



ISSN 1850-2512 (impreso)
ISSN 1850-2547 (en línea)

UNIVERSIDAD DE BELGRANO

Documentos de Trabajo

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

El Plan Colombia*

Nº 87

Norberto Emmerich

Departamento de Investigaciones

Febrero 2002

Universidad de Belgrano
Zabala 1837 (C1426DQ6)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel.: 011-4788-5400 int. 2533
e-mail: invest@ub.edu.ar
url: <http://www.ub.edu.ar/investigaciones>

Para citar este documento:

Emmerich, Norberto (2002). El Plan Colombia.

Documento de Trabajo N° 87, Universidad de Belgrano. Disponible en la red:

http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_nuevos/87_emmerich.pdf

Indice

Introducción	5
Capítulo 1 - La violencia	7
Capítulo 2 - La crisis andina	14
Capítulo 3 - La geografía	17
Capítulo 4 - El sistema político	19
Capítulo 5 - La economía	24
Capítulo 6 - Plan Colombia	31
Capítulo 7 - La guerrilla	49
Capítulo 8 - Las Fuerzas Armadas	60
Capítulo 9 - El narcotráfico	68
Capítulo 10 - El conflicto regional	77
Capítulo 11 - Los desplazados	88
Capítulo 12 - Estados Unidos	91
Capítulo 13 - Conclusiones	98

Introducción

En un contexto donde múltiples actores de alto perfil compiten desde hace décadas por imponer un veto definitivo sobre las posibilidades de actuación del otro, se destaca un crecimiento económico sostenido que perduró durante 40 años. Pareciera ser que la “violencia” fuera un requisito *sine qua non* para la acumulación capitalista colombiana y que este crecimiento no podría explicarse sin aquella “eliminación física del adversario”.

La crisis del capitalismo colombiano

El Plan Colombia aparece cuando esta dicotomía del sistema capitalista colombiano deja de funcionar. El crecimiento negativo del PBI en 1999, con una caída del 5%, desata e independiza los componentes de una estructura que había garantizado durante todo el siglo XX las “ganancias a sangre y fuego”. La “violencia” se independiza del desarrollo capitalista en un proceso que se inicia en 1991, cuando se implementan las medidas de adecuación de la economía colombiana a los estándares mundiales. La crisis de “disfuncionalidad” entre violencia y economía explota en 1999. Por lo tanto el Plan Colombia, a pesar de los motivos específicos con que avala su anuncio e implementación, puede verse como un nuevo intento de “encajar” el capitalismo colombiano dentro de los requerimientos de la economía mundial. La economía legal no puede seguir soportando la magnitud de los negocios que se desenvuelven en la economía ilegal y necesita recuperar control sobre ellos. Todos los componentes de la realidad colombiana encuentran en esta adecuación la razón última que explica las fuertes presiones que sobre ellos se ejerce: la reforma política a partir de la Constitución de 1991, la profundización de las reformas económicas, la reforma al Código de Justicia militar, la reivindicación de los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y finalmente la eliminación de la guerrilla, con acuerdo de paz o no.

En esta tarea el Estado colombiano intenta recuperar energías y establecerse por encima de todos los actores para convertirse en el único interlocutor con capacidad de cortar el ingreso de demandas de los grupos en armas. De este modo un sistema de vetos paralelos entre fuerzas armadas ilegales (guerrilla-paramilitares-narcotráfico) intenta ser sustituido por un sistema de veto vertical ejercido por el Estado e instrumentado por las Fuerzas Armadas legales.

Es en este terreno donde deberá medirse finalmente el éxito del Plan Colombia. El Estado deberá recuperar soberanía en todo su territorio a fin de poder justificar la cesión de soberanía que implica su alianza estratégica con Estados Unidos. La burguesía colombiana intenta entonces “colonizar” todo el país a fin de ejercer control sobre los recursos disponibles en él, no como propietario último de ellos, sino como intermediario calificado de las masivas inversiones extranjeras que están por llegar, una vez que esta política de “tierra arrasada” haya dejado el terreno virgen. Estas inversiones no llegarán si el control territorial y la explotación económica sigue en discusión en manos de guardianes armados.

En el caso del Plan Colombia la tradicional cesión de soberanía que implica la adhesión de los países a las reglas transnacionales de comercio e inversiones en que se desenvuelve la economía mundial está magnificada por el excluyente componente militar del Plan. La presencia de asesores, aviadores, helicópteros, inteligencia e intervención directa de los militares norteamericanos en la ejecución del Plan Colombia es un “valor agregado” que sólo dosifica en el tiempo las políticas de intervención que fueron características de la guerra fría. La delgada línea que separa la participación encubierta de la intervención directa puede esfumarse con un certero disparo que obligue a los norteamericanos a entrar en combate.

La crisis andina

Pero la crisis de “disfuncionalidad” del capitalismo colombiano se enmarca dentro de un contexto regional de crisis aún mayor.

Los cinco países andinos, todos ellos pertenecientes al acuerdo comercial de Cartagena, Pacto Andino o CAN, se debaten en crisis políticas de distinta magnitud y sentido pero igualmente importantes.

Venezuela está retomando las posiciones con que había asomado a la política internacional en la crisis de 1973. El petróleo es nuevamente utilizado como herramienta política internacional y los líderes de la OPEP encuentran en el primer abastecedor mundial de combustible a Estados Unidos un líder ocasionalmente fuerte, tal como lo fue en 1973. Sólo la fuerte adhesión de Arabia Saudita, el primer productor mundial, permitió al capitalismo mundial evitar que la crisis petrolera de 2000 se convirtiera en una crisis política, que transformara la ya consolidada suba de precios en un ascenso del liderazgo de los países periféricos. Por otro lado el sistema venezolano se está tornando sumamente dependiente de la situación interna y regional, pero no se muestra presionado por la geopolítica norteamericana. La asistencia venezolana al Plan Colombia es nula y su asociación económica, militar y política con Brasil (y Cuba) amplía sus márgenes de negociación, aunque todavía los hechos no la han puesto seriamente a prueba.

Ecuador no ha podido sobreponerse en forma definitiva a la crisis de gobernabilidad iniciada en enero de 2000 con la caída del presidente Mahuad. La dolarización implementada por el nuevo presidente Noboa, si bien fue muy recibida en Washington como parte de una inserción sumisa en la economía mundial, no logra detener las movilizaciones indígenas y no encuentra posibilidades de reforzar seriamente la poca gobernabilidad adquirida de su antecesor.

En Perú la caída de Fujimori, más lenta de lo deseado por Estados Unidos, no parece tener capacidad de frenar la movilización democrática que sigue recorriendo el país. Todavía queda por ver en qué situación quedará el nuevo gobierno tras la transición post-fujimorista y qué lugar ocupará Perú en la política exterior del gobierno de Bush, aunque la situación interna se estabilice.

Finalmente Bolivia, que estaba por detrás del conjunto del proceso andino, se ha colocado repentinamente por delante. El proceso de eliminación de cocaleros iniciado victoriosamente por Banzer culminó con masivas movilizaciones en Cochabamba y el enfrentamiento con los campesinos cocaleros. La represión del ejército produjo la formación de un grupo de autodefensa campesino en el Chapare y la iniciación de un proceso convulsivo en el país.

Panorama latinoamericano

Más allá de los países andinos el panorama latinoamericano también se presenta complicado para el Plan Colombia y para el capitalismo mundial.

Brasil, quien está ocupando cada vez más claramente su rol de líder sudamericano, está siendo criticado por no adherir al Plan Colombia. Al mismo tiempo está anudando acuerdos económicos, militares y políticos con Venezuela para lograr también él rodearse de un anillo de seguridad. Sus gestos de independencia, calmos pero claros, fueron prontamente advertidos por Washington quien está viéndose tentado de perder la paciencia, aunque no ha podido durante el gobierno de Clinton, elaborar una política adecuada para América Latina, tal como el entonces presidente norteamericano lo reconoció públicamente.

La declaración final de los presidentes sudamericanos reunidos en Brasilia el 31 de agosto de 2000 no hizo ninguna alusión explícita al Plan Colombia y sólo felicitó los esfuerzos de paz del presidente Pastrana. Itamaraty logró, en una compleja situación y con el presidente Clinton visitando Cartagena, licuar la encerrona diplomática de Madeleine Albright.

El rol de Brasil y su negativa rotunda a participar militarmente en el Plan Colombia, son un serio palo en la rueda para la política norteamericana en la región¹.

El Plan Colombia, que tiene una perspectiva regional que nadie niega, también supone la adopción por parte de Estados Unidos de objetivos estratégicos para toda la región sudamericana. Como veremos, el crecimiento de la economía norteamericana se financia sustancialmente con los excedentes provenientes de América Latina, balanceando así los déficits que le generan Asia y Europa. Su hasta ahora incuestionado liderazgo en el subcontinente es la superestructura de una base material de acumulación constante.

La crisis andina y la emergencia de Brasil suponen crisis de liderazgo y peligro de caída de recursos por un lado (Ecuador, Bolivia, Perú) e intentos de competencia política e independencia económica por el otro (Brasil, Venezuela).

El Plan Colombia tiene entonces un marcado acento continental. No es sólo un intento de reconversión del modelo de acumulación colombiano. Es un intento por recomponer el liderazgo norteamericano en Sudamérica, resquebrajado por la demora (o fracaso) del proyecto del ALCA y en general por la miope visión política de la pasada administración Clinton sobre la política latinoamericana, un déficit al que se suman las constantes críticas que su sucesor recibe sobre el conjunto de la política exterior norteamericana.

Si el foco de atención del Plan Colombia se centra en la lucha contra el narcotráfico, y en concreto en la militarización recurrente de la política antidrogas, este texto encuentra pleno sentido al acentuar el posible involucramiento de Estados Unidos en la "más cruenta y prolongada de las guerras del hemisferio occidental"².

El gobierno de Bush

Los elementos que hasta ahora ha mostrado la política exterior del nuevo gobierno republicano norteamericano permiten deducir el triunfo de una línea dura que intenta suplantar la indefinición de la era Clinton con la supremacía del paradigma reaganiano.

Un gabinete étnicamente diverso pero ideológicamente monolítico realza un perfil de especialistas en Medio Oriente y Europa Oriental pero ignorante de la sutil problemática latinoamericana. La receta recurrentemente utilizada con Irak intenta convertirse en mecanismo de solución de la compleja situación internacional.

El triunfo de Ariel Sharon en Israel, la presión sobre Cuba, el rechazo al protocolo de Kyoto, la venta de armas a Taiwán y el nuevo ataque a Irak son los primeros y escasos elementos de una política exterior que retoma los mecanismos de la guerra fría en todos los frentes.

Por eso el Plan Colombia en la versión de la administración Bush es un subproducto de la presión por un rápido pronunciamiento del Congreso norteamericano sobre el ALCA. Colombia es la llave para la penetración norteamericana en todo el subcontinente y Brasil es el principal negociador sentado enfrente, siempre difícil.

Notas

1. "Brasil no tiene intención de participar de ninguna acción internacional concertada". Declaraciones del canciller brasileño citadas por Clarín el 16 de agosto de 2000.
2. Colombia, la nueva Vietnam, Tad Szulc, Clarín, 7 de septiembre de 2000

Capítulo 1 – La violencia

El escaso nivel de conocimiento sobre Colombia se refleja en los numerosos artículos que hablan de 40 años de guerra civil. En realidad, la primera gran guerra civil que definiría las subsiguientes surgió entre los liberales y los conservadores en 1840, 21 años después que Bolívar había logrado independizar a Colombia de España. Estas guerras nunca terminaron y un momento clave fueron los disturbios salvajes en Bogotá, en 1948. El "bogotazo" fue un pico elevado en la vieja meseta de violencia colombiana pero no tuvo la entidad suficiente como para configurar un inicio. Es el momento culminante de un largo proceso con hondas raíces geográficas, culturales, sociales, económicas y políticas.

La población colombiana se reparte en una geografía tropical y montañosa. La cordillera se divide en tres al llegar a Colombia, generando gran cantidad de climas y terrenos, haciendo las delicias de las organizaciones guerrilleras y el dolor del Ejército.

Esta conformación creó zonas geográficas bastante autónomas, separadas las unas de las otras por días, semanas o meses de caminos montañosos. Por ello, desde el siglo pasado, el país se desarrolló en cuatro grandes regiones: el Litoral Atlántico, el Alto Magdalena o la Cordillera oriental, el Valle del Cauca y Antioquia.

Esta autonomía, geográficamente determinada, creó un país archipiélago. Los procesos políticos de una zona bien podían no tener ningún punto de contacto y comparación con lo que sucedía en otra. Este aislamiento recíproco también ayudó a la perpetuación de los caudillismos locales y las guerras perennes por el control de las zonas económicas alejadas de la vertiente central de desarrollo y circunscriptas a ámbitos geográficos específicos.

Los choques entre las distintas zonas por dominar el país provocaron infinidad de guerras civiles que signaron la historia del país desde la independencia¹, a lo que se agregó la guerra civil entre liberales y conservadores en 1840. Estas guerras continuaron hasta 1902, impidiendo el desarrollo económico nacional y generando mucha pobreza. Desde fines del siglo XIX se inició el proceso de unificación política de Colombia como nación. En 1886 se promulgó la Constitución Nacional, pero recién 16 años después terminaron los enfrentamientos regionales y las guerras civiles.

Pero la paz no alumbró con la llegada del nuevo siglo. La guerra con España hizo descubrir a Estados Unidos que el Caribe y el Pacífico² eran una buena opción. Muy cerca de los inicios del corolario Roosevelt, la creación del estado panameño y la construcción del canal de comunicación bioceánico ayudaron a esos fines. Nació así un estado artificial, escindido de Colombia, y un nuevo foco de conflictos por la búsqueda de la efectiva independencia del nuevo Estado, un hecho que recién se concretaría en los Tratados Torrijos-Carter de 1977 y la reversión³ de 1999.

El conflicto entre liberales y conservadores, que había ensangrentado de guerras civiles toda la segunda mitad del siglo XIX colombiano, continuó con algunas interrupciones durante el siglo XX hasta 1958, cuando termina la "violencia" y se organiza el Frente Liberal, que permitiría una alternancia ordenada en el poder repartida consensuadamente entre ambos partidos. Pero para ese entonces los grandes grupos guerrilleros del presente estaban a punto de surgir.

Para algunos autores la mayoría de los norteamericanos desconoce que el Plan Colombia amenaza con sumergir a Estados Unidos en esta guerra civil, "la más larga y brutal del hemisferio occidental"⁴, que se prolongó intermitentemente durante 160 años. La población norteamericana desconoce la situación colombiana, como también desconocía la situación de Vietnam cuando la ficticia batalla del Golfo de Tonkín⁵ involucró a las tropas norteamericanas en una guerra lejana, brutal y perdida.

El siglo XX

Terminadas las guerras civiles en 1902, comenzó a surgir con fuerza la posibilidad de construir la estructura económica nacional que hasta entonces no existía. La pacificación supuso el interés internacional por invertir en la economía colombiana.

En la década de 1920 se iniciaron las grandes obras públicas. Miles de campesinos se fueron a las ciudades a buscar empleo. Era el nacimiento del movimiento obrero colombiano, que realizó sus primeras huelgas. En el campo, mientras tanto, los terratenientes tenían serias dificultades en conseguir mano de obra, la cual debía ser reclutada en forma compulsiva.

En los primeros años de la década nació el Partido Socialista Revolucionario que recogió en sus filas a los principales dirigentes de las huelgas obreras y que posteriormente se convirtió en el Partido Comunista. A su lado surgió también la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, dirigida por Jorge Eliecer Gaitán, famoso caudillo que luego se convirtió al liberalismo.

La burguesía colombiana, celosa de la custodia de los intereses nacientes, respondió desde el principio con una fuerte represión. En 1929, el gobierno conservador de Abadía Méndez asesinó a 1500 trabajadores bananeros al servicio de la compañía United Fruit. Este episodio pasó a la historia como la "masacre de las bananeras".

La crisis del '30

Cuando se inició la depresión muchos trabajadores volvieron al campo. Los terratenientes, que años antes debían obligar a los campesinos a trabajar en las cosechas de café, ahora no sabían qué hacer con tantos campesinos que volvían y pedían un pedazo de tierra.

Esto significó un gran cambio en la situación tradicional del campo colombiano. La colonización del agro en este siglo ha seguido un ciclo repetido una y otra vez. Los terratenientes dan tierras en arrendamiento o las entregan a colonos. Estos las limpian y siembran, y a los pocos años son desalojadas por los propietarios, que los obligan a desplazarse hacia tierras incultivadas, donde nuevamente tendrán que limpiar y poner el campo en condiciones para sembrar. Y donde nuevamente los desalojarán cuando el campo esté en condiciones.

Pero los miles que llegaron de las ciudades a fines de los años '20 no eran campesinos tradicionales. La vida en la ciudad los había radicalizado políticamente. Por primera vez había logrado ganar algún dinero y habían oído de las uniones sindicales y de la revolución obrera y estaban decididos a ser su propio patrón. El influjo de la Revolución Rusa de 1917 y la actividad del Partido Comunista en el campo se hacían sentir.

A fines de los años '20 iniciaron la lucha por la tenencia de la tierra. Los colonos y jornaleros de las grandes haciendas cafeteras se valieron de dos leyes promulgadas por el Partido Conservador: una que disponía de grandes extensiones de tierra del Estado para la colonización y otra que imponía a los terratenientes la obligación de registrar sus títulos de propiedad en las oficinas estatales.

La mayoría de los terratenientes no podían presentar títulos porque habían anexado ilegalmente centenares de hectáreas pertenecientes al Estado. Los colonos y jornaleros pretendían que se les adjudicaran no sólo las tierras limitadas por las normas gubernamentales, sino también las porciones no explotadas de las haciendas. Muchos procedieron a establecerse en esas tierras y muchos de los que ya vivían en las haciendas dejaron de pagar alquiler. Cuando los hacendados trataron de expulsarlos, los colonos les solicitaron la presentación de los títulos de propiedad.

Las invasiones se extendieron por todo el departamento del Tolima. Pero los terratenientes apelaron a la violencia y organizaron bandas armadas para poder echar a los colonos.

En 1930, cuando a las movilizaciones obreras y campesinas se sumó la crisis mundial, los conservadores, que gobernaban desde hacía 30 años, se dividieron y ganó el liberal Enrique Olaya Herrera. Los liberales gobernaron durante los siguientes 16 años.

La oleada de luchas campesinas crecía pero Colombia entró en guerra con Perú por problemas fronterizos. El presidente Olaya apeló al sentimiento nacionalista de la población y logró apaciguar las movilizaciones.

En 1934 asumió el liberal Alfonso López Pumarejo quien logró que el Parlamento aprobara la Ley de Tierras, que garantizaba la propiedad de los campos a los campesinos pobres que la explotaban siempre que lo pudieran demostrar. Por un tiempo disminuyó la expulsión de colonos y aparceros. La ley de López Pumarejo fue percibida como una importante conquista para los campesinos. Lógicamente, las luchas agrarias por la tenencia de la tierra se incrementaron.

La presión de los terratenientes se hizo sentir y comenzaron a hostigar a los colonos. De este modo lograron que el gobierno aceptara mitigar los efectos más perjudiciales de la ley.

En 1937 un sector del Partido Liberal formó bloque con el Partido Conservador para presionar contra las concesiones que se habían otorgado a los campesinos. López Pumarejo intentó quebrar ese bloque pero no lo consiguió.

Durante la Segunda Guerra Mundial las divisiones se profundizaron. López Pumarejo y su sucesor Santos eran aliados de los Estados Unidos y planteaban entrar en la guerra. Laureano Gómez, máximo dirigente del Partido Conservador, estaba vinculado al franquismo, a la Iglesia y a los intereses alemanes. Neutralista ferviente, presionó para que Colombia se mantuviera ajeno a la contienda mundial.

En 1942 López Pumarejo es elegido nuevamente presidente pero abandona su política reformista para ingresar en la guerra del bando aliado, abandonando la neutralidad colombiana.

En 1944 Laureano Gómez intenta un golpe pero fracasa. Como consecuencia de este golpe frustrado el presidente López Pumarejo no puede concluir su segundo mandato, renunciando en 1946. Su período fue completado por Santos, también del Partido Liberal.

En las elecciones el partido Liberal se dividió entre Jorge Eliecer Gaitán y Gabriel Turbay (apoyado por Santos). La división liberal permite al Partido Conservador ganar las elecciones colocando a Mariano Ospina Pérez como presidente.

El “bogotazo”

La llegada de los conservadores al poder significó un crecimiento de las luchas obreras que todavía veían al Partido Liberal como “su” partido. Pero el 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliecer Gaitán, el prominente líder liberal. La Central de Trabajadores de Colombia declaró la huelga general hasta que cayera el gobierno conservador. La policía se sublevó junto al pueblo.

En Barrancabermeja, centro de la industria petrolera, los obreros tomaron el poder por unos días; en Tolima, la población liberó a los presos, constituyendo comités revolucionarios en todos los municipios y asaltando las iglesias. Una enorme insurrección popular se había desatado y la caída del poder parecía inminente.

Ese 9 de abril es conocido como “bogotazo”. El Partido Liberal, colocado por la población como su dirección política, pactó con Ospina un gobierno conjunto y llamó a levantar la huelga general.

La desorientación y desmovilización de la población urbana que se había levantado en esas jornadas de 1948 hizo que la resistencia se trasladara a los campos donde se inició una guerra civil que duraría diez años y que costaría la vida de 300.000 colombianos.

Allí se produjo una simbiosis entre la resistencia política al régimen conservador y la lucha feroz entre terratenientes y campesinos por la tierra. Para luchar contra la violencia conservadora se organizaron las milicias liberales y comunistas.

El reto de Eliecer Gaitán, que había intentado apelar a las masas campesinas para frenar el avance de la oligarquía terrateniente, estaba arrinconado en la espesura de la selva.

Las guerrillas liberales acordaron con el gobierno la desmovilización y la entrega de armas. El Partido Comunista, con fuerte presencia en el campo desde los años '20, impulsaba la organización de movimientos de autodefensa.

Las zonas de autodefensa campesinas –entre ellas la República Independiente de Marquetalia- se desarrollaron, duramente reprimidas por las armas que proveyeron los Estados Unidos.

La guerra civil

Los liberales entraron al gobierno conservador el 10 de abril de 1948 como parte del acuerdo para frenar el bogotazo. Pero la polarización hizo imposible la convivencia y tuvieron que retirarse al año siguiente.

El presidente Ospina nombró gobernadores ultraconservadores y lanzó a los campos a la temible policía chulavita, así denominada porque casi todos sus miembros provenían de ese pueblo. Se comenzó a perseguir a los liberales a fin de que no ganaran las elecciones de noviembre de 1949. Ospina clausuró el Parlamento días antes de las elecciones y los liberales retiraron su candidato. Resultó elegido Laureano Gómez, el viejo franquista católico. Sólo tuvo 14 votos en contra.

Bajo Gómez se desató la resistencia liberal en forma de guerrilla que abarcó todo el territorio nacional⁶. Esta fue la primera fase de la Violencia que concluyó en 1953 con la entrega de la guerrilla liberal. La segunda fase de la violencia concluye en 1957 dirigida contra la guerrilla comunista.

La guerrilla llanera⁷

En los Llanos orientales, una extensa sabana que nace al terminar la cordillera y termina en Venezuela, se organizó un verdadero ejército de masas contra el régimen conservador.

La fuerza de esta guerrilla liberal hizo que los ganaderos y hacendados le retiraran el apoyo con que la habían recibido en un principio. Pero esto acentuó su radicalización y centralización. Se calcula que llegó a tener cerca de 20 mil hombres armados.

Los guerrilleros nombraron gobiernos civiles en los territorios que controlaban, acordaron normas estrictas para la agricultura y la ganadería, impusieron impuestos a todos los terratenientes, que se cobraban dependiendo de su filiación política y organizaron el comercio de carne con Venezuela.

En 1953 organizaron el Congreso General guerrillero, que nombró un Estado General Guerrillero y resolvió buscar la unidad con las guerrillas del resto del país.

Esta misma lucha que se dio en los Llanos se dio en todo el país. La de los llanos fue el prototipo de resistencia política liberal contra la dictadura.

Por otro lado los terratenientes tomaron revancha de las ocupaciones de tierras que habían hecho los campesinos en los tiempos de López Pumarejo. Empieza una verdadera contrarreforma agraria.

Este despojo organizado de la tierra dio lugar a las guerrillas campesinas, liberales y comunistas (en el sur del Tolima).

La diferenciación política entre liberales y comunistas llevó al enfrentamiento armado de ambos, un enfrentamiento auspiciado y permitido por el Ejército para debilitar la lucha guerrillera.

En esa época surgieron los gérmenes de las “repúblicas independientes”, es decir de territorios controlados por la guerrilla, donde no entraba ni el Ejército ni el Estado. En el Llano, el ejército guerrillero liberal controlaba la vasta llanura.

A fines de 1952 se reúne el Congreso Nacional Guerrillero, al que asistieron todas las guerrillas liberales menos las del Llano, por expresa prohibición del Partido Liberal, que organizó una reunión aparte. La conferencia guerrillera del Llano y la del Congreso Nacional Guerrillero apoyaron el 13 de junio de 1953 el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla⁸.

1953-57: la segunda guerra

El primer acto de Rojas Pinilla fue la amnistía. Los aviones del ejército sobrevolaban los campos tirando volantes llamando a los guerrilleros a entregarse. La dirección liberal ordenó a sus guerrilleros el desarme. En sólo 5 días de setiembre de 1953, se entregaron 6.500 guerrilleros.

En el Llano la amnistía fue una encerrona política que concluyó con el asesinato de varios jefes guerrilleros.

Pero las guerrillas liberales se desarmaron en todo el país. Las únicas que no se rindieron fueron las guerrillas comunistas y algunos sectores de la liberal.

Los comunistas se replegaron en movimientos de autodefensa. No entregaron las armas ni se amnistieron, pero dejaron de combatir. Se establecieron en el oriente del Tolima, en la región del Sumapaz, en asentamientos que controlaban en su totalidad.

El gobierno de Rojas Pinilla no podía permitir ese poder campesino. Utilizó a las guerrillas liberales para atacar a las guerrillas comunistas. A pesar de las críticas de quienes preferían una salida negociada organizó una expedición militar de 4 mil hombres y 50 aviones contra Villarica, el principal asentamiento comunista.

La batalla duró 2 meses y la gente de Villarica debió emigrar a la cordillera. En su huida los guerrilleros organizaron los campamentos de Riochiquito, el Pato, Guayabero y Marquetalia, que posteriormente serían objeto de la violencia en el segundo gobierno del Frente Nacional.

Rojas Pinilla quiso hacer un proyecto nacionalista, por la buena situación económica, y pudo otorgar algunas concesiones al movimiento obrero y campesino. Pero no pudo aglutinar el apoyo de la burguesía y su intento fracasó.

El Frente Nacional

Los partidos liberal y conservador comenzaron a organizar la destitución de Rojas Pinilla. Alberto Lleras (liberal) y Laureano Gómez (conservador) pactaron en Europa la creación del Frente Nacional y sellaron un acuerdo para gobernar alternadamente durante 16 años, 4 años cada uno. Toda la administración nacional sería paritaria, mitad para cada uno.

Tras un lock out patronal de 15 días la dictadura cayó el 10 de mayo de 1957. La patronal llegó a pagar los salarios para que los obreros no fueran a trabajar. Una Junta militar asumió el poder y en 1958, después de un plebiscito en que se aprobó el Frente Nacional, asumió como presidente Alberto Lleras Camargo.

La estabilidad política duró hasta 1977 ayudada por el boom de la economía mundial y el desarrollo capitalista del campo.

Pero la revolución cubana empalmó desde sus inicios con el lento ascenso de las masas urbanas. La burguesía tomó medidas para que el descontento campesino y urbano no fuera canalizado hacia la revolución.

El primer gobierno hizo una tímida reforma agraria y Carlos Lleras creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) con el fin de contener a los hombres del campo dentro de una organización reformista controlada por el gobierno.

Al mismo tiempo Alfonso López Michelsen, aconsejado por su padre, el ex presidente López Pumarejo, creó el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL).

La burguesía organizó este movimiento procastrista, opositor al Frente Nacional, para recoger a las franjas opositoras y a los jóvenes impactados por la revolución cubana e impedir que cayeran en las filas comunistas o castristas.

El MRL consiguió el 23% de los votos (600 mil) en 1962. Sus votos fueron campesinos en un 70% y su incidencia fundamental fue en las antiguas zonas de violencia.

Pero López ingresó al gobierno del Frente Nacional en 1967 y el movimiento se dividió. Grupos enteros alimentaron a la guerrilla.

El segundo gobierno del Frente Nacional, a cargo del conservador Guillermo León Valencia, decidió lanzar una operación de exterminio de las guerrillas comunistas que quedaron activas después de la “violencia”.

Estas habían desmovilizado al cuerpo armado, crearon grupos de autodefensa, licenciaron al personal, distribuyeron tierras entre los combatientes y su dirección guardó las armas.

Era un poder territorial antagónico al poder estatal pero se encontraba en zonas alejadas, donde no representaban ningún peligro militar para el gobierno.

Las FARC

El segundo gobierno del Frente Nacional, de Guillermo León Valencia, emprendió la operación Marquetalia, una fabulosa operación militar de exterminio, en la cual 16 mil hombres se enseñaron contra un pequeño caserío en medio de las selvas. Tras varios meses de una feroz ofensiva terrestre y aérea, los viejos guerrilleros tuvieron que retomar los fusiles, abandonar la población y reiniciar el combate.

Contradictoriamente, la acción que se hizo para terminar con los vestigios de las guerrillas comunistas, concluyó con la fundación de las FARC en 1965.

El mismo año se fundó el ELN. En 1967, producto del cisma chino-soviético, surgió la guerrilla maoísta, el EPL.

Pero, a diferencia de las FARC, estas nuevas guerrillas reflejaban la creciente influencia de las masas urbanas. El ascenso estudiantil de 1968 iniciado en Cali llevó a miles de estudiantes a engrosar las filas de las nuevas organizaciones guerrilleras.

Al calor de las luchas de las universidades, de un ascenso campesino y de las movilizaciones obreras, nacieron también todos los posteriores partidos de izquierda: el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), el Partido Comunista Marxista Leninista, escisión del PC, ambos maoístas, la Corriente Socialista y posteriormente el M19.

Crisis del bipartidismo

En la campaña electoral de 1970 el Partido Conservador, a quien correspondía el turno presidencial, se dividió en tres candidatos. El más votado de los tres fue Misael Pastrana con 1.614.419 votos. El general Gustavo Rojas Pinilla sacó 1.557.482. La votación rojista provino de las masas urbanas desposeídas, que se enfurecieron al sospechar que el gobierno había hecho fraude contra su candidato. Pero el mismo Rojas se encargó de calmar los ánimos e impedir una nueva grave crisis.

Esta elección de la ANAPO (Alianza Nacional Popular), el partido de Rojas, evidenció la crisis del política del sistema de gobierno ya que prácticamente igualó al candidato frentenacionalista.

A partir de allí y año tras año, la abstención aumentó hasta alcanzar un pico del 75% en Bogotá y Medellín en 1985.

La crisis revolucionaria de 1977

Los '70 son la década de las luchas obreras. Los huelguistas se duplicaron en relación con los '60 y se destacaron las huelgas de los sectores de servicios (47%), seguidas por las manufactureras. Del total de 1.786.000 huelguistas en la década, 946.645 fueron maestros, gremio que se convirtió en el más combativo del país. La clase obrera industrial, la más rezagada, fue avanzando. Hacia 1975 el ascenso obrero y popular tomó bríos y comenzó a encaminarse hacia una acción nacional independiente. La guerrilla atravesaba una fuerte crisis, y el campesinado había declinado.

En los primeros meses de 1977 las cuatro centrales sindicales (tres patronales y la del PC) conformaron el Consejo Nacional Sindical (CNS). Presentaron un pliego al presidente Alfonso López y los respaldaron con un Paro Cívico para el 14 de septiembre. Se lo denominó Paro Cívico porque era una combinación de huelga general obrera con levantamiento popular y barrial.

En un sólo día pararon un millón y medio de personas, tanto como el total de huelguistas de los 15 años anteriores.

El paro abrió una crisis revolucionaria parecida a la del bogotazo en 1948. Para atenuar los efectos el CNS desmontó todas las acciones nacionales programadas.

El paro cívico colombiano contribuyó a abrir la situación revolucionaria centroamericana, cuyos inicios se remontan a ese año. En Panamá se produjeron las masivas movilizaciones contra los tratados que prolongaron la vigencia del tratado del Canal, y en enero de 1978 se levantaron las masas de las ciudades nicaragüenses por la muerte de Chamorro. El primer triunfo de este movimiento democrático fue la caída de Somoza en 1979.

El presidente Turbay asumió en 1978 y pretendió cerrar la brecha abierta en 1977, mediante la represión y la violencia. Aunque mantuvo las instituciones democráticas, el gobierno desató una fuerte represión: decretó el Estatuto de Seguridad, traspasó los delitos políticos a la justicia militar y detuvo a más de 5 mil personas. Se hicieron comunes las torturas y las desapariciones, los allanamientos a la madrugada, el asesinato y la persecución de dirigentes sindicales y políticos, el estado de sitio y la prohibición de realizar manifestaciones y actos públicos.

El M19 hizo sus dos acciones más espectaculares: el asalto del Cantón Norte de Bogotá donde sacó más de 3000 armas del ejército y la toma de la Embajada de la República Dominicana, que duró más de 40 días. La represión del gobierno casi lo liquidó. Cayó toda su infraestructura, apresaron al 80% de los cuadros y a la mitad de la dirección.

La represión contra la guerrilla fue muy fuerte, especialmente en Caquetá y el Magdalena medio. Pero el proceso democrático en Nicaragua que culminó con la caída de Somoza en 1979, provocó un efecto dominó que derivó en un fuertísimo ascenso guerrillero y el renacimiento de las luchas populares. Turbay intentó una salida negociada a la situación: propuso dos proyectos de amnistía al parlamento y nombró una comisión de Paz, presidida por el ex presidente liberal Carlos Lleras Restrepo. Pero las condiciones de paz no podían ser aceptadas por la guerrilla, ya que de hecho significaban una rendición.

Betancur aplastó electoralmente a su contrincante Alfonso López Michelsen, que representaba la continuidad de Turbay. Debía dar respuesta a dos graves problemas: el ascenso de las luchas de todos los sectores de la población y una guerrilla cada vez más fortalecida.

Se obtuvieron muchas reivindicaciones democráticas: se levantó el estado de sitio, se derogó el Estatuto de Seguridad y se consiguió la amnistía de todos los presos políticos. También se conoció públicamente el informe del Procurador General de la Nación sobre las actividades que el grupo paramilitar MAS (Muerte al Secuestro) había realizado durante el gobierno de Turbay.

El mismo día de la asunción de Betancur los campesinos de Saravena, en el límite con Venezuela, iniciaron un paro cívico que se extendió durante dos semanas, con corte de caminos. Los estudiantes realizaron una marcha de 15 mil estudiantes en Bogotá y recuperaron las residencias estudiantiles perdidas en 1976. De los 12 paros cívicos de 1981, se saltó a 68 en 1982.

En 1984 el M19 tomó la ciudad de Florencia, en el sur, provocando la alarma del gobierno. En mayo el gobierno decretó el estado de sitio pero los maestros hicieron un paro nacional de 40 días, pasando por encima del estado de sitio. Los campesinos protagonizaron más de 200 invasiones de tierras en diez departamentos, cubriendo unas 100 mil has. ocupadas por más de 20 mil familias.

A pesar de los golpes que Turbay le había inflingido, la guerrilla había vuelto a resurgir con fuerza, controlando determinadas porciones del territorio nacional. Ante lo que parecía la pérdida absoluta del control político Betancur debía actuar. Nombró a la misma comisión de paz que había fracasado durante el gobierno de Turbay, puso a su frente a quien había negociado la entrega de los guerrilleros del Llano en 1953 e impulsó en el Parlamento un amplio proyecto de amnistía. Con estas medidas audaces para la tradicional política colombiana Betancur pretendía cerrar la crisis abierta en 1977 y los hechos posteriores parecieron justificar sus expectativas.

El proceso de paz en los '80

En 1982 el presidente conservador Belisario Betancur tomó una iniciativa sin precedentes para lograr la paz. En diciembre de 1983, el M19 y las FARC constituyeron un frente común para negociar. El pacto se postergó hasta el 28 de marzo de 1984 ya que las luchas obreras y populares y las acciones guerrillas que seguían produciéndose, polarizaban la situación y dificultaban las negociaciones.

En diciembre de 1983 el M19 secuestró al hermano del presidente. Esto provocó un derroche de solidaridad. Hasta Fidel Castro solicitó en dos oportunidades la libertad del detenido. Cuando quedó liberado se produjo una jornada de apoyo al gobierno y su política, con la participación de la burguesía, la Iglesia, el PC, las FARC y otros grupos de izquierda.

Se estaba creando el consenso necesario para el acuerdo. En enero de 1984 el presidente forzó la renuncia del general Landazábal, ministro de Defensa, el más duro contra la guerrilla. El camino parecía allanado. Pero las luchas obreras y populares crecieron. Ya nadie creía en la firma de los tratados. Por otro lado, dentro de las FARC había una fuerte discusión, que provocó la ruptura del Frente Ricardo Franco, que se oponía a la negociación con el gobierno.

Pero el 28 de mayo se firmaron los acuerdos, cuando nadie lo esperaba. El gobierno se comprometió a lanzar una serie de reformas políticas, económicas y sociales y se estableció un cronograma para permitir al movimiento armado organizarse políticamente.

En definitiva el gobierno no se comprometió a nada concreto. El 24 de agosto se firmó un acuerdo con el M19 y el EPL. El ELN rechazó el acuerdo. El M19 se vio obligado a romper parcialmente el acuerdo por la agresión del Ejército. En 1985 el 30% de la guerrilla continuaba luchando, aunque debilitada.

El gobierno en concreto impulsó la ley de elección directa de los alcaldes (hasta ese momento eran elegidos por los gobernadores, que eran elegidos por el presidente). El PC y las FARC aspiraban a lograr muchas alcaldías. En mayo de 1985 se aprobó la ley de indulto a los condenados políticos y la suspensión de los procesos iniciados (cobijando sobretodo a la dirección de las FARC).

La tregua fue aceptada, permitida, apoyada e impulsada por Estados Unidos, temiendo un estallido revolucionario en Colombia.

Las FARC pactaron solos con el gobierno, dividiendo al movimiento guerrillero⁹. Como acto de colaboración con el gobierno, las FARC entregaron una lista de “desertores”, es decir, de miembros del grupo disidente. El grupo de Franco llegó a declarar que tenía más bajas causadas por las FARC que por el Ejército¹⁰.

El MOIR acusó a las FARC del asesinato del dirigente sindical Eduardo Rolón. El EPL acusó al V Frente de las FARC de asesinar militantes suyos en el norte de Antioquía.

El sindicato de Trabajadores de las bananeras de Urabá publicó un aviso en el diario regional denunciando a los militares y a las FARC por hostigamientos y amenazas contra sus dirigentes. El Frente Ricardo Franco reveló la lista de 12 miembros liquidados por las FARC. Todas las guerrillas se unieron y escribieron una carta a las FARC para solicitarle públicamente “que pare de inmediato el enfrentamiento militar contra las organizaciones guerrilleras”.

En el Cauca, centenares de indígenas de todas las comunidades aborígenes repudiaron las acciones de las FARC durante una manifestación realizada en agosto. Acusaban al VI Frente de asesinar indígenas que se negaban a pertenecer a esa organización. Una gran pancarta recordaba a una maestra, muerta por las FARC, acusada de pertenecer al grupo Ricardo Franco.

En setiembre de 1984 se hizo un encuentro de delegados sindicales con 1.500 delegados presentes para realizar un gran paro nacional, obrero y popular. Pero el PC y las FARC (ya se había firmado la tregua) impusieron su mayoría para impedir la aprobación de una lucha nacional.

En marzo de 1985 se reunieron 6 mil delegados sindicales, campesinos, estudiantiles, guerrilleros y de izquierda. Faltaron las tres entidades patronales, pero muchos de sus sindicatos se hicieron presentes. Se convocó a un paro nacional para el 20 de junio.

El gobierno, que al principio tuvo una actitud permisiva, declaró ilegal el paro y llamó a los organizadores a levantarlo. El paro fue un fracaso, el conjunto del movimiento obrero y popular no paró. Sólo los campesinos lucharon: en el Cauca más de 1500 indígenas bloquearon la ruta Panamericana; en la costa, 2000 campesinos bloquearon la vía al mar; en Santander hubo tomas de tierra, también en Florencia, en Guaviare, y en el norte de Antioquía.

El fracaso del paro significó un enfriamiento en la movilización de la clase obrera pero no constituyó un retroceso definitivo.

En noviembre de 1985 las FARC lanzaron un nuevo movimiento, la Unión Patriótica, que participó en las elecciones con gran éxito en 1986: 350 consejeros municipales, 23 diputados y 6 senadores fueron elegidos al Congreso. Al poco tiempo una ola de asesinatos sin precedentes eliminó a 4.000 dirigentes, cuadros y militantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista.

Una nueva violencia

Los asesinatos fueron estrictamente individuales, en un comienzo, muy selectivos, pero siempre muy numerosos. Desde 1984, una vez firmada la tregua con el gobierno, se empezó el asesinato de dirigentes y activistas guerrilleros amnistiados. Pero como plan sistemático, dirigido no solamente contra la guerrilla sino contra la dirigencia y el activismo sindical y popular, comenzó en 1986 con el gobierno liberal de Virgilio Barco Vargas¹¹.

Todas las masacres se llevaron a cabo con el pretexto de defender la democracia y de combatir a los narcotraficantes y a los movimientos guerrilleros, pero quienes pusieron la mayor cuota de víctimas fueron las masas obreras, campesinas y populares.

El Ministro de Gobierno, César Gaviria Trujillo, llegó a manifestar en el Congreso de la República que existían 140 grupos paramilitares e indicó incluso las ciudades donde operaban.

Las causas de esta violencia de los 80 tenían mucho parecido con las de la década del '50. Se asistió a una nueva ofensiva para entrar a zonas periféricas del país que no habían logrado ser colonizadas plenamente en las décadas anteriores como Caquetá, Casanare, los Llanos orientales, Arauca, Vichada y Córdoba, entre otras.

El M19 cesó sus hostilidades en 1989 y se constituyó en partido político, la Alianza Democrática. En 1991 es sustituido por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. A raíz de la represión sufrida por la Unión Patriótica, que se extendieron a todas las organizaciones armadas, las negociaciones con las FARC, el ELN y los grupos disidentes del EPL no continuaron. En 1990 la guerra fue relanzada por el presidente

liberal César Gaviria (1990-1994). Tampoco hubo negociaciones de paz con Ernesto Samper (1994-1998), acusado de financiar su campaña con dinero provenientes del narcotráfico.

Con un trasfondo de miseria campesina, la guerrilla lanzó en septiembre de 1996 una violenta ofensiva para sostener a los pequeños productores de coca en su reclamo para una reforma agraria. Esto no hizo más que acelerar la expansión geográfica de la guerrilla y legitimarla. El proceso actual forma parte de esta ofensiva lanzada en 1996 que encuentra su raíz en el problema de la tenencia de la tierra.

Notas

1. Carmen Carrasco, Correo Internacional N° 14, noviembre de 1985, Buenos Aires.
2. Resultado de esta guerra Estados Unidos se expandió a Filipinas, Puerto Rico, Cuba y Hawai.
3. El término se refiere a la devolución del Canal de Panamá efectuada en diciembre de 1999.
4. Colombia, la nueva Vietnam, Tad Szulc, Clarín, 7 de septiembre de 2000
5. Esta batalla desencadena la intervención de las tropas norteamericanas en Vietnam. El propio gobierno norteamericano reconoció que la agresión vietnamita nunca existió y que la "batalla" fue creada por el Pentágono.
6. Un excelente relato de las luchas guerrilleras liberales y comunistas se puede encontrar en el libro "Las FARC" de Pizarro León-Gómez, Editorial Nuevo Mundo, Bogotá, 1998.
7. La guerrilla llanera denomina a la guerrilla liberal organizada en los Llanos orientales. Fue la más importante de las guerrillas liberales.
8. El gobierno militar de Rojas Pinilla fue la única interrupción de los procedimientos democráticos electorales desde 1840 hasta el presente.
9. Esta actitud constituye una de las principales acusaciones al interior de las fuerzas de izquierda. Estos episodios contribuyeron a su aislamiento de las masas urbanas y de las otras fuerzas guerrilleras.
10. Clarín, 22 de mayo de 1985.
11. Ganancias a sangre y fuego, Correo Internacional N° 36, septiembre de 1988.

Capítulo 2 – La crisis andina

La relativa gobernabilidad de que gozó el sistema político durante los últimos años en la mayor parte de América Latina se está diluyendo. La intervención de la OTAN en Kosovo y la victoria rusa sobre la guerrilla chechena permitieron la implantación de una coyuntura internacional de relativa estabilidad que se superpuso a la pesada calma que hasta entonces reinaba en el subcontinente. América Latina no escapó a los efectos agregados de esta coyuntura. De este modo el sistema internacional pudo amortiguar los focos de inestabilidad que lentamente comenzaban a extenderse al calor de la recesión económica y la crisis mundial.

Aunque tardíamente, Estados Unidos retomó la iniciativa política buscando afirmar una relación de fuerzas más favorable en la región. Las burguesías nacionales intentaban reafirmar sus regímenes, gravemente erosionados a la luz de los escasos resultados de la liberalización económica, profundizando la dependencia de la economía mundial. La coyuntura estabilizadora no estaba plenamente asentada y se basaba principalmente en mecanismos políticos de funcionamiento simbólico. Estados Unidos no lograba implementar programas decisivos para asegurarse la superavitaria renta latinoamericana derivada de su hegemonía indiscutida.

La región norandina¹

A pesar de esa coyuntura estable el área norandina (Ecuador, Colombia, Venezuela) seguía permaneciendo como la zona de mayor inestabilidad política y convulsión social en el continente, expresando una aguda desigualdad con la relativa estabilización de México, Brasil y el Cono Sur. Después de la recesión que afectó a la mayoría de los países de la región, y que fue particularmente severa en el área norandina y en el cono sur, está tomando cuerpo una recuperación débil y desigual, fuertemente polarizada en las dos mayores economías de la región, Brasil y México.

Un rasgo que no debe perderse de vista en el análisis es la alta desigualdad en el desarrollo y los ritmos de la situación política latinoamericana. La oposición entre los polos de estabilidad y convulsión es relativa y dinámica ya que a pesar de las grandes diferencias en los ritmos y dinámica de la coyuntura, ésta se asienta sobre contradicciones económicas, sociales y políticas fundamentalmente similares: las que imprimen, en la última década, el proceso de penetración de la economía mundial sobre el capitalismo atrasado de los países latinoamericanos.

En los años '90 la subregión andina se ha constituido en el mayor foco de inestabilidad continental.

En una primera etapa se produjo el autogolpe de Fujimori, la caída constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela, la salida política del presidente Abdalá Bucaram en Ecuador y el desplome del presidente Samper en Colombia. El mayor enfrentamiento limítrofe del hemisferio se originó entre Ecuador y Perú y una de las fronteras más tensas en el continente en la actualidad es la de Colombia con Venezuela.

A su vez, en comparación con otras subregiones, es aquí donde se violan más sistemáticamente los derechos humanos, siendo Colombia el caso más espeluznante. Estos acontecimientos han dejado huella en estos países y la crisis política dibujó su conducta internacional en los años posteriores. En una segunda etapa de los '90 se desató en Perú la crisis de sucesión porque el país ya no podía ser gobernado con los métodos de Fujimori. Estos no garantizan ya la preservación de la "obra" económica y política del fujimorismo que a los ojos de Estados Unidos estaba esbozando perfiles no tolerables de autonomía.

Las contradicciones y la erosión afectan no sólo a los partidos políticos y a las instituciones de la democracia formal, como el Parlamento, sino al pilar del Estado, las Fuerzas Armadas, donde afloran las contradicciones y disputas entre las burocracias estatales. Este es quizás el más novedoso y sintomático de los hechos que se vieron en Ecuador y Bolivia: las fisuras que se producen en las instituciones estatales en medio del proceso de expansión de la participación real.

Los acontecimientos de Perú y Bolivia a partir del inicio del Plan Colombia amenazan con extenderse a cada país del hemisferio. Los desmanes políticos de Fujimori, incompatibles con un mecanismo institucional y para colmo acompañados de gestos de autonomía, hicieron apelar a un nuevo recurso por parte de Estados Unidos para controlar aliados: una denuncia de corrupción en puntos claves del gobierno. Vladimiro Llich Montesinos, a pesar de su antigua pertenencia a la CIA, llevado por una combinación de avaricia financiera y juego político propio, poco antes del inicio del plan Colombia, facilitó la compra y recepción por parte de las Fuerzas Armadas peruanas de 10 mil fusiles Kalashnikov, cuyo destino final eran las FARC. La Casa Blanca optó por el camino de la desestabilización.

En el caso de Bolivia el éxito en la erradicación de cultivos produjo la sublevación de los campesinos y el inicio de un movimiento de autodefensa campesino, tal como nacieron las FARC en Colombia tras la década de la "violencia".

Varias características de los países andinos ayudan a la expansión de la crisis, un proceso que recorre toda la última década del siglo:

1. Los Andes concentran la producción de coca del continente y las cinco naciones (junto con México) son protagonistas centrales en el negocio ilegal de las drogas.
2. En esta subregión se ubican los países con mayor nivel de corrupción continental.
3. Es la zona donde los militares, en el escenario de la posguerra fría, menos se han replegado en términos de su incidencia política y su gravitación corporativa.
4. En estas naciones el ajuste económico se asienta sobre economías sin recursos de alto valor agregado transables en el nuevo mercado mundial. Sus commodities (petróleo, agricultura, pezca) no implican un alto flujo de inversiones a largo plazo.
5. Es una zona con altos grados de degradación medio-ambiental.

Se fue configurando así un polo de aguda desestabilización y conmoción social, económica y política en el último período. Estos países han sido brutalmente golpeados por la última recesión asiática y además está en crisis la perspectiva de sobrevivencia de la acumulación capitalista.

En un análisis desagregado y pormenorizado del área norandina, la relativa estabilización del régimen que implica el asentamiento del chavismo en Venezuela, buscando cerrar la perspectiva de disolución del sistema político nacional y los avances de la "dolarización" en Ecuador tras la "impasse" política del levantamiento de enero, implican que el agudo nivel de la inestabilidad en el área tiende a amortiguarse, sin que los gobiernos hayan podido todavía recuperar el equilibrio.

Mientras Ecuador y Venezuela tienden a detener el avance hacia mayores niveles de crisis, la desestabilización se extiende a nuevos países, abarcando toda la región andina y derramándose hacia otros sectores (Costa Rica, Paraguay y el Cono Sur).

América Latina

En enero y febrero de 2000, el vuelco sufrido por la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el levantamiento campesino y popular en Ecuador mostraban las contradicciones de la coyuntura. Los planes de estabilización económica y de represión política chocaban con una tenaz resistencia y tendían a repercutir en la persistencia de las contradicciones políticas. Los gobiernos no lograban retornar al equilibrio, por lo menos en forma permanente.

Los acontecimientos que se están produciendo desde entonces en Bolivia, Paraguay, Costa Rica o Perú muestran que en América Latina, lejos de acontecer el asentamiento de una coyuntura de estabilidad, se está produciendo un vuelco. El contrapeso se hallaba en los países económicamente más fuertes y más poblados (Brasil, México y el cono sur) donde el capitalismo contaba con una mayor estabilidad económica y política y en los que las movilizaciones no se hallaban en centro de la escena, aunque a mediados de 2001 ya se había perdido todo vestigio de estabilidad. La tendencia es clara: aparece una nueva oleada de movilizaciones que muestra importantes signos de radicalización política y metodológica, el surgimiento de

una nueva vanguardia que se organiza en forma independiente y el recrudecimiento de la crisis política en varios países. Esto presupone el establecimiento de un período preparatorio, que apunta a desplegarse con mayor amplitud en una etapa superior de enfrentamientos.

El epicentro de la crisis se encuentra en los Andes, mientras que en los países más estables comienzan a manifestarse algunas importantes movilizaciones. El motor de esta nueva oleada es el rechazo a los intentos de profundizar el programa económico, que suponen una nueva extracción de renta nacional y el aumento de los desequilibrios distributivos.

En Costa Rica movilizaciones de más de 100 mil trabajadores (el 10% de la población adulta) obligaron al gobierno a postergar la privatización de la energía eléctrica. En Paraguay la crisis política que golpea a González Macchi se combina con huelgas y protestas obreras y campesinas. Pero no es la clase obrera industrial la que imprime su sello de manera decisiva a esta primera fase de la nueva oleada.

Estudiantes y campesinos

El campesinado latinoamericano viene protagonizando un amplio ascenso que abarca a casi todo el continente desde mediados de los '90, respondiendo a la presión de la modernización en el campo, a la política de contrarreforma agraria y la situación de aguda miseria. A ello hay que sumar la lucha contra la opresión racial y cultural de los pueblos originarios.

Pero también el estudiantado está emergiendo como actor de primer orden. La aparición de un nuevo movimiento estudiantil encontró en México su mayor expresión, pero se lo puede encontrar en las primeras líneas del enfrentamiento en Bolivia, juega un importante papel en Costa Rica y en el movimiento democrático de la población peruana, comienza a irrumpir en Brasil con las movilizaciones de los estudiantes secundarios y de la Universidad. El motor de esta lucha estudiantil es que la Universidad y la educación pública en su conjunto están en la mira de los gobiernos de la región a través del ajuste y la reforma educativa que impulsa el Banco Mundial.

El levantamiento de enero en Ecuador y las movilizaciones de Cochabamba en Bolivia son las dos mayores acciones independientes del movimiento de masas con que se inicia esta oleada.

En estas experiencias más avanzadas se expresan:

- la tendencia a la lucha política de masas, elevándose incluso desde reivindicaciones mínimas o sectoriales a cuestionar abiertamente los marcos políticos generales.
- la tendencia a la unidad entre los obreros, campesinos y la población empobrecida.
- el recurso a los métodos más radicales de lucha como la huelga y los paros activos, el bloqueo de calles y caminos y las barricadas, el levantamiento y los primeros pasos de la autodefensa para enfrentar a las fuerzas militares, alcanzando rasgos de semiinsurrección como en Cochabamba.
- el resurgimiento de la tendencia hacia la huelga general política combinada con el levantamiento nacional.
- la búsqueda de una unidad de los distintos sectores en conflicto, imponiendo a las organizaciones sindicales y populares históricas la actuación conjunta de las organizaciones obreras, campesinas y populares. Estos organismos, aunque no son estructuras de poder, reflejan el despertar de tendencias profundas a la autoorganización, superando las limitaciones de las organizaciones tradicionales.

Esta nueva vanguardia latinoamericana es parte de un proceso internacional, como muestran las movilizaciones de Seattle y Praga, que en la región hallaron su expresión más avanzada en la huelga de la UNAM en México.

En esta primera fase, donde la intervención del movimiento obrero industrial no pesa de manera decisiva, la juventud, en particular la estudiantil, está jugando un importante papel aunque este rol no debe magnificarse dadas las limitaciones organizativas e ideológicas de las conducciones políticas y las propias ilusiones democráticas de las movilizaciones populares. El caso de Ecuador, en que la toma de los edificios de gobierno es desmontada mediante un llamado telefónico del Departamento de Estado norteamericano, es ilustrativa al respecto. El proceso de movilizaciones manifiesta tendencias a la radicalización pero esas tendencias aún no se han asentado.

Las necesidades de estabilidad política que manifiesta la economía mundial fueron bien expresadas por Peter Romero, del Departamento de Estado norteamericano, quien reclamó en Paraguay, como requisito para asegurar la gobernabilidad, "no más golpes, no más huelgas". Pero es poco probable que le hagan caso.

El vocero guerrillero Andrés París dijo que "es claro que la invasión norteamericana no es para enfrentar la expansión guerrillera sino para enfrentar los problemas que tiene Estados Unidos en el área andina. Quieren poner en caja la situación peruana, ecuatoriana y venezolana. Por eso, estos países y Brasil han identificado como una amenaza a su soberanía el Plan Colombia"².

Notas

1. Un análisis de coyuntura, los Andes en erupción, Estrategia Internacional N° 15, órgano internacional del Partido Obrero de Argentina, diciembre de 1999, Buenos Aires.
2. Clarín, 22 de agosto de 2000

Capítulo 3 – La geografía

Nunca como en este caso es conveniente hacer un análisis de la geografía de un país para comprender no sólo los sucesos del presente sino todo su desarrollo histórico.

En general puede afirmarse que la relación entre geografía y política, que dio lugar al nacimiento de la geopolítica como rama especial de estudio, se utilizó en el pasado como elemento determinante para la constitución de los Estados, que intentaban de este modo dotarse de un marco territorial específico para la materialización del hoy revisado concepto de Estado nación. Las desventuras que produjo la afirmación del “espacio vital” alemán comenzaron a echar por tierra el privilegio determinista de estas posiciones pero ya habían quedado asentadas como derecho adquirido las expansiones que Gran Bretaña y Estados Unidos realizaron amparadas en esta doctrina. La creación de la Armada británica y el impulso naval de Estados Unidos se ampararon en estos conceptos para desarrollar la expansión de las economías que entonces se basaban en el “dominio de los mares”.

Quitando entonces el concepto determinante que tuvo la geografía sobre la política en el pasado no podemos dejar de rescatar por lo menos la importancia que sigue teniendo la topografía de un país en relación a las corrientes de expansión interna de su dinámica social.

En el caso de los países andinos se destaca el caso de Perú, donde las diferencias sociales entre el llano y la sierra nacen ya con la Conquista española. En el caso de Colombia la geografía proporciona variados elementos para diseccionar su estructura social a partir de la conformación de su territorio. Es el único país bioceánico de América del Sur lo que equivale a sostener que un país de importancia media, con alta densidad de población y una geografía montañosa, fluvial y selvática tiene una amplísima capacidad de comercialización de productos primarios hacia ambas costas de Estados Unidos siendo, junto con Venezuela, la economía más cercana a Europa occidental.

La geografía tropical y montañosa generó gran cantidad de climas y terrenos, sumamente aptos para la lucha guerrillera obligando al Ejército a permanecer encerrado en las ciudades y sometiéndolo a indecibles contratiempos en la lucha sobre el terreno. La cordillera se divide en tres al llegar a Colombia, la Cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Sin solución de continuidad esta geografía se continúa en Panamá, convirtiendo al Darién en una zona de fronteras móviles donde los límites sólo figuran en los tratados.

Así surgieron zonas geográficas separadas, en un país percibido como demasiado alejado de sí mismo. El tránsito de una zona a otra implicaba un viaje de meses entre zonas cercanas geoméricamente pero distantes geográficamente. Se desarrollaron cuatro grandes regiones: el Litoral Atlántico, el Alto Magdalena o la Cordillera oriental, el Valle del Cauca y Antioquía. Por otro lado, la intrincada geografía produjo que los procesos políticos de una zona no tuvieran relación con lo que sucedía en otra. Estas características permiten definir a Colombia como un “país archipiélago”.

Los guerras civiles entre las distintas zonas por colonizar el país explicaron toda la historia colombiana del siglo XIX. Estas cuatro zonas se encuentran del lado norte y oeste de la cordillera. Al este de la cadena montañosa andina queda una inmensa región, selvática y campesina, que ha terminado siendo la zona en disputa durante el siglo XX. Allí están los departamentos de Meta, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Amazonia y Putumayo donde actualmente se desarrollan los combates entre las FARC y los paramilitares, donde se asientan los cuarteles militares de entrenamiento de las brigadas antinarcóticos, los asesores norteamericanos, la zona de despeje y las plantaciones de coca.

También en esta zona se asientan las dos grandes cuencas hidrográficas que dan origen al sistema fluvial del río Orinoco, que desemboca sobre el Atlántico en Venezuela y del río Amazonas, que tras un larguísimo recorrido, desemboca también sobre el Atlántico, en Brasil.

El Litoral Atlántico, el Alto Magdalena, el Cauca y Antioquía son las zonas “desarrolladas” de Colombia, todas sobre el occidente del país. El costado oriental, desde las cadenas montañosas hasta la Amazonia, es donde se asientan los territorios que aún no están definitivamente incorporados a la economía colombiana, donde está en disputa el control territorial y donde se asienta el primer objetivo del Plan Colombia, el Putumayo.

Las grandes fronteras de Colombia también están relacionadas con esta zona que limita con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Sobre el extremo sudeste se alza la triple frontera Brasil-Perú-Colombia donde el

Plan Cobra brasileño fijó su comando central, en la localidad de Tabatinga¹. Por allí ya comenzaron a pasar los primeros desplazados externos de la guerra en el Putumayo colombiano.

La conjunción de selva y montaña ha favorecido la permanencia durante 40 años de las guerrillas de las FARC y el ELN en Colombia. Las operaciones de guerra se ven frecuentemente entorpecidas por súbitos cambios de clima, tal como sucedía en la Cordillera del Cóndor cuando se dio la guerra entre Perú y Ecuador. La adaptación de la guerrilla al terreno ha terminado por dejar encerrado al Ejército en las grandes ciudades, desmoralizado por las derrotas sucesivas, bombardeado por el dinero del narcotráfico y ahora doblemente presionado por el Plan Colombia. Deberá salir a luchar en la selva y la montaña y deberá hacerlo respetando los “derechos humanos”, una espada de Damocles que, tarde o temprano, caerá.

Notas

1. Brasil se protege del conflicto y militariza su frontera, Eleonora Gosman, Clarín, 21 de agosto de 2000.

Capítulo 4 – El sistema político

Es difícil encontrar una estabilidad de las instituciones políticas comparable a la colombiana en el sistema político latinoamericano. Los gobiernos ejercieron su mandato siempre surgidos de resultados electorales. Este proceso sólo se vio interrumpido entre 1953 y 1958², cuando las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del poder para poner fin a la guerra civil surgida del bogotazo de 1948. La base institucional de esta estabilidad política ha sido la preeminencia de los dos grandes partidos políticos colombianos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que dominaron la vida política desde 1840 en adelante. Sólo en Honduras ha sobrevivido la hegemonía liberal-conservadora como rasgo central del sistema político durante más de 150 años.

El “Frente Nacional”

La supremacía indiscutida de liberales y conservadores ha otorgado una estabilidad con aspectos negativos de todo tipo. El dominio de las élites políticas, la vigencia de actitudes políticas basadas en lealtades personales y clientelistas y la falta de renovación sólo conforman la superestructura de esa primacía. En la base de la misma se encuentra una permanente militarización de la política como resultado de un cerrado sistema social en el cual el adversario debe ser físicamente eliminado. Estas características de guerra constante culminaron en la “violencia”. Los 300 mil colombianos muertos reforzaron las características superestructurales de los partidos mientras buscaban eliminar el enfrentamiento armado y legalizar el sistema político.

El mecanismo fue el denominado Frente Nacional de 1957, un pacto entre liberales y conservadores que puso fin al breve régimen militar del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). En virtud de este pacto, que se extendió formalmente de 1957 a 1974, los dos partidos acordaron el apoyo unificado a un mandato presidencial rotativo, el reparto equivalente de importantes cargos políticos en gabinetes de gobierno y una paridad parlamentaria en la representación de ambas cámaras legislativas. Hasta 1974 ningún otro partido estuvo representado en el Congreso.

En los años ‘60 y ‘70 una serie de reformas constitucionales comenzó a abolir gradualmente los acuerdos del Frente Nacional. Sin embargo, el pacto dejó una huella duradera en el sistema político colombiano. Pero algunos de los elementos frentistas, en especial la repartición de cargos políticos y administrativos, subsistieron tras el desmantelamiento formal del Frente en 1974. Salvo durante el gobierno del liberal Virgilio Barco (1986-1990), el principal partido de oposición siguió representado en el Gabinete.

El acuerdo entre conservadores y liberales, sancionado en la constitución del Frente Nacional, permitió poner fin a la violencia secular entre ambos partidos y logró otorgar al Estado un margen de acción para relanzarse a un periodo de rápido crecimiento económico y transformación social. Pero por otro lado el sistema impidió que las nuevas demandas que encarnaban las fuerzas sociales derivadas de la modernización económica y social lograran encontrar un espacio de expresión en las instituciones políticas. De este modo las demandas no encontraban un canal de penetración en el sistema político. La emergencia de la actividad guerrillera en los años ‘60 fue una respuesta a esta exclusión de alternativas a la alianza bipartidista. Y por otro lado, los sectores que estaban opuestos a los acuerdos que sellaron el funcionamiento del Frente Nacional no tenían más remedio que actuar dentro de alguno de los dos partidos. Con esto el faccionalismo al interior de los partidos se acentuó.

La reforma constitucional de 1991

A finales de la década del ‘80, la aparición de nuevos problemas hizo que crecieran las presiones sobre el Estado para lograr la modernización del sistema político. El crecimiento de la actividad guerrillera, el

descubrimiento del narcotráfico como una amenaza a las instituciones, la expansión de la pobreza y la perpetuación de las desigualdades sociales y regionales hicieron que los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco intentaran solucionar todos los problemas juntos mediante la ampliación de la participación política y la incorporación de la guerrilla a la vida política civil.

El casi exterminio de la Unión Patriótica pareció otorgar posibilidades a unos esfuerzos de modernización política que no tocaran las bases del desarrollo económico. Estos esfuerzos desembocaron en la convocatoria de una Asamblea Constituyente que promulgó, el 4 de julio de 1991, una nueva Constitución en reemplazo de la Carta de 1886.

La Constitución de 1991 tuvo por finalidad restablecer el consenso nacional, instaurando nuevas formas de participación política e incrementando el número de actores políticos. De forma implícita, la nueva Constitución partía de la visión de que el cese de la violencia exigía modificar el sistema bipartidista y hacer que los partidos políticos fueran más representativos de una sociedad que se había complejizado.

A tal fin se dispuso incluir en la Asamblea Constituyente a los grupos guerrilleros que hubieran firmado acuerdos de paz con el Gobierno. También se intentó extender la participación a diversas minorías étnicas y religiosas. La Constitución y la legislación subsiguiente, como la Ley de Partidos Políticos de 1994, aspiraban a establecer un sistema más pluralista de representación política, que incluía escaños especiales para las poblaciones indígena y afrocolombiana.

El resurgimiento del bipartidismo

La nueva Constitución pareció dar aliento a las esperanzas de que el sistema político pudiera crear una mayor pluralidad y de que los dos partidos tradicionales perdieran su monopolio tradicional. Estas expectativas se vieron alentadas por la trayectoria electoral de la Alianza Democrática/M19, el movimiento político fundado por los guerrilleros desmovilizados del M19, en las elecciones presidenciales de 1990 y en las elecciones a la Asamblea Constituyente.

En los hechos estas expectativas se vieron defraudadas. En los años '90 la supremacía electoral de liberales y conservadores continuó. En las elecciones legislativas del 27 de octubre de 1991, estos dos partidos alcanzaron casi el 70% de los votos.

Las elecciones presidenciales de 1994 confirmaron la aparente imposibilidad de que una tercera fuerza política cuestionará la posición de los partidos tradicionales. En la primera ronda de las elecciones, el 24 de marzo, Ernesto Samper y Andrés Pastrana obtuvieron en total el 90,3% de los votos. El 3,8% obtenido por Antonio Navarro Wolf de AD/M-19 parecía acabar con las esperanzas del partido de convertirse en una opción válida y con la perspectiva de construir una "tercera vía" con posibilidades reales de cuestionar la hegemonía bipartidista.

La fragmentación interna

En las elecciones de 1991 y 1994 se pudo ver una tendencia hacia la fragmentación interna en los partidos liberal y conservador. Se multiplicaron las listas electorales oficialmente independientes del PL y particularmente del PC, y se asistió a un debilitamiento de la frágil autoridad de las organizaciones de los partidos. En el Congreso elegido en 1994, nueve grupos se adhirieron a las "familias" liberal y conservadora, aunque sin pertenecer oficialmente a ninguno de estos partidos. Al mismo tiempo, el faccionalismo se hizo patente en una proliferación de listas que incluían candidatos en representación de un mismo partido. Para el Senado los votantes pudieron escoger entre 254 listas diferentes, de las cuales 134 fueron presentadas por candidatos del PL y 39 por candidatos del PC. De estas listas, sólo tres lograron asegurar la elección de más de un candidato. El número total de listas para la Cámara de Representantes fue de 628, 293 liberales y 88 conservadoras.

La dispersión de candidatos en diferentes listas refleja la total falta de disciplina jerárquica de los partidos políticos y su deficiente organización nacional. Estas carencias permitieron a los líderes locales o a grupos poderosos de interés, unidos a uno de los partidos tradicionales por lazos de lealtad, promover candidatos y lanzar campañas electorales al margen de las organizaciones nacionales de los partidos. Con frecuencia, los candidatos al Congreso no representan a un partido o programa específico, sino que concurren a las urnas a título individual, con sus propias propuestas y movilizan un determinado apoyo electoral que sólo refleja su propia base personal de poder.

Fragmentación externa

Diversos partidos pequeños y regionales han obtenido escaños desde 1991, al igual que las minorías étnicas del país. Así, en la legislatura de 1994-1998, unos 35 partidos y movimientos diferentes tenían representación en ambas cámaras del Congreso. Estas fuerzas presentan una fragmentación extrema, tal como refleja el hecho de que sólo siete de ellas lograron más de un escaño. Esto hace pensar que el objetivo

de la Constitución de 1991, el nacimiento de un sistema político más abierto y pluralista, no se ha materializado. La escena política y legislativa se caracteriza, pues, por el predominio continuo de los partidos tradicionales, combinado con el alto nivel de fragmentación entre otras organizaciones políticas y en el seno mismo del PL y del PC.

El gobierno de Samper (1994-1998)

Durante el mandato del liberal Ernesto Samper, se acentuaron las divisiones políticas dentro de los partidos y, en general, entre la “clase política” establecida y las fuerzas alternativas favorables a la renovación política. La victoria de Samper en 1994 fue muy exigua. Nunca antes un candidato liberal respaldado por todas las fracciones del PL había ganado por un margen tan estrecho. Esto indicaba una posición frágil que se vio acentuada en los cuatro años posteriores. Las acusaciones de que su campaña electoral había sido financiada con dinero proveniente del cartel de Cali cargó con un extenuante lastre su gestión de gobierno. La condena y detención de algunos de sus más próximos colaboradores le produjo un aislamiento que obstaculizó la construcción de cualquier tipo de consenso político e imposibilitó la ejecución de cualquier diálogo de paz durante su mandato.

Las denuncias sobre la financiación de la campaña de Samper por el cartel de Cali surgieron pocos días después de su elección, el 19 de junio de 1994. Pero la investigación sobre su posible implicancia recién concluyó el 12 de junio de 1996. La Cámara de Representantes decidió, por 111 votos contra 34, exonerarlo de los cargos y archivar el caso. Dos años después, el 26 de junio de 1998, la Corte Suprema decidió investigar a los miembros del Congreso que habían votado en favor del presidente.

Así, la primera mitad del mandato de Samper estuvo marcada por la incertidumbre sobre el posible desenlace de la investigación y la eventualidad de que el presidente tuviera que dimitir en la crisis institucional más seria desde 1957. Tras ser sobreseído, Samper tuvo que asistir a múltiples pedidos de renuncia, incluso de senadores de su propio partido. Su gobierno nunca pudo evitar del todo ser identificado con la corrupción. En 1997, tres de sus ministros debieron renunciar por escándalos de corrupción. El 20 de marzo, el ministro de Defensa presentó su dimisión, acusado de tener vínculos con el narcotráfico; y los ministros de Minas y Energía y de Comunicaciones renunciaron más tarde al conocerse la asignación de contratos mediante prácticas corruptas. Estos casos minaron aún más la legitimidad del Gobierno, creando un clima de incertidumbre política.

El mandato de Samper se caracterizó por una polarización entre los partidarios del Gobierno y sus opositores, dentro y fuera del gobierno, que también estaba constituido por ministros conservadores. El PC adoptó una postura clara y relativamente unificada contra el Gobierno, en contraste con la usual porosidad de la división entre gobierno y oposición. Un efecto de ello fue la renuncia de los ministros conservadores y de varios altos funcionarios de gobierno. Tres de los cuatro ministros conservadores del Gabinete de Samper presentaron su dimisión en enero de 1996, al igual que diversos embajadores, entre ellos Noemí Sanín.

La corrupción

El “Proceso 8000”, como se denominó a la investigación de la financiación de la campaña de Samper, fue sólo el aspecto más notorio de un rastreo mayor sobre los vínculos existentes entre el cartel de Cali y numerosos políticos y altos funcionarios. La investigación se inició en abril de 1995 y condujo a la condena de varios congresistas y al arresto de dos procuradores generales, uno de los cargos públicos más importantes. Aunque desde hacía varios años se daba por real la conexión entre el narcotráfico y algunos políticos, el Proceso 8.000 sacó a luz una trama antes insospechada de relaciones criminales con las principales instituciones democráticas del país, minando aún más su ya escasa credibilidad. Inevitablemente, la sospecha habitual hacia los líderes y partidos políticos se vinculó ahora a la presidencia, que para muchos pasó a encarnar el máximo exponente del derrumbe moral del sistema político tradicional y de la clase política.

La demandada modernización política, que la constitución de 1991 había prometido, se asoció con la necesidad de lograr una limpieza de un sistema político ampliamente percibido como corrupto. Estas demandas se convirtieron en el principal argumento de la oposición a Samper. Andrés Pastrana, vencido en las elecciones de 1994, dio a conocer las grabaciones que vinculaban al presidente con el cartel de Cali en el llamado escándalo de los ‘narcocasetes’. En un principio, esta actitud de Pastrana significó un duro golpe para su popularidad. Pasó a ser considerado como un traidor y confidente de Washington. Cuatro años después el clima político había cambiado y podría decirse que su denuncia reforzó su imagen de renovador y sus posibilidades de gobernabilidad.

Las elecciones legislativas de 1998

Las elecciones del 8 de marzo de 1998 a ambas cámaras del Congreso confirmaron las tendencias que se venían perfilando en la política colombiana desde principios de los ‘90. Como había sucedido en las

elecciones legislativas de 1994, nuevamente la fragmentación de los partidos produjo un alto número de listas: alrededor de 107 partidos, movimientos y coaliciones diferentes presentaron 692 listas para la Cámara de Diputados y 318 para el Senado, sumando un total aproximado de 7.600 candidatos. Y al igual que en 1994, sólo tres listas para el Senado lograron asegurar la elección de dos o más candidatos. La proliferación de listas y la ausencia de candidatos capaces de recoger un apoyo significativo fuera de una zona geográfica determinada hizo que los medios informativos trataran a los candidatos como representantes individuales y no como expresiones de partidos políticos.

Varios candidatos concurren por dos partidos o por alianzas, en algunos casos incluso entre el PL y el PC, lo que dificultó entender rápidamente si los partidos tradicionales habían perdido o ganado. No obstante, la composición de ambas cámaras del Congreso se mantuvo en general inalterada, con una mayoría liberal de 50 bancas en el Senado y 90 en la Cámara de Representantes. La representación de los conservadores fue de 25 escaños en el Senado y 50 en la Cámara.

La elección del 8 de marzo fue la primera votación nacional posterior al Proceso 8.000. Pero los resultados electorales no evidenciaron un rechazo al sistema político establecido o a los políticos con base personal de poder. La renovación de los miembros del Congreso era sólo parcial, y muchos de los líderes locales (o caciques) fueron reelegidos, en ocasiones por más votos que en 1994. Aun así, algunos políticos de esta categoría perdieron sus bancas, mientras que muchos candidatos opuestos a la política tradicional recibieron un número alto de votos, especialmente en Bogotá. La disidente liberal Ingrid Betancourt accedió al Senado por el Movimiento Oxígeno Liberal conquistando más votos que ningún otro candidato. El populista de izquierda Carlos Moreno de Caro fue el tercer candidato más votado al Senado. En las elecciones a la Cámara de Representantes en Bogotá, una amplia mayoría del voto fue a los candidatos independientes, entre ellos el ex candidato a la presidencia Antonio Navarro Wolff, ideólogo del M19. Todos ellos basaron su campaña electoral en la lucha contra la corrupción y el clientelismo y se constituyeron en los críticos más firmes del gobierno de Samper.

Las elecciones del 8 de marzo ayudaron al fortalecimiento de la lucha contra la política tradicional. O por lo menos la tornaron más visible que antes. Pero esta afirmación debe tener en cuenta algunas características que deben mencionarse:

1. Tuvo casi un exclusivo asiento en el resultado electoral de Bogotá, un voto fuertemente personalista.
2. No surgieron elementos que pudieran prever el surgimiento de una "tercera fuerza" consolidada, con capacidad de estructurar un programa común mediante la colaboración entre los candidatos opositores.
3. Contradictoriamente, si por un lado aparece una tercera fuerza incipiente, también es cierto que esta elección representó la desaparición de los últimos representantes de la izquierda política independiente en el Congreso. El Consejo Electoral Nacional ha decidido cancelar el estatuto legal del Partido Comunista, del M19 y de la Corriente Renovación Socialista, movimientos que obtuvieron menos de 50 mil votos en las elecciones legislativas y no obtuvieron ningún escaño en el Congreso.
4. Por otra parte, si los comicios revelaron la existencia de un nutrido voto independiente, éste todavía está lejos de ser mayoritario. El 8 de marzo se emitieron unos dos millones de 'votos de opinión', frente a unos 500 mil en 1994. El 'voto clientelista', atado a la maquinaria partidaria tradicional, representó aún unos 6 millones de sufragios.

Las elecciones legislativas de marzo podrían haber sido una nueva muestra del desencanto con los partidos tradicionales, habitualmente expresado en la abstención más que mediante el apoyo a una opción alternativa. Pero la alta participación y el masivo apoyo a Noemí Sanín en la primera vuelta de las elecciones presidenciales probaron que el rechazo al statu quo político no se traduce necesariamente en apatía.

Pastrana presidente³

El 21 de junio de 1998 Andrés Pastrana ganó las elecciones al frente del Partido Conservador imponiéndose por un margen de 500 mil votos sobre su opositor Horacio Serpa del Partido Liberal. Conquistó más votos que ningún otro presidente en la historia del país con un 50,4% del escrutinio. En la segunda vuelta el presentismo electoral fue cercano al 60%, algo poco usual en Colombia. Pastrana asumió el 7 de agosto de 1998.

La posible crisis del sistema bipartidista

Lo que la contienda electoral del 21 de junio mostró claramente fue la persistencia de una tendencia reciente en la política nacional, el creciente peso del 'voto de opinión' urbano. Tal como sucede en los centros urbanos de otros países latinoamericanos los colombianos ya no votan como sus padres, ni lo hacen por las mismas razones.

En estos comicios, la tercera vía obtuvo una porción del voto mucho mayor que en 1994, cuando Ernesto Samper y Andrés Pastrana se repartieron el 90,3% del escrutinio en la primera vuelta. En 1993, la tercera

opción, representada por la candidata independiente Noemí Sanín, consiguió en la primera vuelta casi el 28% del voto nacional, así como holgadas victorias en Bogotá y otras zonas urbanas.

La campaña reveló también una tendencia conocida: la profunda fragmentación interna de los dos grandes partidos. Así, el conservador Pastrana se impuso gracias al apoyo de un compañero de fórmula liberal y de importantes facciones de ambos partidos.

El resultado ha sacudido la fuerza electoral del PL, que ha ocupado la presidencia en los últimos 12 años y la mayoría en el Congreso desde 1974. Lógicamente Horacio Serpa, el candidato liberal derrotado, aseguró que el partido entrará en una fase de reorganización. Sin embargo, la persistencia de estas tendencias no señala la desaparición inminente del sistema bipartidista.

Sociedad civil y reforma política

Algunos observadores han sugerido que la gravedad de la crisis colombiana y la urgencia de darle solución han generado una “nueva actitud” en la política nacional caracterizada por una participación electoral más activa y una acción más decidida de la sociedad civil contra la polarización política. Uno de los rasgos más llamativos de las elecciones del 21 de junio fue la movilización de un gran número de electores que antes habrían preferido la abstención o la indecisión. La sociedad civil también ha ejercido un papel central en el diálogo con el ELN, con independencia de las fuerzas políticas tradicionales. Su función será ampliar el espacio para la negociación y garantizar la sustentabilidad del proceso, instando a todas las partes a proseguir el diálogo. El desencanto evidente de buena parte del electorado con la política tradicional (Noemí Sanín recogió más de una cuarta parte de los votos en la primera vuelta) podría inducir a los dos partidos a reformar tanto su estructura como el sistema, a fin de dar una respuesta más adecuada a las demandas de la sociedad. Se ignora, no obstante, si éste será el punto de partida de un proceso más amplio de transformación del sistema político que trascienda más allá de la necesidad de hallar una salida al conflicto.

Tanto Pastrana como Serpa, líder de la oposición, han expresado su adhesión a la reforma política. El presidente electo ha prometido celebrar un referéndum sobre dicha reforma en los primeros 30 días de su mandato y no ha descartado la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. Asimismo, ha prometido cambios en la estructura y financiación de los partidos políticos, así como en el mecanismo de elección al Congreso, impidiendo a los partidos apoyar más de una lista por distrito. Las listas serán abiertas y se celebrarán elecciones a los principales cargos de la administración estatal.

El nuevo Congreso, que asumió funciones el 21 de julio de 1998, contribuirá probablemente a este fin. Aunque nominalmente los liberales ocuparon 56 de los 101 escaños del Senado y 98 de los 161 de la Cámara, la coalición de conservadores, liberales e independientes que se ha constituido podría dar a Pastrana una mayoría suficiente. Las principales propuestas de liberales y conservadores coinciden en sus aspectos centrales: reforma de los partidos políticos, modificación de la legislación electoral y del Congreso, y revisión de la relación de poderes entre las distintas ramas del poder. Estas cuestiones se verán afectadas por el desarrollo del proceso de paz y por el desenvolvimiento de la economía.

Los liberales en la oposición

Aunque Pastrana logró la presidencia por un cómodo margen, es de destacar que casi la mitad del electorado votó en su contra. La alta tasa de participación electoral implicó también que Serpa recibiera más votos que ningún otro candidato liberal en la historia del país, pese al abandono de importantes facciones de su propio partido. La victoria de Pastrana fue tributaria de las victorias tácticas de las postrimerías de su campaña. Aun así, la victoria del PC fue un hecho histórico, teniendo en cuenta que los liberales se habían impuesto desde 1930 en todas las elecciones a las que concurrieron con una candidatura unificada.

Algunos analistas vieron en la derrota liberal un hecho saludable para la política colombiana. Después de 12 años de gobierno liberal, el país se enfrentaba a agudas dificultades políticas y económicas, con un presidente desacreditado, varios altos funcionarios en prisión y al menos una docena de congresistas liberales investigados por cargos de corrupción.

La maquinaria política del PL resultó ser no invencible, tal como lo demostró esta elección, y el partido debería consagrarse a una fase de reorganización. Serpa aludió a la necesidad de un “redireccionamiento” para que el partido se adapte a las nuevas circunstancias, atrayendo un número mayor de jóvenes y mujeres, fortaleciendo los vínculos internacionales y afianzando al PL como un partido social-demócrata.

La primera tarea de Serpa debería consistir en re-unir un partido fragmentado para permitirle ejercer una oposición creíble, algo que no será sencillo. El líder de la oposición no pudo impedir que un grupo de congresistas liberales apoye la candidatura conservadora de Fabio Valencia Cossio a la presidencia del Senado. Serpa ha acusado a los conservadores de alentar las divisiones en el PL ofreciendo a líderes liberales cargos en la administración y en el Gobierno a cambio de apoyo político. Esto podría dificultarle el

cumplimiento de la promesa, hecha tras su derrota electoral, de formar “una oposición constructiva..., no burocrática”.

Su decisión de que ningún liberal participe en el gobierno de Pastrana sorprendió a muchos observadores nacionales, que invocaron la necesidad de que los dos partidos establezcan un consenso en la crisis actual. Entre tanto, el apoyo que muchos congresistas liberales estaban dispuestos a brindar a Pastrana sugería que la unidad liberal no era una posibilidad inmediata.

Legados de Samper

Los problemas que Pastrana ha encontrado venían desarrollándose durante el período de Samper. El gobierno de Samper no fue capaz de resolver los problemas estructurales con los que se encontró en la economía colombiana y el clima de inseguridad que se vivió en el país durante este período exacerbó muchos de los problemas a corto plazo. El marco del plan de política de Samper fue el salto social, un programa de desarrollo presentado como una redefinición parcial del programa de reformas de Gaviria involucrando un sustancial incremento de la participación del gasto social dentro del gasto público total, con un énfasis en la creación de empleo, vivienda, infraestructura, educación y seguridad social, diseñado para corregir los desequilibrios generados por la liberalización.

Durante gran parte de su período de Gobierno, las sucesivas olas de escándalos crearon una progresiva parálisis en la administración, que vio reducida en muchos casos su capacidad de hacer política al manejo de la crisis. Las políticas sociales planificadas por el gobierno se hicieron incompatibles con una política fiscal dirigida a controlar la inflación. El gobierno reclama, sin embargo, que el 79% de su plan de inversiones sociales se realizó y que el gasto público social se habría incrementado de un 12,2% del PIB a un 15,2% durante el período de Samper. Sin embargo, al concluir el gobierno, el desempleo en junio de 1998 se había incrementado a un 15,8%, el más alto en 13 años. Los planes para mejorar la infraestructura y la educación no fueron completados, y el programa de redistribución de tierras, que suponía la distribución de un millón de hectáreas de tierra a 70.000 familias campesinas, quedó inconcluso.

Las perspectivas de Pastrana al asumir

Quizás la mayor ventaja de Pastrana al inicio de su mandato haya sido la claridad que brindaba en un clima de confusión política y económica. Sus mensajes políticos durante la campaña fueron directos y optimistas, así como desprovistos de detalles. Conservador en economía, Pastrana era capaz de inspirar confianza al sector empresarial ofreciendo recetas económicas severas pero relativamente simples en un período de inestabilidad y confusión. Los analistas sugirieron que, pese a tener poca experiencia personal en política o interés en los pormenores del gobierno, el presidente electo se ha rodeado de un sólido equipo de experimentados gestores.

Las elecciones del 2000

El lunes 7 de agosto de 2000 Pastrana cumplió dos años de gobierno. Pero tuvo que enfrentar una huelga nacional de trabajadores, en medio de la recesión y el desempleo más severos de la historia y de fuertes presiones del FMI para que intensifique el ajuste fiscal⁴.

Luis Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que más de 100 mil trabajadores del sector público y algunos del privado marcharán por las calles de las principales ciudades para protestar contra el desempleo del 20,4% que registra Colombia, la depreciación del salario, las privatizaciones y las altas tarifas de los servicios públicos.

Además, rechazarán las reformas laborales y económicas que el gobierno de Pastrana se propone presentar a consideración del Congreso, en el marco de un acuerdo firmado con el FMI.

A fines de octubre de 2000 se realizaron las elecciones intermedias. 23 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar. Se preveía una abstención del 50 al 70% en varias de las principales ciudades, entre ellas Medellín, Cali y Barranquilla.

Previo a las elecciones fueron asesinados 21 candidatos a las alcaldías y concejos y 100 se retiraron, en su mayoría por la intimidación de la guerrilla y los grupos paramilitares de derecha⁵.

En las elecciones intermedias del domingo 29 de octubre fueron elegidos 965 alcaldes municipales, 12.118 concejales, 30 gobernadores de provincia y 502 diputados a las asambleas legislativas regionales, además de las juntas administradoras locales de las grandes ciudades.

La caída estruendosa del Partido Conservador, interpretada por algunos tratadistas como un castigo al gobierno del presidente Pastrana, el ascenso de un indígena a la gobernación del Cauca, la llegada de un lustrabotas al Concejo de Bogotá, la protesta del voto en blanco en la capital colombiana (10%) y el castigo liberal en Antioquía, son los aspectos más trascendentes de los comicios locales y regionales⁶.

Las coaliciones, una expresión política que tomó auge después de las reformas a la ingeniería electoral, implementadas a través de la Constitución de 1991, ocupa el segundo puesto en la estructura del poder, al

quedarse con 10 gobernaciones y 9 alcaldías de capitales de departamento. Los “otros” movimientos representan hoy la tercera fuerza del país.

El Movimiento Bolivariano de las FARC no participó en las elecciones.

El partido liberal advirtió que sus mayorías fueron un voto de sanción contra el gobierno del presidente Andrés Pastrana, “por carecer de una política de Estado para la solución de los problemas para llevar adelante de una manera exitosa el proceso de paz y la recuperación de la economía”.

Sólo hubo un incidente en Vista Hermosa (zona de distensión) donde las FARC sustrajeron el material electoral. La llamada zona de distensión, escenario del diálogo de paz entre el gobierno y las FARC la componen los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Mesetas, La Macarena, La Uribe y Vista Hermosa (Meta). Su población se estima en 100 mil habitantes.

Las administraciones locales

Un aspecto incierto de las nuevas administraciones locales está en las regiones del sur de Bolívar (creación de una zona de encuentro con el ELN), el oriente de Antioquía (muchas muertes de alcaldes en el período 1998-2000; enfrentamiento entre guerrilla y paracos⁷, el debate sobre el sector eléctrico y los bloqueos en la vía Bogotá-Medellín), y el Putumayo (a pesar de la elección, continuó el “paro armado”). A esto se suma que el gobernador indígena de Cauca, Floro Tunubalá, es un crítico del Plan Colombia. Toda la zona sur del país puede generar una dinámica contradictoria, entre los planes del Ejecutivo, los que proyectan la insurgencia y los paracos y los modelos de los nuevos mandatarios.

En virtud del triunfo de los liberales en las elecciones del domingo 29 de octubre el paquete de proyectos de carácter económico sería el más afectado por el endurecimiento liberal.

Los debates sobre la reforma tributaria, la reestructuración estatal y la modificación del régimen de transferencias de la Nación a los municipios, serán los escenarios donde se evidenciará el endurecimiento de la oposición liberal.

Notas

1. Colombia ¿un cambio para la paz?, dossier IRELA (Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericanas) N° 64, julio de 1998.
2. La dictadura de Rojas Pinilla cayó en 1957 pero lo reemplazó una Junta Militar que entregó el poder al año siguiente.
3. Colombia ¿un cambio para la paz?, dossier IRELA (Instituto de Relaciones Europeo Latinoamericanas) N° 64, julio de 1998.
4. Huelga contra Pastrana, Clarín, 3 de agosto de 2000.
5. Extrapartidarios, favoritos en Colombia, Clarín, 29 de octubre de 2000
6. Cambios lentos, pero seguros, El Espectador, Colombia, 31 de octubre de 2000
7. Paramilitares

Capítulo 5 – La economía

La deuda externa latinoamericana

En 1972 la deuda externa de América Latina ascendía a 420 mil millones de dólares; en 1975 había llegado a los 500 mil millones y en 1999 oscilaba en los 706 mil millones.

El fenómeno del crecimiento geométrico de la deuda arranca a fines de los años ‘70 cuando los bancos privados, la banca mundial y los gobiernos del norte practicaron una política activa de préstamos a baja tasa de interés. Los países del sur entraron en la vorágine del endeudamiento: crecían sus exportaciones y también los reembolsos, todo sin grandes dificultades. Para los países del norte, el beneficio consistía en reciclar las ganancias petroleras.

Basado en el reingreso de las exportaciones subieron las tasas de interés y la crisis de la deuda se manifestó por primera vez. En 1982 Méjico suspendió unilateralmente los pagos de los intereses de su deuda, entrando en default.

Al no poder pagar sus deudas los países buscaron la forma de obtener el reescalonamiento, estableciendo los reembolsos por un período variable de entre 10 a 20 años. Llegó la hora de los acuerdos con el FMI, la banca mundial, el Club de París y el Club de Londres. Estos aprobaron los nuevos créditos pero esta vez condicionados a la aplicación de planes de ajuste estructural. Los resultados son conocidos: reducción drástica de los beneficios sociales, aceleramiento de las privatizaciones, flexibilización de las relaciones laborales, crecimiento de la pobreza. Comenzaron de hecho a condicionar el marco de actuación de los Estados y sus representantes se despreocuparon de la elaboración de la política económica y el impulso al desarrollo nacional.

En junio de 1984 el grupo de países que formaron el consenso de Cartagena (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Méjico, Perú, Uruguay, Venezuela, República Dominicana) pusieron el acento en la necesidad de un abordaje político de la cuestión de la deuda a nivel internacional. Se sostenía que el valor acumulado de las deudas exteriores de América Latina era superior al monto de su PBI total.

Un año después el Plan Baker aportó 40 mil millones de dólares por 3 años a 15 países muy endeudados. Su teoría del desendeudamiento mediante el crecimiento, se basaba en la necesidad de reducir la inflación, reforzar el rol de las instituciones financieras internacionales y aumentar la presión de los bancos privados. En lo inmediato el objetivo real era ganar tiempo a fin de que la crisis excluyera toda posibilidad de acción concertada entre los países latinoamericanos. La formación de un club de países deudores que permitiera negociar en forma conjunta, basados en el poder otorgado por la magnitud de la deuda, se vio frustrada en la reunión de jefes de Estado americanos de 1986, en Punta del Este. Los presidentes se mostraron incapaces de adoptar una posición común y cada país terminó negociando de manera bilateral.

En 1989 el Plan Brady propuso el canje de las acreencias bancarias por títulos garantizados por el tesoro norteamericano, con la condición de que los bancos redujeran el monto de las acreencias y recolocaran el dinero en el circuito financiero. Los países beneficiarios del Plan se comprometían por su parte a consolidar una parte de su deuda y adoptar los programas de ajuste estructural con el FMI. Entre 1982 y 1996 los países de la región pagaron 749 mil millones de dólares, una suma mayor que la deuda total acumulada.

La estabilidad económica colombiana

Colombia es un país medio, de peso relativo en el ámbito hemisférico en términos territoriales, demográficos y económicos. Con su configuración andina, su proyección hacia el Caribe, su presencia en el Pacífico y su gravitación amazónica, ocupa un lugar geopolíticamente relevante en el continente.

La economía colombiana constituye un caso singular en América Latina. A pesar de su reciente deterioro, desde el comienzo de los años cincuenta mantiene un crecimiento continuo que ha sido relativamente poco alterado por las crisis que han afectado al resto de la región. Así, el aumento de la deuda externa durante los años setenta no tuvo los mismos efectos negativos que en el resto de América Latina.

El crecimiento acumulado de la economía colombiana a lo largo de la década de los ochenta, que se situó en el 43,6%, fue el más alto en toda la región.

De este modo Colombia ha tenido en los últimos 45 años un crecimiento anual promedio de su PIB del 4,5% convirtiéndose en una de las pocas economías de la periferia que ha logrado preservar crecimiento con estabilidad, lo que le ha permitido evitar los ciclos de volatilidad de otras naciones en vías de desarrollo.

Por otro lado, mediante recursos como el petróleo, el carbón y el gas, se ha ido convirtiendo en un centro energético importante en el hemisferio, un recurso con el que hasta hace pocos años no contaba.

Este crecimiento sostenido se ha basado en varios factores:

1. La política económica mantuvo un curso fijo en el marco de la estabilidad creada por el Frente Nacional.
2. La ausencia de conflictos políticos en torno a la política económica permitió un manejo macroeconómico de carácter tecnocrático, sin cambios violentos en la estrategia económica general.
3. La política económica de sucesivos gobiernos, por otra parte, se definió en estrecha colaboración con el sector empresarial, organizado en una serie de gremios, que representan los sectores más importantes de la economía, ha acomodado en gran medida sus intereses.
4. El mantenimiento de una política monetaria y fiscal prudente y estable ha evitado la incertidumbre sobre la evolución económica, favoreciendo así las inversiones privadas.
5. Asimismo, la estabilidad de la política económica ha supuesto una relación armónica con las instituciones financieras internacionales y ha fomentado la confianza de los inversores extranjeros.

El crecimiento se desacelera

En la primera mitad de los años noventa, el ritmo de la expansión económica disminuyó ligeramente y el crecimiento acumulado se manifestaba en índices por debajo de los porcentajes obtenidos por países como Argentina, Chile y Perú. Sin embargo, hasta fechas recientes el crecimiento de la economía colombiana se había mantenido estable y sin grandes fluctuaciones. En el período entre 1980 y 1995, sólo Chile tuvo un aumento del ingreso per cápita superior al de Colombia.

El café

Hasta el inicio de la década, el crecimiento económico en gran medida dependía de la producción de café, dado su carácter de segundo exportador mundial. La participación de este rubro en las exportaciones totales durante la mayor parte del período hasta los años ochenta estuvo en torno al 50%, tendiendo a variar algunos años ante movimientos en los precios internacionales. A partir de mediados de la década de los ochenta, el dominio del café en las exportaciones se ha reducido; en parte, como resultado de una caída en los precios internacionales. Un factor importante en este sentido lo constituyó la suspensión en julio de 1989 del Convenio Internacional del Café que anteriormente había regulado los precios. Una política consistente de diversificación en las exportaciones, que se mostró exitosa, también tuvo incidencia en la caída de la producción cafetera.

Con la reducción de la importancia del café, la economía colombiana ha perdido su carácter monoexportador y es menos vulnerable a los vaivenes de la evolución del mercado internacional.

El petróleo

El dominio del café ha sido reemplazado en parte por la creciente importancia de la explotación de petróleo. Los niveles de producción se han incrementado de 220 mil barriles diarios en 1989 a 650 mil barriles diarios en 1997. Durante los años noventa, con la excepción de 1994, las ventas de petróleo y sus derivados han sido el rubro de exportación más importante. Dadas las grandes reservas de petróleo, así como de gas y carbón, se espera que este sector se convierta en el fundamento del crecimiento en los próximos años, generando los mayores ingresos de exportación y atrayendo inversiones extranjeras. Las empresas petroleras extranjeras, sin embargo, han manifestado preocupación respecto de la inseguridad que sufren sus instalaciones debido a los ataques de la guerrilla y los términos de sus contratos con el Gobierno. Así, a pesar de las excelentes perspectivas en términos de producción, algunas de éstas han amenazado con terminar o reducir sus operaciones en Colombia. Esta situación probablemente afectará también la posibilidad de nuevas inversiones en este sector.

El ajuste en Colombia

En 1990 se adoptó oficialmente en Colombia el modelo neoliberal, que implicó el abandono abrupto de las medidas proteccionistas de la economía nacional. Se suponía que mediante la adopción de una apertura económica el país atraería capital extranjero, fortalecería el sector exportador y, como resultado de la afluencia de divisas por exportaciones, aumentaría el empleo y se mejoraría el nivel de vida de la población.

Durante los primeros años de esa década, la economía colombiana pasó por un proceso de reformas estructurales, impulsado por los gobiernos de Virgilio Barco y, sobre todo, César Gaviria, con el objetivo de fomentar su modernización y asegurar las bases para una continuidad del crecimiento. Se puso en marcha un ambicioso programa de reformas, basado en una estrategia integral para la creación de un nuevo modelo de desarrollo acorde con las nuevas condiciones de la economía global, caracterizada por la internacionalización y una creciente competencia. Las reformas se insertaron en la estrategia general de renovación y transformación de la sociedad colombiana impulsada por el gobierno de Gaviria. Así, la Constitución de 1991 garantizó la libre competencia e impuso limitaciones a las prácticas monopólicas. En este sentido, la reforma política resultó ser complementaria de la reforma económica.

Esta estrategia se materializó en varias leyes que liberalizaron las áreas más importantes de la economía: la ley de comercio exterior; la reforma laboral, cambiaria, tributaria y financiera y la ley portuaria. Asimismo se reformó el sistema fiscal y de seguridad social, y se modernizó el sector público.

La desregulación del mercado estuvo acompañada por una redefinición del papel del Estado a pesar de que nunca había tenido las características intervencionistas propias de otros países de América Latina. De esta forma, sus acciones se reorientaron hacia la creación de las condiciones para apoyar la eficiencia del sector privado, dando prioridad a los sectores de la educación, la salud y la infraestructura. Se puede afirmar que ningún otro país latinoamericano ha realizado un programa de reformas estructurales tan amplio en tan poco tiempo como lo hizo Colombia entre 1991 y 1994.

La política para fomentar la internacionalización de la economía mediante la creación de una estructura productiva más competitiva, tuvo dos ejes principales: la apertura comercial y la introducción de un nuevo régimen de inversiones extranjeras.

Así, se llevó a cabo un proceso de reducciones arancelarias, del 45% en 1990 al 10% en 1994.

En este mismo período, Colombia impulsó varias iniciativas de liberalización comercial con sus socios del Grupo Andino, con Chile y en el marco del Grupo de los Tres (G-3), con México y Venezuela.

Por otra parte, la liberalización de la normativa para la inversión extranjera, tradicionalmente restrictiva, abrió la mayor parte de la economía colombiana a la inversión extranjera y simplificó o eliminó los trámites de autorización.

Los flujos netos de capital dirigidos a Colombia han crecido desde 1993. De acuerdo al BID, los flujos de inversión extranjera directa (IED) han aumentado en un 41% anual a partir de 1991. Los flujos de capital son relativamente estables, representando los flujos a largo plazo más de la mitad de la cuenta financiera en 1996.

La Corporación "Invertir en Colombia" estima que la inversión extranjera alcanzó cerca de 4.400 millones de dólares en 1997, un incremento del 42% respecto de 1996. Un 67% de esta inversión estuvo constituida por IED en el sector no petrolero, un 20% fue inversión en el sector petrolero y sólo un 13% estuvo constituido por flujos de cartera a corto plazo.

Problemas estructurales

Pero también el déficit comercial ha venido creciendo desde 1993. Podría argumentarse que éste es un indicio saludable, en la medida que refleja la necesidad de Colombia de diversificar su producción hacia bienes de mayor valor agregado. En efecto, parte de este déficit es el resultado de la importación de bienes de capital, tales como maquinaria y equipos. Desde 1990, los bienes de consumo han representado aproximadamente una quinta parte de las importaciones totales, los bienes intermedios aproximadamente un tercio y los bienes de capital han representado aproximadamente la mitad de las importaciones totales. Pero también puede afirmarse que los flujos de capital han sido insuficientes para financiar el déficit comercial y éste ha dado lugar a un fuerte déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, incrementado por el alto costo de los servicios de la deuda externa.

El déficit comercial y de la cuenta corriente son sintomáticos de problemas estructurales en la economía colombiana, generados por la acelerada liberalización. Significativamente, y en sentido contrario a las metas de política económica del gobierno, el sector exportador no ha liderado el crecimiento en toda la economía, en parte porque el aparato productivo no se ha modernizado lo suficiente como para abaratar los costos y aumentar la competitividad. La contribución de las exportaciones al PIB ha caído durante los años noventa, mientras que las importaciones han aumentado. En los últimos años también ha habido una tendencia hacia la concentración del crecimiento en los sectores no transables lo que podría reducir las perspectivas de nuevas exportaciones a medio plazo. Esta tendencia se observa en que los sectores con más alto crecimiento en los últimos años han sido la construcción, los servicios y el sector financiero. Los servicios financieros han crecido más rápidamente que ningún otro sector en los años noventa, a una tasa promedio anual del 9,6%, frente a un 1,9% del sector manufacturero. La privatización bancaria y la fuerte inversión realizada por los bancos españoles, del orden de los 500 millones de dólares en 1996, han contribuido a esta dinámica.

Voces críticas de la liberalización económica la han calificado como una "apertura hacia adentro" ya que la eliminación de aranceles y otras barreras a las importaciones en combinación con la revaluación de la moneda, más que conducir a un reforzamiento de los sectores de la exportación y la competitividad internacional del país en general, perjudicó a una gran parte de los sectores productivos que no estaba en condiciones de competir con el masivo ingreso de importaciones.

La desindustrialización

Asimismo, según algunos argumentos, ha tenido lugar un proceso de cierta desindustrialización caracterizada por las dificultades del sector manufacturero, que se mantuvo estancado durante el período como consecuencia de las altas tasas de interés y el auge de las exportaciones de productos primarios y con bajo valor agregado. Uno de los sectores más perjudicados por la mayor competencia internacional ha sido la agricultura, con un aumento del desempleo y de la pobreza rural como resultado.

No se ha consolidado ningún renglón exportador significativo y el país sigue atado a la venta de materias primas tradicionales, entre las que sobresale el petróleo. El café, que ha sido históricamente el principal producto de exportación, ha sufrido una importante caída en su cotización internacional que ha incidido en la crisis de las economías cafeteras del centro y occidente del país.

El área sembrada de algodón, soja, palma africana, maíz, sorgo y ajonjolí se ha reducido sensiblemente o ya no existe y Colombia ha pasado en los renglones alimenticios de autoabastecedor a importador.

En la última década han dejado de ser cultivadas 1.700.000 has. que ahora se encuentran abandonadas o dedicadas a actividades especulativas. Se ha incrementado el éxodo demográfico a las ciudades y peligró el abastecimiento de la reserva alimentaria de las ciudades colombianas: yuca, papa, plátano, producidos por los pequeños agricultores.

La modernización del Estado

Otro elemento de las reformas, la modernización y reorientación del Estado, también ha sido criticado por haber fallado parcialmente en su objetivo: el fomento de la eficacia de la intervención estatal y la concentración de sus acciones en las áreas de mayor "rentabilidad social", como la educación, la salud y la infraestructura. Mientras que el gasto público aumentó bajo el gobierno de Gaviria, el gasto corriente se incrementó del 16,8% del PIB al 21% entre 1990 y 1994. Las inversiones públicas crecieron menos que el gasto en su conjunto. El aumento del gasto público se debió en gran medida al incremento de los recursos destinados a las áreas de defensa, seguridad y justicia. Asimismo, casi la mitad del gasto social se dirigió a sanear el sistema de seguridad social que atravesaba una crisis financiera. El plan de desarrollo del presidente Gaviria, denominado "Revolución Pacífica", fracasó en el punto relativo a la inversión pública en el área social.

Las desventajas de la liberalización

La liberalización parecía exitosa en la medida en que pudo lograr el crecimiento estable. Se consiguió fortalecer el sector exportador mediante la diversificación de las exportaciones. La participación del café en las exportaciones totales cayó desde un tercio a finales de los años setenta a menos de una quinta parte hoy en día. La reducción del dominio del café en las ventas al exterior estuvo acompañada por un crecimiento notable de las exportaciones no tradicionales, como las flores y los productos del mar, que han aumentado su participación en las exportaciones totales del 40% al aproximadamente 55% entre 1990 y 1995. Sin embargo, la rapidez de la apertura contribuyó a crear desequilibrios que dificultaron el logro simultáneo de los principales objetivos de la política económica el fomento de las exportaciones y la estabilidad de los precios.

Algunos de los problemas están relacionados con los flujos de capitales. El aumento de estos flujos, como resultado de la reforma del régimen cambiario y de la inversión extranjera y sin duda también del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, han dificultado el control de la inflación. Como consecuencia de la alta inflación, el peso se ha depreciado en un 127,5% frente al dólar desde 1990. El tipo de cambio real efectivo, que toma en cuenta las diferencias de precio entre Colombia y sus socios comerciales, revela una apreciación de la moneda del 61% en este mismo período. En consecuencia, los bienes producidos en el país se han encarecido respecto de los bienes importados, con repercusiones negativas sobre el crecimiento y el empleo.

La realidad¹

Estas previsiones tímidamente negativas encontraron su verdadero rostro social en 1999. Los indicadores macroeconómicos convencionales nos permiten evaluar con exactitud los resultados de las medidas. En 1999 todos esos indicadores fueron negativos: la tasa de desempleo fue del 21%, la cifra oficial más alta en la historia del país, sin contar las formas disfrazadas de desempleo y la generalización de la economía informal. La economía experimentó un fenomenal decrecimiento del 5%, la deuda externa alcanzó el récord histórico de 36 mil millones de dólares, representando el 41% del PBI, se acentuó el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, como resultado de la necesidad de financiar la economía interna mediante los préstamos y las divisas externas. La pobreza absoluta (personas que viven con un ingreso inferior a un dólar diario) se incrementó, alcanzando la cifra de más de 20 millones de personas, casi el 50% de la población. Se acrecentó la diferencia entre la minoría con mayor ingreso y las mayorías carentes de empleo y de salario, un 41% de las cuales se vio obligada a reducir su consumo de alimentos en 1999. En 1998 emigraron del país unas 800 mil personas, la mayor parte hacia Estados Unidos.

Economía y violencia

La mayoría de los comentarios oficiales y de las cámaras empresarias señalan a la violencia y a la existencia de la guerrilla como la razón fundamental de la crisis económica, dejando de lado las consideraciones relativas a los efectos perversos del modelo económico.

Se puede argumentar que el modelo económico es una variable independiente con respecto a factores específicos de la realidad colombiana como son el peso del narcotráfico, la existencia de la guerrilla y la acentuación de la violencia. Aunque éstos inciden en el desarrollo económico no se los puede considerar como factores determinantes sobre el funcionamiento del modelo, que no incluye los sectores económicos que éstos actores detentan ni se relaciona directamente con la inestabilidad política que su conducta acarrea. Quienes afirman lo contrario desconocen la estrecha relación histórica existente entre violencia y economía. Nunca en Colombia la violencia de todo tipo imposibilitó el crecimiento económico. Al contrario, la espiral de “ganancias a sangre y fuego” fue siempre el paradigma de acumulación del capitalismo colombiano. Pero a partir de las reformas económicas de 1990 la inserción de la economía colombiana en la economía mundial supuso una contradicción profunda entre la larga acumulación primitiva nacional y las fuerzas altamente desarrolladas de la economía mundial. La violencia ya no era funcional a las inversiones extranjeras que necesitan dirimir en forma permanente la disputa sobre el “dominio” de los recursos económicos. Pero el fracaso que los indicadores económicos mostraron en 1999 no puede achacarse a esta violencia que ahora resulta “molesta” al desarrollo. Este fracaso es característico del modelo como lo demuestra toda la economía sudamericana. El dramatismo de las estadísticas colombianas debe verse como una respuesta inevitable de la economía mundial a la imposibilidad de derrotar la violencia defensiva que se institucionaliza en el accionar de las FARC. Pero la disputa sobre los ingresos nacionales que encuentra en un lado a la guerrilla y en el otro a la burguesía mundial sólo profundiza la tendencia que es iniciada por el modelo de modernización económica de 1990 apoyado por la reforma constitucional de 1991, un paquete económico-político diseñado para garantizar las ganancias, un objetivo que los datos macroeconómicos no muestran porque estos datos incluyen “toda” la economía nacional pero no nos dicen nada sobre las ganan-

cias de los grandes grupos empresarios. La derrota de la guerrilla, el objetivo final del Plan Colombia, significaría la posibilidad de ampliar el abanico de negocios para la gran burguesía y mejoraría los indicadores al mismo tiempo que agrandaría el horizonte de desempleo y pobreza de la gran mayoría de la población. En síntesis: la violencia sólo profundiza la tendencia crítica que mostró ya en sus inicios la modernización económica.

La flexibilización laboral²

Sin olvidar otro componente básico del modelo económico como es la política de privatización de las empresas públicas (energía, telecomunicaciones y bancos) debemos marcar que su objetivo principal es la flexibilización laboral. El desempleo ha venido creciendo en los últimos 5 años llegando en 1999 a un 21%.

Según la OIT Colombia presenta el récord mundial de exterminio físico de los sindicatos, puesto que entre 1987 y 1999 fueron asesinados 2700 activistas o dirigentes gremiales de los trabajadores. Ha desaparecido la estabilidad laboral y se ha generalizado el empleo precario y a corto plazo.

Actualmente está en marcha una nueva reforma laboral recomendada por el FMI bajo el pretexto de reducir el déficit fiscal, en la que se propone ampliar la edad de la jubilación de las mujeres a 62 años y la de los hombres a 65 años (actualmente en 55 y 60 años respectivamente), lo que resulta revelador teniendo en cuenta que la esperanza de vida del colombiano promedio es de 67 años.

El incremento salarial en el último año fue de sólo 15 dólares ya que pasó de 115 en 1999 a 130 en el 2000. El 85% de los trabajadores cobra el salario mínimo. Y este aumento, por primera vez en la historia, sólo incluyó a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos (260 dólares) sin que el resto de la población haya obtenido ningún aumento.

En las ciudades colombianas se vienen haciendo campañas, ampliamente apoyadas por los medios de comunicación, en las que se pretende recuperar el centro de las ciudades para el capital privado, para el sector financiero internacional o para el turismo. Con tal propósito se ha venido expulsando y reprimiendo a los miles de vendedores ambulantes y de trabajadores informales que diariamente luchan por ganarse un magro ingreso, generando una campaña de criminalización de esos sectores para justificar su persecución. Esto se complementa con la existencia de grupos de limpieza social encargados de asesinar a mendigos, vagos, prostitutas, homosexuales o pobres, por considerarlos incómodos para el modelo de ciudad moderna que impulsan los alcaldes de las principales ciudades del país.

Las políticas económicas diseñadas por la Junta Directiva del Banco de la República, la principal autoridad económica y monetaria del país, apuntan a beneficiar al capital financiero, como se demostró con las tasas de interés de ficción que llegaron hasta el 80% en determinado momento de 1999, que le permitieron ganar cifras fabulosas en los procesos de intermediación financiera y mediante un gravoso sistema de financiación de vivienda (Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC).

Por este escandaloso sistema una persona que compraba una casa terminaba pagándola 10 o más veces por encima de su valor real y quedaba endeudada. Ante la crisis del sistema UPAC, expresada en que 600 mil familias deudoras no estaban en capacidad física de pagar la Corte Suprema impuso su derogación y el gobierno, de acuerdo con el sistema financiero, le cambió el nombre pero conservó su esencia.

El desarrollo de esta política económica ha polarizado la sociedad. En la actualidad, ante el monitoreo del FMI en virtud de un préstamo de 2700 millones de dólares, el ajuste económico se va haciendo cada día más insoportable.

Como resultado del convenio con el FMI se ha puesto en marcha una nueva reforma laboral, que ha generado miles de despidos de trabajadores del sector público. Unos 100 mil empleados quedarán sin trabajo en el futuro inmediato. También está en marcha una reforma fiscal encaminada a ampliar el IVA mientras se planea reducir el impuesto a la renta y al capital.

En enero de 2000 el salario mínimo aumentó un 10% y en el 2001 el aumento será del 5% mientras se recomienda una reducción drástica de la nómina del Estado y el no reemplazo de los jubilados.

Las tendencias al reforzamiento de estas medidas no otorgan perspectivas de que la crisis económica termine rápidamente.

La clase media, tradicional colchón social, está en vías de desaparición, lo que puede volcarla a la búsqueda de soluciones políticas fascistas. Los medios de comunicación y los diarios han empezado a presentar la imagen de que los paramilitares son en realidad el brazo armado de la clase media colombiana.

El Plan económico de Pastrana

Ante la perspectiva de un cambio de Gobierno se produjo un shock en la economía. Inmediatamente antes de las elecciones el peso sufrió una ola de ataques especulativos. La fuerte caída en su cotización respecto al dólar estadounidense llevó a una masiva intervención del Banco Central. Los ataques especulativos contra el peso generaron una devaluación de la moneda del 8% entre enero y junio de 1998, forzando

al Banco Central a aumentar las tasas de interés en un 30% en la primera semana de junio. Mantener el valor de la moneda a costado al Banco Central más de 900 millones de dólares, aunque pudo mantener 9.000 millones de dólares en reservas.

Los inicios

La primera medida de Pastrana para evitar la continuación de la crisis económica fue anunciar el nombramiento de Juan Camilo Restrepo como Ministro de Hacienda. Restrepo, un respetado economista que contaba con suficiente experiencia en el sector privado, esperaba ganar el apoyo de la comunidad empresarial colombiana.

En efecto, al conocerse la noticia de su nombramiento, la mayor confianza de los inversores se manifestó inmediatamente en la recuperación del valor del peso y la subida de los mercados de valores.

Más importante para la recuperación a medio y largo plazo, la experiencia de Restrepo en el Congreso sería crucial para ayudar a persuadir a los legisladores de que acepten las difíciles medidas de ajuste que el nuevo gobierno quería introducir para hacer frente al déficit fiscal, entre las que se encontraban alzas impositivas y reducciones en el gasto público.

En términos políticos, Pastrana ostentaba una reputación de apoyar medidas de corte neoliberal por lo que estaría bien situado para contar con el apoyo necesario del empresariado y hacer frente a los problemas económicos del país.

Vuelve la crisis

Pero la economía también adolecía de problemas de tipo estructural. Sólo en los primeros cinco meses de 1998, el déficit fiscal alcanzó a un 2,8% del producto interior bruto (PIB) y parecía exceder un 5,5% del PIB en todo 1998. En 1999 la deuda de Colombia se disparó, con un crecimiento nominal del 181% en el servicio de la deuda interna y externa. Las tasas de interés fueron excesivamente altas ese año y el creciente desempleo no ha evitado que se mantengan las presiones inflacionarias.

En su primera declaración pública después de su victoria electoral del 21 de junio, el presidente electo Andrés Pastrana prometió rápidas medidas de austeridad económica. Las finanzas del país “se encuentran en un estado desastroso”, y prometió que sus prioridades más urgentes serían restaurar la confianza en la economía y resolver los problemas presupuestarios. La inseguridad creada por la revitalizada actividad guerrillera y la parálisis política que afligió a la administración de Samper en los últimos cuatro años afectaron a la economía colombiana, aunque estos problemas tienen sus raíces más profundas en los procesos de liberalización en marcha desde comienzos de los años noventa.

La economía hoy

El nuevo ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, dijo que el reajuste de los salarios de los empleados públicos sería prácticamente “simbólico”. “Sencillamente no hay plata y el aumento tendría que ser del 0,001%. Espero de corazón que el fallo de la Corte no diga lo contrario”, comentó el funcionario. “Si el fallo supera las expectativas que tiene el gobierno sobre el mismo, el ajuste fiscal será más severo, pues de lo contrario se desencajarían todas las finanzas nacionales”³. La Corte sancionó un aumento mayor al esperado lo que inició una amarga discusión sobre sus atribuciones en relación a las medidas económicas.

Inmediatamente después de las elecciones de octubre de 2000 el mismo ministro declaró que “llegó la hora del sudor y las lágrimas”. La estrategia para reducir el tamaño del Estado implica el despido de 9 mil funcionarios y el ahorro de 713.200 millones de pesos. La administración Pastrana pedirá al Congreso facultades extraordinarias para fusionar y suprimir 34 entidades⁴.

Se aumentarán los impuestos para financiar el alza del 9,23% de los salarios de los empleados del sector público. No se modificarán las metas de ajuste pactadas con el FMI.

Pero el revés electoral de octubre no ofrece las mejores condiciones políticas para que el gobierno obtenga rápidamente el apoyo del Partido Liberal para su plan de reformas económicas. Y aunque se supone que el acuerdo llegará finalmente, pudimos ver que los problemas estructurales de Colombia están íntimamente ligados al modelo neoliberal adoptado en 1990.

El Plan Colombia es también un jugoso negocio para grandes empresas extranjeras que desean invertir en un territorio desmalezado socialmente. En la perspectiva más optimista el modelo de desarrollo mediante el ajuste perpetuo aumentará los índices macroeconómicos y la crisis social al mismo tiempo.

Notas

1. Guerra, neoliberalismo e intervención imperialista de Estados Unidos en Colombia, Aureliano Buendía, Bogotá.
2. Flexibilización en el margen: la reforma del contrato de trabajo, V. E. Tokman y D. Martínez, OIT, 1999.
3. Reajuste salarial será simbólico, El Espectador, Colombia, 24 de octubre de 2000
4. Poda burocrática y más impuestos, El Espectador, Colombia, 31 de octubre de 2000

Capítulo 6 – Plan Colombia

En setiembre de 1999 la administración Clinton y el presidente colombiano Andrés Pastrana acordaron ejecutar conjuntamente un “Plan para la paz, la prosperidad y el reforzamiento del Estado”, conocido como Plan Colombia. Este plan fue resultado de la enorme frustración de parte de la administración Clinton frente a su permanente incapacidad para frenar el gigantesco flujo de cocaína y heroína proveniente de Colombia. Pero también pareció responder a otros objetivos.

El principal autor del plan es el general Barry McCaffrey, ex director del Comando Sur, “a quien muchos consideran absolutamente ignorante de los asuntos latinoamericanos”¹. Concebido y redactado en inglés, bajo la atenta mirada de los consejeros del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero sin consultar al Congreso colombiano, el plan prevé una ayuda exterior de 7.5 mil millones de dólares a Bogotá, de los cuales 1.3 mil millones son de ayuda americana, esencialmente militar. El monto exacto del aporte norteamericano llega a 1.319 millones. A Colombia serán destinados 860.3 millones de los cuales la ayuda militar asciende a 519.2 millones (3 batallones para el sur, 16 helicópteros Black Hawk y 30 helicópteros UH-1H Huey, etc.). Otras categorías (desarrollo alternativo, Derechos Humanos o reforma judicial) contemplan 215 millones. La paz recibirá 3 millones.

El resto del paquete total (458.7 millones) se desagrega en dos partidas:

1. asistencia a los países vecinos (180 millones)
2. recursos para las autoridades estadounidenses (278.7 millones). De éstos, 276.7 millones son para el Departamento de Defensa (mejoramiento de las bases de Ecuador, Aruba y Curacao; programas de inteligencia rutinarios y clasificados; equipamiento de radares, etc.) y 2 millones son para el Departamento del Tesoro.

Al descomponer el paquete en sus diversas piezas, el 75% se orienta al fortalecimiento bélico de la estrategia antinarcóticos.

Si descartamos, por ahora, la intervención militar directa de USA², este inicio demuestra un viraje en la guerra contra las drogas, una guerra “que seguirá siendo peleada hasta que se derrame la última gota de sangre del último colombiano”.

La primera vez que se presentó la versión colombiana del Plan fue en diciembre de 1998 en Puerto Vilches. La iniciativa del Plan fue concebida por el ex canciller y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, Augusto Ramírez Ocampo, sobre la base de su conocimiento y experiencia del proceso centroamericano.

En dicha oportunidad el presidente Pastrana expresó al respecto: “la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectos del Plan Colombia”. El Plan Colombia formó parte de los preacuerdos entre el gobierno y las FARC con anterioridad a su publicidad, el 7 de enero de 1999. Fueron el propio Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez y el Director de Planeación Nacional, Jaime Ruiz, quienes junto al Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo se ocuparon de exponer ante la Comandancia de las FARC la incorporación del Plan Colombia en la futura agenda de negociación.

Pero mucho ha cambiado desde entonces. El contenido del actual Plan Colombia es sustancialmente diferente al que fuera presentado en Puerto Vilches. Desde hacía tiempo los Estados Unidos venían pregonando la necesidad de una lucha integral contra el narcotráfico cuyo verdadero objetivo comenzó a quedar al desnudo en boca de sus propios promotores. El general Barry McCaffrey³, sostuvo que para superar la violencia que afecta el país y amenaza la subregión, es necesario combatir a la “narcoguerrilla”. El propio McCaffrey, junto a altos oficiales del Comando Sur y legisladores del Partido Republicano, encabezaría la solicitud del aumento de la asistencia militar norteamericana a Colombia y el descongelamiento de los recursos destinados al ejército. Thomas Pickering, subsecretario de Estado, alentaría al gobierno colombiano a la elaboración del Plan que permitiera un paquete de ayuda suplementaria. Altos funcionarios estadounidenses demandarían una estrategia integral y asesores del departamento de Estado colaborarían en la redacción de la nueva versión del Plan Colombia, país que se ha convertido en uno de los ejes de la política exterior norteamericana. Dos elementos la hacen acreedor a tal protagonismo: el problema del narcotráfico y la consideración de Colombia como amenaza de la seguridad hemisférica por un desbordamiento del conflicto armado hacia los países vecinos. El nacimiento de la versión norteamericana y definitiva del Plan Colombia se estaba acercando. El gran empujón del Plan en el escenario de la Unión Europea se daría meses después por parte del presidente de España José María Aznar, al comprometerse a convocar a los países de la Unión Europea, así como a Japón y Canadá, a apoyar el Plan Colombia a través de una mesa de donantes que tendría como sede España y se instalaría en junio de 1999.

El narcotráfico, una nueva amenaza para Estados Unidos

La principal amenaza, para el Pentágono, es la posibilidad que surgiese un “narco-Estado colombiano”

en las zonas controladas por la guerrilla, rebautizada por los defensores de la causa como “narco-guerrilla”, sin tener en cuenta la naturaleza social y política del conflicto armado y sin profundizar en la compleja estructura de montaje y organización del narcotráfico. El Plan centra su análisis en el poder desestabilizador del narcotráfico, dejando de lado las causas estructurales y coyunturales de la sumatoria de violencias que vive el país de la misma manera que tiende a equiparar la lógica y dinámica de los actores armados, sin diferenciar objetivos, métodos y fines.

En el plano económico no se tocan aspectos fundamentales como son: efectos del proceso de globalización y de la apertura sobre los sectores productivos colombianos, la concentración y centralización del ingreso y del capital, la inadecuada distribución del ingreso, los pobres resultados del proceso de privatización, el deterioro de los recursos destinados a salud y educación.

Adepto a las reformas estructurales y de ortodoxia financiera, Pastrana no podía sino seducir a Washington. Las relaciones bilaterales están normalizadas y recibió 280 millones de dólares de nueva ayuda para el refuerzo de la lucha antidroga y el desarrollo. En el plano interior, la Ley 508 del 29 de julio de 1999 formaliza un Plan Nacional de Desarrollo llamado “Cambio para construir la paz, 1999-2002”, aprobado por el Congreso. La constitución colombiana establece que cada gobierno debe elaborar un Plan nacional de desarrollo.

Mientras tanto, el 21 de setiembre de 1999, al término de una entrevista con el presidente Clinton y sin que el congreso colombiano haya sido consultado para nada, Pastrana reemplaza su Plan de desarrollo por un “Plan para la paz, la prosperidad y el refuerzo del Estado”, llamado Plan Colombia. Este no sería divulgado hasta el 2 de enero de 2000 por el diario colombiano El Espectador.

El diálogo de paz

El marco incipiente de negociación bajo la presidencia de Pastrana presenta un rasgo innovador, ya que admite la posibilidad de negociar mientras prosigue la guerra. Algunos analistas afirman que este procedimiento podrían dar a las conversaciones mayor viabilidad, aunque también podría propiciar acciones armadas con el fin de influir en el proceso de negociación.

Si bien algunos sectores del gobierno de Clinton vieron inicialmente con buenos ojos el diálogo Pastrana-FARC, no es el caso del Congreso, ni del Departamento de Defensa, ni del Comando Sur. En abril de 1999, la Heritage Foundation, próxima al Partido Republicano, afirmó que las tentativas de paz de Pastrana suponían una rendición del Estado colombiano a las FARC y al ELN. Paul Coverdale, presidiendo una audiencia de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado norteamericano sobre el conflicto colombiano, dijo: “Estamos en presencia de una balcanización de Colombia. El presidente Pastrana continúa haciendo concesiones de tal modo que las guerrillas aumentan sus esfuerzos para provocar una inestabilidad que amenaza igualmente a los países vecinos”.

Los republicanos reclamaron tanto a la Casa Blanca como a Pastrana una política enérgica contra la guerrilla. Falta saber cuál será el pretexto que hará de maquillaje de la futura intervención: conservar el control de una región vital del nordeste del continente (Colombia, Venezuela, Ecuador), rica en recursos estratégicos, el petróleo en particular. El argumento no tardó mucho en llegar. Para el Pentágono, la principal amenaza del Continente es la posibilidad del surgimiento de un “Narco Estado colombiano”.

La estrategia de paz contenida en el Plan se fundamenta exclusivamente en el esquema de negociación que se viene realizando con las FARC sin que se incluyan otro tipo de alternativas. La estrategia no hace referencia a los objetivos a alcanzar con el proceso, como tampoco a la propuesta política que el Estado está dispuesto a someter a consideración en una mesa de negociación. Queda entonces la sensación de estar limitado a la eliminación del conflicto armado, dejando de lado las experiencias anteriores que no fueron más que procesos de desmovilización, sin ningún impacto en las estructuras económicas, sociales y políticas.

Efectos perversos del Plan Colombia

1. Forzará una partida de los campesinos de las regiones amenazadas, transformados en parias criminales.
2. Estos caerán en brazos de las FARC, que de este modo se reforzarán provocando un desplazamiento de los cultivos ilegales.
3. El anuncio de las fumigaciones ya ha provocado un aumento del precio de la pasta base en Perú.
4. Esto ha puesto definitivamente en peligro la competitividad de los cultivos de sustitución.
5. También producirá un desastre ecológico.
6. La coca se desplazará también hacia el norte del país (Urabá, Magdalena Medio, Atrato, Pacífico), regiones controladas por los paramilitares.
7. Estos aprovecharán entonces para adjuntar la producción a la transformación-exportación en las que ya están implicados.

8. El negocio del narcotráfico ya comenzó a desplazarse hacia la Amazonia brasileña, ampliando geográficamente el área de intervención norteamericana y poniendo en jaque las proyecciones de seguridad del Área de Responsabilidad del Comando Sur.

Riesgos mínimos para Estados Unidos⁴

Mediante un proyecto de Ley (S-1758) presentado por los senadores Dewine, Grassley y Coverdell y conocido con el nombre de *Allianza Act*, la administración americana ofrece 1.600 millones de dólares, de los cuales 954 millones son suplementos de urgencia para el año 2000. El objetivo es ambicioso. No presenta más que un defecto, aunque de magnitud. Mientras todo los ojos se volvían hacia las negociaciones de paz, comprendiendo que serán largas y difíciles, el Plan no tiene otro objetivo que reforzar, equipar y entrenar a las fuerzas armadas colombianas. La dualidad de paz y guerra tiñe de hipocresía todo el Plan.

Paradójicamente la *Allianza Act* fue muy discutida en el Congreso de Estados Unidos. No es que existiera un desacuerdo de fondo sino que se entabló una batalla política. Los republicanos no querían ofrecer una victoria política al presidente en ejercicio a pesar de que estaban globalmente de acuerdo con el Plan Colombia.

1. Los senadores redujeron a 934 millones de dólares la ayuda del Plan Colombia para los años fiscales 2000 y 2001.
2. la presencia militar norteamericana en Colombia se vio limitada a 250 militares y 100 civiles. Esta reducción afectará el mantenimiento de los helicópteros.
3. De los 30 modernos *Black Hawks* prometidos sólo llegarán a Colombia 16 aparatos, más algunos viejos aparatos Huey reacondicionados.
4. Miembros retirados de las Fuerzas especiales de Estados Unidos (comandos) y expertos independientes (mercenarios) son recibidos en Colombia, bajo contrato privado, para asumir las tareas que las fuerzas armadas norteamericanas no pueden ni quieren asumir. *DynCorp*, que ha reclutado viejos pilotos de Vietnam, asegura el mantenimiento y el apoyo necesario para la erradicación de la coca. La empresa *Military Professionals Resources Inc. (MPRI)* negocia actualmente para aportar un apoyo logístico y un entrenamiento a la policía y a las fuerzas colombianas de contra insurrección.
5. Estas prácticas llevan el nombre de "outsourcing" (tercerización). Con esta privatización de la guerra, los riesgos de exposición directa de Estados Unidos, y sus consecuencias políticas, son eliminados.

La *Allianza Act* (Proyecto de Ley S-1758) posee algunas variaciones con respecto a la estrategia narcóticos que bien vale la pena señalar⁵:

1. existe un cambio de orden en los ejes de acción del plan. Comienza con el panorama de la economía, continúa con la estrategia antinarcóticos. El tercer capítulo está dedicado a la reforma del sistema judicial y la protección de los derechos humanos, el cuarto a la democratización y el desarrollo social, para culminar con el proceso de paz en el quinto capítulo.
2. el capítulo dedicado a la estrategia antinarcóticos posee algunos elementos adicionales: un subtítulo denominado "declaración de la misión" cuyo contenido es el siguiente: "misión nacional: asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la ley; garantizar la soberanía nacional sobre el territorio; proteger al Estado y a la población civil de amenazas provenientes de los grupos alzados en armas y de las organizaciones criminales. Romper los lazos entre estos grupos y la industria de la droga que los apoya". También incluye un apartado, incluido después de los "objetivos estratégicos", que se denomina "Focos integrados del plan", referido a cómo las Fuerzas Armadas y de Policía deben actuar de manera integrada y sistemática en la estrategia de lucha antinarcóticos, tendiente a reducir el 50% del cultivo y la producción en tres fases, durante 6 años.

Las fases comprendidas son las siguientes:

Fase 1: esfuerzo judicial, policial y militar de rango bajo apuntando al Putumayo y al sur en un período de un año.

Fase 2: esfuerzo judicial, policial, social y militar de rango medio apuntado al sureste y a las partes centrales del país, por un período de dos o tres años.

Fase 3: extender a todo el país los esfuerzos integrados entre tres y seis años.

La *Allianza Act* incluye una cláusula que en principio es interesante: la ayuda no puede dirigirse a aquellas unidades de la fuerza pública cuando la secretaría del Estado reporte al Congreso que existe evidencia creíble de "que un miembro de dicha unidad ha proveído apoyo material a fuerzas irregulares en Colombia". ¿Qué se entiende por "evidencia creíble" y "apoyo material" en términos del proyecto? ¿Son evidencias de carácter judicial? (recuérdese la existencia en Colombia del fuero penal militar). Al respecto Christine Lauber dice "lo que encontramos en América Latina es militares creando el ambiente en el cual los paramilitares y milicianos aparentemente 'independientes' pueden cometer sus acciones atroces en total

impunidad mientras que al mismo tiempo esos militares mantienen sus 'manos limpias' para poder seguir recibiendo ayuda militar de países como el nuestro sin el escándalo del público en general. Esta es la forma cómo el paramilitarismo opera en el nuevo orden mundial⁶.

La versión del Plan Colombia presentada por los senadores americanos pone el acento sobre la amenaza que significa Colombia para los Estados Unidos. La difusión en la opinión pública americana y colombiana hace un impasse sobre la dimensión militar. La versión propuesta a la Unión Europea insiste sobre la defensa de los derechos humanos y suprime las referencias más explícitas sobre el reforzamiento militar. La Unión Europea fue convocada para financiar el lado "social" del plan de guerra. En concreto, al 15 de mayo de 1999, sólo España había respondido con el desembolso de 100 millones de dólares.

Proponiendo una solución militar a un problema que desde hace muchos años resiste a todas las soluciones militares, el Plan Colombia, percibido por las guerrillas como una declaración de guerra, no puede sino agravar una situación. La guerra llegará a aquellos sectores por donde nunca había pasado, en particular las ciudades.

Las contradicciones del Plan

1. Una primera contradicción de este programa es la que existe entre el mantenimiento y fortalecimiento de los tratados de libre comercio y de protección a la inversión extranjera, con los planes de desarrollo alternativo a los cultivos ilegales y la narcoeconomía. Esta clase de cultivos y economía se fortalecieron merced a la liberalización del comercio y la economía; combatirlos dentro del mismo contexto es un contrasentido.
2. La destrucción de los cultivos ilegales no ha resultado en estos años, ni resultará jamás en su reducción. Al contrario, produce su incremento: los propios datos oficiales indican que a pesar de haber fumigado con herbicidas los cultivos ilegales y haberse utilizado otras formas de erradicación forzada, el área sembrada se incrementó en 200% entre 1992 y 1999, y solamente ese año creció 20.200 has. Esto se debe a que en su mayoría se trata de cultivos campesinos. La unidad económica campesina no busca la rentabilidad en el sentido del empresario capitalista, sino que trata de asegurar en primer lugar la subsistencia familiar. La reacción del campesino fumigado es vender sus mejoras a un rico (a veces un narco) e irse a sembrar coca (o amapola) más lejos. El incremento de los costos lo compensa sembrando una extensión mayor.
Las selvas del sur del país son muy extensas y en la Amazonia quedan 650 millones de has. que pueden ser tumbadas por colonos lanzados desesperadamente a ellas. El Plan Colombia dejará siempre zonas muy amplias sin cubrir y los cultivos se extenderán por las selvas y en vez de reducirse en un 50% como supone el Plan, se incrementarán gracias a él. Esta es la segunda gran contradicción del plan y lo que lo hace ridículo, si se cree en lo que dice.
3. El plan se propone "romper los nexos entre los grupos armados y el apoyo que reciben de la industria del narcotráfico" y "restablecer el control gubernamental sobre las áreas claves de producción de droga". En este sentido el general Roca Machel hace unos años ordenó a la Fuerza Aérea colombiana transportar laboratorios de narcotraficantes a zonas fuera del control de la guerrilla. La orden se cumplió. Si así funcionara el Plan Colombia, se convertiría en una guerra por el control de la producción de la coca.
4. El desarrollo alternativo propuesto no es otra cosa que el modelo malayo del doctor Murgas Guerrero, ex ministro de Agricultura del actual gobierno y asesor del presidente Pastrana, las llamadas "alianzas estratégicas" bajo el comando de los grandes propietarios de la tierra. Esta alternativa significaría que, en las zonas donde sean exterminados los cultivos ilegales, a los campesinos e indígenas no les quedaría más remedio que subordinarse a contratos de aparcería en gran escala para producir palma de aceite, madera, caucho, cacao o ganadería.
Es decir, una contrarreforma agraria en la cual se sustituiría la producción campesina por el dominio de grandes cultivadores que se beneficiarían con la mano de obra campesina e indígena con renovadas y "modernas" formas de servidumbre.
5. Pero la más grande contradicción aparece entre las expectativas que crea el Plan y la realidad colombiana y en particular la realidad militar. Una operación como la propuesta conduciría a una escala de la guerra. La situación de los últimos años muestra que la tarea militar no tiene ninguna garantía de éxito y es totalmente incierta. Los analistas nunca previeron que después de los acuerdos de paz con algunos sectores de la guerrilla en 1990 y 1991, éstas incrementarían su poder al nivel de hoy. Un choque con su base social en el Putumayo podría fortalecer en gran escala su reclutamiento, como ha sucedido en zonas de masacres paramilitares o de fumigaciones. La guerrilla podría también implantarse en las nuevas zonas donde marcharan los colonos en la selva, como ya sucede en las nuevas áreas de colonización donde van los campesinos desplazados por la violencia o las fumigaciones.

6. También hay contradicciones en las actuaciones de los principales aportantes del Plan Colombia. El jefe de la oficina de la Comisión Europea para América Latina, Francisco da Cámara, señaló que el bloque comunitario no apoyará el componente militar del Plan Colombia y que tampoco “condicionará” su ayuda al país andino al tema de los derechos humanos.

Los delegados de 25 países, organismos de crédito y de la ONU participan de la segunda Mesa de Aportantes del Plan Colombia en cuyo marco la UE anunció la donación de una cifra aproximada a los 300 millones de dólares, pero para el componente social del Plan Colombia. El portavoz de la UE, el francés Renaud Vignal, dijo que “nuestra contribución va a ser sustancial. Más o menos a la altura de la contribución social de lo que Estados Unidos otorgó al Plan Colombia”⁷.

En la Mesa de aportantes participan delegados de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Dinamarca, España, USA, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Venezuela.

Los beneficios económicos del Plan Colombia

Ahora que las arcas del Estado están vacías por la crisis fiscal y la corrupción política de los líderes de los partidos tradicionales, los terratenientes utilizarán el Plan Colombia y el dinero de la “comunidad internacional” para continuar un sistema histórico de dominación y concentración de la propiedad de la tierra y la economía.

La perspectiva de varios inversionistas extranjeros, por ejemplo las empresas petroleras, es utilizar el Plan Colombia para extender libremente sus actividades, lo cual significa ignorar los derechos de las comunidades locales y pasar por alto la necesidad de defender el ambiente y los ecosistemas.

El Plan Colombia aparece como un mecanismo para extender el sistema histórico colombiano al sur del país, asegurando el dominio de los terratenientes sobre zonas que aún no controlan. Esta inversión social explica la inversión militar, dándole pleno sentido a la preservación del statu quo mediante la extensión del dominio histórico del esquema latifundista de los gamonales.

El presidente Pastrana ha ido más lejos. El 11 de febrero de 2000 se reunió con los empresarios petroleros y de la electricidad en Houston y anunció que solicitaría el ingreso al Nafta y propondría una reforma constitucional para dar más libertad a las inversiones. En el caso de Méjico el ingreso al Nafta supuso la eliminación de la inalienabilidad de las tierras comunales y motivó el alzamiento zapatista.

La prioridad para la inversión extranjera (en particular para la industria petrolera) fue exigida por la enmienda de los senadores Dewine, Grassley y Coverdell. El vicepresidente de la Oxy (Occidental Petroleum Co.) dijo que se necesitaba duplicar el Plan Colombia en la zona de Norte del Santander (fronteriza con Venezuela) donde está la explotación petrolera del Catatumbo y la perforación de Gibraltar, en territorio U'wa.

Pero también los países europeos y Canadá (en Putumayo) tienen intereses económicos en el Plan Colombia, todos ellos ligados a la extracción de petróleo.

Se logrará así combinar la estructura más obsoleta con la última palabra de la globalización neoliberal y su aprovechamiento de las “ventajas comparativas”: violencia y destrucción de recursos naturales renovables, con enriquecimiento para las transnacionales, las grandes promotoras de plantaciones (como la palma africana), la compleja red de narcoeconomía y los especuladores de la relativización, que concentran tierras valorizables en torno a los proyectos de inversión.

Frente a la perspectiva de reactivación económica es muy probable el fortalecimiento de esta estructura. Los representantes de los gremios de palmeros (Fedepalma), bananeros (Augura) y de los ganaderos (Fedegan) promocionan tal programa. Estos gremios ven en el Plan Colombia una lucrativa oportunidad de catalizar el proceso, mediante el cual se han apoderado históricamente de las zonas de colonización.

Ponen sus ojos en el Putumayo y otros departamentos donde los cultivos ilegales son extensos. Las fumigaciones de los cultivos con herbicidas químicos y hongos se complementarían con la sustitución de los cultivos ilegales por plantaciones donde el gran empresario terrateniente tendría el 80% y el campesino o el indígena el 20%.

Para el gobierno “se impulsarán núcleos productivos agrícolas y forestales, en los cuales se focalicen los esfuerzos de apoyo estatal al desarrollo rural. Estos se entienden como procesos socioeconómicos generados alrededor de una actividad principal en la cual las comunidades rurales se integren con el sector empresarial en alianzas estratégicas dentro de proyectos productivos exitosos ya emprendidos o con altas probabilidades de competitividad”.

La “actividad principal” son los grandes proyectos de inversión; las “alianzas estratégicas” son las aparcerías en gran escala.

La prioridad para las plantaciones es el sistema tomado de Malasia, Tailandia e Indonesia, donde ha tenido terribles efectos ecológicos, destrucción de selvas, contaminación masiva del aire con el humo y además, a nombre del desarrollo, destrucción cultural y étnica de las poblaciones indígenas.

Para completar, vale decir que en la situación actual los mercados como el de palma africana no tienen un futuro seguro, pues en el primer trimestre del '99 la producción aumentó 24% y las exportaciones un 12% pero los precios internacionales disminuyeron simultáneamente un 25% y los precios internos bajaron 31% durante el mismo período.

La caída de precios tiene varias explicaciones. Se vislumbra un aumento de 1.8 millones de tons. de frijol soja en Estados Unidos frente a la de 1998. También se espera una mayor oferta de aceite de soja y girasol, por cosechas récord en Argentina y Brasil. La producción mundial de aceite de palma superará en 1.3 millones de toneladas a la del año anterior. Por otro lado, la gran devaluación de la moneda brasileña, la reducción de impuestos a las exportaciones en Indonesia y las menores compras por parte de China, país que junto con India ha venido participando con 50% del crecimiento de la demanda total de aceites y grasas en los últimos tres años, son factores adicionales que han contribuido a la caída de precios.

La zona piloto escogida, el sur del país, tiene un interés estratégico:

1. Dentro de ella se encuentran proyectos de exploración petrolera
2. Es el punto de entrada y control de la Amazonia, con su biodiversidad y multitud de recursos naturales claves para el planeta.
3. Allí confluyen el megaproyecto de intercomunicación fluvial de Sudamérica y la carretera marginal de la selva.
4. Es zona fronteriza con Ecuador, país petrolero en crisis y donde USA ha trasladado parte de las instalaciones militares que tenía en Panamá.

Versiones del Plan Colombia⁸:

Una cosa es la versión del Plan Colombia para Estados Unidos donde se enfatiza la lucha antinarcóticos y otra es el discurso ante la Unión Europea donde se enfatiza la inversión social. También las FARC han denunciado la existencia de dos versiones del Plan Colombia. En su denuncia consideran que existe una versión destinada al gobierno de Estados Unidos que "coloca la lucha contra el narcotráfico en el mismo nivel que el combate de la guerrilla" y que la otra versión es "reformista y asistencialista", llegando a la conclusión que "la tediosa lectura del Plan Colombia en inglés deja la sensación de que Pastrana poco a poco está enterrando las expectativas de paz del pueblo colombiano".

Pero cualquiera sea la versión que se utilice, es posible descubrir unos elementos centrales⁹:

1. Implantación de medidas para atraer la inversión extranjera y promover la expansión del comercio, fortaleciendo los tratados de protección de las inversiones foráneas y las disposiciones de libre importación de la OMC.
2. Destrucción de los cultivos ilegales en el Putumayo y otras zonas del sur del país y sustitución por proyectos productivos, principalmente cultivos permanentes, a través de alianzas estratégicas entre inversionistas, grandes y pequeños propietarios que ofrezcan oportunidades de empleo alternativo y servicios sociales a la población de las áreas de cultivo. El plan se expandiría a otras zonas del país en las fases 2 y 3.
3. Restablecimiento del control militar en esas zonas y modernización de las Fuerzas Armadas.
4. Reforma institucional general, que incluiría la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
5. Reactivación de la economía.

A continuación sintetizamos las 6 versiones "oficiales" del Plan Colombia:

1. Oficina del Alto Comisionado, diciembre de 1998. Es el texto utilizado en las negociaciones con las FARC.
2. Presidencia de la República, versión oficial entregada a la UE, octubre de 1999, en inglés.
3. Borrador. Septiembre de 1999, en inglés. Tiene diferencias con la versión entregada a la UE. Coincide en general con la Alianza Act (sobretudo en el tema antinarcóticos).
4. Proyecto Alianza Act, Congreso norteamericano, octubre de 1999, en inglés. Tiene diferencias con la versión de la UE en el orden de los temas y en la estrategia antinarcóticos.
5. Presidencia de la República, Santa Fe de Bogotá, octubre de 1999, en inglés. Es la versión que el gobierno dice haber entregado oficialmente a la UE. En relación con la versión efectivamente recibida por la UE omite el apartado referido a los elementos básicos de la estrategia antinarcóticos.
6. Anncol, Agencia de Noticias Nueva Colombia, 1 de diciembre de 1999, en español. Traducción de la versión en inglés de la UE, es el texto difundido por las FARC.

El presidente Clinton, en Estados Unidos, hizo hincapié en la lucha antinarcóticos; Pastrana, en el Consejo, Comisión y en el Parlamento Europeo, hizo hincapié en la paz y en el desarrollo y no mencionó para nada la lucha antinarcóticos.

Análisis del texto del Plan Colombia¹⁰

1. Aunque se reconoce el papel central de la sociedad civil en el proceso, no se definen sus posibilidades de participación real y efectiva, como tampoco los criterios y mecanismos de representatividad de las organizaciones sociales dentro del mismo. Contrasta con ello la importancia que se le otorga como “factor de presión” a los grupos armados para la búsqueda de una solución política y el respeto al DIH, lo que pone en evidencia la instrumentalización de la misma, para el mantenimiento de un esquema de negociación que se centra en las conversaciones entre cúpulas de poder.
2. Sorprendente resulta la designación de los protagonistas del conflicto: la guerrilla, las autodefensas (grupos paramilitares), los colombianos, sin ninguna alusión al Estado. Surge entonces el interrogante de cuál es la caracterización del conflicto y a quiénes se considera como actores del mismo.
3. Frente al tema de los paramilitares el planteamiento resulta confuso. Se habla de la lucha que se sigue contra los mismos sin especificar en qué consiste y se agrega que no se descarta la utilización de alternativas pacíficas. ¿Cuáles serían esas alternativas? ¿Se contempla la posibilidad de otorgar status político a los paramilitares e iniciar una negociación con ellos?
4. “La participación de la comunidad internacional se constituye en un elemento vital para la construcción de un proceso de paz” pero se limita a relacionar una serie de posibilidades de acción de la misma sin definir el papel con relación a la estrategia planteada.
5. Las medidas de estabilización económica son:
 - desequilibrio de las cuentas fiscales
 - salarios y empleos
 - reforma institucional (seguridad social y privatización de los fondos de pensión)
 - privatizaciones
 - asistencialismo: red de apoyo social

Todas estas medidas corresponden a los compromisos adquiridos con el FMI. Las metas fiscales contenidas en el memorándum de entendimiento con el FMI, presentadas en diciembre de 1999, coinciden plenamente con el Plan Colombia.

Para lograr el crecimiento se plantea:

- hacer competitivo al campo
- eliminar el contrabando
- incremento de las exportaciones y la inversión extranjera
- transparencia en el sistema de compras estatales
- permanencia de las preferencias arancelarias
- acuerdos de protección de inversiones
- sustitución de cultivos ilícitos

Los principales factores de la ineficiencia agropecuaria se pueden atribuir a la apertura ingenua con revaluación del peso, que puso a competir al campo con los inmensos subsidios de los países desarrollados y el proteccionismo de sus respectivos mercados.

La industria perdió su dinámica y su participación en el PBI disminuyó. Se produjo un proceso de desacumulación de inversiones y no se gestaron procesos de modernización empresarial (con contadas excepciones). No se puede esperar en el corto plazo una recuperación de las exportaciones y del mercado interno.

El programa de privatizaciones contempla empresas rentables que prestan servicios públicos importantes (ISA, ISAGEN, banca estatal). Pero se deben sanear antes de ser vendidas, con lo que se produciría una socialización de las pérdidas. Se dice que los recursos de las privatizaciones se destinarán a sanear el déficit fiscal y a los programas asistenciales. El peligro de estos destinos presupuestarios es la financiación de gastos permanentes con recursos de coyuntura, creando una ilusión de bajo déficit fiscal en el corto plazo y un hueco mayor para el futuro.

En los sectores de carbón y petróleo la flexibilización no es otra cosa que la orientación hacia concesiones a la inversión extranjera antes que la asociación racional para la exploración y explotación de los recursos. En lo ambiental y en lo sustentable los resultados saltan a la vista mediante proyectos en los que poco importa avasallar cultural y físicamente poblaciones y territorios indígenas ancestrales (luchas como la de los indios Embera y U'was resultan ser lo suficientemente llamativas).

En cuanto a las preferencias unilaterales ya se han establecido plazos para su desmonte.

Respecto al problema de la competitividad: mientras no se plantee un cambio estructural y de modelo económico, el problema de la restricción de la demanda por la disminución del poder adquisitivo de la población y la incorrecta distribución del ingreso económico continuará afectando la recuperación del mercado interno y el aumento del bienestar.

6. En cuanto a la **estrategia antinarcóticos** los objetivos centrales son:

1. fortalecimiento de la lucha antinarcóticos sobre la base del fortalecimiento y coordinación de las Fuerzas Armadas y la Policía.
2. eliminación de la producción a gran escala continuando con los métodos de erradicación forzosa.
3. ruptura de los nexos existentes entre los grupos armados y las organizaciones del narcotráfico
4. fortalecimiento de planes de desarrollo alternativo.

El elemento preponderante de la estrategia es el uso de la fuerza en operaciones militares que integran ejército y policía, sin diferenciación alguna entre las etapas de producción, distribución y comercialización, que amerita un análisis de los elementos estructurales presentes en esta problemática y con ellos el de las fronteras existentes entre el conflicto armado interno y el narcotráfico.

La erradicación forzosa parte de la premisa de afectar la oferta y obstaculizar de manera temporal la producción, para por esta vía reducir el consumo. No obstante, en la práctica, la realidad ha demostrado que la rapidez en la movilidad de producción no logra incidir en la demanda y por el contrario, causa un impacto ambiental negativo.

La erradicación forzosa de cultivos ilícitos a través de la fumigación no es nueva en Colombia. 25 años de aplicación demuestra su fracaso no sólo en términos de reducción de la oferta (las hectáreas de hoja de coca sembrada aumentaron entre 1992 y 2000 de 40 mil a más de 120 mil), sino también en relación a la incidencia negativa para la legitimidad del Estado, el orden social, el conflicto armado y el daño al medio ambiente que la fumigación ha causado.

La fórmula combinada fumigación-desarrollo alternativo contenida en el Plan, resulta incompatible. La fumigación mediante aspersión aérea tiene un efecto masivo y por tanto los cultivos lícitos resultan igualmente afectados, convirtiéndose en un esfuerzo perdido y en una frustración más para los cultivadores afectados. Por otro lado el plan considera la posibilidad de utilizar agentes de control biológico como método de erradicación a sabiendas que se desconoce su potencial para atacar otras especies.

Para el especialista en el tema Martín Jelsm, el hecho que la administración norteamericana haya sido categórica en que el esquema de lucha antinarcóticos no es negociable y por tanto el desarrollo del proceso de paz no debe interferir en la cooperación antinarcótica condujo al gobierno de Pastrana a la elaboración de un "plan plagado de contradicciones que intenta llegar a un compromiso entre enfoques mutuamente excluyentes, entre el nexo droga y paz".

7. Sobre el **sistema judicial** y la protección de los **derechos humanos** las propuestas del plan son:

1. Procesamiento de narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes, que incluye el compromiso de hacer cumplir leyes multilaterales y procedimientos de extradición.
2. Mejora del sistema de fiscalía
3. Protección de los Derechos Humanos
4. Eliminación de la corrupción
5. Decomiso y expropiación de bienes producto del narcotráfico
6. Bloqueo de rutas del narcotráfico
7. Campañas de prevención del consumo de drogas

En el tema de derechos humanos se desestatiza la responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que vive el país.

La consolidación del Estado de Derecho aparece en el Plan Colombia ligado a un enfoque de seguridad y estabilidad que desconoce la necesidad de una legitimidad democrática como pilar fundamental del Estado de Derecho.

El gobierno colombiano, a pesar de estar sometido al escrutinio de las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sigue sin implementar las múltiples y reiteradas recomendaciones de derechos humanos emanadas de diferentes organismos de Naciones Unidas.

La estrategia omite referencia alguna al desmantelamiento de los grupos paramilitares, su juzgamiento y la ruptura de los nexos existentes entre estos grupos y la Fuerza Pública. También se desconoce totalmente la reparación integral a las víctimas del conflicto y de las violaciones a los DH.

8. Sobre la **Financiación** del plan el principal problema que menciona el Plan Colombia es el del crecimiento de la deuda externa. Los 6.900 millones de dólares (del paquete de ayuda financiera del período 1999-2002) son de nuevo endeudamiento, cuyo pago se efectuará a cuenta del futuro crecimiento.

Del presupuesto proyectado para el Plan Colombia 4 mil millones deben ser aportados por Colombia. Saldrán entonces del nuevo endeudamiento o de los procesos de privatización, o de los denominados bonos para la paz que suscribirán obligatoriamente las empresas y los sectores de altos ingresos. El primer factor es el único real, pues los otros dos son sólo supuestos macroeconómicos con un alto grado de incertidum-

bre. De las finanzas corrientes del Estado, no saldrá dinero en razón de la angustiosa situación de las finanzas públicas.

El paquete de ayuda suplementaria tiene cinco componentes:

1. ayuda al gobierno a tomar el control del sur de Colombia por considerar que es un área de cultivo de drogas actualmente bajo el control de la guerrilla. Se destina para este rubro un presupuesto de 600 millones para los dos años que servirá para entrenar y equipar dos nuevos batallones antinarcóticos, 30 helicópteros Black Hawk y 33 Huey, actividades de inteligencia como apoyo a los batallones y asistencia a las personas que resulten desplazadas a causa de los operativos.
2. Aumentar la capacidad de interceptación de cocaína por parte de las autoridades colombianas. Los recursos (341 millones) para los dos años (2000-2001) se destinarán para el mejoramiento de radares, aviones, aeródromos y recopilación de inteligencia.
3. Aumentar la erradicación de cultivos (96 millones para los dos años)
4. Promoción de cultivos y empleos alternativos. 145 millones.
5. Protección a los derechos humanos: 93 millones

A esto hay que sumar los 300 millones de ayuda actual que está recibiendo Colombia (150 para cada año). Colombia es el principal destinatario de ayuda norteamericana después de Egipto e Israel¹¹.

La internacionalización del conflicto

Es de notar que de los casi 41 millones de colombianos, el 14% vive en el exterior, cifra que en los últimos meses ha ido creciendo de manera alarmante, debido a la gran cantidad de solicitantes de asilo y refugio. Este hecho se está convirtiendo en un problema para varios Estados, no sólo aquellos fronterizos con Colombia, sino para algunos estados europeos como España que ha venido cerrando posibilidades a los ciudadanos colombianos, que por diversos motivos, solicitan legalizar su situación en dicho país.

Existen dos tipos de internacionalización respecto a este conflicto armado: una positiva, que ayudaría a generar las condiciones para una salida negociada y otra negativa, aquellas acciones u omisiones de la comunidad internacional o de algunos países que fomentan y estimulan el conflicto¹².

Internacionalización positiva: aquí podemos señalar las acciones de las diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos en el escenario de Naciones Unidas, OIT, UNESCO, UNICEF, OEA, CICR; otras como Amnistía Internacional, Human Right Watch y otras organizaciones de la sociedad civil que han mostrado gran sensibilidad hacia el conflicto colombiano.

El 11 de enero de 1999 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortó al gobierno a que acate las recomendaciones de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "exhortamos al estado a adoptar una política integral de combate contra el paramilitarismo y a subsanar la ineficacia e insuficiencia de las acciones emprendidas por la fuerza pública y demás instituciones competentes para prevenir y sancionar la actuación de los grupos paramilitares". Otras organizaciones solicitaron cambiar la oficina de la Alta Comisionada por el de un Relator Especial de Naciones Unidas para Colombia.

Internacionalización negativa: varios actores y procesos se desarrollan en un esquema de internacionalización negativa del conflicto colombiano.

1. Estados Unidos: En estos momentos hay sectores políticos y empresariales que piensan en una acción de tipo marines para resolver con el exterminio lo que se han negado a negociar en un proceso sincero de paz.
2. Existe el peligro de que Colombia se transforme en un títere en manos de la política exterior norteamericana. "Y menos cierto aún es que los gringos vayan a sacarles las castañas del fuego a los ineptos responsables del establishment colombiano. 'Son amigos nuestros, nosotros hablamos correctamente el inglés, Andrés hizo un posgrado en Harvard, son gente como uno', dicen ilusionados. Pero eso tampoco es verdad. Más amigo de ellos era el Sha de Persia, mejor inglés hablaba Ferdinando Marcos de Filipinas, el general Mobutu del Congo había hecho un posgrado en West Point. Y a todos los cambiaron cuando, por ineptos, ya no les servían".
3. La posible vietnamización del conflicto colombiano no sólo es un concepto utilizado por el comandante de las FARC, Manuel Marulanda. Se ha escuchado desde los centros de investigaciones políticas en Alemania, varias revistas y diarios colombianos, venezolanos y peruanos, ecuatorianos, españoles y, por supuesto, desde el Congreso norteamericano.
4. Antonio Panesso en su columna de opinión de El Espectador, el 5 de abril de 1999, decía: "el último rincón del patio trasero de Estados Unidos es Colombia, que ha sido alternativamente tan mansa como un cordero y tan atolondrada como una vaca loca. Aún así es parte de un patio que no debe preocupar mucho a los gringos y que tiene la particularidad de que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia se vino hasta Bogotá a advertirnos que las bombas del avión "Fantasma" dirigidas por satélite,

- pueden llegar a los centros de producción de coca. Esto es una buena noticia porque la alta técnica militar es preferible a la fumigación”.
5. El diario El Tiempo decía el 5 de abril de 1999: “cabe destacar la advertencia que han hecho observadores del proceso según la cual las manifestaciones de autoridad por parte de la guerrilla sin que el gobierno el gobierno haga nada por rebatirlas le estarían allanando el camino a la insurgencia hacia el status de beligerancia, con lo que obtendría su reconocimiento internacional como fuerza rebelde”.
 6. Respecto de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos decidió quedar fuera del Tratado de Roma. El senador Jesse Helms, en lo que es la opinión de un sector importante de la derecha norteamericana, dice que el Tratado de Roma es un documento peligroso. Uno de los crímenes que contempla es el de “agresión” que fue incorporado a pesar de no existir acuerdo sobre su definición. Agrega Helms “debemos tener claro que a los ojos de la Corte habría crimen de agresión cuando los Estados Unidos emprenda una acción militar en defensa de sus intereses nacionales, salvo que Estados Unidos solicite y obtenga el permiso de la Corte”. Continúa Jesse Helms: “esta Corte pretende someter a juicio la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Pueden Uds. imaginar lo que hubiera ocurrido si este tribunal hubiera estado funcionando durante la invasión estadounidense de Panamá? ¿o la de Grenada? ¿o el bombardeo de Trípoli? En ninguno de estos casos Estados Unidos solicitó permiso a Naciones Unidas para defender nuestros intereses”. Otras afirmaciones del senador son: “votar en contra de la Corte Penal Internacional no basta, los Estados Unidos deberían acabar con ella”. O esta otra: “La Corte Penal Internacional es una amenaza para los intereses nacionales de los Estados Unidos, es de hecho un monstruo, y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes que crezca y acabe devorándonos”.
 7. Estados Unidos ve en el narcotráfico uno de los peligros inminentes para la seguridad norteamericana. Así lo expresó la ex secretaria de Estado Madeleine Albright en una entrevista para la revista La Semana (18 de enero de 1999): “La reducción del tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos es un objetivo principal de seguridad nacional de la administración Clinton¹³. La importancia de esta tarea es tan grande que no puede sobreestimarse y no disminuirá hasta que haya desaparecido la amenaza que representa el comercio de narcóticos para nuestra seguridad nacional y nuestra salud pública”.
 8. El Pentágono: en diciembre de 1998 en Cartagena el Departamento de Defensa de los Estados Unidos firmó un acuerdo donde prometía más ayuda militar a Colombia “contra la más poderosa insurgencia de América Latina” (El Espectador, 31 de marzo de 1999). ¿Más ayuda militar? Si ya en 1995, como lo denuncia Noam Chomsky, “Colombia recibe cerca de la mitad de la asistencia militar que los Estados Unidos distribuye en el hemisferio, incrementada durante la administración Clinton, quien se hizo con los fondos de emergencia cuando el presupuesto del Pentágono no permitiría su aumento”.
 9. Barry McCaffrey dijo: “Colombia caerá en las espiras de los rebeldes marxistas asociados con el narcotráfico”.
 10. El general Charles Wilhelm, comandante del Comando Sur, sostuvo que “el ejército colombiano carece de movilidad e infraestructura para combatir a la insurgencia que tiene más y mejores armas”.
 11. La Heritage Foundation agregó que “mientras la atención nacional se concentra en Kosovo, se está gestando una crisis más cerca de nuestras fronteras, en Colombia”¹⁴. La Fundación estimó que el 57% de las alcaldías colombianas apoyan u obedecen ya a los 15.000 miembros de las FARC, o a los 5 mil guerrilleros del ELN.
- En algunas regiones esas agrupaciones rebeldes han creado servicios públicos y abierto bancos de crédito agrícola con los 1.000 millones de dólares anuales que reciben de los carteles de la droga que operan en sus territorios”. John Sweeney, director de Asuntos Latinoamericanos de la Fundación dijo: “Clinton ha anunciado también su respaldo a la iniciativa de paz del presidente Andrés Pastrana, quien confía en neutralizar a los rebeldes para enlistarlos luego en la lucha contra los carteles, si la iniciativa fracasa. Pastrana será forzado a entregar la mitad de Colombia a las FARC y al ELN o lanzar al ejército regular en una guerra total”. Al recordar que en enero de 1999 las FARC anunciaron que el personal militar y otros elementos estadounidenses de seguridad serán considerados blancos legítimos en el conflicto, se preguntó: “¿Es que la ayuda adicional contribuirá al logro de la paz? ¿Ha pensado Clinton en la necesidad de introducción de fuerzas de tierra para mantener la paz? Clinton debe responder a estos interrogantes pero no lo ha hecho. Si desde el comienzo no se fijan claramente los límites del involucramiento estadounidense se corre un gran riesgo de que las tropas norteamericanas sean atrapadas por la ciénaga colombiana”.
12. Antonio Caballero dijo que “el nombre comunidad internacional es simplemente el nuevo nombre que ha usurpado los Estados Unidos para cubrir sus propias guerras”. El 24 de marzo de 1999 el subsecretario de Estado para Antinarcóticos del Departamento de Estado dijo ante el congreso norteamericano: “hemos dejado claro al gobierno colombiano que no vamos a apoyar proyectos de desarrollo alternativo en áreas que no estén bajo el control del gobierno colombiano”¹⁵.

13. Para atraer las inversiones españolas (Repsol, Telefónica, BBV y Banco de Santander) Pastrana prometió a los empresarios eliminar las trabas jurídicas, como el artículo 57 de la Constitución que dice, entre otras cosas: “por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y el afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio”
14. España incumplió los siete criterios fijados por el Consejo de Europa en 1991, bajo el nombre de Código Europeo sobre el Comercio de Armamentos. Estas normas subrayan que cualquier decisión de exportar armamento deberá tener en cuenta la situación interna y regional del país comprador, su situación de derechos humanos y el efecto de la compra sobre la economía nacional. España ha vendido a Colombia entre los años 1994 y 1997, 3 aviones CN-235 CASA; 6 patrulleros Lazaga E.N. Bazán y 1 patrullera Cormorán.
15. A Japón se le está ofreciendo “acceso al Pacífico” y la creación de un centro de productividad, instalaciones de educación empresarial con “plenas garantías” para los inversionistas (RCN, 3 de abril de 1999). Pero la balanza de pagos colombiana es deficitaria con Japón. Este exporta a Colombia por mil millones y Colombia por 300. Los productos colombianos tienen enormes dificultades para ingresar en Japón por las políticas proteccionistas de este país.
- Como vemos, los actores centrales del Plan Colombia empujan decididamente hacia una internacionalización negativa del conflicto.

La intervención norteamericana

El subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Thomas Pickering, justificó el derecho de ingerencia en estos términos: “Como mínimo, la era de la información asegura que no haya rincones oscuros en los cuales el mal y el horror puedan pasar desapercibidos”¹⁶.

El derecho de Estados Unidos a actuar en todo el mundo encuentra razones en que “las amenazas a la seguridad estadounidense proceden de todas partes”. Mediante una visión conspirativa que mezcla atentados terroristas, enfermedades, crímenes informáticos y armas nucleares, Pickering encuentra lógica la omnipresencia paranoica de Estados Unidos. La prosperidad nacional norteamericana “depende de defender y promover con éxito nuestros intereses en el extranjero”.

La ampliación del concepto de interés nacional norteamericano es propagandizado como una sincera expresión de la preocupación del pueblo norteamericano por ver qué hacen sus líderes por remediar los males del mundo. “Cuando los estadounidenses se remontan a los países que ‘no tienen’, ven la pobreza que hay en esos países, quieren saber qué hace su gobierno acerca de eso. La era de la información aplica presión al gobierno estadounidense a expandir su concepto de interés nacional para incluir acontecimientos en todos los países de donde proceden los estadounidenses. Y eso significa, simplemente, todos los países”.

Mediante esta transformación de la política exterior norteamericana en sucedánea del orden mundial, Colombia se transforma en “un microcosmos de la ‘nueva diplomacia’ ya que “los graves problemas de cualquier parte tienden a afectar a los países en todas partes”.

¿Por qué Colombia?

Un observador del encuentro que en enero de 2000 sostuvieron en Costa Rica representantes de las FARC y del Departamento de Estado norteamericano¹⁷ habría supuesto que no se estaba al borde de una mayor intervención de Estados Unidos en el conflicto colombiano.

Las FARC habían disminuido el tono agresivo y “antiimperialista” que usaban rutinariamente; Estados Unidos reiteraba sus críticas al Ejército por presumibles vínculos paramilitares y transgresión de derechos humanos, al tiempo que orientaba su disminuida ayuda militar hacia la Policía, mientras los embajadores en Bogotá desmentían que las FARC fueran un cartel de la droga.

Las cosas llegaron tan lejos que “Tirofijo” propuso un programa piloto para erradicación de cultivos que parecía tener como interlocutor a Estados Unidos. Alfredo Rangel, inmune a toda sospecha de connivencia ideológica con la guerrilla, escribió en 1998: “la solución al problema de los cultivos ilícitos en Colombia pasaría necesariamente por un acuerdo de paz global con la guerrilla mediante el cual, al tiempo que se acomete una sustitución masiva y en serio de los narcocultivos, se logra el imprescindible apoyo de los insurgentes para este propósito, dado que son el verdadero poder en las zonas cocaleras”.

Todos los analistas daban por hecho que Estados Unidos no se embarcaría en la aventura de un protagonismo mayúsculo en el conflicto militar interno sin que previamente ocurrieran cambios sustantivos en el desempeño del Ejército, en la crisis de los derechos humanos y en sus presuntos nexos con las organiza-

ciones paramilitares, tareas en las cuales los voceros estadounidenses de toda condición y nivel habían sido tan duros y explícitos.

Si bien se percibe una mejora en los resultados militares del accionar del Ejército y una mejor coordinación de las Fuerzas Armadas en su confrontación con los insurgentes, no parece que las novedades hayan sido suficientes para el viraje que la ayuda económica propuesta por el presidente Clinton parecía sugerir. La súbita "rehabilitación" del Ejército, al convertirlo en el destinatario principal de la asistencia económica y militar, es un dato relevante que amerita preguntar qué cosas influyeron en ese cambio de dirección.

Hasta hoy, todos los analistas del conflicto armado en Colombia han supuesto el desprecio norteamericano hacia el peligro político de una guerrilla marxista. Imaginan que la muerte de la guerra fría lo es también de las viejas percepciones que la temían como un riesgo de la seguridad nacional de la superpotencia.

Según esta lógica, la escalada de la guerra por la ayuda económica y militar de Estados Unidos se entiende como un efecto marginal indeseable de la lucha contra el narcotráfico. La "coincidencia" territorial entre zonas de cultivo de la droga y zonas de influencia de las FARC tendrían esa incómoda pero irrelevante condición: una coincidencia¹⁸.

Se supone que Estados Unidos sabe lo que hace. Pero también debió suponerse lo mismo durante más de 30 años con ocasión de su intervención en el sudeste asiático. Entonces las voces más inteligentes, incluidos expertos del gobierno, nunca se cansaron de alertar sobre los peligros de esa intervención. Fueron desoídos. Los fantasmas de un complot criminal soviético y una China expansionista redujeron el espacio de maniobra de la inteligencia racional. Ahora no hay fantasmas y la coincidencia parece sospechosa.

Estados Unidos, y secundariamente la Unión Europea, buscan en primer lugar evitar el desplome que se opera en el estado capitalista en Colombia. Las causas de este desplome son variadas:

1. el poder disolvente del dinero de las mafias del "narco" sobre el aparato represivo. Desde hace décadas las fuerzas armadas y policiales son bombardeadas con cañonazos de millones o decenas y hasta cientos de millones de dólares, que dispara el narcotráfico.
2. la existencia de las FARC y las guerrillas desde hace 4 décadas.
3. los fracasos y la liquidación de los batallones de elite del ejército que acudieron a defender a los paramilitares en Urabá, en 1998. Esto es indicio de quiebre, de falta de moral de combate en el aparato represivo oficial, apretados por el dinero del narcotráfico y la acción militar de las FARC.
4. el fracaso del régimen político para contener a una izquierda comunista dentro de los límites del remedo de la democracia burguesa en el país.

El problema no es sencillo. Colombia no es Kosovo ni Yugoslavia. No se trata de bombardear ciudades prácticamente indefensas sino de combatir en las selvas de la Amazonia al Darién y en la triple cadena montañosa en que se dividen los Andes en la región. Además, deben combatir contra gente que está en guerra desde hace 4 décadas y conoce el terreno mucho mejor que los datos que puedan suministrar mapas basados en satélites y aviones espías. Colombia es un país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 40 millones de habitantes y con fronteras con 5 países de importancia (Venezuela, Brasil, Panamá, Ecuador y Perú).

Las vacilaciones de Estados Unidos

Durante la administración Clinton se desarrolló una sorda lucha interna dentro del aparato norteamericano. El doble discurso del Departamento de Estado ("ni locos intervenir militarmente") no es sólo una maniobra confusionista, también expresa las vacilaciones que manifiesta Estados Unidos para dar el salto cualitativo en la intervención militar. El Pentágono, la DEA y la CIA actúan militarmente pero en una medida no muy grande, tal como ocurrió en Vietnam en los primeros años. Por otro lado, establecen una red de bases que intenta dejar encerrada a Colombia en un anillo militar, con dificultades de implementarse en Brasil y Venezuela. Simultáneamente están tratando de armar fuerzas de infantería latinoamericanas de intervención, que sean las que pongan los muertos mientras Estados Unidos se encarga de la logística y el armamento. Este proyecto se intentó también en Vietnam y su fracaso llevó a la masiva intervención norteamericana¹⁹.

Es probable que el nuevo gobierno republicano manifieste intenciones más frontales hacia una mayor intervención en el conflicto colombiano pero corre el peligro de agitar la crisis política interna, avivada por el desaceleramiento de la economía y la paridad de poder interno.

La intervención armada

El plan de participación norteamericana en Colombia nunca fue públicamente manifestado pero se expresa en:

1. Un primer batallón antinarcóticos de 1000 hombres, entrenados por 65 asesores norteamericanos en la base militar de Tolemaida, fue entregado al presidente Pastrana el 6 de septiembre de 1999.

2. El 9 de diciembre de 1999 fue inaugurada una fuerza de desplazamiento rápido. Se trata de una unidad moderna de lucha anti-subversiva consistente en tres brigadas móviles y una de fuerzas especiales dotadas de helicópteros rusos y Black Hawks americanos.
3. El 2 de diciembre se inauguró la Central de Entrenamiento Común del Sur, en la base militar de Tres Esquinas.

Además del entrenamiento y movilidad que son críticos para la policía y las fuerzas armadas colombianas, el Plan Colombia proveerá:

- 48,5 millones para apoyar programas de derechos humanos y seguridad para los trabajadores en derechos humanos
- 65,6 millones para programas de administración de justicia
- 199 millones para programas de desarrollo alternativo en toda la región.
- 117 millones para el establecimiento de Bases de Operaciones de Avanzada (FOL) de Estados Unidos para ayudar en los esfuerzos regionales de la interceptación aérea de la droga.

Esta fase es financiada por el Plan Colombia y dirigida por los asesores americanos, mientras son previstos otros batallones antinarcóticos. Como sus homólogos, que ya están esperando, su lema será combatir a los grupos armados que protegen las estructuras del narcotráfico, lo que significa reprimir los territorios controlados por la guerrilla.

Estados Unidos, ya desde 1998, comenzaba a demostrar que tenía clara percepción que la estrategia de lucha contra el narcotráfico era un paraguas para cubrir la guerra contrainsurgente:

1. Desde 1998, una directiva americana autorizaba al personal americano a compartir con Colombia los conocimientos sobre la capacidad de la guerrilla únicamente si estaban directamente relacionadas con la lucha antidrogas.
2. En junio de 1999 se redactó una nueva directiva que autorizaba al mismo personal a compartir información, aunque no estuviera directamente relacionada con el narcotráfico, bajo el pretexto de que la línea que separa ambos es totalmente difusa.

Estados Unidos prepara cuidadosamente los detalles de la que pretende ser su ofensiva final contra las FARC. Dentro de Colombia, cientos de asesores entrenan al ejército y los paramilitares; miles de mercenarios que fueron parte del ejército norteamericano en Vietnam están siendo enviados por seis compañías privadas para apoyo logístico y tareas de alto riesgo; tres bases aéreas fueron habilitadas para el aterrizaje de aviones y más de 2000 paracaidistas están siendo entrenados para invadir las zonas despejadas donde se desarrollan las negociaciones. Fuera de Colombia ha establecido bases en Ecuador, Perú, El Salvador y Puerto Rico donde miles de soldados esperan la orden para atacar.

La ingerencia de Estados Unidos es el elemento clave que agudizará la guerra. Antes no era común ver a funcionarios norteamericanos de alto rango en Colombia, ahora se los ve todos los días. ¿Por qué ese repentino interés de Estados Unidos?

- En Colombia existen importantes recursos naturales (petróleo, oro, carbón, níquel, madera, esmeraldas) en los que las multinacionales han puesto sus ojos.
- También es un tesoro de biodiversidad.
- Por otro lado la devolución del Canal de Panamá empuja a Estados Unidos a reforzar su presencia en las zonas vecinas y Colombia es fronteriza con Panamá²⁰.
- La capacidad militar de la guerrilla preocupa a Estados Unidos, sobre todo en una región donde está Venezuela y Ecuador. El ejército colombiano ha sufrido duros reveses en los últimos años. Las FARC tienen prisioneros a cientos de militares colombianos, capturados en combate, lo que indica cierto dominio territorial, una gran capacidad logística y la existencia de una retaguardia segura en algunas zonas bajo su influencia.
- El narcotráfico es otra preocupación. Barry McCaffrey, Director Office of National Drug Control Policy, expresó claramente este punto de vista: "la producción de cocaína y heroína que rápidamente aumenta en Colombia genera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y al bienestar de nuestros ciudadanos".

El Plan Colombia encierra tres amenazas fundamentales:

1. el peligro de que el conflicto colombiano traspase las fronteras y se desborde hacia los países limítrofes. "Nuestro temor es que la remoción de ese tumor canceroso genere una metástasis en Ecuador", dijo gráficamente el canciller de ese país, Heinz Moeller.
2. la posible intervención estadounidense, que significaría la vietnamización o kosovarización del conflicto. Dos dirigentes de las FARC (Simón Trinidad y Manuel Cardona) advirtieron que "Estados Unidos pretende crear un nuevo Vietnam en Latinoamérica" y que el conflicto armado puede agravarse porque "se van a levantar más Manueles Marulandas"²¹.
3. involucramiento directo de las fuerzas armadas de otros países sudamericanos. Esta última hipótesis

fue hecha pública por Vladimiro Montesinos. Habló de la existencia de un plan de invasión a Colombia en el que Ecuador y Perú desempeñarían un rol fundamental en lo referente a la logística de un operativo multilateral. Esto significa una señal adversa hacia la integración impulsada desde el sur de América y un acercamiento a una estrategia norteamericana cuya formulación es anterior al Plan Colombia²².

La propuesta de operativos multilaterales parece ser la reedición del proyecto de creación de una Fuerza Multilateral Antidrogas. La idea surgió en 1995 y fue propuesta por el entonces presidente panameño Pérez Balladares. La negativa norteamericana a satisfacer las solicitudes del gobierno hizo fracasar el proyecto. Perdida su casi centenaria presencia en Panamá, Estados Unidos debió buscar lugares alternativos que le permitieran hacer frente a los “nuevos enemigos”.

Así nacieron los Centros de Operaciones de Avanzada (Forward Operating Location – FOL), que fueron implementados a partir de 1999. Surgieron al morir el proyecto del Centro Multilateral Antidrogas. En la imposibilidad de disponer de una gran base militar, se trató de ubicar bases más pequeñas y diseminadas por América Latina en los sitios considerados estratégicamente relevantes. Hoy en día hay un FOL en Manta, Ecuador, uno en Aruba, otro en Curacao en las Antillas Holandesas más un FOL en Comalapa, en El Salvador²³.

Los respectivos gobiernos firmaron convenios con Estados Unidos en los que ceden el uso de las bases, aéreas en algunos casos y marítimas en otros, por diez años, con posibilidad de renovación del convenio por otros cinco años. Los acuerdos prevén el acceso irrestricto a personal y equipo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a aeropuertos, puertos y otras instalaciones y la posibilidad de construir o ampliar las instalaciones existentes. Estas están puestas a disposición de Estados Unidos sin costo alguno, así como los terrenos, los derechos de vía y el personal local. Se protege el derecho de discrecionalidad norteamericano para ingresar los tipos y cantidad de aviones, armas, equipo y personal que ellos decidan. Se prevé solamente un límite para la presencia de personal estadounidense, variable para cada centro. En el caso de Manta, considerado el FOL más importante, se puede llegar, previa notificación, a 475 hombres, mientras en períodos considerados normales el número oscilaría entre 250-300 militares.

Los objetivos de los FOLs son la detección, monitoreo, rastreo y control de actividades ilegales del narcotráfico a realizarse mediante el patrullaje aéreo. Durante los vuelos los datos serán cruzados con la información proporcionada por la red de radares. La tripulación sólo puede ser estadounidense. Los militares latinoamericanos podrán participar de los vuelos en calidad de observadores invitados. Los aviones no serán artillados y no podrán intervenir en contra de las avionetas y barcos irregulares detectados. Su tarea consiste en avisar a la policía local, que deberá llevar a término los operativos.

Para la realización del patrullaje el gobierno norteamericano tuvo que pedir autorización para ingresar al espacio aéreo de todos los países de la región. A tal efecto se firmaron acuerdos bilaterales. Solamente un país se negó: Venezuela.

Los FOLs son puestos de avanzada. En términos militares significa que detrás de éstos existe una segunda fila de defensa operativa. La constituyen la base aérea Enrique Soto Cano cerca de Tegucigalpa, en Honduras; la base naval de Guantánamo, Cuba y la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico. A este elenco se suman las bases en Colombia, sobre todo la de Tres Esquinas, totalmente aislada, convertida en un fuerte inexpugnable; la de Palmapampa en la selva de Ayacucho en Perú y todas las otras bases que brasileños, peruanos, ecuatorianos y venezolanos están alistando para defender sus fronteras de la posible expansión del conflicto en Colombia.

Al mismo tiempo se realizan en Centroamérica operativos con participación estadounidense insertados en programas a escala regional. Son los programas llamados “Cielos centrales” y “Juventud sana” que a pesar de su nombre prevén la intervención de aviones, helicópteros y barcos para detectar cultivos ilegales e interceptar cargamentos de drogas.

El fusarium oxysporum

Como otro recordatorio fantasmal de Vietnam, la administración Clinton persuadió a Colombia de desarrollar un poderoso herbicida biológico contra los cultivos de coca y los campos de amapola que se utilizan para producir heroína. Es el hongo *Fusarium oxysporum*, derivado de la coca y la idea es esparcirlo a lo largo de cientos de miles de hectáreas en toda Colombia. Nadie parece conocer el impacto de este hongo en los seres humanos –los agricultores– y las posibles consecuencias, inevitablemente, nos remiten al defoliante Agente Naranja, que en Vietnam mató y diezmó al Vietcong y a norteamericanos por igual.

Nadie sabe, ni siquiera los científicos que lo estudian, lo que hará este hongo una vez que los aviones rieguen el cielo de la selva del Amazonas y el Putumayo con miles de litros de la sustancia.

Según el London Observer figura en la receta de muchas armas químicas y está proscrito en convenciones contra la guerra tóxica. Es verdad que ataca cacaes y amapolas pero no es tan astuto como para dañar solamente estas plantas y según el biólogo Jeremy Bigwood destruirá también unas 200 especies más con lo cual podría devastar el medio ambiente selvático²⁴.

El proyecto independiente Sunshine que estudia el problema agrega que el riesgo afectará todo tipo de contacto con los demás seres vivos y advierte que los pájaros que se alimenten de semillas contaminadas estarán en peligro.

A su turno una campaña internacional llamada Movimiento del Agua planteó los estropicios del hongo en el sistema hidrológico. ¿Qué pasará con el agua del país si envenenan sistemáticamente las fuentes primordiales como las cabeceras del Amazonas y la Orinoquía? El último animal en la cadena es el hombre. Las investigaciones permiten saber que el hongo es letal en personas con problemas inmunológicos: según estadísticas, tres de cada cuatro inmunodeficientes atacados por el hongo morirán. ¿Y qué decir de los consumidores de coca o heroína que se apliquen dosis contaminadas? ¿Es justo combatir la droga envenenando a quienes la consumen?

Pero lo peor del hongo son las incógnitas que abre. El fusarium posee sorprendente capacidad de transformación. Un documento del Estado de Florida reconoce que la mutagenicidad del hongo es el más inquietante factor que impide emplearlo como herbicida.

Estados Unidos quiere transformar a Colombia en un enorme laboratorio tal como lo atestigua el ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, quien declaró que el gobierno rechazaba el hongo, pero luego dijo que lo aceptaba como mera prueba. Es previsible que zonas de alta biodiversidad al sur de Colombia se conviertan en terreno de experimentación, denuncia el biólogo de la U.N. Gabriel Nemoga. Ya ha intentado hacerlo la DEA en Perú y Ecuador, en forma secreta, y casi seguramente lo habrá hecho ya en Colombia donde las fumigaciones con glifosato ya comenzaron en 1992.

El dominical inglés *The Observer* publicó documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano donde mencionaba al científico británico Michael Greaves como el protagonista del programa “fusarium oxysporum”²⁵.

Hasta hace poco el científico trabajaba en el Institute of Arable and Crop Research de Bristol en un programa solventado por el gobierno inglés. También coordinaba un secreto programa gubernamental británico en la ex república soviética de Uzbekistán, en el Cáucaso, donde desarrollaban otro tipo de defoliante “fungi”, para destruir las plantaciones de opio en Afganistán, de donde proviene la mitad de la heroína mundial.

El defoliante –conocido como agente verde- segrega toxinas en las raíces de las plantas, forzando al vegetal a debilitarse y morir. Pero puede sobrevivir en la tierra por años y algunos científicos sostienen que puede ser tóxico para animales y seres humanos. También es mutante y mata otros cultivos.

El programa está basado en el Instituto de Genética de Uzbekistán, dirigido por un grupo de científicos de la ex URSS que trabajaban en la guerra fría en la preparación de la guerra bacteriológica.

La Cancillería británica aportó 150 mil dólares para ese programa en 1998. En 1999 tres científicos del instituto en Uzbekistán llegaron a Bristol para trabajar con Greaves. El “fungi” ha sido probado en Uzbekistán, Tajikistán y Kirgizistán, todas repúblicas de la ex URSS. Dos países rechazaron las pruebas: Turkmenistán y Kazakstán.

El gobierno norteamericano no quería ser visto como tomando la iniciativa en estos proyectos y pidió al programa de control de la droga de las Naciones Unidas (UNDCP) que tomara la responsabilidad de llevarlo adelante. Pero los fondos son estadounidenses y británicos.

Con la firma de la secretaria de Estado Madeleine Albright Estados Unidos le pidió a ese organismo de la ONU testear la implementación del “fusarium” sobre plantaciones de coca a gran escala y conseguir la participación de otros países “para evitar la percepción de que es sólo una iniciativa norteamericana”.

En Florida se prohibió el uso del defoliante cuando el Departamento de Protección de Medio Ambiente sostuvo que “es difícil, si no imposible, controlar el traspaso del fusarium a otras especies. El defoliante mutante causa enfermedades en otras plantas, como tomates, pimientos, viñas y maíz”.

En Perú, cuando se utilizó como spray sobre plantaciones de coca en el área de la base militar estadounidense Santa Lucía, centenares de campesinos no pudieron hacer producir la tierra. Brasil ya ha expresado su temor de que los residuos de los herbicidas utilizados puedan descender por los ríos Putumayo y Caquetá hacia el Amazonas brasileño. El caso del hongo Fusarium Oxysporum es más grave aún ya que puede amenazar seriamente la biodiversidad en la Amazonia.

La militarización de la lucha antidroga

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos aseguran que el Plan Colombia marcará el comienzo del fin del narcotráfico que se origina en la región andina de América Latina.

Los críticos del proyecto, anticipan que en el más benigno de los casos, se producirá un nuevo y ampliado “efecto globo” de los que suelen ser habituales en la lucha contra esa actividad ilegal que genera entre 300 mil y 500 mil millones de dólares anuales de dinero negro, según los expertos.

Los antecedentes –la lógica histórica con que Estados Unidos ha enfrentado el problema de la droga, lógica que impregna al Plan Colombia- favorecen a los más pesimistas, a los del “efecto globo”. El término

es una alusión a la imposibilidad de atrapar o empuñar el aire y a la similitud entre ese imposible y la lucha contra el narcotráfico: en cada oportunidad en que Washington consiguió realizar una acción exitosa de supresión de cultivos, laboratorios de procesamiento y de redes de transporte y comercialización de las sustancias ilegales en algún lugar del planeta, estas formas delictivas reaparecieron en otro punto geográfico con igual o mayor fuerza.

Este es el resultado más notorio de una filosofía que descansa en la acción policial y militar para el problema de la droga, que Washington abrazó con fuerza desde su primera ley para reprimir la producción, comercialización y consumo ilegal de sustancias controladas, en la segunda década del siglo XX²⁶.

Algunos la identifican con el empeño estadounidense en la lucha contra la droga, otros la asociación a una necesidad por conveniencia.

Mantener el eje fuera del territorio estadounidense permite eludir el incómodo debate sobre las condiciones que hacen de la sociedad de ese país el mayor mercado de la droga ilícita o la forma en que sus grandes instituciones de crédito se siguen beneficiando con el lavado del dinero del narcotráfico.

Los carteles colombianos de Medellín y Cali sucumbieron como grandes organizaciones criminales en los 90 y esto fue celebrado como un éxito por Washington. Pero en su lugar surgieron organizaciones más pequeñas y flexibles que los reemplazaron y ahora constituyen una perplejidad constante para agencias policiales especializadas como la DEA, que se sentía más cómoda cuando el enemigo era grande como ella misma y parecía fundamentarle con su sola existencia dentelladas de recursos en el presupuesto estadounidense.

Pero la ayuda de Estados Unidos, oficialmente destinada a la guerra contra el narcotráfico, en la práctica será utilizada contra la guerrilla.

Un funcionario del departamento de Estado que pidió no ser identificado, dijo que el entrenamiento, el equipo y los helicópteros que recibirán las Fuerzas Armadas colombianas serán utilizados en la lucha contra los integrantes de las FARC y del ELN²⁷.

“El objetivo de los tres batallones antinarcóticos que hemos comenzado a entrenar es asegurarse que la policía pueda fumigar los cultivos de coca que se encuentran, fundamentalmente, en el sur de Colombia. Pero como esos cultivos están protegidos por la guerrilla, la lucha de los batallones será contra la guerrilla, y los operativos que realizarán serán operativos antiterroristas”.

“En El Salvador uno podía entrenar a los batallones en guerra contra la guerrilla y uno sabía que podía ganar porque El Salvador es un territorio mucho más pequeño y más fácil. En Colombia es mucho más complicado por el tamaño del país y la topografía. Hay muchas más montañas y selvas”, dijo el funcionario.

La fuente descartó cualquier intervención directa norteamericana. “Esto no es Vietnam. Y si el plan A fracasa, el plan B será más de lo mismo, es decir más del plan A. Lo que hay que tener en cuenta es que los 1.300 millones de dólares de ayuda de USA es solo un adelanto. Para enfrentar el problema seriamente se necesita mucho más”.

El viaje de Clinton

Bajo un sol rajante y 32 grados de temperatura, Clinton pidió el apoyo de los países latinoamericanos en un tono que tuvo más de súplica que de amenaza.

Se dirigió fundamentalmente a Brasil, el país que estuvo liderando los cuestionamientos. “Y yo entiendo las reticencias. Pero tenemos fondos para ayudar a los países vecinos a enfrentar el problema. Porque, seamos honestos, el problema desbordará las fronteras”, dijo²⁸.

Barry McCaffrey, el zar antidrogas, reforzó el argumento: “este es un problema regional y es por eso que todos los países del continente deben expresar firmemente su apoyo al Plan Colombia”.

Clinton vino acompañado de una nutrida comitiva de legisladores de ambos partidos, para dejar en claro que el Plan Colombia es fruto de una política bipartidista y que cualquiera que sea el candidato que ganara las elecciones el Plan Colombia seguirá siendo implementado. Muchos analistas dicen que la visita de Clinton a Colombia se debió en parte a problemas de política interna. Presionado por los republicanos para que intervenga con más determinación en la lucha contra las drogas Clinton habría querido demostrar con su viaje que los demócratas, cuando se trata de drogas, son tan halcones como los republicanos.

“Esto no es Vietnam, esto no es imperialismo yanqui. Estados Unidos no intervendrá militarmente con el envío de tropas en Colombia. La solución del problema colombiano es política, no militar”²⁹.

El presidente Pastrana recibió un fuerte espaldarazo pero también una formidable demanda para que cumpla con todos los compromisos. La presión no fue sólo sobre el mandatario.

“Sabemos lo mucho que hace en favor de los derechos humanos y contra los paramilitares, pero el problema es que nadie le cree”, le espetó un congresista norteamericano al general Fernando Tapias, el comandante de las FFAA colombianas³⁰. “Usted no solo tiene que hacer, sino demostrar y convencer”, agregó el parlamentario.

“Ya hubo una certificación para Colombia y puede haber una segunda, pero no habrá una tercera. Ahora les toca a ustedes ganársela cumpliendo las condiciones, tanto en el tema narcotráfico como en el de los derechos humanos”.

Aunque Pastrana recalcó en varias oportunidades que no cree que los rebeldes sean narcotraficantes, en la reunión de Cartagena hubo acuerdo en que esa guerrilla “es parte fundamental en la cadena productiva del narcotráfico”.

Conclusiones

No hace falta demasiada imaginación para llegar a la conclusión de que el Plan Colombia como bien sabe la mayoría de los colombianos informados, es sencillamente impracticable.

- ❑ Nada se dijo sobre qué pasaría si un helicóptero norteamericano fuera derribado por las guerrillas y su tripulación resultara herida o muerta. Las filas de las FARC aumentaron desde que Estados Unidos lanzó el Plan Colombia. A los batallones de contrainsurgencia no les resultará fácil enfrentarse a las FARC.
- ❑ Casi todos los gobiernos latinoamericanos no participarán en el Plan Colombia por lo que Washington quedaría aislado en este emprendimiento. El énfasis en la militarización de la lucha contra las drogas es lo que ahuyentó a los donantes latinoamericanos y volvió reticentes a los europeos³¹.
- ❑ Algunos sectores en Estados Unidos sostienen que lo fundamental es que los países identifiquen, y Washington antes que nadie, que el principal problema de Colombia es la caída absoluta de la autoridad y la ley. El 70% de todos los secuestros del planeta se producen en Colombia. La clase profesional colombiana está huyendo a Miami para evitar ser una víctima más en el país con mayor tasa de secuestros en el mundo.

Agobiada por un prolongado conflicto que ha dejado 35 mil civiles muertos en la última década, Colombia es señalada como la capital mundial del secuestro. En 1999 se registraron 2945 secuestros. Esto no se explica por el cultivo, sino por una profunda crisis de gobernabilidad, por un Estado débil e instituciones pobrísimas.

- ❑ La mayor amenaza y la mayor tragedia para Estados Unidos en esta empresa colombiana es que la decisión del plan fue tomada en el nivel político más alto por hombres y mujeres que saben muy poco de la historia, la cultura y la política del país.
- ❑ En la opinión de Noam Chomsky, la intervención de Estados Unidos en Colombia es la mejor prueba más de que poco y nada ha cambiado desde que terminó la Guerra Fría, un gran pretexto que funcionó durante 40 años³². Ahora uno de los pretextos es la droga.
- ❑ La verdadera razón de la intervención norteamericana es que Colombia es un país relativamente rico, que tiene petróleo y que limita con Venezuela, que actualmente es el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos.
- ❑ Colombia no será un nuevo Vietnam. Vietnam fue una guerra imperial muy inusual. En general, los imperios utilizan las fuerzas locales para lograr sus fines. Un imperio utiliza sus soldados para la conquista inicial pero no para mantener su poder. En la India, por ejemplo, Inglaterra utilizó las fuerzas locales. Los ingleses estaban ahí pero el que hacía el trabajo sucio era el ejército indio. Colombia se parece más a El Salvador. El ejército colombiano, como todo ejército, tiene a sus propios paramilitares, que son los que se encargan de cometer las atrocidades³³.
- ❑ “Los dos partidos apoyaron la ayuda para Colombia porque nadie quiere ser acusado, en un año electoral, de ser blando en la guerra contra las drogas”, dijo el embajador norteamericano en Colombia, Myles Frechette. “Pero nadie está entusiasmado con el paquete. Lo más probable es que será reevaluado por el próximo presidente”.
- ❑ Uno de los motivos del escepticismo generalizado es que la motivación oficial de la ayuda norteamericana –la guerra contra las drogas- parece deshonesto. Clinton, en su afán de lograr su aprobación por el Congreso, presentó el paquete de ayuda como un esfuerzo antidrogas. Pero gran parte de la ayuda está destinada a la compra de helicópteros y al mantenimiento de 500 entrenadores militares y personal de apoyo estadounidense en Colombia³⁴.
- ❑ Clinton dice que los norteamericanos se dedicarán exclusivamente al combate contra los narcotraficantes, y sólo se enfrentarán con los guerrilleros de las FARC si éstos interfieren en las operaciones antidrogas. ¿Es cierto esto? Y si es cierto ¿tiene sentido? El plan Colombia sufrió un duro golpe cuando George F. Will, el columnista conservador más respetado por la prensa de Estados Unidos publicó en el Washington Post un artículo llamado “Ilusiones colombianas”: “las seguridades del presidente Clinton de que Estados Unidos no se involucrará en la guerra civil de Colombia en la que Estados Unidos ya está involucrado (con personal militar, equipos, entrenamiento, financiación e inteligencia) sólo tiene sentido si un considera a los helicópteros como maquinaria agrícola”³⁵.
- ❑ La intervención estadounidense estará muy tentada de “norteamericanizar” toda la vida política de la región. Si Chávez toma el control de los recursos de Venezuela para introducir reformas sociales en su

país habrá problemas. Cada vez que un presidente latinoamericano intentó algo así terminó mal. Jacobo Arbenz, en Guatemala fue un claro ejemplo. Aunque en otras partes del mundo las cosas parecen estar cambiando, como lo sostiene William Pfaff³⁶.

- El Plan Colombia comete el error de abordar un problema de dimensiones mundiales a partir de las cuestiones internas de un país. Es como si el problema del narcotráfico quedara resuelto con el solo hecho de erradicar las plantaciones colombianas o cerrar laboratorios clandestinos. Esto no es más que una simplificación de un problema mucho más complejo, que envuelve al mundo entero. Para ser precisos: Colombia importa el 70% de las sustancias químicas, llamadas precursoras, empleadas en el procesamiento de coca. Obviamente son muchos los países productores de esos insumos, que además se comercializan libremente. Y sin precursores no hay cocaína³⁷.

Por otro lado, las rutas del tráfico atraviesan decenas de países para llegar a los grandes consumidores. Y además el dinero de la droga no se lava en Colombia, sino en todo el mundo. Así, abordar una solución del narcotráfico a partir de Colombia es, cuanto menos, un enfoque miope. A menos que esconda otras intenciones más abarcadoras.

Notas

1. Así lo afirma Tad Szulc, en Clarín, 7 de septiembre de 2000.
2. "Este es un conflicto interno colombiano y no habrá intervención militar por parte del gobierno de los Estados Unidos", declaraciones del presidente Clinton al semanario Tiempo, de Bogotá.
3. El general Barry McCaffrey, el "zar antidrogas", anunció su retiro del cargo para enero de 2001.
4. Plan Colombia, pasaporte para la guerra, Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, agosto 2000 (en francés).
5. Plan Colombia, una estrategia sin solución, ODHACO, Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, Bruselas, febrero de 2000.
6. Idem.
7. Europa no apoya el capítulo militar del Plan Colombia, Clarín, 25 de octubre de 2000.
8. Plan Colombia, una estrategia sin solución, ODHACO, Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, Bruselas, febrero de 2000.
9. El Plan Colombia, proyecto de mantenimiento del statu quo, Héctor Mondragón, 5 de mayo de 2000.
10. Plan Colombia, una estrategia sin solución, ODHACO, Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, Bruselas, febrero de 2000.
11. Ejércitos de América Latina, "carne de cañón", ANNCOL, 15 de agosto de 2000.
12. ¿Colombia-Vietnam?, Luis Fajardo, 14 de abril de 1999. Paper disponible en www.ainfos.ca
13. El presidente Reagan incluyó la lucha contra las drogas dentro del concepto de Seguridad Nacional. Ver Drogas y seguridad en América Latina, David Scott Palmer, revista Milenio 3, Buenos Aires.
14. El Espectador, 31 de marzo de 1999
15. Revista Semana, 29 de marzo de 1999
16. Mensaje de Thomas Pickering en el Salón Benjamín Franklin del Consejo Hispánico de Relaciones Internacionales, 26 de abril de 2000
17. USA ¿en qué andás?, Armando Beedetti Jimeno, El Tiempo, Colombia, 17 de enero de 2000.
18. Idem.
19. La negativa de Brasil, que tracciona toda la política latinoamericana, es el principal escollo del Plan Colombia. Difícilmente Estados Unidos decida intervenir con sus soldados en Colombia por lo que el Plan parece cercano a la defunción como lo afirmó recientemente el propio McCaffrey.
20. Un completo informe sobre la devolución del Canal de Panamá puede encontrarse en el paper "Panamá, el fin de la quinta frontera", disponible en www.cderi.com.ar
21. El Tiempo, Colombia, 27 de junio de 2000.
22. Este plan de invasión, de ser cierto, no ha encontrado apoyo hasta el momento.
23. América Latina, un continente en vías de militarización, Adriana Rossi, Le Monde Diplomatique en español, octubre de 2000.
24. Del hongo de Hiroshima al hongo de Frankenstein, Daniel Samper Pizarro, 9 de agosto de 2000.
25. Un tóxico inglés contra la coca en Colombia, María Laura Avignolo, Clarín, 19 de septiembre de 2000.
26. Colombia: misión imposible, Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 26 de agosto de 2000.
27. La guerrilla, en la mira del Plan, Ana Barón, Clarín, 30 de agosto de 2000.
28. Clinton pidió que la región apoye el Plan Colombia, Ana Barón, Clarín, 31 de agosto de 2000. Cuatro días antes había dicho todo lo contrario.
29. Pero las FARC, a través de Iván Ríos, dicen que Clinton "sólo viene a confirmar la llegada de más helicópteros, de armas, de hongos peligrosos. Y eso es echarle más gasolina al incendio". La solución norteamericana parece ser militar, no política. Nelson Padilla, Clarín, 6 de agosto de 2000.
30. Presión de Estados Unidos a Colombia, Nelson Padilla, Clarín, 2 de septiembre de 2000.
31. Declaraciones de Michael Shifter, director de programa del Diálogo Americano, instituto de investigación del Partido Demócrata norteamericano, entrevistado por Matilde Sánchez, Clarín, 24 de septiembre de 2000
32. La guerra fría como pretexto imperial, entrevista de Ana Barón a Noam Chomsky, Clarín, 17 de septiembre de 2000.
33. Estados Unidos comienza a darse cuenta de que Colombia, en realidad, es mucho peor que Vietnam. Sólo podrá derrotar a la guerrilla si interviene masivamente, pero también se incrementa la posibilidad de caer derrotado. Pero algunas voces en Estados Unidos están decididas a correr el riesgo. El diputado republicano Hastert dijo que "Colombia puede terminar como Vietnam, es necesario correr el riesgo", Clarín, 1 de septiembre de 2000.
34. Las dudas sobre la ayuda a Colombia, Andrés Oppenheimer, La Nación, 26 de septiembre de 2000.
35. Advertencia de Brasil a Colombia por el uso de un hongo tóxico, La Nación, 14 de septiembre de 2000
36. "El poder de Estados Unidos intimida a los aliados pero no a sus enemigos", William Pfaff, La Nación, 22 de octubre de 2000.
37. Brasil desconfía de lo que el plan oculta, declaraciones de Walter Maierovich, ex jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas de Brasil a Eleonora Gosman, publicadas en Clarín, 24 de septiembre de 2000.

Capítulo 7 – La guerrilla

En 1965 el Xº Congreso del Partido Comunista Colombiano (PCC) propuso la reestructuración del aparato armado revolucionario que se había formado en 1964, las FARC. Bajo el impulso de Jacobo Arenas y sobretodo de Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo) se implantaron en varias provincias del país. En 1966 fueron rebautizadas FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo). Desde los años '80 una parte de su financiamiento proviene de un impuesto sobre la coca. Presente en el 40% de las comunas colombianas, los combatientes de las FARC-EP (estimados entre 8.000 y 20.000 hombres) operan sobre 60 frentes con un mínimo de 100 combatientes en cada uno.

Inspirado por el ejemplo de la revolución cubana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó a operar en 1965. En febrero de 1966 murió en combate el cura guerrillero Camilo Torres. Su destino tomó valor de símbolo para todos los creyentes "sometidos" del continente. A partir de 1999 el ELN es dirigido por un sacerdote español, Manuel Pérez. El ELN encuentra el grueso de su financiamiento en el impuesto de guerra a las compañías petroleras. Sus efectivos son estimados en 5.000 combatientes.

En 1967, relacionado con el conflicto chino-soviético, surgió el Ejército Popular de Liberación (EPL), maoísta, brazo armado del pequeño Partido Comunista Marxista-Leninista. Actualmente reagrupa algunos centenares de hombres.

A estas guerrillas se agrega el M19, creado en 1970 para protestar contra el fraude electoral que impidió la victoria presidencial del general populista Gustavo Rojas Pinilla. Desprendido de la burguesía urbana, con ideología marxista leninista, el movimiento se hizo conocer en 1980 por la captura de la embajada dominicana.

Las FARC

Las guerrillas comunistas expulsadas de Marquetalia en 1964, fundaron las FARC en 1965 en unidad con otros destacamentos guerrilleros del sur del Tolima. En ese momento había seis destacamentos. Pero al poco tiempo, a raíz de una desafortunada operación encabezada por Ciro Trujillo, recibieron un fuerte golpe donde perdieron el 70% de las armas y muchos hombres.

Fueron años duros, de crisis, de los que tardó tiempo en recuperarse. Desde mediados de los '70, y como resultado de la crisis política nacional que culminó en 1977, comenzaron a superar esta situación.

Desde principios de los '80 las FARC discutieron pasar de su táctica defensiva, de guerrillas, a tácticas más ofensivas y a la construcción de un Ejército Revolucionario, es decir, a pasar a una lucha ofensiva por el poder.

Esto se expresa en los cambios aprobados en la Séptima Conferencia, en los cuales se definió una táctica militar ofensiva.

Pero según Jacobo Arenas, el otro alto dirigente de las FARC, la organización no ha sabido implementar el nuevo modo de operar.

El ELN

Esta guerrilla comenzó a reflejar sectores urbanos, en particular al movimiento estudiantil. Surgió como producto directo de la Revolución Cubana y se nutrió de jóvenes desilusionados que salieron del MRL. El ELN fue la guerrilla foquista por excelencia. Sus fundadores, procedentes de Cuba, querían seguir las enseñanzas del Che Guevara.

Escogieron el departamento de Santander, vieja zona de guerrillas liberales. En enero de 1965 tomaron la población de Simacota, dando inicio a sus actividades. Al poco tiempo el sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien se hizo muy conocido por su oposición a la Operación Marquetalia, ingresó al ELN. Fue asesinado por el Ejército en febrero de 1966, convirtiéndose en un mártir de la lucha guerrillera colombiana.

El ELN tuvo un período de consolidación en el que se nutrió de decenas de estudiantes que abandonaron las aulas universitarias, durante el ascenso estudiantil de 1968-72.

Pero el gobierno de Misael Pastrana realizó la operación militar Anorí en 1974, liquidando una columna completa, y provocando una profunda crisis en la organización.

El fracaso del foquismo llevó a un cambio de concepción del ELN, que abandonó esa táctica. A principios de la década de los ochenta, el ELN comenzó a recuperarse, y desde esa fecha ha venido consolidándose y ganando una importante franja simpatizante entre el movimiento sindical y estudiantil. Se reclama socialista y fue la organización guerrillera más importante que rechazó los acuerdos de paz propuestos por el presidente Betancur en 1984. El 9 de febrero de 1998 Samper y el ELN firmaron en Madrid un acuerdo preliminar secreto para definir el marco de las futuras negociaciones, que continuaron bajo el gobierno de Pastrana.

La guerrilla maoísta

El PCC-ML organizó en 1967 el EPL cuyo eje de actividades ha sido el norte de Antioquía y el departamento ganadero de Córdoba, en el norte del país.

Inició sus acciones al calor del ascenso campesino de 1968. Desde su fundación fue una típica guerrilla maoísta, que concebía la lucha contra el cerco del campo a la ciudad dentro de la estrategia de la guerra popular prolongada. Pero se estrelló contra la realidad de un país que había dejado de ser campesino y se había convertido en un 70% urbano.

Esto provocó una fuerte crisis en el EPL durante los años 70. Pero al mismo tiempo el PCC-ML se convirtió en un partido con una fuertísima influencia obrera y campesina.

En el Congreso del PCC-ML en 1980, se saldó la discusión. Rompieron con China y con el maoísmo, y dieron un giro orientándose hacia el Partido Comunista de Albania. Rompieron con las concepciones que daban primacía al movimiento campesino, definieron a la clase obrera como eje de la revolución y sostuvieron que Colombia iba hacia la revolución socialista.

A pesar de estas radicales declaraciones, el EPL pactó la tregua con el gobierno de Betancur y entró en un callejón sin salida. Se desintegró en 1991, aunque 500 de sus miembros han llevado a cabo algunas acciones guerrilleras limitadas.

El M19

Surgió en 1970, de las filas de la ANAPO. Recordemos que el 19 de abril de 1970, el fraude electoral arrebató el poder a este nuevo partido. El M19 surgió como expresión del descontento anapista, y se convirtió en su brazo armado. Sus inspiradores tuvieron una importante influencia de los Montoneros argentinos.

Fundado por 20 o 25 personas, con dos o tres armas cortas, el M-19 orientó sus primeros años a dar golpes de opinión. Robó la espada del Libertador Simón Bolívar e inició acciones populistas como robar carros repartidores de leche para distribuirla en los barrios populares de las grandes ciudades, ayudar a resolver los problemas de luz y agua en los barrios y asaltar supermercados para repartir la comida.

En 1978 realizó su primera gran acción contra el gobierno de Turbay: el asalto al Cantón Norte del Ejército en Bogotá, donde tomó más de 3 mil armas. A los pocos meses, tomó la embajada de la República Dominicana. La persecución que se desató casi lo liquidó.

Para resistir, el M19 se fue a los montes. Allí se recuperó en los siguientes 5 años, aunque pudo mantener una amplia influencia en los sectores marginales de las ciudades y en el movimiento estudiantil.

El M19 firmó la tregua de agosto de 1984, pero se vio obligado por la represión a retomar las armas en junio del año siguiente enfrentando un operativo de exterminio.

El M19 fue una guerrilla nacionalista y populista, cuya base social son los habitantes marginales de los tugurios urbanos.

Como el ELN, el M19 reflejó desde sus comienzos a las nuevas clases urbanas. Pero a diferencia de él, nunca tuvo una concepción foquista de la lucha guerrillera.

Tras la constitución de la Alianza Democrática como movimiento político, la guerrilla anapista se disolvió aunque un pequeño grupo disidente, el grupo Jaime Bateman Cayón, sigue en operaciones.

Las guerrillas latinoamericanas

El triunfo de la revolución cubana en 1959 puso al orden del día la toma del poder por la lucha armada, tradición latinoamericana que se remonta a Simón Bolívar, José Martí y Augusto César Sandino. El movimiento iniciado por los cubanos revistió pronto un carácter continental y se apoyó en la teoría del foco desarrollada en sus escritos por el Che Guevara: la guerra de guerrillas es necesaria para hacer la revolución; las condiciones para una revolución pueden ser creadas por la lucha armada; las zonas rurales son los mejores campos de batalla en los países subdesarrollados; la guerrilla comienza por la creación de un foco dirigido por los clases más revolucionarias, reclutadas entre los campesinos.

Los cubanos entrenaron en los años ´60 los futuros cuadros de las guerrillas continentales y no obtuvieron una ayuda logística y financiera de Moscú, partidario de la coexistencia pacífica con los Estados Unidos.

La organización de la conferencia tricontinental (diciembre de 1965-enero de 1966) y la creación de la Organización para la Liberación de América Latina (OLAS) constituyeron la expresión política más elevada de resistencia al imperialismo estadounidense.

Pero la asistencia de Estados Unidos a los ejércitos locales (a través de la Escuela de las Américas), la ausencia de ayuda de los partidos comunistas atados a la línea soviética que excluía la lucha armada y la inexistencia de un apoyo obrero y campesino organizado provocaron la debacle de las guerrillas. La muerte del Che en 1967 marcó el fin de una época. Las agrupaciones guerrilleras foquistas fueron desapareciendo

en el transcurso de la década siguiente.

Deberá esperarse una decena de años para un renovamiento revolucionario. La imposibilidad de obtener cambios políticos y sociales por la vía legal (el ejemplo chileno y la muerte de Salvador Allende son la mejor expresión) provocaron el pasaje de una generación de jóvenes idealistas a la guerrilla, en particular en América Central. La teoría del foco fue descartada en beneficio de un trabajo político militar de masas.

La guerrilla de Sendero Luminoso en **Perú**, de inspiración maoísta, surgió de una escisión del Partido Comunista. El movimiento se desarrolló sobre la base de una sorda revuelta amerindia, de la reforma agraria de 1969 y de los estudiantes campesinos que salían de la universidad con un diploma inutilizable en razón de la segregación racial y lingüística. La “guerra popular” supuso el encerramiento de las ciudades por el campo y pasó por tres etapas: una campaña de agitación y propaganda; una ofensiva generalizada contra el Estado y su poder militar; una guerra total sobre las ciudades asediadas. Dotada de una organización vertical, la guerrilla renegó de todas las formas posibles de unidad con las organizaciones de masas y con las fuerzas políticas nacionales.

Utilizando los mismos métodos, intimidación, chantaje y asesinatos que los miembros de los cuerpos especiales de represión, los Sinchis, lanzados contra ellos, los guerrilleros practicaron la política de tierra arrasada. La población civil fue la prenda de esta guerra, presa entre la violencia terrorista de la guerrilla y la violencia contra terrorista del Estado.

En 1992 un duro golpe fue asestado a la guerrilla –basada en el culto de la personalidad– por el arresto de su jefe y fundador Abigael Guzmán y de otros dirigentes. Un brazo disidente hizo su aparición en las zonas de productores de coca, Sendero Rojo.

La avenencia de Guzmán llamando desde su prisión a la apertura de “conversaciones para la paz” apaciguó el movimiento. Aunque duramente golpeado, es cierto que no ha desaparecido totalmente.

Totalmente de otra naturaleza, apareció otra segunda guerrilla: el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Fusión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Socialista Marxista Leninista propone un socialismo autogestionario, solidario y democrático. Sus métodos son más cercanos a la guerrilla clásica de América Central en los años 80. El MRTA mantuvo excelentes relaciones con el Ejército de Liberación Nacional colombiano. Una espectacular operación (diciembre de 1996-abril de 1997) en la residencia del embajador de Japón en Lima, los hizo conocidos en el mundo. La operación terminó con la muerte de 14 guerrilleros. La mayoría de los dirigentes del MRTA fueron encarcelados en condiciones inhumanas.

En **Nicaragua** el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) apareció en 1961, en plena dictadura de Somoza. Retoma la tradición de César Augusto Sandino, líder de la guerrilla entre 1927 y 1934, quien luchó y finalmente expulsó a los marines americanos del país. Fue asesinado en 1936 por la Guardia Nacional, formada por los Estados Unidos y comandada por el primero de los Somoza. Ayudados por Cuba, pero también por Venezuela, Costa Rica y Panamá e impulsados por una insurrección popular, los sandinistas derrocaron a la dictadura en 1979. La designación de Daniel Ortega como presidente de la república marcó la elección de una política moderada. Pero Estados Unidos comenzó una guerra de agresión, financiando, sosteniendo logísticamente y armando a los contras. Después de la elección de 1990, apareció la “nueva clase”, formada por ciertos dirigentes sandinistas, tentados de defender sus intereses en las estructuras de producción, con una lógica de “privatización” y pretextando defender las conquistas de la revolución. Esto se manifestó evidentemente imposible y permitió a los gobernantes sucesivos, Chamorro y Aleman, sostener políticas neoliberales que desangraron a la población.

En **El Salvador** las luchas populares se desarrollaron a fines de los 70 sobre el trasfondo de los fraudes electorales: cada grupo de oposición armada estableció relaciones con las organizaciones populares que se radicalizaban de cara al cierre de todo espacio político.

Así se formó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), nombre del fundador del Partido Comunista salvadoreño, asesinado en las masacres organizadas por el poder contra la insurrección campesina de 1932. En el seno del FMLN cada organización conservó su identidad, sus propias estructuras y su zona de intervención. Sostenidos por los sandinistas de Nicaragua, pero contando sobretodo con sus propias fuerzas, el FMLN se convirtió progresivamente en un verdadero ejército revolucionario. A pesar de la ayuda masiva de los Estados Unidos, el ejército salvadoreño estaba en jaque.

En 1992 se realizan las conversaciones de paz. Con un programa social demócrata radical, el Frente se constituyó en la primera fuerza política del país y llegó a la cabeza de las elecciones legislativas realizadas en marzo de 2000. El alcalde de la capital, San Salvador, es miembro de una coalición en la que el FMLN constituye el corazón.

En **Chile**, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lucha por una “justicia popular” tratando de que la impunidad no beneficie al general Pinochet, se dividió en dos: una facción pro comunista depuso las armas y se transformó en movimiento político (el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) y una facción autónoma

continúa con la lucha armada.

En **Uruguay**, en 1985, la salida de los militares, el retorno de la democracia y la amnistía de su dirigente histórico, condenado a 45 años de prisión, impulsó al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, a convertirse en una fuerza política legal.

País de mayoría indígena, **Guatemala** fue el teatro de conflicto civil más largo y violento del continente: 36 años, 150 mil muertos, 50 mil desaparecidos. El golpe de Estado de 1954 contra el presidente democrático Jacobo Arbenz marcó el comienzo de este proceso. Intentando una reforma agraria, Arbenz expropió las tierras de la compañía bananera americana United Fruit. Bajo la cobertura de la lucha contra el comunismo (Fidel Castro todavía no estaba en el poder en Cuba), la CIA armó, financió y entrenó un ejército mercenario que lo derrocaría. Guatemala fue utilizada por la CIA para la preparación de la invasión de Cuba (episodio de Bahía de Cochinos, en 1961) donde Castro había derrocado la dictadura de Batista.

Influenciada por la revolución cubana, la guerrilla guatemalteca inició sus combates en los años 60, compuesta esencialmente por una pequeña burguesía intelectual que se consideraba como una "vanguardia". Rápidamente el ejército guatemalteco fue entrenado por Estados Unidos. La represión fue feroz (8 mil muertos entre 1966 y 1968, 20.000 entre 1970 y 1978), tanto contra los grupos armados como contra la oposición civil. En los años 80 mientras los sandinistas tomaban el poder en Nicaragua y toda América Central entraba en ebullición, la ofensiva revolucionaria se relanzó mediante la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que involucró a los indígenas en los combates. Dirigida por las dictaduras militares sucesivas, una represión de características genocidas se desató contra la población. La ola de terror se mantuvo hasta el retorno de la democracia en 1985, cuyo objetivo era aislar a la guerrilla.

En 1992, el premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, indígena maya quiché que denunció las violaciones a los derechos humanos en su país, reforzó el peso de la sociedad civil y, frente a la comunidad internacional, puso al poder en dificultades. Las negociaciones con la guerrilla (disminuida pero todavía activa) se aceleraron. El 29 de diciembre de 1996 un acuerdo de paz puso fin al conflicto.

Guerrillas mejicanas

El 1 de enero de 1994, día de entrada en vigor del acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), centenares de rebeldes indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocuparon las principales ciudades del sureño Estado de Chiapas. En ese estado feudal, uno de los más pobres de Méjico, donde jamás llegó la reforma agraria, los sucesivos gobernantes nunca respondieron las demandas de la población más que mediante la represión.

Los fuertes movimientos sociales hicieron su aparición en Chiapas en los años '70, bajo el impulso por una parte de los grupos maoístas y por otra parte de la Iglesia católica (a través de Monseñor Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas).

Embrionario en 1984, el EZLN devino, con el transcurso de los años, en una organización con un fuerte sostén en el seno de la población indígena chiapaneca. El "pasaje a la guerra" fue decidido en 1992, cuando el gobierno decidió revisar el artículo 27 de la Constitución, permitiendo la privatización de las tierras comunitarias poniendo en discusión el viejo sistema del égido, la comunidad agraria baluarte de la revolución mejicana.

Dirigidos por el subcomandante Marcos (políticamente subordinado al Comando Clandestino Revolucionario Indígena – CCRI) los zapatistas no intentaban tomar el poder, bajo dominio del PRI que gobernaba sin interrupción desde 1946.

La primera declaración de la Selva Lacandona titulada "Ya Basta" otorgó estilo y sentido al movimiento. Se rodeó de una fuerte simpatía nacional e internacional. Tras dos días de combate con 400 muertos (esencialmente entre los insurgentes) el presidente Salinas de Gortari ordenó el cese del fuego. Intentando aglutinar un amplio espectro de organizaciones, incluidos los partidos políticos, el EZLN convocó en agosto de 1994 a la sociedad civil para un diálogo nacional con vistas a una transición pacífica hacia la democracia: la resolución final reclama una nueva constitución, el derecho a la autodeterminación para las poblaciones indígenas y un gobierno de transición.

Aunque algunos días después las elecciones presidenciales fueron declaradas limpias por los observadores, el escrutinio en Chiapas para la elección del nuevo gobernador estuvo marcado por el fraude. El EZLN ocupó 38 municipios anunciando la formación de "municipalidades libres rebeldes" donde se aplicarían las "leyes revolucionarias zapatistas". El ejército federal recuperó poco a poco las aldeas ocupadas. Gracias a la intervención de la Comisión Nacional de Mediación, presidida por Monseñor Samuel Ruiz, se logró un acuerdo en 1995: las tropas federales se retirarían y el EZLN anunció un cese del fuego.

A pesar de todo, la política de intimidación y de represión continuó.

El 16 de febrero de 1996, los zapatistas y los representantes del gobierno firmaron el acuerdo de San Andrés, redactados con la participación de expertos nacionales e internacionales en cuestiones indígenas.

El proyecto de ley de modificación constitucional fue propuesto el 29 de noviembre por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fue rechazado por el presidente Zedillo, que con el argumento de la soberanía nacional y el riesgo de balcanización rechazó la autonomía indígena. Las negociaciones fueron rotas.

Más que por una solución militar con alto costo político, el poder espera la erosión progresiva de la movilización zapatista y alterna programas de asistencia con programas de contra insurrección.

Militarización, violencia y proliferación de grupos paramilitares suponen un desplazamiento masivo de la población con la complicidad masiva de las autoridades y el ejército. Varios centenares de personas han pagado el precio de esta guerra de baja intensidad que intenta cerrar el proceso de organización social conducido por los indígenas.

Derrotado en las elecciones de julio de 2000, el PRI se retiró del poder sin poder aplastar militarmente el movimiento. El nuevo presidente Vicente Fox ha demostrado serias intenciones de resolver pacífica-mente el conflicto zapatista.

La guerrilla colombiana

La guerrilla colombiana es resultado de un proceso histórico de resistencia campesina, ligada a la expansión colonizadora de terratenientes y empresarios a partir de los años 50. Sigue siendo, a pesar de la urbanización, fundamentalmente rural. Allí se encuentra su debilidad y su fuerza al mismo tiempo, puesto que tiene unos presupuestos ideológicos muy ligados a su origen agrario y a las reivindicaciones históricas de colonos y campesinos (y ahora de los raspachines¹). Las FARC tienen limitaciones para adquirir influencia y presencia política en los grandes centros urbanos y ligarse a las luchas económicas y políticas de los sectores sindicales y de clase media.

Desde el punto de vista militar, las FARC han adquirido importancia con la ampliación de sus frentes por diversos lugares del país, pero esa expansión geográfica no se ha visto complementada con un reforzamiento ideológico y político que posibilite la construcción de un proyecto alternativo de izquierda, con un nuevo discurso anticapitalista en estos tiempos de globalización y neoliberalismo. Hasta ahora las medidas y las proposiciones han sido puramente defensivas, sin que se constituyan en una propuesta global y coherente, en la que se articulen las reivindicaciones de los sectores sociales con las del movimiento insurgente. Este último tampoco ha tenido la capacidad de generar un movimiento que vaya más allá de sus propios intereses inmediatos.

La popularidad de las FARC en los territorios liberados se acrecentó en los últimos meses, pero no por el proceso de negociaciones, sino por el conjunto de leyes que sancionaron².

La más importantes de estas leyes es la 001 de "Reestructuración de la agricultura" en la que se dispone:

1. entrega de tierras gratuitas a los campesinos
2. confiscación de tierras a los latifundistas
3. anulación de las deudas de los campesinos con el Estado
4. créditos y asistencia para compra de semillas y herramientas
5. control de precios sobre los artículos de la canasta familiar
6. respeto a las tierras pertenecientes a los indígenas
7. confiscación de bienes a empresas multinacionales

La ley 002 establece el cobro de impuestos revolucionarios del 10% a cambio de no ser secuestrados a todos aquellos que tengan más de un millón de dólares.

La ley 003 o "sobre la corrupción administrativa" establece que quien se apropie de bienes o dineros públicos, deberá reintegrarlos y pagar una multa acorde a la gravedad del delito que puede llegar incluso a la expropiación de bienes. Lo mismo para quienes desde el sector privado otorguen coimas o sobornos.

Hay un abismo entre la ley 001 sancionada en los territorios liberados y las ilusiones que las FARC siembran en las negociaciones y en la posibilidad de avanzar hacia el socialismo por la vía pacífica y dentro de los marcos del régimen capitalista.

En realidad los pasos prácticos que están dando las FARC en los territorios liberados chocan incluso con sus propias ilusiones de un gobierno pluralista al estilo sueco donde tengan participación hasta los grandes grupos económicos. Esa contradicción no obedece a una maniobra táctica sino a una radicalización empírica, producto de una dinámica que los está llevando más lejos de lo que quieren.

Las conversaciones con las FARC

Las FARC habían rehusado negociar con el gobierno de Samper alegando que éste era «ilegítimo». Pero para 1998 la elección de un nuevo presidente, el diálogo con el ELN en Maguncia y la posibilidad de un

encuentro entre Pastrana y el líder de las FARC, Manuel Marulanda, suscitaron esperanzas sobre el inicio de un auténtico proceso de paz.

Desde su arribo en 1998, Pastrana decidió negociar con la guerrilla más importante y encontrarse con su jefe, Manuel Marulanda Vélez. A pesar de las duras críticas del ministerio de Defensa, los generales y los Estados Unidos, el presidente reconoció implícitamente que los revolucionarios tomaron las armas por una justa causa.

El 10 de julio de 1998 se realizó el primer encuentro entre la cúpula de las FARC y Andrés Pastrana. Este manifestó que cumpliría con su promesa electoral de retirar las Fuerzas Armadas de cinco municipios al Sur del país, con miras a crear un espacio desmilitarizado para desarrollar las conversaciones con las FARC. Las negociaciones directas deberían iniciarse en un plazo de 90 días después de su investidura.

Sin embargo, Pastrana se cuidó de no suscitar falsas esperanzas y recalcó que no podía garantizar la paz antes del final de su gobierno. Las perspectivas de pacificación no eran, aun a mediano plazo, brillantes. El Ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, calculó que la plena pacificación podría tardar entre cinco y diez años tras el inicio de las negociaciones.

Por otra parte, las FARC han mostrado una actitud confusa. El 24 de junio, tan sólo dos semanas antes de la reunión entre Andrés Pastrana y Manuel Marulanda, otros líderes del movimiento advirtieron sobre las escasas posibilidades de iniciar conversaciones inminentes de paz y sugirieron que Pastrana carecía de un plan serio para superar el conflicto. Según el comandante de las FARC Iván Ríos, “no existe un plan serio de paz. Pastrana no tiene ningún programa y, aun si lo tuviera, necesitaría el pleno respaldo de las instituciones del Estado”. Hay que tener en cuenta que los grupos guerrilleros no son organizaciones del todo monolíticas. Las FARC combaten probablemente en más de 60 frentes, y es posible que sus líderes no hablen en nombre de todos los miembros al decidir dialogar con el Gobierno.

Algunos comentaristas sostienen que el aparente deseo de las FARC de negociar con el gobierno es sólo una maniobra táctica que difícilmente podría llevar a una pacificación duradera. El movimiento ha reforzado recientemente su capacidad militar, aunque quizás ha perdido fuerza política. Incluso la izquierda civil ha cedido terreno, tal como demuestra la escasa votación a favor de los partidos de izquierda en los comicios presidenciales de junio de 1998 y la pérdida de la personería política del M19 y del Partido Comunista.

Según algunas opiniones, las FARC podrían utilizar las negociaciones con el Gobierno para acrecentar su perfil político, aunque sin hacer concesiones significativas tendentes a la solución del conflicto.

Un problema crítico parece ser que la guerrilla carece de un aliciente poderoso para embarcarse en una negociación seria. En efecto, las FARC afrontan escasos riesgos de derrota militar, gozan de apoyo rural y obtienen jugosos ingresos de las actividades que desarrollan para financiar la guerra, circunstancias que probablemente no variarán a corto plazo. Por otra parte, las FARC han dado a conocer sus cuatro “condiciones mínimas” para entablar un diálogo sustantivo:

1. desmilitarización de los cinco municipios donde se concentra su base de poder
2. desmantelamiento de los grupos paramilitares
3. descriminalización de la protesta social
4. revocación de la recompensa ofrecida por la captura de líderes rebeldes.

Como es ampliamente conocido Pastrana accedió a la primera demanda, desmilitarizando cinco municipios (San Vicente del Caguán, La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas y Uribe), una zona de 42.000 km² y 100 mil habitantes.

La supuesta resistencia de diversos sectores de las FFAA a retirar el Ejército de porciones tan extensas del territorio no se cumplió. La presencia de la imponente base militar de Tres Esquinas (Putumayo) y la de Larandia (cerca de la zona de distensión) tranquilizaron a los militares. Otras condiciones de las FARC parecen difíciles de cumplir. Así, no es seguro que el Gobierno tenga el poder suficiente para desmantelar todas las organizaciones paramilitares, las cuales no se desintegrarían probablemente en un contexto de continua violencia subversiva. Si los grupos oficialmente promovidos³ son declarados ilegales, algunos de ellos simplemente actuarán en la ilegalidad. Carlos Castaño, ex líder de las AUC, ha recordado que, si bien los paramilitares no ven ningún inconveniente en las conversaciones bilaterales entre el gobierno y la guerrilla, todo acuerdo final habrá de pasar por conversaciones trilaterales que incluyan a las AUC, eventualidad que fue descartada por el ELN en el transcurso de las conversaciones de Maguncia (Mainz).

Varios episodios y continuas rupturas del diálogo se sucedieron a lo largo de 2000. Finalmente, el 29 de septiembre, Raúl Reyes, segundo comandante de las FARC, dijo en Quito (donde estuvo clandestinamente durante 4 días) que “en las actuales condiciones todo hace prever que el presidente de Colombia dejará de ser un interlocutor válido en las conversaciones”. Reyes explicó a los intelectuales “en detalle” la situación actual del conflicto interno colombiano y el desarrollo del Plan Colombia, con el inicio de las fumigaciones en los departamentos de Putumayo y Nariño. “Las conversaciones de paz están a punto de romperse por la aplicación del Plan Colombia y la escalada de los combates con el ejército y la policía de su país”, señaló El Comercio de Quito⁴. Las conversaciones se interrumpieron el 14 de noviembre.

Las conversaciones con el ELN

El gobierno de Samper y el ELN habían firmado en Madrid un acuerdo preliminar secreto para definir el marco de las negociaciones de paz. El acuerdo parecía promisorio, ya que por primera vez el ELN mostraba un interés real en un acuerdo. Debido a una fuga de información, un diario español develó la firma del pacto el 24 de marzo de 1998. En protesta, el ELN suspendió el proceso, denunciando la utilización del acuerdo secreto con fines electorales. Ya bajo la presidencia de Pastrana comenzaron nuevas negociaciones de paz en Alemania. En caso de que continúe el proceso iniciado en Maguncia el 12 de julio de 1999, podría incluir posteriormente a las FARC, aunque será probablemente difícil, largo y complejo.

Dos de las condiciones iniciales formuladas por el ELN en el acuerdo de Madrid con Samper podrían ser igualmente difíciles de cumplir:

- ❑ Financiación de la desmovilización. La jefatura del ELN calcula que la desmovilización costará 200 millones de dólares anuales, suma en la que cifra el coste actual de operación del movimiento.
- ❑ Autonomía financiera. Ante la posibilidad real de una venganza contra los guerrilleros desmovilizados por parte de escuadrones de extrema derecha –tal como ilustran las experiencias de UP y del EPL-, el movimiento ha expresado su deseo de independencia financiera durante un año de transición.

Además, según indicó el líder del ELN Pablo Beltrán, el grupo desea conservar su poder regional, aun si se firma un acuerdo de paz. El 15 de julio, en Alemania, Beltrán opinó que el proceso de negociación no culminará en la desmovilización o el desarme, sino que se dará una situación en la que cada parte seguirá ejerciendo la autoridad en su zona de influencia y en la que los subversivos conservarán sus armas como garantía. Cuatro días más tarde, otra figura principal del ELN, Milton Hernández, sostuvo que el movimiento mantiene viva su aspiración a una sociedad socialista, sigue siendo una organización “político-militar” y nunca entregará las armas.

No está claro de qué modo el Gobierno colombiano podría mantener indefinidamente enclaves oficialmente sancionados y autorregidos por la guerrilla, aun cuando cabe prever cierta forma de autoridad compartida, al menos a nivel local.

El 24 de abril de 2000 Pastrana anunció el establecimiento de otro enclave “sin presencia militar” en el Sur Bolívar, a fin de entablar un diálogo con el ELN. Esta eventualidad encontró un fuerte rechazo de parte de la población, que se encuentra bajo fuerte presión de los paramilitares.

Si se lleva a ejecución, el acuerdo alcanzado con el ELN podría marcar el inicio de un proceso de pacificación. El pacto propone celebrar el día de 12 de octubre una «convención nacional» con participación de la sociedad civil, el ELN, el Gobierno y las FARC. La convención redactaría un acuerdo político encaminado a la «transformación de las estructuras sociales y políticas» y podría dar lugar a una nueva asamblea constituyente encargada de reformar la Constitución⁵. Como parte del esfuerzo por “humanizar el conflicto”, el ELN aceptó igualmente:

- ❑ renunciar al uso de minas antipersonas que suponen peligro para la población civil; garantizar la protección de escuelas y hospitales;
- ❑ cesar los ataques contra oleoductos durante la celebración de la convención nacional; renunciar al secuestro como medio de obtener ingresos (siempre que tenga acceso a otras vías de financiación) y a la retención de ancianos, niños y mujeres embarazadas.

En julio de 2000 se reanudaron las conversaciones con el ELN. Las reuniones se realizaron en la ciudad de Ginebra, Suiza⁶. En señal de buena voluntad el gobierno dio un salvoconducto a dos guerrilleros del ELN, Francisco Galán y Felipe Torres.

Camilo Gómez, Alto Comisionado para la Paz designado por el presidente Pastrana y Antonio García, segundo comandante del ELN, dirigieron las negociaciones. La guerrilla del ELN prometió agilizar la liberación de todos los rehenes que permanecen en su poder⁷.

Esta promesa es el primer resultado del acuerdo alcanzado en la madrugada del 26 de julio entre el gobierno colombiano y el ELN, la segunda guerrilla del país.

El gobierno y el ELN sellaron en Ginebra el reinicio de las negociaciones entre ambas partes, que estaban rotas desde hace varios meses. El documento fue suscripto por Camilo Gómez, Alto Comisionado para la Paz del gobierno y Antonio García, jefe militar del ELN y refrendado por los representantes de los países que apoyan el proceso de paz: Suiza, España, Noruega, Cuba y Francia.

El futuro de los diálogos de paz

Pero todas estas esperanzas nacidas de las negociaciones corren riesgo de morir con la puesta en marcha del Plan Colombia. La Convención Nacional prevista para el 12 de octubre no se realizó, las FARC se retiraron innumerables veces de las mesas de negociación, la guerra recrudeció, las Fuerzas Armadas

están siendo entrenadas y equipadas aceleradamente y los paramilitares están más cerca que antes de entrar en las rondas de diálogo con el gobierno.

En este contexto no hay que hacerse muchas ilusiones sobre las conversaciones de paz:

1. El crecimiento militar de las FARC, que obligó al Estado a iniciar las conversaciones, no es bien visto por el ejército colombiano y Estados Unidos.
2. Este crecimiento militar es deliberadamente exagerado para poder justificar una modernización del ejército.
3. La lógica paramilitar de la política contrainsurgente del Estado preocupa a la guerrilla, puesto que pone en peligro a toda la población que vive en las zonas de influencia guerrillera, impidiendo la futura construcción de un movimiento legal de masas.
4. La guerra se ha incrementado mientras se habla de paz porque el objetivo, tanto del ejército como de la guerrilla, es alcanzar más fortaleza para negociar en mejores condiciones en la mesa de diálogo. Desde enero de 1999 los paramilitares han efectuado 500 masacres.
5. Como el gobierno ha privilegiado el diálogo con las FARC y no con los otros grupos guerrilleros (ELN, EPL) éstos han comenzado a desplegar estrategias desesperadas para lograr un reconocimiento político de modo que el gobierno se decida a dialogar con ellos en términos de mejor paridad.

Otros procesos actúan en sentido contrario a los anteriores:

1. Las FARC no fueron muy explícitas en relacionar al neoliberalismo con el diálogo, produciendo una escisión entre los sectores sociales que se movilizan contra las medidas económicas y el movimiento armado. Esto debilita la perspectiva estratégica de la guerrilla y contrabalancea las tendencias.
2. Tradicionalmente la escasa coordinación entre los distintos grupos insurgentes ha mermado su potencial para amenazar directamente el orden constitucional. En octubre de 1987 se creó la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) para coordinar la lucha armada y todo eventual pacto con el gobierno. Pero tuvo un éxito limitado y no logró constituir un frente amplio tras la desmovilización del M19, del EPL y de otras agrupaciones menores a principios de los '90.

Pero el principal elemento que erosiona las posibilidades de éxito de las negociaciones de paz es el propio Plan Colombia que militariza las relaciones políticas y obliga a la guerrilla a internarse claramente en un escenario de guerra, solucionando empíricamente las contradicciones que se visualizan en su programa. Las poblaciones campesinas han ingresado en masa a las filas de las FARC tras el anuncio del Plan Colombia, militarizando aún más la vida rural.

Los combates en 2000

Las deficiencias de los servicios de inteligencia militar exponen al Ejército a emboscadas, tal como ocurrió el 28 de febrero de 1998. Ese día, el ejército sufrió su peor derrota frente a la insurgencia en varias décadas, cuando las FARC atacaron a un batallón en el departamento selvático de Caquetá. Después de tres días de combates, los rebeldes dieron muerte a más de 60 soldados y capturaron a otros 40, además de hacerse con abundantes armas y municiones del Ejército. La propia investigación castrense del incidente identificó fallos militares en materia de táctica, equipamiento y obtención de informaciones. Algunos analistas opinan que las FFAA deben modificar sus estrategias y tácticas en momentos en que las FARC pasan de la guerra de guerrillas a un conflicto posicional.

Sólo para ver la magnitud de la guerra repasemos los principales combates entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas en 2000:

Cundinamarca y Tolima

El ejército y la policía de Colombia quedaron en alerta máxima en los departamentos de Cundinamarca —del que Bogotá es la capital— y Tolima, tras la sangrienta incursión de los rebeldes de las FARC el viernes 14 de julio de 2000 en un poblado campesino, donde murieron al menos 18 personas⁸.

Unos 180 insurgentes de los frentes 21 y 50 de las FARC atacaron la localidad tolimense de **Roncesvalles**, matando a balazos a trece policías y destruyendo con explosivos el cuartel, varias viviendas, la sede de un banco y oficinas gubernamentales. Los policías fueron ejecutados después de que se les agotaron las municiones.

La ley que regula la ayuda militar dice que los batallones antinarcóticos entrenados por Estados Unidos sólo pueden luchar contra la guerrilla en las áreas donde protegen los cultivos de coca. Pero esa condición ha sido trasgredida, según lo dice Robin Kirk, de Human Right Watch: "Hace dos semanas las FARC atacaron un pueblo llamado Rocas Vals (Roncesvalles) que se encuentra en el centro de Colombia y mataron a 12 policías. La embajada pidió permiso para utilizar los equipos especiales y por razones humanitarias le fue concedido"⁹.

El 12 de julio comenzó la ofensiva guerrillera en respuesta al Plan Colombia y alcanzó en dos días, 43 muertos entre policías, rebeldes y civiles.

Urabá

Fuertes combates se registraron en el norte y el noroeste de Colombia entre las guerrillas de las FARC y el ELN con los paramilitares de extrema derecha, que según fuentes eclesiásticas y lugareños ya habrían provocado al menos 112 muertos¹⁰.

El gobierno y la jefatura castrense admitieron que se registraron combates en los poblados de Ituango y San Pablo. Según el párroco de Ituango, Oscar Palacio, los enfrentamientos que se libraron en la aldea Santa Rita entre las FARC y los paramilitares dejaron un saldo de 34 muertos. Estos combates que se iniciaron el miércoles 19 de julio y se prolongaron 48 horas, ocurrieron como resultado de un ataque lanzado por tres columnas de las FARC contra un campamento de las AUC.

“La guerrilla ha logrado tomar el dominio de la zona, básicamente del corregimiento Santa Rita, donde había presencia de grupos de autodefensa”, dijo el alcalde de Ituango, Jaime Montoya.

Versiones de prensa indicaron que la incursión de las FARC en Ituango forma parte de un plan del grupo rebelde para recuperar el control de la zona bananera de Urabá (fronteriza con Panamá), que según las autoridades es un corredor estratégico para el trasiego de armas y drogas desde y hacia Centroamérica.

Campesinos que llegaron al centro urbano San Pablo (650 km. al norte de Bogotá) huyendo de los combates entre el ELN y las AUC, dijeron a la policía que en esos choques han muerto al menos 60 rebeldes y 18 paramilitares.

Cauca y Valle del Cauca

Los guerrilleros del ELN se enfrentaron contra sus pares de las FARC por el control de la estratégica región occidental de su país y dejaron más de un centenar de muertos¹¹.

Un número impreciso de rebeldes de las FARC y el ELN libraron duros combates las últimas semanas de octubre en las montañas de los estados occidentales de Cauca y Valle del Cauca, pero ambas guerrillas negociaron un acuerdo.

Risaralda

Tres frentes de las FARC y el ejército dejaron el sábado 2 de septiembre un saldo de 65 muertos, entre rebeldes y soldados, y un avión militar estrellado con sus 7 tripulantes muertos, en el oeste del país¹².

En la refriega murió un teniente coronel del ejército colombiano. La situación se vivió en Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Pastrana sobrevoló la región con su ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez y los comandantes de las fuerzas militares Fernando Tapias y del Ejército, Jorge Mora.

El ministro de Defensa anunciaba desde Pereira que habían muerto 50 miembros de las FARC y 15 soldados.

Andrés París, de las FARC, dijo que los aviones del ejército bombardearon a sus propias tropas por lo que las bajas de soldados puede ser mayor a la oficial.

Las FARC también incursionaron en la población de Caloto en el departamento de Cauca, donde liberaron a 64 presos.

Ante los enfrentamientos en el oeste colombiano, el ejército envió a la zona de guerra a 2000 soldados de sus tropas de elite¹³. En Risaralda, donde habían muerto 65 personas se agregaron el domingo 3 siete policías y un guerrillero. Un vocero de las FARC dijo que la ofensiva continuaría hasta que el gobierno desistiera de poner en práctica el Plan Colombia.

A pesar de esto el gobierno y las FARC acordaron iniciar la discusión de una tregua el viernes 22 de septiembre. Es común negociar la paz por un lado y seguir con la ofensiva por el otro. Es un modo en que las FARC intentan negociar en mejores condiciones.

El grupo rebelde desató desde fines de agosto una ofensiva que incluyó ataques en 24 de las 32 provincias del país en protesta contra el Plan Colombia.

Nariño

El 4 de septiembre el ELN dinamitó un tramo del oleoducto Trasandino que transporta crudo colombiano y ecuatoriano hacia el Pacífico. El petróleo quedó ardiendo en la provincia de Nariño sin que pudiera ser apagado¹⁴.

Antioquía

Por lo menos 19 soldados murieron y 11 fueron heridos el 17 de septiembre en duros combates entre el Ejército y las FARC al noroeste del país. Los enfrentamientos se concentran en los alrededores del poblado de Dabeiba, unos 150 kms. al sudoeste de la frontera con Panamá. Las tropas oficiales cuentan con apoyo aéreo de helicópteros Black Hawk y un avión de reconocimiento AC-47¹⁵.

En la zona de los combates hay mal tiempo y las comunicaciones con los soldados son difíciles. También se habría perdido contacto con otros 44 soldados. “Logramos evitar los ataques en la región bananera de Urabá, pero desafortunadamente en estas acciones hemos perdido a 19 de nuestros hombres”, dijo el comandante del Ejército, general Néstor Ramírez.

El comandante aseguró que los combates fueron parte de una ofensiva del ejército desplegada tras conocerse informaciones sobre un plan insurgente para tomar Dabeiba, Mutatá y otros poblados del departamento de Antioquía.

Los enfrentamientos se sucedieron todo el día en las regiones de Dabeiba, Lebrija y Cajamarca. En Sumapaz también se registraron combates dos semanas después de que una columna de las FARC atacó una base militar; murieron 72 insurgentes y 15 militares.

En Lebrija murieron 5 guerrilleros y dos fallecieron en Cajamarca. La ofensiva militar comenzó el 13 de septiembre para evitar el avance del bloque noroccidental de las FARC sobre los poblados de la región de Urabá, noroeste de Colombia. Pero los combates en Dabeiba comenzaron el 17.

En los 9 primeros meses del año, el ejército colombiano perdió en combate a 97 hombres, y la guerrilla a 498.

Cali

También el 17 de septiembre el ELN secuestró a por lo menos 60 personas que comían en un restaurante de una exclusiva zona turística cerca de Cali¹⁶. Los insurgentes tomaron a todos los comensales de un restaurante de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, donde se concentran lujosos centros de vacaciones. Estos incidentes llevaron a que el Partido Conservador propusiera una consulta popular para decidir si el gobierno debería seguir o no llevando adelante conversaciones de paz con la guerrilla hasta que no se acuerde un alto el fuego¹⁷.

El ejército rescató el 20 de septiembre a 12 de las personas secuestradas por el ELN. El rescate se produjo tras un enfrentamiento con el ELN que dejó 2 soldados y siete guerrilleros muertos. Los combates sucedieron en las inmediaciones de Cali donde habían sido llevados los secuestrados. Una veintena de rehenes ya había sido liberada, pero el total de rehenes quedaría liberado el 1º de noviembre tras una agresiva presión del Ejército y una negociación con el gobierno, que produjo una crisis con las Fuerzas Armadas.

Cundinamarca

El 20 de septiembre el ejército descubrió una ruta construida por las FARC entre la zona neutral destinada al proceso de paz y un sector cercano a Bogotá. Comunica San Vicente del Caguán, en la zona de distensión, con el departamento de Cundinamarca, 90 kms. al sur de Bogotá¹⁸.

La ruta fue hallada luego de los combates registrados en los últimos días en Cundinamarca. Las tropas incautaron varios tractores y equipos. Los combates dejaron 14 guerrilleros muertos y dos campamentos destruidos. La obra estaba a cargo del guerrillero Mono Jojoy, utilizando mano de obra esclava e ingenieros rusos, se habrían destruido 200 kms. de selva en una zona de gran riqueza natural. La ruta tenía concluidos 96 kms. de su recorrido.

Barrero, comandante de la Brigada 13 del Ejército, dijo que por la ruta se transportaba desde personas secuestradas, armas y cocaína hasta víveres. Todo era llevado a la zona desmilitarizada del sur del país, en plena selva, donde el gobierno y las FARC llevan adelante conversaciones de paz.

Sumapaz

Más de 4 mil militares capacitados para operaciones de alta montaña, con el apoyo de helicópteros artillados, tanques cascabel y artillería pesada, realizan desde principios de septiembre la Operación Aniquilador II, quizás el movimiento de tropas más estratégico de los últimos años¹⁹.

El objetivo es recuperar 16 mil kms. cuadrados de la región del Sumapaz, un bastión tradicional de las FARC, situado a escasas dos horas de Bogotá, y una zona en la que la guerrilla más vieja del país ha ejercido su hegemonía desde que nació hace 35 años. La región es una punta de lanza hacia Bogotá, la salida a la vía al Llano (ruta abastecedora de alimentos para el interior) y un corredor que comunica a más de diez municipios cercanos a Bogotá.

En la mañana del último 23 de septiembre y tras 18 días de operaciones, el general Arcesio Barrero le comunicó al oficial al mando de la estrategia que el área estaba consolidada. Esto significa que después de 35 años las FARC han perdido el dominio de esta zona, lo cual implica un revés para su plan estratégico. No sólo perdió el corredor entre Bogotá y la zona de distensión. También perdió un centro para albergar secuestrados, una central de comunicaciones y un lugar para el acopio de víveres y armas, que proveían a los cinco frentes guerrilleros.

Putumayo²⁰

El gobierno colombiano anunció el 10 de octubre que enviaría refuerzos militares al sureño y selvático departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador para retomar el control de una vasta zona cercada por las FARC, que desde el mes pasado es escenario de combates entre guerrilleros y paramilitares.

El gobernador de Putumayo, Jorge Devia, dijo que el departamento estaba aislado por completo del resto del país. Desde el 21 de septiembre sus fronteras están bloqueadas por combates que, además, ocasionaron el agotamiento de las existencias de alimentos, medicinas y combustibles.

Los enfrentamientos comenzaron en la población de La Dorada, próxima a la frontera con Ecuador, cuando un frente de las AUC llegó para encarar a la guerrilla de las FARC. Unas 15 personas murieron en los choques.

El bloqueo del departamento creció a raíz del “paro armado” de las FARC en la zona norte del Putumayo, que desde hace varios días mantiene totalmente paralizado el transporte de pasajeros y mercancías.

Chocó-Antioquía-Putumayo²¹

El 20 de octubre el gobierno de Pastrana ordenó un amplio operativo militar contra varios frentes de las FARC que operan al sur y al noroeste del país.

Los poblados afectados por los ataques fueron Dabeiba (Antioquía) y Bagadó (Chocó), sobre el Pacífico donde las FARC incursionaron. El tercer escenario es el Putumayo, al sur, donde las FARC mantienen combates con los paramilitares desde mediados de septiembre.

El ministro de Defensa, Luis Ramírez, rechazó la ofensiva de las FARC contra Dabeiba, donde murieron 52 militares. El ejército atacó desde los alrededores del poblado, dejando unos 200 guerrilleros de las FARC muertos. De ser cierta la cifra sería la más alta en las FARC en los últimos años. El ejército no dio pruebas de las 200 bajas rebeldes: “lo que pasa es que ellos esconden a sus muertos”, dijo el comandante de la fuerza aérea, general Héctor Velasco²².

La realidad parece ser bastante distinta: “Se trata del mayor desastre militar en la lucha contra la guerrilla desde el 3 de agosto de 1998, cuando las FARC atacaron simultáneamente las poblaciones de Uribe y Miraflores, en el suroeste del país, y dieron muerte a 48 soldados y 20 policías, y secuestraron a otros 129”²³.

La segunda acción se registró en Bagadó, Chocó, donde las FARC incursionaron el jueves 19 de octubre por la mañana. Se desconocía la suerte de los 17 policías que custodiaban el puesto debido al corte de las comunicaciones con el comando municipal de Bagadó, de 3200 habitantes y enclavado en la selva chocana, cerca de Antioquía.

El tercer escenario es el Putumayo. Allí la violencia está obligando a los campesinos a cruzar el río San Miguel rumbo a Ecuador. Huyen hacia la ciudad de Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

Como resultado de los combates en Putumayo se comenzaron a registrar las primeras víctimas ecuatorianas heridas. Entre ellas Germán Zúñiga, un chofer municipal que conducía a periodistas de un telenoticiario ecuatoriano cerca del lado colombiano.

Putumayo

El gobernador Jorge Devia dijo que la región ha sufrido quebrantos por 4.6 millones de dólares debido al bloqueo que desde hace fines de septiembre realizan las FARC. Grupos de estudiantes, campesinos e indígenas se declararon en huelga contra el paro armado y para presionar por la ayuda oficial²⁴.

Afirmó que la gobernación ha dejado de recibir giros por concepto de regalías en la explotación petrolera, a lo que deben sumarse las pérdidas de transportadores y comerciantes.

Las posibilidades guerrilleras

Las FARC ya dejaron en claro que no retrocederán ni dejarán que los cultivos de droga sean fumigados y su territorio sea recuperado por el ejército colombiano.

El estado colombiano tiene entonces dos opciones:

1. pueden eludir una confrontación con las guerrillas, que protegen muchos de las tierras y los laboratorios de drogas, dejando sin completar su misión.
2. pueden entrar en una guerra de gran escala en las selvas del Putumayo y derrotar a las guerrillas.

Esta segunda tarea es imposible porque el Putumayo es un territorio perfecto para la guerrilla, que une selva con montañas y donde se asientan unos 3 mil combatientes.

Mientras tanto, los analistas militares sostienen que una ventaja numérica de tres a uno es necesaria para un cambio en los acontecimientos.

Debido a la presión por los resultados, seguramente habrá una serie de operaciones con destrucción de laboratorios y fumigación de algunos campos. Pero con las guerrillas todavía presentes en la tierra, se

construirán nuevos laboratorios y serán desmalezados nuevos sectores selváticos para cultivo de drogas. Por lo tanto los analistas predicen que en dos años la situación volvería a ser la misma. No disminuirá el abastecimiento de droga a Estados Unidos, las guerrillas no podrán ser derrotadas y la guerra civil de 36 años continuará²⁵.

Algunos ven al Plan Colombia como fundamentalmente frágil:

1. Putumayo es el asiento principal de las FARC donde se asienta su Bloque Sur con 3.000 combatientes. El terreno donde habitan es mayormente selvático y encaja perfectamente con las necesidades de la guerrilla. "Estamos listos para los imperialistas gringos. Convertiremos esto en un nuevo Vietnam para ellos", así lo dijo el Comandante Cristian.
2. La erradicación aérea de cultivos no dañará a las finanzas de las FARC ya que nuevos sectores selváticos pueden ser abiertos en pocas semanas. Los más vulnerables son los campesinos cultivadores. "Muchos paisanos están envueltos en los cultivos de coca no por amor al dinero o por el deseo de convertirse en millonarios o convertirse en vendedores de droga, sino para sobrevivir y mantener a sus hijos".

En Putumayo, Germán Martínez, oficial de gobierno, cree que el Plan Colombia revela una floja comprensión del comercio de las drogas, que es una interacción entre tres elementos: producción, tráfico y consumo.

"El Plan Colombia responde a los intereses de contrainsurgencia y de antidrogas de Estados Unidos y los campesinos van a pagar el precio"²⁶.

Notas

1. Son los campesinos recolectores de coca que la "raspan" al cosecharla. Constituyen la actual base social de las FARC.
2. ¿Qué hacer? N° 36, Buenos Aires, octubre de 2000.
3. Se refiere a las asociaciones civiles armadas "Convivir", organizadas oficialmente en 1994 por el presidente Samper.
4. Citado por La Nación, 30 de septiembre de 2000.
5. Este referéndum aún no se realizó. El resultado electoral de octubre de 2000, con la derrota conservadora, dificulta aún más su concreción.
6. Negocian en Suiza el ELN y el gobierno colombiano, Juan Gasparini, Clarín, 24 de julio de 2000.
7. Una promesa de la guerrilla, Juan Gasparini, Clarín, 27 de julio de 2000.
8. Máxima alerta en Colombia, Clarín, 17 de julio de 2000.
9. La guerrilla, en la mira del Plan, Ana Barón, Clarín, 30 de agosto de 2000.
10. Negocian en Suiza el ELN y el gobierno colombiano, Juan Gasparini, Clarín, 24 de julio de 2000.
11. Luchan en Colombia, dialogan en Suiza, Juan Gasparini, Clarín, 25 de julio de 2000
12. Feroces combates en Colombia, 65 muertos, Clarín, 3 de septiembre de 2000.
13. Colombia envía tropas de elite contra las FARC, Nelson Padilla, Clarín, 4 de septiembre de 2000.
14. Colombia envía tropas de elite contra las FARC, Nelson Padilla, Clarín, 4 de septiembre de 2000.
15. Duros combates con las FARC, Clarín, 18 de septiembre de 2000.
16. Masivo secuestro en Colombia, La Nación, 18 de septiembre de 2000.
17. La Nación, 21 de septiembre de 2000
18. Las FARC construían una ruta de 200 kms., La Nación, 21 de septiembre de 2000.
19. Ofensiva del ejército en un bastión de las FARC, La Nación, 2 de octubre de 2000.
20. Intentarán recuperar zonas de las FARC, La Nación, 11 de octubre de 2000
21. Violencia en Colombia, 100 muertos en tres días, La Nación, 21 de octubre de 2000.
22. Colombia, violenta contraofensiva militar, La Nación, 23 de octubre de 2000
23. Tiempos del Mundo, semana del 21 al 28 de octubre de 2000.
24. Pérdidas en el Putumayo por paro armado, El Espectador, Colombia, 3 de noviembre de 2000.
25. Colombia se prepara para frenar a los rebeldes, Jeremy McDermott, BBC News, 31 de agosto de 2000.
26. Colombia cambia de tácticas en la guerra contra las drogas, Jeremy McDermott, BBC News, 31 de agosto de 2000.

Capítulo 8 – Las Fuerzas Armadas

El plan Colombia establece una fuerte presión, en primer lugar sobre las Fuerzas Armadas colombianas. Estas han acumulado demasiadas derrotas para un ejército nacional.

1. El 30 de agosto de 1996 las FARC atacaron la base de Las Delicias (Caquetá), capturando a 60 soldados y matando otros 27.
2. Otra humillación fue en marzo de 1998, con el casi aniquilamiento de un batallón profesional de contra-insurrección, también en Caquetá.
3. El 3 de agosto del mismo año otra derrota militar se dio en las poblaciones de Uribe y Miraflores, con 68 soldados y policías muertos y 129 secuestrados.
4. Finalmente en Dabeiba, en octubre de 2000, otra frustración terminó con 52 militares muertos.

El 12 de agosto de 1999, Pastrana promulgó un nuevo código militar para destituir a los oficiales de alto rango por su ineficacia en la lucha contra la guerrilla y, en teoría, contra los paramilitares.

A pesar de esta baja performance los altos mandos militares no han perdido ocasión de utilizar las derrotas como una prueba de fuerza contra los poderes constituidos. El 26 de mayo de 1999, apoyado por 18 generales y 200 oficiales, renunció el ministro de Defensa Rodrigo Loreda. Le reprochaba al presidente ser demasiado conciliador con las FARC. Pastrana comenzó con las concesiones. Anunció que la desmilitarización en la zona de despeje no sería indefinida. Esto no pudo impedir que el general Fernando Tapias, comandante en jefe de las fuerzas armadas y Jorge Enrique Mora, comandante del Ejército, presentaran sus renuncias el 19 de noviembre siguiente, aunque fueron rechazadas.

Comenzaron entonces las maniobras de desestabilización. El general Néstor Ramírez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Ejército, habló en el Salón del Hotel Billmore de Miami, el 2 de diciembre de 1999. Invitado por la organización de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad y por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) afirmó que la Procuraduría (responsable de las medidas disciplinarias contra los funcionarios públicos), la Fiscalía (ministerio público) y la Defensoría del Pueblo (órgano de control del ministerio público) estaban infiltradas por la subversión. La razón para este intempestivo ataque era el inminente comienzo del juicio contra decenas de militares, entre ellos 4 generales, por negligencia y complicidad en las masacres cometidas por los paramilitares.

Desde los años 90 los Estados Unidos redujeron su ayuda al ejército colombiano en razón de sus abusos en materia de derechos humanos. Para persuadir al Congreso de votar un aumento de la ayuda militar, la administración Clinton comenzó a operar sobre este terreno agitado. En julio de 1997 el general Harold Bedoya fue relevado en su cargo de comandante en jefe del ejército por habérselo encontrado como manifiesto encubridor de las acciones criminales de sus subordinados. La XX Brigada de instrucción militar fue disuelta en razón de sus visibles conexiones con los paramilitares.

Más recientemente, en abril de 1999, el gobierno forzó la renuncia de los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, notoriamente aliados a los paracos. Pero los intentos por tabicar las conexiones entre los militares y las fuerzas de Castaño fueron tímidos hasta fines de 2000, cuando la presión norteamericana impulsó la baja de 388 militares. El Defensor del Pueblo lo dijo en el Congreso: "los grupos paramilitares han devenido en el brazo ilegal de la fuerza pública" por lo que la relación entre ambos es necesariamente fuerte.

Unas fuerzas armadas con tan poca capacidad de combate y con tantas conexiones con la ilegalidad no pueden garantizar que los millones de dólares que recibirán del Plan Colombia se destinen exclusivamente a la lucha contra la producción y comercialización de narcóticos y no a la lucha contrainsurgente. Sólo una completa ignorancia sobre la historia del ejército colombiano permitiría suponer que es posible hacer esa diferenciación. Ese ejército todavía piensa en los términos de la guerra fría y sus acciones se rigen por una lógica visceralmente anticomunista. Por otro lado esta lógica de guerra fría implementada mediante la injerencia norteamericana resulta útil para importantes fracciones de las clases dominantes. Estas consideran que la injerencia norteamericana es la única posibilidad para un hipotético triunfo militar del ejército, idea que las seduce sobremanera para no tener que ceder sus riquezas y poder acumulado, la base sobre la que reposa el capitalismo gangsteril de ese país.

El desarrollo de negociaciones sustantivas de paz dará probablemente lugar a una inevitable redefinición del papel de los militares. Un proceso de paz sostenido acentuaría las presiones en favor de una reducción del tamaño y del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Esto podría ser rechazado por algunos sectores militares, lo cual ocasionaría divisiones en el seno de la institución. A largo plazo, será vital la disponibilidad de recursos para brindar oportunidades de empleo a los guerrilleros y efectivos militares desmovilizados. En el proceso de desarme en Nicaragua, el no cumplimiento del suministro de los recursos prometidos llevó a los ex combatientes al crimen y al bandolerismo.

Las Fuerzas Armadas han contribuido y se han beneficiado a la vez de la prolongación del conflicto, que ha dado cierta legitimidad a la búsqueda de un renovado papel político para los militares y favoreció el incremento de los gastos de defensa. Desde 1950 Colombia ha vivido en estado de sitio durante prolongados períodos. Esta situación se hizo prácticamente permanente desde mediados de los años 60, fortaleciendo el papel político y la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas.

Paramilitares

"Hay una convergencia estratégica entre los militares y los paramilitares: tienen el mismo enemigo, la guerrilla. Entonces hay un problema porque nadie quiere ser percibido como que está apoyando a los paramilitares, pero ellos están luchando tan enérgicamente como el ejército y no se necesita ser un genio para saber que a nivel táctico va a ver cierta coordinación"¹.

"Esto es como la Triple A de López Rega luchando contra los comunistas en la Argentina o los paramilitares luchando en El Salvador. Se trata de verdaderos delincuentes pero el impacto que tiene a nivel estratégico es favorable para los militares regulares".

Los paramilitares se convirtieron en una fuerza destinada a realizar las tareas sucias que el Estado no podía completar. En materia de derechos humanos los paramilitares son los principales acusados: se les atribuye el 73% de las atrocidades (el 16,67% a la guerrilla). La más importante de sus tareas fue la instauración de un régimen de terror en el campo, para minar la base social de la guerrilla. Esto forzó la emigración de un millón y medio de campesinos a las ciudades desde 1985².

En diciembre de 1994, invocando el derecho de autodefensa de la población contra la violencia guerrillera, se crearon oficialmente las patrullas civiles armadas Convivir. Muchas de ellas, sin embargo, han sido acusadas de participar en violaciones de los derechos humanos. El 10 de octubre de 1997 la Corte Constitucional votó en favor de mantener dichos grupos, pese a que sus críticos los acusan de tomar parte de acciones de "limpieza social" urbana (asesinatos de individuos marginados en las ciudades) y de prestar ayuda a fuerzas paramilitares irregulares. El 25 de julio de 1998, alrededor del 70% de las 414 patrullas Convivir manifestaron al gobierno su deseo de cancelar sus licencias como contribución al proceso de paz.

Lo que en Colombia se llama paramilitares se organiza de manera muy estructurada en torno a dos familias: los Castaño y los Carranza. Carlos Castaño es líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, antes lo fue de la Autodefensa de Córdoba y Urabá (ACCU). Fue aliado coyuntural del cartel de Cali dentro del grupo de los Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES) y fue el verdadero causante de la derrota y muerte del padrino de Medellín. Controla la parte de la región de Urabá que cubre los departamentos de Choco y Antioquía, desde la frontera panameña hasta sus límites marítimos en el Caribe y el Pacífico, además de los departamentos de Sucre y Córdoba, y una parte del César. Con el acuerdo de los traficantes sobrevivientes del conflicto que los enfrentó a Pablo Escobar, los Castaño dirigen las principales bandas criminales y la industria del secuestro de Medellín. También aprovecharon la desaparición del cartel de Cali, cuyos líderes se encuentran presos, para extender su influencia al norte del departamento del Valle. Los Carranza son propietarios de minas de esmeraldas y ganaderos, ejercen su poder en el Meta, Vichada, Boyacá, la región del Magdalena Medio en el departamento de Santander y al sur de los departamentos de Bolívar y Sucre. Ambos grupos tienen un solo objetivo en común: la lucha contra las FARC.

La unión de estos dos frentes forma un cinturón de control político y administrativo que va de la región amazónica, en las fronteras con Venezuela y Brasil, hasta la costa atlántica. Se trata de una zona tradicional de contrabando de armas y drogas, en la cual se proyecta la construcción de un canal interoceánico. Por otra parte este cinturón estratégico ha permitido a los paracos apoderarse de 3 a 3.5 millones de has., un tercio de las mejores tierras agrícolas del país, fenómeno que ha sido calificado de "contrarreforma agraria".

Pero el frente de los Castaño no tiene objetivos solo económicos y militares, sino que es un proyecto político contrainsurreccional de extrema derecha, para lo cual cuentan con el apoyo de sectores políticos colombianos, aunque las autoridades norteamericanas parecen ignorar esto.

Si para Estados Unidos la prioridad es la droga, para las AUC el objetivo principal es el proyecto contra-insurgente. La implantación de los grupos paramilitares, muy ligados a la droga, tiende a coincidir desde hace varios años con las zonas de forraje y de producción de pozos petroleros, en Urabá como en el resto de Colombia.

La British Petroleum fue acusada, en octubre de 1990, de financiar los escuadrones de la muerte con el apoyo del ejército, al que pagaba 1.5 dólares por barril a cambio de la protección de sus explotaciones. Según Ian Stewart, portavoz de la BP, el Ejército habría recibido 5.4 millones de dólares a título de "impuesto de guerra" durante los últimos tres años.

Una nueva y poderosa organización ejerce control sobre la mitad del país: el cartel del Norte del Valle, departamento cuya capital es Cali. El "capo" del cartel es Orlando Henao, un ex policía, secundado por su hermano Arcángel. Declararon una guerra sin cuartel a los hermanos Rodríguez Orejuela, "capos" del cartel de Cali, cuando estos se rindieron a la policía.

El grupo de Henao hizo una alianza con Carlos Castaño. Su influencia militar, que se extendía ya a todo el noroeste de Colombia, se amplió gracias a este acuerdo al conjunto del litoral pacífico, desde la frontera con Panamá a la de Ecuador.

Por lo tanto, las rutas de exportación de cocaína y marihuana que parten del Pacífico (vía marítima), del Caribe (con una marcada preferencia al tránsito marítimo y aéreo por Cuba) y de Ecuador (vía marítima y aérea) con destino a Estados Unidos y Europa, tienen cada vez menos obstáculos que franquear. Las armas llegan a los paramilitares y a los narcos por las mismas rutas (con un fuerte aumento de esta clase de contrabando procedente de Ecuador) pero en el otro sentido.

Desde mediados de los '80 recrudesció una feroz campaña de terror en el campo, cuyo motor ha sido la lucha de los terratenientes por apropiarse de las mejores tierras, expulsando a los campesinos y sometiendo a los obreros agrícolas. Las grandes empresas han recurrido a los mismos métodos para despejar áreas petroleras, etc.

Las bandas civiles armadas han sido legalizadas por Samper³ y reúnen a unos 5 o 6 mil hombres y operan en unos 350 municipios, sobre todo en la región de Urabá.

Estos grupos paramilitares ejercen la violencia más brutal. Las masacres se han convertido en práctica cotidiana desde 1988. Desde 1997 se han perpetrado en el país 850 masacres sin que el Estado y el ejército hayan impedido la realización de ninguna de ellas a pesar de que la mayoría son anunciadas con antelación por los paracos.

El Estado obtiene varias ventajas de la acción de los paramilitares:

1. no tiene que someterse a ningún control ciudadano
2. puede operar fácil e impunemente en cualquier lugar del país
3. cuenta con el apoyo económico abierto, pero no legalizado en cuentas oficiales del Estado, de industriales, terratenientes, ganaderos.
4. la violación de los DDHH no se imputa al Estado sino a grupos privados.

Desde el punto de vista económico y social los paracos representan los intereses de los terratenientes y ganaderos, comerciantes, industriales y mafiosos, cuyo objetivo prioritario es la contrarreforma agraria a fin de ensanchar las propiedades y acaparar las tierras de los pequeños cultivadores. En una carta abierta dirigida al ministro de Defensa, Luis Ramírez, Castaño admite que recibe dinero de empresas privadas: “¿Por qué no deberían apoyarnos las compañías nacionales e internacionales cuando ven sus inversiones amenazadas por el terrorismo y la barbarie guerrillera? El apoyo del sector empresario es una urgente necesidad. O se defienden ellos mismos de nuestro enemigo nacional, o desaparecerán”.

Colombia presenta por lo tanto el más alto índice de desplazamiento interno. Hay dos millones de colombianos desplazados por los paramilitares con el beneplácito del Estado y el ejército. También se da el caso de regiones donde la alianza entre paramilitares y multinacionales se hace para garantizar el monopolio en la explotación de un determinado recurso como es el oro en el sur de Bolívar o el petróleo en los Llanos orientales.

Un vínculo triple Estados Unidos-paramilitares-ejército se ha encontrado en la masacre de Mapiripán, un pequeño pueblo en el departamento de Meta, donde fueron masacrados 70 campesinos en 1997. La masacre fue perpetrada por paramilitares trasladados desde el departamento de Córdoba, en el otro extremo de la geografía colombiana, que fueron transportados en aviones del ejército y recibidos en una base militar donde asesores de Estados Unidos entrenaban al ejército colombiano. El periodista que realizó la investigación, a partir de fuentes norteamericanas, se vio obligado a abandonar el país por amenazas de muerte. La nota fue publicada por el diario El Espectador, en su edición del 27 de febrero de 2000.

Otra violencia es la ejercida contra los líderes sindicales, intelectuales de izquierda y estudiantes universitarios. En Medellín circulan panfletos donde se ofrece pagar mil dólares por el asesinato de cualquiera de los activistas sociales, considerados en la lógica paramilitar como “guerrilleros desarmados”. En distintas universidades del país circulan comunicados en los que, con nombre propio, son sentenciados a muerte profesores y estudiantes. Esto comenzó en la Universidad de Antioquía (Medellín) donde en 1999 fue asesinado un estudiante que aparecía en la lista; continuó en la Universidad de Córdoba (en Montería) donde el 22 de mayo de 2000 fue asesinada Marilys de la Ossa, estudiante de Ciencias Sociales embarazada de cinco meses.

Junto a la delincuencia de los sectores pobres de la sociedad, la más criminalizada por los medios de comunicación, que ha llevado a una sobrepoblación de las cárceles colombianas, existe la delincuencia de las clases pudientes. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, con un nivel de impunidad del 97% de los delitos que se cometen. Los funcionarios han tomado como botín de guerra a las entidades públicas para aumentar sus riquezas y las de sus familias, como sucede entre ministros, alcaldes, gobernadores y gerentes estatales.

Pero además de contar con el apoyo del ejército y los empresarios más el silencio del Estado y del gobierno, los paramilitares encuentran nuevos socios armados. “Me he enterado que están conformando un escuadrón de la muerte ultrafascista compuesto de unos 4 mil hombres”, dijo Calderón, vocero de las FARC para América Latina. “Parece que son ex militares indignados de la manera en que Pastrana está haciendo concesiones a la guerrilla”.

La nueva unidad es financiada por grupos o individuos acaudalados de los suburbios del norte de Bogotá, cuyo poder económico y político quedaría minado si Pastrana logra la paz con los guerrilleros que actualmente ejercen el control sobre la mitad del país.

El asesinato del principal humorista del país, Jaime Garzón (la víctima número 900 de los grupos fuera de la ley) ha puesto al descubierto este nuevo grupo que asesina a las personalidades que abogan por la paz. Garzón estaba en una lista negra de cinco prominentes defensores de la paz. El comisionado del gobierno de Pastrana, Víctor Ricardo, podría ser otro de los blancos. Coincide con esta opinión el congresista Antonio Navarro Wolff, ideólogo del disuelto M19.

En el marco de las negociaciones de paz las AUC también se han propuesto negociar con el Gobierno, pero sólo en condiciones que dependerán en parte del balance de las conversaciones entre el Estado y la

guerrilla: prueba de la voluntad sincera de negociar de los subversivos, liberación de todos los secuestrados en poder de los rebeldes, creación de una zona desmilitarizada para el desarrollo de las negociaciones y revocación de las órdenes de captura contra los líderes paramilitares. Castaño ha afirmado asimismo que los paramilitares sólo entregarán las armas si la guerrilla hace otro tanto. Estas condiciones parecen difíciles de cumplir. Especialmente si el ELN pretende realmente establecer enclaves armados después de un acuerdo de paz, sería difícil impedir que grupos paramilitares clandestinos continuaran atacando a los rebeldes y a sus simpatizantes en estas áreas, perpetuando así el conflicto. En una declaración emitida el 17 de julio, las AUC calificaron la propuesta del ELN de “declaración de guerra”. Castaño dijo que “el gobierno está actuando equivocadamente con la posibilidad de despejarle al ELN el sur de Bolívar”. Afirmó que las AUC dominan el 80% de esa región del país. Dijo que el gobierno debe evaluar qué controla realmente el ELN, para buscar una zona de despeje.

En noviembre de 2000 las AUC condicionaron la liberación de siete congresistas retenidos a que el gobierno designe un delegado especial que discuta con su organización los reparos que tiene frente al proceso de paz con la guerrilla. Castaño manifestó que el gobierno debe exigirle a la guerrilla la liberación de todos los civiles secuestrados y el compromiso, a través de un cese de hostilidades, de no volver a secuestrar. Varios congresistas, durante las plenarias de Cámara y Senado, pidieron al Gobierno iniciar diálogos con las AUC. En igual sentido se pronunció la Dirección Nacional Liberal⁴. El ministro del interior, Humberto de la Calle, dijo que el gobierno seguirá con su política de paz y no la discutirá con las autodefensas. Pero finalmente el gobierno accedió y las FARC abandonaron la mesa del diálogo en señal de protesta⁵.

Pero Castaño amplió su exposición política cuestionando la decisión del gobierno de ordenar el cese de las operaciones militares en los Farallones de Cali para la liberación de los secuestrados por el ELN. En este episodio los paramilitares demostraron tener una fuerte base social en la clase media de las ciudades.

Los acontecimientos que sucedieron a la renuncia del general Canal son esclarecedores al respecto. “Nunca estuve de acuerdo con el desarrollo de la etapa final de la operación de rescate, en la que se minimizó al Ejército, donde se apreció que una victoria militar se transformó en una derrota política, porque no hubo un manejo adecuado, porque no hubo firmeza en los negociadores, porque la debilidad del ELN se quiso mostrar como una actitud humanitaria”. El general Jaime Ernesto Canal Albán, renunció al Ejército Nacional siendo comandante de la III Brigada. Lo hizo en desacuerdo con la política del gobierno en relación a la liberación de los secuestrados por el ELN⁶.

10 mil personas marcharon en Cali en apoyo de la permanencia del general Canal en la zona. Este militar integra la lista de 11 generales que las ONGs (HRW, WOLA y Amnistía Internacional) piden al gobierno norteamericano que sean investigados penalmente por violación a los Derechos Humanos.

El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, negó que la proclama pública que hizo el coronel del Ejército Guillermo Lora, acusando al gobierno del presidente Andrés Pastrana de haber “ofendido el honor” de la institución por la negociación para la liberación de los rehenes retenidos por el ELN, constituya un “ruido de sables”⁷.

“La salida del general Canal del Ejército y el pronunciamiento del coronel Lora en Cali, no tienen nada que ver con un supuesto ruido de sables que podría generar un golpe de Estado en el país”.

Alianza paramilitares-droga

Los paramilitares nacieron a fines de los '60, dentro de una política recomendada por los consejeros americanos para “desalentar” toda veleidad de transformación social. Constituidos desde 1985 como brazo armado de los narcotraficantes y luego como complemento del Ejército para efectuar la “guerra sucia” contra las bases sociales de la guerrilla, se reagruparon desde abril de 1997 en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Hoy tratan de adjuntar a su estrategia contra-insurreccional un discurso político a fin de mostrarse autónomos del Ejército y del poder del Estado.

El general Jorge Enrique Mora declaró que atacando los cultivos ilícitos, se dará un fuerte golpe a las FARC: “aspiramos a destruir sus finanzas y así ganaremos el 80% de la guerra”. Pero no son las guerrillas quienes obtienen las ganancias del narcotráfico. Es bien conocido que en una zona controlada por los paramilitares se desmanteló el 10 de agosto de 1997 un complejo de 4 laboratorios de alta sofisticación en Puerto Libre (Cundinamarca). No se puede ignorar que los puertos de Turbo, Necoclí, Arboletes, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento, Capurgana (sobre la costa atlántica), Jurado y Bahía Solano (sobre el Pacífico norte), desde donde se exporta el 60% de la producción de droga colombiana, están situados en una zona de fuerte influencia paramilitar.

La alianza entre Carlos Castaño, líder de los paracos, con el narcotraficante Orlando Henao, quien facilita el crecimiento de los paramilitares, está presente en todo el nordeste del país hasta el litoral pacífico, desde la frontera de Panamá hasta la frontera con el Ecuador⁸.

Carlos Castaño declaró sin miramientos que financia su movimiento con las ganancias de los cocaleros, aunque se mostró más discreto sobre los aportes de los actores económicos financieros del establishment.

En la zona de Catatumbo se desplaza en un helicóptero que jamás fue detectado por los aviones de la Fuerza aérea colombiana ni por los radares norteamericanos. Por otro lado, contrariamente a lo que sucede con las FARC y el ELN, los paramilitares no figuran en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Phil Chicola, jefe de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, lo explicó: “de acuerdo con la ley estos grupos deberán cometer acciones que amenacen los intereses nacionales de Estados Unidos para poder ser incluidos formalmente en la lista”.

Narcotráfico-militares-paramilitares⁹

Human Right Watch relaciona la mitad de las 18 unidades a nivel de brigadas del ejército colombiano (exceptuando las academias militares) con la actividad paramilitar. Estas unidades operan en todas las 5 divisiones de Colombia. También HRW encontró evidencia de la relación entre militares y paramilitares en la 5^o, 7^o, 9^o, 14^o y 27^o Brigada.

1. en 1999, investigadores del gobierno colombiano encontraron evidencia comprometedor de que oficiales del ejército (Tercera Brigada, parte de la Tercera División del Ejército colombiano, donde se concentra gran parte de la ayuda norteamericana) organizaron un grupo paramilitar de apoyo al Frente Calima, en el Valle del Cauca, utilizando fuerzas activas, retirados y reservistas junto con fuerzas militares legales en la lucha contra el ELN.
2. En 1997, 1998 y 1999 una investigación del gobierno encontró evidencia de que los oficiales del ejército trabajaban íntimamente con los paramilitares bajo el comando de Carlos Castaño. Compartían inteligencia, planificación y llevaban adelante operaciones conjuntas, proveían armas y municiones, apoyo con helicópteros y ayuda médica, coordinados sobre una base diaria. Algunos de los oficiales involucrados permanecen en servicio activo y al comando de tropas.

La conexión entre los traficantes de drogas y los grupos paramilitares no es nueva y está bien documentada en los reportes que obran en poder de la embajada norteamericana en Bogotá desde 1990.

Tercera brigada (Cali): “Elías”, espía militar y matón del narcotráfico al mismo tiempo, declaró a HRW que encontró una cercana relación entre los traficantes de droga, los paramilitares y el ejército. Elías dijo que el Batallón paramilitar coronel Agustín Codazzi tomaba armas y municiones capturadas a la guerrilla y las colocaba en el mercado negro de armas. El dinero obtenido era destinado a los soldados y para sostener actividades ilegales. El trabajo de Elías era pagado (por las operaciones generadas gracias a su información), con dinero aportado por la venta ilegal de armas.

Dijo que también trabajaba como traficante local de drogas y sirvió como guardaespaldas en el rancho de un narcotraficante que frecuentemente albergaba a las tropas de la Tercera Brigada y a paramilitares. La distinción entre traficantes, paramilitares y ejército es inexistente.

El salario era de 800 dólares mensuales cuando no entraba en acción y de 1.300 cuando sí lo hacía.

Cuarta brigada (Medellín): El jefe de la cuarta brigada es el general Carlos Ospina Ovalle. Una de las unidades a su cargo está destinada a recibir ayuda norteamericana, la 12^o Brigada, con asiento en Florencia, Caquetá.

Se encontró evidencia de la conexión en 1997, 1998 y 1999 entre la Cuarta Brigada y los paramilitares.

En la localidad de El Aro (octubre 1997) se produjo una masacre por parte de los paramilitares mientras miembros de la Cuarta brigada protegían el perímetro.

Durante la operación las fuerzas combinadas del ejército y los paramilitares fueron atacadas por las FARC. Un helicóptero del ejército entregó medicinas y municiones a los paramilitares.

Los paramilitares entregan los cuerpos de guerrilleros sospechosos o ciudadanos asesinados al ejército a cambio de armas y municiones. Los soldados visten los cadáveres con uniformes militares y los publicitan como guerrilleros muertos en combate. A esto se llama “legalización”.

La legalización es uno de los mejores caminos para obtener medallas y promociones. El comandante pide “resultados”, por lo tanto cualquiera que pasa cerca de la patrulla puede morir, a fin de que los soldados puedan cumplir con la estadística de bajas exigida.

30^o brigada (Bogotá): En algunos asesinatos como el de los trabajadores de la CINEP en 1997 y el de Valle, defensor de los derechos humanos de Antioquía, en 1998, la evidencia que encontraron los investigadores sugiere que la inteligencia militar actuó en coordinación con Carlos Castaño.

Derechos humanos

Los organismos de derechos humanos denuncian la relación entre los paramilitares acusados de crímenes de civiles y los militares colombianos acusados de proveerles instrucción, armas, asistencia, etc. El reporte denuncia igualmente la ayuda de Washington “para luchar contra la droga” a los militares colombianos en las zonas donde ellos actúan en forma conjunta con los paramilitares.

Según un comunicado de la Unicef de abril de 1999, en el curso del último decenio 1.257.000 personas fueron desplazadas por el conflicto en Colombia, entre ellos 700 mil niños. Unicef denuncia igualmente el reclutamiento de los niños por las fuerzas armadas y otras violaciones de los derechos humanos de las que ellos son víctimas.

En marzo de 1998 la Comisión de Derechos del Hombre de Naciones Unidas reiteró “su preocupación por la persistencia de innumerables violaciones del derecho a la vida, la práctica de desapariciones forzadas y de la tortura, la participación creciente de grupos paramilitares en el conflicto y la persistencia de una impunidad alarmante. El Alto Comisionado exhorta a las autoridades a poner en práctica una política eficaz para dismantelar definitivamente las bandas paramilitares, juzgar y sancionar a todos sus instigadores, organizadores, dirigentes, miembros o combatientes y a aquellos que le aportan apoyo financiero. Del mismo modo, es indispensable poner fin a las actividades de los grupos civiles armados, conocidos bajo el nombre de asociaciones ‘Convivir’, con vistas a eliminar las incidencias negativas sobre la crisis de los derechos humanos, y facilitar la aplicación del principio humanitario de la distinción en los conflictos armados y de permitir al Estado ejercer, en todo momento y en todas circunstancias, un control absoluto sobre el recurso de la fuerza y el uso de armas”.

Los derechos humanos y el Plan Colombia

Desde la visita del Presidente Virgilio Barco a Bruselas en 1990 para solicitar la ayuda de la UE en la lucha contra el narcotráfico, Colombia ha sabido aprovechar el apoyo europeo. Los sucesivos Gobiernos han visto en este apoyo un contrapeso potencial a sus relaciones con EEUU, dominadas por el tema de la droga. Al mismo tiempo, las frecuentes visitas oficiales de alto nivel a la UE y la eficaz labor de la Embajada en Bruselas han producido en Europa un mayor entendimiento del contexto colombiano y una respuesta más considerada a los problemas conexos. Tanto el Presidente Samper como la Ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, desempeñaron en Europa importantes cargos diplomáticos que les permitieron preparar una estrategia hacia la UE y tejer una red indispensable de contactos diplomáticos.

En la búsqueda activa de este apoyo, sin embargo, Colombia se expone también a las críticas de Europa. Si bien el país capta un alto nivel de interés europeo con respecto a otras naciones latinoamericanas, el hecho de que gran parte de esta atención se centre en los derechos humanos redundando a menudo en una publicidad negativa. La sensibilidad del tema de los derechos humanos se refleja en la respuesta del Parlamento Europeo (PE) a los acontecimientos en Colombia y en las resoluciones parlamentarias que urgen al Gobierno a dar cuenta de sus acciones contra las violaciones de derechos humanos imputadas a unidades militares o a grupos paramilitares vinculados a las FFAA.

La violación sistemática de los derechos humanos en Colombia era la sombra que oscurecería la visita de Clinton a Cartagena.

El viaje de Clinton a Colombia el 30 de agosto fue el mejor indicador de la preocupación de Estados Unidos por la situación en ese país.

“El problema es que hay preocupación porque por un lado la popularidad de Pastrana está disminuyendo y hay temores de que la situación desborde no solo en Colombia sino hacia los países vecinos. A eso se suma que hay en Washington muchas preguntas entre algunos legisladores y entre las organizaciones de derechos humanos sobre las violaciones que se producen en Colombia”.

Por ley Estados Unidos no puede apoyar ni financiar a ninguna institución que viole los derechos humanos. Pero en Colombia los paramilitares son independientes porque están financiados por el narcotráfico y ya no dependen del ejército colombiano. “Entonces se produce la paradoja de que si bien son condenables por las violaciones a los derechos humanos, objetivamente son muy convenientes desde el punto de vista estratégico porque ellos son los que lograron que el ELN quiera negociar”¹⁰.

La decisión de Clinton puede constituir un pesado legado histórico: el inicio de un compromiso en los Andes que pueda reproducir una situación similar al fiasco político y militar de Vietnam. O bien que suponga la reintroducción en la región de algunas de las concepciones de la denominada “doctrina de la seguridad nacional”.

Para aprobar la asistencia (del Plan Colombia) el Congreso norteamericano introdujo en la ley seis condiciones que Colombia debía aceptar en materia de respeto de los derechos humanos. Pastrana cumplió hasta ahora solo una de ellas: someter a jueces civiles a los militares que infrinjan las leyes. Clinton —que certifica ante el Congreso el cumplimiento de Colombia— obtuvo, sin embargo, un resquicio legal. Puede hacer a un lado las cuestiones humanitarias si cree que la seguridad nacional de Estados Unidos lo justifica¹¹. Y eso es lo que hizo. Colombia envía a Washington el 80% de la cocaína que se consume allí y hasta el 70% de la heroína que se consume en la costa este norteamericana. Otro argumento formal norteamericano es que éste es un “rescate” de la democracia en Colombia. No es lo que revelan los funcionarios de Washington cuando hablan en serio: en febrero, un subsecretario del Pentágono, John J. Hamre, dijo al

definir la agenda de seguridad de su país para el siglo XXI que “Colombia ya no es un gobierno coherente, la mitad del país está controlado por un grupo rebelde”.

Clinton autorizó el desembolso de 1300 millones de dólares de ayuda militar y económica a Colombia. Lo hizo aunque Pastrana no adoptó las medidas exigidas por el Congreso norteamericano para poner fin a la violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

La decisión de Clinton transforma a Colombia en una excepción. Desde que terminó la Guerra Fría Estados Unidos insiste en la importancia de los derechos humanos en los países latinoamericanos. En esta ocasión Clinton argumentó cuestiones de seguridad nacional para otorgar un “waiver”, un perdón o renuncia a las restricciones impuestas por el Congreso.

Las organizaciones de derechos humanos criticaron la medida. “Envía un mensaje contradictorio: el Congreso pide una cosa, el presidente hace otra”, dijo el presidente de Human Rights Watch, División Américas.

Coletta Younger de WOLA, Washington Office in Latin America, dijo que “durante años Colombia ha violado sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. Al diferir el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Congreso a ese nivel, Clinton no favorece su cumplimiento”.

Pero Clinton está confiado, “Pastrana se comprometió a tratar los asuntos referidos a los derechos humanos, sobre los cuales estamos muy preocupados”.

El Departamento de Estado mantuvo reuniones con varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo HRW y WOLA para evaluar si Colombia había cumplido con las condiciones sobre derechos humanos. El “no” fue unánime. El Departamento de Estado aconsejó a Clinton que pidiera un “waiver” por razones de seguridad nacional. A una semana del viaje a Colombia, Clinton aceptó el consejo¹².

En vísperas de la partida de Clinton, Andrew Miller, el director para América Latina de Amnesty International; José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch y Georges Vicker de la Oficina de Latinoamérica de Washington (WOLA) presentaron una radiografía muy sombría sobre la “impunidad” con que actúan no sólo los paramilitares y los guerrilleros sino también los militares colombianos.

Según HRW en Colombia hay 400 masacres por año. 300 de ellas son ejecutadas por los paramilitares, cuya relación con el ejército regular ha sido probada en múltiples ocasiones. El 20% de las masacres es obra de los miembros de las FARC. El resto es realizado directamente por las fuerzas militares regulares. Por cada combatiente que muere en Colombia, mueren dos civiles inocentes¹³.

Miller, Vivanco y Vicker condenaron enérgicamente el hecho de que Bill Clinton haya decidido otorgar a Colombia los 1.300 millones de dólares a pesar que Pastrana no adoptó las medidas requeridas por el Congreso para poner fin a la violación de los derechos humanos y no suspendió a ninguno de los militares que violaron los derechos humanos, como lo pidió el Congreso de Estados Unidos.

El caso más flagrante es el del general Rodrigo Quiñones, comandante de una brigada de la Marina. Existen pruebas que lo implican en por lo menos 57 asesinatos de sindicalistas, defensores de derechos humanos y de líderes vecinales, cuando presidía el Servicio de Inteligencia Naval.

Pero no es el único. También están cuestionados el comandante de la Cuarta División, Carlos Ovalle; el brigadier general Jaime Canal Alban, comandante de la Tercera Brigada; el general Jaime Cortés Parada, inspector general del Ejército; el general Freddy Padilla León, comandante de la Segunda División¹⁴.

Hay 51 casos pasados de la justicia militar a la civil, de los cuales 39 se ligan a violaciones a los derechos humanos. “Pero la mayoría de esos casos implica a sargentos y lugartenientes de bajo rango”.

Estados Unidos anunció que suspendió el apoyo y entrenamiento a dos brigadas del ejército clave para una ofensiva contra el narcotráfico, por acusaciones de violación a los derechos humanos. La decisión afecta a las brigadas 12 y 14, ubicadas en los selváticos departamentos de Caquetá y Putumayo¹⁵.

El gobierno colombiano finalmente destituyó en octubre a 388 militares, entre ellos a 89 oficiales y el resto suboficiales. Se hizo sobre la base de un decreto que expidió en septiembre el presidente Pastrana. Hasta ahora las fuerzas militares colombianas podían retirar a sus integrantes después de 15 años de servicio¹⁶.

El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, negó que la masiva destitución de efectivos, que representa un 0,25% del total del pie de fuerza, estimado en unos 150 mil hombres, se deba a presiones de USA.

Pero el diario El Espectador informó sobre el documento confidencial que remitió la Embajada de Colombia en Washington al gobierno tras el waiver en derechos humanos que concedió la administración Clinton a Colombia en el mes de julio. De su lectura se concluye que se conminó al gobierno a retirar del servicio a los miembros de la institución que enfrentaran acusaciones por estar involucrados en violaciones a los derechos humanos¹⁷.

Los oficiales fueron retirados en virtud del decreto 1790 de 2000. No todos salieron por derechos humanos, pero el Ministerio de Defensa necesitaba mostrar resultados para neutralizar cualquier obstáculo al Plan Colombia.

Desde el 12 de agosto rige un nuevo Código Penal Militar, sancionado el 17 de agosto. El Departamento de Estado de USA debe nuevamente evaluar el rendimiento de Colombia en Derechos Humanos. Así se abrió el camino para el retiro de los 388 militares. En la práctica las condiciones para una nueva certificación en derechos humanos para Colombia ya están cumplidas.

Las ONG (HRW, WOLA, Amnesty International) solicitaron a Estados Unidos que exija investigaciones penales sobre 11 generales de las Fuerzas Armadas colombianas.

Notas

- 1 La guerrilla, en la mira del plan, Ana Barón, Clarín, 30 de agosto de 2000.
- 2 Newsweek, 9 de agosto de 1999.
- 3 Se refiere a las patrullas "Convivir", legalizadas por Samper bajo el pretexto de la autodefensa.
- 4 Castaño presiona proceso de paz, El Espectador, Colombia, 3 de noviembre de 2000
- 5 Las FARC congelaron el diálogo, La Nación, 15 de noviembre de 2000.
- 6 Fue una derrota política, El Espectador, 6 de noviembre de 2000
- 7 Ministro de defensa niega ruido de sables en Colombia, El Espectador, Colombia, 10 de noviembre de 2000.
- 8 Plan Colombia, pasaporte para la guerra, Maurice Lemoine, Le Monde Diplomatique, agosto 2000 (en francés).
- 9 Idem.
- 10 Las preocupaciones de Washington, Ana Barón, Clarín, 16 de agosto de 2000.
- 11 El fantasma de Vietnam como telón de fondo, Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 24 de agosto de 2000.
- 12 Clinton firma millonaria ayuda militar a Colombia, Ana Barón, Clarín, 24 de agosto de 2000.
- 13 Hay que sumar los crímenes políticos. En los primeros 8 meses de 2000 murieron 366 personas asesinadas por razones políticas, la mayoría a manos de los paramilitares. Clarín, 31 de agosto de 2000.
- 14 Crítico informe sobre los derechos humanos en Colombia, Ana Barón, Clarín, 29 de agosto de 2000.
- 15 Estados Unidos suspende su ayuda a dos brigadas, Clarín, 28 de septiembre de 2000
- 16 Purga sin precedentes en las fuerzas armadas de Colombia, La Nación, 17 de octubre de 2000
- 17 Purga en las Fuerzas Armadas sí fue pedida por Estados Unidos, El Espectador, 5 de noviembre de 2000.

Capítulo 9 – El Narcotráfico

El zar de la droga, Barry McCaffrey declaró, tras la promulgación de la ley de Asignaciones para Construcciones Militares promulgada por Clinton con 1.319 millones de dólares en ayuda antidroga para Colombia y la región andina, que "los programas hemisféricos destinados a reducir la oferta de droga antes de que lleguen a Estados Unidos han resultado en una caída del 18% en la cantidad de cocaína disponible en todo el mundo durante los últimos cuatro años. Ese progreso y nuestro interés nacional están en riesgo frente al aumento del 140% en la producción de coca colombiana desde 1995"¹.

Supuestamente este plan, "coherente y a largo plazo", tiene como fin ayudar al gobierno de Colombia a "responder a la emergencia causada por las drogas y a apoyar sus instituciones democráticas".

El cultivo de la coca se ha más que duplicado en Colombia, pasando de 50.000 has. en 1995 a 100.000 en 1998 y sin duda 120.000 has. en 1999. 65.000 familias están implicadas directamente en esta actividad y 500 mil personas indirectamente.

Varias son las causas del aumento de los cultivos de coca:

1. La apertura económica golpeó la agricultura y arruinó al campo. Desde 1974 la superficie cultivada disminuyó en más de un millón de has. La guerra no es la única explicación posible. Basta un solo ejemplo: Colombia era autosuficiente en alimentos en 1990; actualmente necesita importar alimentos.
2. Los propietarios de las explotaciones agrícolas con una extensión mayor de 500 has. (0,2% de los propietarios) poseían en 1997 el 45% de la tierra.
3. El éxito de la lucha antidroga en Perú: el 60% de la coca peruana alimentaba al cartel colombiano de Cali. Después de su desmantelamiento en 1994 la alianza fue rota y la producción peruana se desfondó, provocando una verificable crisis, en particular en el Alto Huallaga, con un desplazamiento importante de población.
4. En Bolivia, una erradicación brutal redujo las superficies cultivadas, pero la ausencia de políticas de desarrollo, empujaron a los campesinos a la miseria, y los obligó a replantar coca en lugares más inaccesibles.
5. El éxito de la erradicación en ambos países provocó un desplazamiento de los cultivos a Colombia, en particular en el sur (Putumayo y Caquetá), tradicionalmente dominados por las FARC. Así lo reconoció el mismo Pastrana: "Nosotros no criticamos cuando Perú o Bolivia impulsaron sus programas y erradicaron la droga. Colombia en ese entonces no producía coca. Ese cultivo no tenía tradición histórica en nuestro país. Los cultivos se desplazaron y nadie señaló a otros"².
6. La coca constituye la única posibilidad de supervivencia de la población campesina en los países andinos.

7. Protegiendo a los campesinos en donde la producción de la “planta criminal” constituye la única posibilidad real de sobrevivencia, las FARC perciben un importe tanto sobre la coca como sobre la pasta base, práctica públicamente asumida dentro de una economía de guerra, pero que no transforma a la guerrilla en una “mafia”.
8. “Los grandes carteles fueron diezmados y hoy los reemplazan numerosos grupos que son como pequeños empresarios. Un traficante se encarga de comprar la pasta de coca y el solvente, y se la entrega a familias que obtienen la cocaína. Así, el traficante no precisa ya contar con un laboratorio: creó millares de laboratorios familiares”.

El término narcoguerrilla fue creado en 1982 por el embajador norteamericano en Bogotá, Lewis Tamb. Este mismo personaje fue implicado dos o tres años después en Costa Rica en actividades de narcotráfico destinadas a financiar la “contra”.

El punto central de la preocupación de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia radica en el alto grado de deterioro del Estado y de sus instituciones fundamentales, las FFAA, la policía, la justicia, corroídas por una aguda crisis que se acerca a la descomposición. Los datos más elocuentes que avalan esta afirmación son la pérdida de control sobre un 40% del territorio, la pérdida del monopolio legal de la violencia, la multiplicación de pequeños estados dentro del Estado según el entrelazamiento de intereses de las mafias del narcotráfico, los terratenientes y las camarillas militares. La situación del ejército y la policía es calamitosa, como muestran las repetidas derrotas, incluso de batallones de elite, a manos de la guerrilla y el reiterado fracaso de sus ofensivas.

Señalaremos aquí que el narcotráfico, con sus ingentes recursos financieros y sus métodos de mafia, es una poderosa fuente de descomposición de las instituciones del Estado, a la vez que de inestabilidad política y roces con Estados Unidos. El alineamiento de Pastrana con Washington, superando los roces de la época de Samper, significa aceptar las imposiciones norteamericanas en torno a la cuestión del narcotráfico, que afecta poderosos intereses ligados a este próspero negocio que deja en Colombia unos 3.000 millones de ganancias al año, lo cual no dejará de ser fuente de nuevos remezones en la situación.

El 18 de agosto de 1999 el presidente Clinton tuvo una reunión enteramente consagrada a la situación colombiana en compañía de Sandy Berger, miembro del Consejo Nacional de Seguridad, y de Thomas Pickering, subsecretario de Estado. En una lógica de guerra fría se creó un grupo de trabajo con aquellos funcionarios que habían sido probados en los conflictos centroamericanos. En nombre de la guerra santa contra la droga, se elaboró el Plan Colombia. Este prevé una guerra de seis años, en tres etapas estratégicas, comenzando en el Putumayo.

La economía del narcotráfico

La importancia de la droga en el cuadro macroeconómico es difícil de cuantificar. Las estimaciones sobre las ganancias obtenidas por el narcotráfico que entran en Colombia oscilan entre los 1.500 y los 3.500 millones de dólares anuales. Incluso tomando estas cifras con la cautela necesaria, se puede afirmar que las drogas, particularmente la cocaína pero en forma creciente también la heroína, están entre los principales productos de exportación. Aunque los efectos de estos ingresos son difíciles de estimar, no cabe duda de que han constituido una parte importante del alto nivel de inversiones que ha caracterizado la economía colombiana, aunque no de forma uniforme en el país. Se ha relacionado la entrada de capital proveniente del narcotráfico con el importante auge del sector de la construcción en los años ochenta y principios de los noventa. A principios de los noventa el masivo ingreso de capitales procedentes del narcotráfico se vio favorecido por la abolición de las restricciones a las entradas de capital. También es probable que haya contribuido substancialmente a la acumulación de grandes reservas de divisas, lo que ha dificultado el control de la inflación.

En un estudio de la magnitud de la economía ilegal del narcotráfico en Colombia, las “ganancias” financieras potenciales deben ser contrape-sadas de alguna manera con los costos económicos derivados de la violencia asociada. Las áreas rurales se han visto particularmente afectadas por el narcotráfico.

En general, mientras la agricultura capitalista de alta producción (café) ha sido afectada por una serie de problemas, el sector agrícola campesino bajo control armado (guerrillero o paramilitar) ha sido particularmente dinámico en los últimos años. El problema de la pobreza entre el campesinado se ha regionalizado al igual que la concentración de la tierra. Debe reconocerse la incidencia de un largo proceso de colonización de nuevas tierras y la aplicación de distintas políticas a cargo de los actores del conflicto colombiano (gobierno, paramilitares, guerrilla).

En las zonas controladas por la guerrilla la aplicación de los decretos 001, 002 y 003 han posibilitado un mejoramiento relativo en las condiciones de economía de subsistencia en que se desenvuelve la estructura productiva campesina. Sin tener mediciones a la vista podemos suponer que las crisis de producción alimenticia producidas por la adopción del modelo neoliberal están siendo revertidas en estos lugares, por más inestable que políticamente sea esta recuperación.

Las compras masivas de tierra por parte de traficantes de drogas han incrementado la concentración. Esto ha ocurrido principalmente en el Magdalena Medio, la región de Urabá en Antioquía, el departamento de Córdoba y los Llanos Orientales. Muchos terratenientes de estas zonas, que eran extorsionados por grupos guerrilleros establecidos de antaño, se encuentran ahora atrapados entre la guerrilla y los grupos paramilitares financiados por el narcotráfico, y quieren vender sus tierras. Investigaciones recientes en estas zonas indican que la concentración ha aumentado incluso en aquellas áreas en las que se llevan adelante procesos de reforma agraria, lo que es indicativo de un violento proceso de contrarreforma.

La producción ganadera y de cultivos legítimos en las tierras de los narcotraficantes también difiere de lo normal. Los narcotraficantes tienen recursos para invertir en nuevas tecnologías agrícolas y pueden, por tanto, incrementar la productividad agrícola con relativa facilidad. Estos, sin embargo, financian simultáneamente grupos paramilitares que generan violencia y desincentivan la participación política de los campesinos. Los salarios rurales tienden a ser más altos en estas áreas, por la escasez de mano de obra. El mayor nivel de ingresos tiene poco que ver con la productividad y está relacionado con la emigración de los trabajadores ahuyentados por la violencia.

La Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) estima que las pérdidas debidas a la violencia y la pérdida de tierras en las haciendas ganaderas asciende a alrededor de 700 millones de dólares. Los relativamente altos retornos que proporciona la producción de coca, unidos a la extendida pobreza rural, han ayudado a extender la violencia, los efectos menos visibles de la cual son el aumento en la "risk premium" para los inversores extranjeros, la depreciación del peso y el aumento en la tensión social. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima el coste total de la violencia en la pérdida de un 25% del producto potencial, y ha proporcionado financiación para afrontar los problemas asociados, incluyendo préstamos por 30 millones de dólares en 1998. Pastrana, por su parte, ha hecho llamamientos para un Plan Marshall, mediante el cual la comunidad internacional ayudaría a terminar con la violencia a través de recursos para hacer frente a los problemas sociales y disminuir la desigualdad.

La DEA

Fue fundada en 1973 y su actividad se desarrolla primordialmente en Colombia, Bolivia, Perú, Panamá y Méjico.

Si se examina de una manera general la acción de la DEA, y más globalmente la política antinarcóticos de Estados Unidos, se podrá uno dar cuenta que hace recaer todo el peso de la lucha sobre los países latinoamericanos. En primer lugar sobre los campesinos cultivadores de coca, principales víctimas de una represión que, a falta de alternativas políticas, los condena a la miseria. Las acciones son menos espectaculares y los resultados menos provechosos (por no decir inexistentes) de lo que sería luchar contra las mafias americanas (Estados Unidos es el primer consumidor mundial de cocaína) y el blanqueo de narcodólares en los bancos del norte y en los paraísos fiscales.

Contra los campesinos se utilizan los métodos más brutales: erradicación forzada, fumigaciones aéreas (que destruyen al mismo tiempo los cultivos de subsistencia), experimentación de sustancias químicas peligrosas para el ambiente y la salud.

La "guerra santa" contra la droga permite a Washington intervenir contra los movimientos o los gobiernos que no se comprometen a fondo en su campaña. Una clara demostración fue la operación Causa Justa y el arresto del general Noriega en Panamá; más mediatizadas pero igualmente reales fueron las operaciones de desestabilización contra el gobierno del MIR en Bolivia, o el conflicto con el presidente colombiano Ernesto Samper, acusado de financiar su campaña electoral con dinero de la droga. El último enemigo encontrado, las FARC, son asimiladas a una "narcoguerrilla".

La DEA está perfectamente encuadrada, en provecho de otros servicios americanos como la CIA, la cual, en nombre de dudosas razones de Estado, jamás tuvo reparos en la materia para cerrar los ojos a fin de colaborar con las mafias: la dictadura de García Meza en Bolivia o el financiamiento de los contras nicaragüenses, gracias a los beneficios del narcotráfico son los mejores ejemplos.

¿Quién controlará el narcotráfico?

Dada la distribución geográfica del poder de los paramilitares, y mientras no se demuestre lo contrario, pareciera ser que el objetivo del Plan Colombia es permitirles asegurarse un control total sobre el complejo coca-cocaína. Si el eje de los combates contra el narcotráfico es la lucha contra los cultivos ilícitos en el sur, se supone que el procesamiento, tráfico y comercialización, ubicados en el norte, no serán tocados.

Castaño, el líder paramilitar, estableció sus empresas sobre la región de Chocó y Antioquía, en el Urabá, en la frontera con Panamá. El Urabá es una zona bananera, también caracterizada como una zona de explotación petrolera donde se asientan compañías americanas y británicas. Allí se encuentran importantes reservas de gas y se asienta el trazado del proyecto de canal interoceánico que podría desplazar al de Panamá.

Sobre el este de Antioquía se encuentran grandes proyectos hidro-eléctricos y turísticos que constituyen la base material del desplazamiento forzoso de personas. La ofensiva militar planificada por el Plan Colombia tiene como prioridad el Putumayo, región atravesada por importantes ríos incluidos dentro de un megaproyecto de interconexión fluvial de América del sur y donde se asientan las principales plantaciones de coca.

De esta doble ubicación geográfica del Plan Colombia y los paramilitares, podría deducirse que el rol futuro de los paramilitares es actuar como intermediarios y controladores del negocio del narcotráfico, en acuerdo con Estados Unidos.

De Colombia sale el 80% de la cocaína y el 40% de la heroína que se consume en el mercado norteamericano. Un negocio de más de 5 mil millones de dólares anuales. Con el Plan Colombia, el imperialismo no busca erradicar el negocio de la droga, sino colocarlo bajo su exclusivo control, desplazando o subordinando a las mafias locales. Y las evidencias son obvias:

1. Los recursos del plan serán administrados por los altos mandos militares, altamente comprometidos con el genocidio de luchadores, el auspicio de bandas paramilitares y las mafias narcotraficantes. Basta ir al llamado "Barrio de los generales", ubicado en el exclusivo sector del Peñón de Girardot para verificar que las fastuosas mansiones, con valores superiores a los 1000 millones de pesos colombianos, no fueron comprados con los salarios militares sino con los cheques que regularmente les otorgan las mafias. El propio imperialismo está comprometido desde siempre en el negocio, como quedó en evidencia cuando fue procesada Laura Hiett, la esposa del ex jefe de operaciones contra el narcotráfico de los Estados Unidos en Colombia, por enviar sistemáticamente encomiendas de cocaína a Nueva York³.
2. Los militares y el conjunto del régimen político están sobornados por los narcotraficantes. De hecho el negocio de la droga es el principal negocio de los grandes grupos económicos. Los propios diarios lo admiten: "la clase empresaria no pudo adaptarse a las transformaciones operadas en la economía mundial y en su lugar apareció una nueva burguesía en ascenso vinculada a la producción y tráfico de drogas, que produce fuertes excedentes"⁴.
3. Estados Unidos y el gobierno, cuando se refieren a la lucha contra el narcotráfico, se refieren exclusivamente a los campesinos del sur del país, que son el eslabón más débil del negocio y están en municipios bajo control de las FARC. Estos representan el 1% del negocio. Es allí donde el Plan Colombia descargará su guerra química de exterminio y no sobre las zonas más prósperas del narcotráfico que están en manos del gobierno o de los paramilitares. Tampoco se ocupa el Plan Colombia del circuito de procesamiento y distribución en el que están involucrados funcionarios y militares.
4. Estados Unidos considera que el negocio de las drogas se le ha escapado demasiado de las manos. En los paraísos fiscales distribuidos por el mundo se lavan alrededor de 600 mil millones de dólares anuales. Estos inmensos capitales son determinantes (junto con la crisis de sobreproducción) de las crisis del sudeste asiático, Rusia y Brasil, provocando convulsiones financieras. Colombia es uno de los abastecedores principales de esos paraísos y Estados Unidos busca colocarlo bajo su completo control.

Estados Unidos, capital de la droga

El gasto de los norteamericanos en drogas ilícitas asciende a 63 mil millones de dólares por año. Así lo reveló en San Pablo Donnie Marshall, jefe máximo de la DEA. La demanda americana de estupefacientes representa el 16% del consumo mundial, calculado en U\$S 400 mil millones por la Casa Blanca.

Para Calderón, vocero de las FARC, "el narcotráfico es una multinacional. La casa matriz está en Estados Unidos, la fábrica más importante en Colombia y el resto de los países latinoamericanos cumplen el papel de tráfico y lavado y en otros casos de consumo".

El ejemplo de Laurie Hiett, la esposa del ex jefe de operaciones contra el narcotráfico de los Estados Unidos en Colombia, que cumple una sentencia de cinco años de prisión de Fort Worth, Texas, es elocuente. La mujer fue detenida en agosto de 1999, acusada de traficar cocaína y heroína de Bogotá a Nueva York, a través del correo de la Embajada estadounidense en ese país, donde su marido comandaba a unos 200 hombres.

El coronel Hiett había llegado a la cima de las operaciones militares de más alto riesgo tras 24 años de impecable carrera militar. Se vio despojado de su última pizca de honor cuando en julio de 2000 fue sentenciado a prisión por un juzgado federal. Los fiscales, sin embargo, predijeron que él obtendrá una "probation" sólo si demuestra que puede cuidar de los dos jóvenes hijos de la pareja. Ambos pasaron por el Comando Sur de Estados Unidos en Panamá.

Su caso significó una de las mayores vergüenzas para el Pentágono, cuando la Casa Blanca ya pensaba en lanzar el multimillonario paquete de ayuda del Plan Colombia.

La mayor parte del tráfico de drogas se realiza dentro de los mismos Estados Unidos y lo manejan las mafias norteamericanas, pero Washington quiere un control más completo sobre este negocio y sus fabulosas ganancias. En Colombia el tráfico de cocaína y heroína mueve unos 4 o 5 mil millones al año, y los

socios principales son los terratenientes y distintas camarillas empresariales, políticas y militares. Pero Estados Unidos quiere destruir los cultivos de coca de que viven cientos de miles de humildes campesinos y “secar” las fuentes de recursos de las FARC que cobran “impuestos revolucionarios” en la región.

La militarización de la “guerra” contra la droga

El uso de la coca existía ya en los Andes en los tiempos del Imperio Inca. El gobierno la detentaba como monopolio y permitía su uso sólo con fines rituales y para el trabajo en la mina. Pero si bien son productores y consumidores de coca, no son los pueblos andinos quienes inventaron la cocaína.

El complejo coca-cocaína se desarrolló en el contexto de una crisis generalizada de las economías latinoamericanas, en un transcurso de baja continua de los precios de las materias primas y la puesta en marcha de las políticas de ajuste estructural de los años 80. Así en Bolivia tras la privatización de las minas, miles de indios se vieron obligados a retirarse al Chapare donde ahora plantan coca.

Cerca del 80% de la cocaína y el 90% de la marihuana entran a Estados Unidos provenientes de América Latina. Producida en la región de los Andes (Bolivia, Perú, Colombia) la coca se transforma en cocaína en Colombia, después transita por el Caribe, América Central y México antes de penetrar en Estados Unidos, el primer consumidor mundial.

Bajo la mirada indiferente de la clase política los narcotraficantes colombianos han colocado bajo sus pies los recursos que les permiten transformarse en los primeros productores de cocaína latinoamericana.

Esta alianza de hecho ha implosionado porque los narcos, fortalecidos por su poder económico, comienzan a jugar un rol político. Esto deviene en una guerra inevitable donde el Estado los extradita hacia los Estados Unidos, tal como lo demanda con insistencia Washington.

Quizás no haya existido en los últimos 20 años una administración retóricamente más nacionalista que la de Samper. Sin embargo es quien más ha norteamericanizado la guerra contra la droga. Dicha estrategia consiste en la aceptación acrítica y la aplicación simultánea de varias tácticas punitivas: la militarización de la lucha antidrogas, que implica una participación creciente y directa de las fuerzas armadas en un combate de naturaleza policíaca; la erradicación química de cultivos ilegales mediante el uso masivo y por aspersión aérea de herbicidas cada vez más agresivos; el incremento de la criminalización y el rechazo a la despenalización o la legalización como alternativa para afrontar el problema de los narcóticos y la amenaza de la extradición de nacionales como herramienta principal para doblegar a la narcocriminalidad⁵.

En síntesis, norteamericanizar la guerra contra la droga llevó a transferir los mayores costes de la misma a los países productores, procesadores y traficantes, que son los que en realidad padecen las consecuencias más desfavorables de la demanda de sustancias ilegales en los epicentros de consumo de Estados Unidos. Esto supone establecer un límite represivo difícil de revertir en lo interno y externo. Colombia aceptó la estrategia más prohibicionista posible y va a resultar complicado y prolongado deshacerse de ella.

Para poner coto a la ola de violencia, el gobierno propuso a los carteles su rendición a cambio de su juzgamiento en Colombia. Con la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, y la detención y rendición de la mayoría de los líderes de los carteles de Medellín y Cali, las grandes organizaciones (aparte del cartel del Norte del Valle) han sido reemplazadas por una cuarentena de organizaciones de mediana importancia, sin contar las empresas familiares, sin duda de 2.000 a 3.000.

El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, se rindió y posteriormente se evadió de la cárcel “cinco estrellas” de Evingado, que él mismo mandó construir. Fue finalmente muerto el 2 de diciembre de 1993 en Medellín por una unidad de elite del ejército. Más discreto y más cercano a las elites económicas, el cartel de Cali aprovechó la caída de su rival antes de ser desmantelado en 1994.

Desde entonces los carteles prácticamente han desaparecido de Colombia, en provecho de una estructura horizontal, múltiple y diversificada. A nivel mundial, los únicos carteles en ejercicio están constituidos por los grupos mafiosos mejicanos. Por lo tanto y a pesar de esta modificación en la estructura del narcotráfico, los niveles de producción no han disminuido.

El gobierno de Samper ha avanzado en el terreno de la represión de los cultivos ilícitos en cinco departamentos de la Amazonia, a los que el 13 de mayo de 1996 declaró como Zonas Especiales de Orden Público, poniéndolas bajo control militar.

Para combatir el narcotráfico, declarado enemigo número 1 de su seguridad nacional, los Estados Unidos intensificaron su ayuda financiera y logística a los países de la región, instándolos a “militarizar la lucha”. Este “combate prioritario” ha resultado ser para Washington un excelente pretexto para efectuar su reingreso en la escena latinoamericana, decaído tras el fin de los conflictos centroamericanos y la retirada de Panamá. De este modo pudo también fortalecer a los ejércitos continentales. La CIA, la DEA, el Pentágono, el servicio de guardacostas y el Comando Sur se han movilizado para poner en marcha esta política.

Desde 1995 Estados Unidos ha multiplicado las maniobras para tratar de asegurar la permanencia de las bases americanas en Panamá (restituidas el 1º de enero de 2000 en virtud del acuerdo Torrijos-Carter). La operación consistió en camuflar esta tentativa detrás de la creación de un Centro Multilateral Antidrogas,

negociado con el presidente Pérez Balladares, pero fracasó. El Comando Sur fue trasladado de Panamá a Puerto Rico en julio de 1999. El "Imperio" debía repensar su estrategia. Se negoció la instalación de nuevas bases militares. Manta, en Ecuador; Aruba en las Antillas holandesas y la más oculta, Comalapa (El Salvador) y Tegucigalpa (Honduras).

Tanto para combatir el narcotráfico como para controlar una región estratégica, este dispositivo tiene por objeto vigilar el plan económico y el político. Y todo esto justificado por fuertes movimientos que están inquietando a los Estados Unidos: la elección del "bolivariano" Chávez en Venezuela, el crecimiento considerable de las guerrillas en Colombia, la agitación cívico-militar en Ecuador; todos países productores de petróleo.

Es dentro de esta perspectiva que debe mirarse la reciente intromisión de Washington en el conflicto colombiano. Bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico, se ocupa bien de "cazar" a la guerrilla, en especial a las FARC, mientras sienta a Bogotá en la mesa de negociaciones, en una demostración de fuerza favorable al poder.

De este modo el Plan Colombia, que acuerda al presidente Pastrana una ayuda de 1.6 mil millones de dólares para "consolidar los mecanismos democráticos y luchar contra el narcotráfico" está, de hecho, destinado esencialmente a la contrainsurrección. Los Estados Unidos cuentan con 300 a 400 consejeros civiles y militares en Colombia.

La insistencia norteamericana en proponer una solución exclusiva-mente militar a un problema tan complejo como los cultivos ilícitos y el narcotráfico obliga a la guerrilla a profundizar su ingreso en la guerra. Por donde se mire el enfoque, además de ser trágico, es claramente equivocado.

Una guerra perdida

Toda la militarización anterior, de casi dos décadas, no tuvo éxito. Circunscripto en los países andinos, ante arremetidas guerreristas, el narcotráfico se reorganizó y se reestructuró, buscando nuevas tierras para los cultivos y nuevas rutas para el transporte. Países ajenos o de secundaria importancia se insertaron en el circuito del tráfico. Hoy en día el mapa del narcotráfico incluye a la casi totalidad de los países del continente.

El circuito basado en la división internacional del trabajo de acuerdo a la cual existían países cultivadores, refinadores, de tránsito y paraísos fiscales, se desdibujó. El universo criminal se fragmentó. A pesar de ello, se sigue por el mismo infructuoso camino que está llevando a los países de la región hacia una peligrosa desestabilización.

La razón de esta decisión parece residir en que por este camino se puede implantar un control sobre el territorio latinoamericano. A través de la militarización se puede llevar a cabo la tarea de ejercer una estricta vigilancia sobre territorios considerados estratégicos. Uno de ellos es la Amazonia con sus recursos naturales no renovables y sus fuentes de agua, vitales en un próximo futuro en la determinación del mapa del poder. Permite también implantar un control sobre las poblaciones vapuleadas por el empobrecimiento y la exclusión en aumento.

Las políticas represivas permitieron una reducción importante de los cultivos de coca en Perú (de 140.000 has. a 40.000 has.) y en Bolivia (de 35.000 has. a 5.500 has.). Pero no han hecho más que trasladar el problema, dado que el al mismo tiempo la producción se ha desplazado hacia Colombia, donde ocupa ahora 120.000 has.

Esta pseudo lucha contra la droga ignora deliberadamente las raíces socio-económicas del problema: más que constituir una "elección de vida" los cultivos ilícitos permiten sobrevivir a decenas de miles de campesinos. Frente a la ausencia de toda reforma agraria, de toda política de desarrollo, librados a su propia suerte, han accedido a los beneficios que no pueden ser otorgados por ningún cultivo tradicional. Más que esto, los proyectos de "desarrollo alternativo" que se plantean reemplazar los cultivos interdictos, no han pasado nunca de la etapa de discurso sin que se los pudiera comprobar en la realidad. Por otro lado el Plan Colombia amenaza con esparcir en el aire productos químicos que destruyen tanto la coca como los cultivos de subsistencia, poniendo a los campesinos al borde de la desesperación y la miseria.

Por eso la política represiva no hace más que expandir los cultivos ilícitos, aumentar los precios y permitir a la guerrilla consolidar su base social mediante el apoyo a los pequeños productores y aumentar sus recursos financieros, por el cobro de un impuesto revolucionario sobre la coca.

Mientras tanto el blanqueo del dinero sucio continúa, para beneplácito de los grandes aparatos bancarios americanos y europeos.

El Plan Colombia está concebido para llevar a cabo una guerra prioritaria contra la guerrilla y, en forma complementaria, contra los cultivos ilícitos. No apunta a colocar el flagelo de los cultivos ilícitos en un escenario más complejo, en el que juegan otros actores diferentes a la guerrilla.

Se considera que si se logra erradicar esos cultivos, a cualquier costo, la batalla contra el narcotráfico estará asegurada en un buen porcentaje. En consecuencia, no se tienen en cuenta los demás actores, ni las demás zonas en las que la coca se procesa y se envía al exterior.

La “narcoguerrilla”

Los anuncios de guerra contra las FARC fueron claramente expresados por Bill Clinton: “los rebeldes marxistas y los paramilitares de derecha financian, cada uno, sus actividades con los centenares de millones del narcolucro. Debido a la fuerte presencia insurgente y paramilitar, las fuerzas de seguridad colombiana no cuentan con capacidad de realizar operaciones antinarcóticos efectivas en las mayores regiones de Colombia, donde se encuentran unas dos terceras partes de los cultivos de coca de Colombia. Esta región, particularmente los departamentos de Putumayo y Caquetá, está aislada geográficamente y dominada por las FARC”⁶.

Barry McCaffrey ya hace tiempo fue absolutamente claro cuando reclamó “el aumento de la presencia militar estadounidense para contener la expansión del narcotráfico”, aclarando que “narcotráfico y guerrilla son lo mismo”⁷.

Pero el sofisma de la narcoguerrilla no resiste el menor análisis. Un kilo de base de coca en su lugar de producción (la selva colombiana) tiene un precio de 1.000 dólares. Cuando se ha transformado en cocaína y se vende al menudeo en Nueva York, París o Frankfurt alcanza el precio de 150 mil dólares, lo cual indica que las ganancias no circulan precisamente en las selvas colombianas ni quedan en poder de los campesinos coccaleros ni de los raspachines, base social de las FARC, sino de los poderosos agentes de la mafia internacional y de todos los que intervienen en el negocio (multinacionales productoras de químicos, bancos). Con respecto al precio de venta en las ciudades del primer mundo, el campesino coccalero se queda con el ridículo 0,67%, mientras que el Plan Colombia destina el 87% de su presupuesto a la erradicación de los cultivos (mil millones de dólares).

También se parte del supuesto perverso de que el narcotráfico existe porque hay cultivos ilícitos negándose a ver la importancia del consumo norteamericano en la generación del negocio y que los márgenes de ganancia son elevados por el carácter ilegal del negocio pero no por el negocio mismo.

En Colombia y Estados Unidos, que ahora parecen ser un solo estado en cuestiones de narcotráfico, se afirma sin ninguna prueba consistente que las ganancias de las FARC son de 500 millones de dólares. Eso sería el 1% del comercio mundial de la cocaína exportada desde Colombia (500 tons. a 150 mil dólares el kilo). ¿Por qué entonces una guerra generalizada contra campesinos cuya participación en el precio mundial de la cocaína es tan sólo del 0,67% y de una guerrilla que recibe el 1% de los dividendos del negocio? Por qué Estados Unidos no declara la guerra a aquellos que se benefician con el 99% de las ganancias del negocio? Además las FARC obtienen sus ingresos no porque sean un cartel ni tampoco porque estén comprometidas con el tráfico internacional de estupefacientes. Esos ingresos provienen del cobro que por gramaje (es decir por peso) hacen a los cultivadores, comerciantes y procesadores de coca que se encuentran en su zona de influencia en el sur de Colombia.

La persecución indiscriminada a los cultivadores y narcotraficantes aumenta las ganancias, pues encarece los precios de venta y difunde su cultivo a lo profundo de la selva amazónica, que tiene 650 millones de has. de reserva, con las consecuencias ambientales y humanas que esto conlleva.

Oficialmente, algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos calculan que como resultado de la lucha contra los cultivos ilícitos se desplazará a 150 mil colonos y campesinos relacionados con el negocio, lo que indica la magnitud de la guerra que se avecina en las selvas colombianas. Incluso antes de comenzar la guerra a gran escala, la Amazonia ya es un nuevo terreno del narcotráfico.

Contradicciones que genera el narcotráfico

1. El negocio de la coca, como el de la marihuana en su momento, ha creado una base social. Un sector de la población deriva su sustento de actividades relacionadas con la producción y elaboración de la misma: son los trabajadores de los grandes laboratorios, los transportadores y sobre todo los cultivadores. Es un hecho aceptado hasta por las FARC que en muchas zonas de su influencia, los campesinos cultivan la coca y que ellas las orientan en el sentido de sacar buenas ganancias de esta actividad económica⁸.
2. Otra razón es la influencia política que ha logrado tener el narcotráfico y que se expresa en sectores de parlamentarios, jueces, políticos, militares y altos burócratas del Estado que obtienen beneficios económicos de estas actividades y obstaculizan la acción del Estado contra los narcotraficantes o los defienden, así sea de manera indirecta.
3. En tercer lugar está el precio político que han tenido que pagar los gobiernos y sectores de la burguesía que han ido a una lucha más abierta y directa contra la droga. La lumpemburguesía del narcotráfico se ha defendido y con sus bandas armadas han asesinado ministros de justicia como Lara Bonilla, procuradores generales de la nación como Carlos Maura Hoyos, importantes periodistas como el director de El Espectador, Guillermo Cano, y numerosos jueces y magistrados, al mismo tiempo que ha intimidado a amplias capas de la burocracia estatal.
4. Las fabulosas ganancias que produce el tráfico de drogas benefician no sólo a los capos del narcotráfico sino a sectores importantes de la burguesía y de la burocracia estatal, incluidos el ejército y la policía, y a la economía del país en su conjunto.

Estas son las razones de fondo de las contradicciones que le generan a Colombia los aprestos de guerra contra el narcotráfico que impulsa Estados Unidos, que muestra interés en combatir con mucha intensidad y celo la producción en sus países periféricos pero deja correr el negocio en su propio territorio. “¿Por qué la marihuana de allá (Estados Unidos) es buena y la de acá es mala?”, se preguntó el ministro de Justicia de Colombia⁹.

Los acuerdos con la Unión Europea

Coincidiendo con el surgimiento de la lucha contra la droga como prioridad de la agenda internacional en el último decenio, la Unión Europea se ha dotado de la capacidad institucional necesaria para encarar la tarea a escala regional. La política antiestupefacientes ha cobrado creciente relevancia en las relaciones de Colombia con la UE. Este fue uno de los principales puntos tratados el 8 de septiembre de 1997 durante la visita a Colombia del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, quien insistió en que las relaciones de Europa con Colombia en materia de drogas se basan en el concepto de “responsabilidad compartida”. Diferenciando la visión europea del proceso de certificación de Estados Unidos, el vicepresidente Marín sostuvo que la UE no condiciona su cooperación económica a la lucha de las autoridades colombianas contra los estupefacientes.

La Comisión Europea sólo dispone de poderes limitados en la formulación de la política exterior sobre drogas, a pesar de que la UE puede aplicar políticas de alcance regional sobre el blanqueo de fondos o el comercio de precursores químicos. Del mismo modo, puede utilizar la política comercial para reforzar los vínculos en materia de drogas. Desde 1991, las exportaciones colombianas disfrutaron, junto con las de otros países andinos y centroamericanos, de preferencias de acceso al mercado comunitario dentro del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), como contribución a la lucha contra las drogas. Esta es la principal medida de apoyo de la UE a aquellas regiones que luchan por combatir el narcotráfico.

El régimen comercial, emanado de una iniciativa colombiana de 1990 que buscaba el apoyo europeo en este sentido, se ha hecho más efectivo con el tiempo, excediendo el marco preliminar de cuatro años fijado originalmente. La UE extendió indefinidamente el SGP para productos agrícolas y pesqueros el 8 de abril de 1997. Gracias a una mayor diversificación de exportaciones y a la inclusión del café en la lista de productos agrícolas acogidos al Sistema, Colombia obtiene mayores beneficios de los acuerdos SGP que ningún otro país. El porcentaje de exportaciones colombianas que se benefician del régimen pasó del 22,5% en 1990 a más el 85% en 1994. El Ministerio de Comercio Exterior calculó que los beneficios adicionales derivados del SGP podrían haber contribuido a crear casi 5,5 millones de puestos de trabajo, esto es, un 26% del empleo nacional.

Varios Estados europeos, como España, Italia y el Reino Unido, mantienen con Colombia sólidos vínculos bilaterales sobre crimen internacional y estupefacientes. A lo largo de los años noventa, el Reino Unido y Colombia han consolidado sus lazos en actividades antidroga y cooperación en la aplicación legislativa. La Policía británica realizó varios programas de formación de miembros de las fuerzas de seguridad colombianas en materia de control de drogas. Respecto a España, el 9 de febrero de 1998, María Emma Mejía, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, y Fernando Villalonga Campos, Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, firmaron un intercambio de notas que cerraba la negociación de un Tratado de Transferencia de Prisioneros. En virtud del acuerdo, España brinda a Colombia asistencia en materia de gestión carcelaria, que incluye al presente la formación de guardianes de prisión. En noviembre de 1997, 43 españoles estaban detenidos en cárceles colombianas, mientras que las prisiones españolas albergaban a 1.345 ciudadanos colombianos.

La cooperación UE-Colombia sobre drogas se inscribe también en el marco general de las relaciones interregionales. La UE concluyó con el Pacto Andino un convenio sobre prevención del comercio de precursores químicos. El 12 de febrero de 1998, la UE y la Comunidad Andina (CAN) suscribieron un acuerdo de cooperación y asistencia técnica en la lucha contra la droga por valor de 900.000 ECUS, de los cuales la UE aportará 650.000. Los recursos se destinarán a la armonización de legislaciones, así como a combatir el comercio de precursores y el blanqueo de dinero.

La propuesta de las FARC

En junio de 2000, en la zona de distensión de los llanos del sur del país, comenzó una audiencia internacional que reunió a delegados de 21 países para hablar por primera vez sobre la solución al fenómeno del narcotráfico a partir de la sustitución de cultivos ilícitos¹⁰.

El encuentro fue convocado por Andrés Pastrana y las FARC. Los delegados fueron recibidos en el aeropuerto del municipio de San Vicente del Caguán con una calle de honor de 50 rebeldes con sus fusiles al hombro y con brazaletes con la bandera de Colombia. A la entrada de la Villa Nueva Colombia los esperaba una gran pancarta que decía: “Welcome International Delegates – FARC people army”. Al lado había dos pinturas gigantescas: una del libertador Simón Bolívar y otra de Manuel Marulanda, “Tirofijo”.

Los países que enviaron representantes son España, Noruega, Francia, Suiza, Grecia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia, Austria, Gran Bretaña, Dinamarca, Portugal, Brasil, México, Costa Rica, Canadá, Japón y Venezuela. Asistieron en total 80 personas, incluido un delegado del Vaticano. Estados Unidos fue invitado pero se negó a asistir.

Las FARC negaron ser una narcoguerrilla y criticaron la ausencia de delegados de ese país, pues consideran que el principal consumidor de drogas ilícitas del mundo es uno de los responsables de encontrar soluciones al fenómeno. El grupo guerrillero presentó una propuesta concreta para erradicar 8.756 has. de coca ubicadas en el municipio de Cartagena del Chairá, pegado a la zona de distensión.

La sustitución de cultivos se haría con financiación internacional durante 5 años y beneficiaría a los 36 mil habitantes del lugar. La guerrilla pretende asistencia integral para los campesinos en vez de represión, inversión social y en infraestructura para transformar la zona en un polo turístico con inversión privada.

Las FARC propusieron que si ese proyecto resulta exitoso el gobierno debe comprometerse a extenderlo a todo el país y a suspender las operaciones de represión contra los cultivadores.

“No queremos que sigan fumigando con veneno nuestras parcelas y a nuestras familias. Necesitamos ayuda internacional para dejar de sembrar coca y empezar a producir cultivos legales”, dijo un dirigente campesino de Putumayo, donde hay 60 mil has. de coca que empezarán a ser erradicadas en breve por tres batallones antinarcóticos del ejército colombiano, entrenados por tropas norteamericanas.

La conexión Surinam

En julio de 2000 se produjo un incidente diplomático entre Brasil y Colombia a raíz de que dos aviones brasileños fueron abatidos por la Fuerza Aérea de Colombia, en una ciudad fronteriza con el Brasil, donde llegaron con un cargamento de armas y de donde intentaron despegar con drogas.

El gobierno de Andrés Pastrana acusó a Brasil de no combatir el contrabando de armas y drogas en sus fronteras con Colombia. El ministro de Defensa brasileño, Gerardo Quintao, respondió con evidente irritación: “Brasil es un país soberano y competente para tomar las medida que el caso requiriera”¹¹.

Las dos naves habrían decolado desde el sur del estado de Pará con destino a Vaupés, una ciudad fronteriza colombiana. Allí debían entregar armas y recibir drogas. Las dos máquinas serían propiedad de brasileños que trabajan para un cartel de la droga con sede en Surinam.

Desde febrero a julio la fuerza aérea de Colombia destruyó 6 aviones brasileños el 26 de febrero, el 22 de marzo, el 1º de abril, el 13 de junio y el 9 de julio (2). Esas máquinas descargaron armas en la zona de influencia de la localidad colombiana de Vaupés, limítrofe con el estado brasileño de Amazonas. Fueron destruidas en tierra cuando ya habían cargado drogas y estaban listas para despegar.

Salieron de Surinam, la ex Guayana Holandesa, que se especializa en el contrabando de armamento. El camino es a través del Amazonas brasileño con escala en el sur del estado de Pará. De allí continúan hacia Surinam a 8 horas de vuelo, el país que está bajo la mira del mundo por ser un centro de distribución de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

El interior de Surinam está despoblado y su frontera con Guyana es una auténtica tierra de nadie. Esa área está en manos de uno de los mayores traficantes: lleva armas para Colombia y recibe, en pago, cocaína que coloca en Europa¹². El caso saltó a la luz el año pasado en parte por el trabajo de la Policía Federal brasileña. Pero sobre todo por la intensa investigación realizada por la Comisión Parlamentaria de Combate al Narcotráfico en el Brasil.

“Las armas que fueron encontradas son de altísima tecnología. Desde ametralladoras Uzi, pistolas Glock y fusiles AK-47, hasta misiles. Son provistas por los traficantes desde Florida y por la mafia rusa. Son las mismas organizaciones que proveyeron de armas a Yugoslavia, durante la guerra”.

La primera información sobre la conexión Surinam surgió en agosto de 1999 cuando fueron detenidos cinco brasileños en Oriximiná, al sur del estado de Pará. Uno de ellos, Leonardo Días Mendonca, propietario de estancias en el estado de Pará, era el líder de una organización clandestina vinculada al transporte de armas y drogas entre Surinam y Colombia.

Esa banda estaba vinculada el ex presidente de Surinam, Desi Bouterse, buscado por Interpol a pedido de Brasil y de Holanda por el envío de drogas a través de territorio brasileño con destino a Amsterdam y el resto de Europa.

La conexión Brasil

Donnie Marshall, jefe máximo de la DEA, llegó a Brasil en septiembre de 2000 cuando este país está por lanzar el Plan Cobra para prevenir los efectos del plan Colombia. Marshall dijo que los químicos denominados precursores, que se utilizan para extraer los alcaloides de la pasta base de coca provienen en forma creciente del Brasil. “Los traficantes usan cada vez más productos químicos de origen brasileño. Existe la posibilidad de que traficantes con base en Brasil comiencen a competir con los carteles radicados en Colombia”¹³.

Notas

1. Comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, mensaje emitido en Washington el 13 de julio de 2000.
2. Todos apoyan el Plan Colombia, salvo Brasil, Telma Luzzani, Clarín, 8 de septiembre de 2000.
3. La mujer del coronel se confiesa, Clarín, 29 de agosto de 2000.
4. Cronista Comercial, 7 de julio de 1999.
5. Colombia y Estados Unidos, Juan Gabriel Tokatlían, Política Exterior Nº 60, Bogotá, noviembre-diciembre de 1997.
6. Presentación del Plan Colombia ante el Congreso de Estados Unidos, 11 de enero de 2000
7. Página 12, 31 de julio de 1999.
8. Entrevista a Jacobo Arenas, La Semana, 10 de marzo de 1987.
9. Diario El Siglo, 2 de agosto de 1988.
10. Nelson Padilla, Clarín, 30 de junio de 2000.
11. Incidente entre Brasil y Colombia, Eleonora Gosman, Clarín, 11 de julio de 2000
12. Mafias de Colombia y Brasil, unidas en la conexión Surinam, Eleonora Gosman, Clarín, 13 de julio de 2000.
13. Millonario consumo de drogas en los Estados Unidos, Eleonora Gosman, Clarín, 22 de septiembre de 2000

Capítulo 10 – El conflicto regional

Estados Unidos, único dueño del escenario mundial desde fines de la década de 1980, ha perdido la iniciativa en la región y desde hace tiempo viene actuando a contragolpe en más de un terreno. El punto de inflexión puede situarse en diciembre de 1998 cuando un terremoto político demolió en Venezuela al sistema partidario que sostuvo el equilibrio durante medio siglo en aquel país y dio paso a un fenómeno nuevo, encarnado en el presidente Hugo Chávez que promovió una sucesión de movimientos que precipitaron conflictos latentes hoy focalizados en dos puntos: la recomposición de la OPEP y el encuentro de Brasilia.

Madeleine Albright viajó a obtener apoyo para frenar la crisis de Ecuador y para convencer a Chile y Argentina de que no se plieguen a la iniciativa brasileña. También fueron ostensibles los esfuerzos del Departamento de Estado para neutralizar el alza de los precios del petróleo. En ambos casos, el gobierno norteamericano corrió tras los acontecimientos y en ambos casos fracasó.

Clinton viajó personalmente para presentar y apoyar el Plan Colombia. En Cartagena las autoridades se empeñaron por mostrar un panorama a la altura del ilustre visitante. Además de asumir los costos de refacción de varias casas derruidas, para sorpresa de sus paupérrimos habitantes, pintar muros y plantar árboles, juntaron apresuradamente una multitud de niños que viven en la calle y los ubicaron, temporariamente en un “centro recreacional”. También levantaron 1500 puestos de venta callejeros y borrarón de las paredes toda expresión de disenso político. Tanto esmero se vio empañado en la mañana del 30 de agosto, durante el recorrido del presidente estadounidense: aparecieron pintadas en letras rojas palabras de antigua resonancia: ‘yanquis go home’.

Bush ya había visitado Cartagena en 1990, para iniciar una cruzada antinarcóticos que evidentemente fracasó. El viaje de Clinton reafirma la preferencia por el unilateralismo de Estados Unidos en materia hemisférica; entorpece la cumbre de presidentes sudamericanos convocada por Brasil; contribuye a identificar a Colombia como el mayor problema de seguridad en el área y refuerza la militarización andina y amazónica para contener la crisis colombiana.

La visita también simboliza el cruce de una delgada línea: Estados Unidos pretende asegurar su esfera de influencia más allá de la Cuenca del Caribe. Ya domina su mare nostrum y busca un control en los Andes, esa terra nostrum de Sudamérica¹.

La intrincada pugna por espacios de poder lleva cada vez más a que Washington y Brasilia se topen y no de manera amistosa. Así, la definición de alianzas y balances es clave. Estados Unidos fuerza un cordón sanitario alrededor de Colombia con el concurso resignado de Panamá y Ecuador y el apoyo ambiguo de Perú, mientras Brasil y Venezuela arman sus fronteras con Colombia con objetivos diferentes a los de Washington. A Estados Unidos le preocupa las FARC, que ya dijeron que intensificarán la guerra: “lo único que tenemos para decir es que en la medida en que el gobierno, respaldado por el imperialismo estadounidense, se viene armando, no se puede esperar que nos quedemos con los brazos cruzados. Nosotros estamos en todo el derecho de adquirir el armamento que consideremos necesario para responder a esa arremetida del imperialismo”, dijo en la zona de distensión el vocero rebelde Carlos Lozada.

Pero, además de las FARC, la preocupación de Estados Unidos también tiene otro origen, que acaso podría explicar el apuro de esta operación de desembarco militar: el brusco cambio de rumbo de un país que además de ser la llave para América del Sur y poseer el segundo yacimiento petrolífero del mundo, es el primer exportador de esa materia prima vital a Estados Unidos.

Desde antes de asumir su cargo el presidente Chávez atacó por ese flanco. Entonces el barril de petróleo estaba por debajo de los 10 dólares. Menos de un año después supera los 30 dólares y en ese nivel se mantiene.

Una de las innumerables vaciedades que alcanzaron categoría de verdad inapelable en los últimos años es la del fin de las naciones y en consecuencia el fin de las soberanías y el imperio de la economía más fuerte. Que el mundo marcha en el sentido de la unificación es una obviedad con 500 años de antigüedad. Pero en tanto el impulso hacia ese destino resida únicamente en la lucha por áreas de mercado, lejos de acabar con las naciones y los nacionalismos, la globalización revalidará a aquéllas contra todo anacronismo y exacerbará a estos contra toda lógica. No otra cosa es lo que el mundo observa en el Golfo Pérsico, en la ex URSS y aún en la Unión Europea.

En América Latina, en cambio, la sobresaliente reaparición de conceptos y conductas de independencia y soberanía nacional no ha adoptado hasta el momento aquellos contenidos. Entre las muchas responsabilidades que afrontan los partidos e intelectuales sinceramente comprometidos con los valores democráticos está precisamente la de evitar que una continua política de sumisión a las exigencias de Washington empuje hacia un nacionalismo ultramontano, que en última instancia sería percibido por Washington, con razón, como un mal menor. Es por eso que la línea aplicada por el venezolano Hugo Chávez alarma tanto a la Casa Blanca como a la casi totalidad de los dirigentes políticos tradicionales de la región.

Es acaso por las inexorables derivaciones de esta realidad que Estados Unidos ha resuelto responder con la fuerza. Pero aún desde el punto de vista militar el centro de gravedad no está en Colombia. Estados Unidos ha montado una base aérea en el puerto ecuatoriano de Manta, que aceleró la fractura del ejército, como se comprobó en la participación de altos mandos en la insurrección de enero. En línea con esta política está la decisión de montar una base de lanzamiento de cohetes en El Esequibo, territorio en litigio entre Venezuela y Guyana, situado en la estratégica desembocadura del Orinoco. El conflicto viene tensándose desde que, tras la firma de un contrato entre la empresa estadounidense Beal Aerospace y el gobierno guyanés, el canciller venezolano José Vicente Rangel presentó una protesta formal oponiéndose al acuerdo. Aparte de la histórica reclamación territorial, las autoridades venezolanas alegan contra el rescuicio contractual abierto para que la base pudiera quedar bajo custodia de fuerzas militares estadounidenses.

La abrupta militarización de las relaciones y del lenguaje político provocada por el Plan Colombia es indicativa de una tendencia de altísimo riesgo para el futuro inmediato del hemisferio. Brasil ha informado que pondrá en funcionamiento en breve el llamado Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM), mediante el cual se propone controlar con aviones, radares y satélites el espacio aéreo de la región. Es imposible no entender el mensaje dado por los gobiernos de Brasil y Venezuela horas antes del arribo de Clinton a Colombia: el jefe del Estado Mayor del ejército venezolano anunció que acababan de firmar con su par brasileño un acuerdo de cooperación militar².

Estados Unidos no puede defender políticamente su Plan Colombia si no va acompañado de negociaciones; Pastrana, las FARC y el ELN están obligados a responder a la opinión dominante en la población, que demanda paz. En el caso de las FARC, dan por seguro la intervención militar estadounidense y trabajan para continuar la guerra bajo las condiciones que tal presunción supone. El Estado Mayor que las combate piensa que las FARC han montado una infraestructura de retaguardia en toda la región y lo mismo parecen creer los gobiernos del área, preocupados por el modus operandi que podría tomar esa estructura en condiciones de guerra sin cuartel. El Pentágono ya ha desembarcado en Colombia más de 2 mil asesores militares. La táctica guerrillera de impedir todo posible argumento para la intervención directa de Estados Unidos en el combate los ha preservado. Pero es una ley de hierro que en las actuales circunstancias estos hombres que asesoran a los mandos a todo nivel, conducen helicópteros, organizan la inteligencia e incluso, según afirman personalidades creíbles de Bogotá, alimentan y adiestran a los paramilitares, serán blanco del poder de fuego guerrillero. Y si hay algo que teme la Casa Blanca por su significado para la población estadounidense, que no olvida la guerra de Vietnam, es el arribo a sus aeropuertos de las tenebrosas bolsas de nylon negro con los restos de militares caídos en combate en el exterior.

Un artículo de la estadounidense Christine Lauber relata su vista a la oficina del senador Mike DeWine, coautor del proyecto de lo que es en la actualidad el Plan Colombia, para insistirle en el peligro de que el proyecto agudice el conflicto y afecte las posibilidades de encontrar una salida negociada a la guerra civil que se vive en el interior de Colombia. Lauber le recordó al senador la forma en que su gobierno apoyó a los "escuadrones de la muerte" en El Salvador y le recordó además el escándalo Irán-Contras. La respuesta del asistente del senador fue alzar los hombros y decir "ese es el precio que hay que pagar para ser una potencia mundial"³.

Durante la semana anterior al arribo de Clinton a Cartagena cinco países (Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela) movilizaron tropas tomando posiciones en áreas fronterizas con Colombia, dato que no registra antecedentes en la historia latinoamericana desde las guerras de independencia.

Tal diversidad de condiciones y protagonistas ilustra la complejidad del caso colombiano frente a otras experiencias de pacificación en América Latina. A diferencia de El Salvador y Guatemala, Colombia presenta varias fuerzas irregulares activas en buena parte del territorio nacional. Asimismo, los principales movi-

mientos no son monolíticos y ningún actor externo está directamente involucrado en la crisis. El número de insurgentes es relativamente alto; si en Guatemala la desmovilización afectó a unos 3.000 subversivos, en Colombia este número podría ascender a 15.000, lo que hará difícil y onerosa su reinserción en la vida civil. Otras experiencias en América Latina sugieren también el peligro potencial de la desmovilización de guerrilleros, de paramilitares y de patrullas civiles de defensa creadas por las FFAA. Una vez finalizado el conflicto en El Salvador y Nicaragua, miles de armas quedaron en manos de civiles, lo cual provocó una oleada de crimen y bandolerismo rural.

Las condiciones sociales que han permitido la conflagración colombiana existen también en Ecuador, Perú y Bolivia, y en regiones de Brasil donde ya se expresan a través del Movimiento de los Sin Tierra (MST).

El problema con el norte de América del Sur es que es una gran reserva de mano de obra barata, que va a actuar como factor competitivo si se establece un mercado libre, y más aún si hubiera libre circulación de personas⁴. El apresuramiento del nuevo gobierno republicano de Bush en lograr la aprobación del Congreso norteamericano para el ALCA es un claro indicio de la importancia estratégica de América del Sur para revitalizar la economía norteamericana.

Colombia es hoy el principal productor de coca con sus 120 mil has. plantadas. Pero los narcotraficantes tienen una dificultad: los cultivos están en la banda oriental de la cordillera de los Andes, en la cuenca del Amazonas; en cambio, los laboratorios están en la cuenca del río Orinoco, debido a que por ese río llegan los productos químicos. Como entre estas dos cuencas no hay rutas, el transporte de la pasta a los laboratorios se debe hacer por avión. Ahí intervienen los pilotos brasileños. Esa especialización de Brasil ocurrió por la fiebre del oro de los años 80. Los garimpeiros necesitaban hombres con capacidad para aterrizar en pistas de tierra de 300 metros. Con la decadencia de esa actividad, esos pilotos se convirtieron en la mano de obra del transporte de la droga.

La guerra regional

El Plan Colombia apunta a intervenir en tres focos geográficos:

1. Departamento de Putumayo, la zona fronteriza más conflictiva con Ecuador. Allí operan los grupos ultraderechistas de Autodefensa, parte del ELN y el Bloque 48 de las FARC.
2. La provincia fronteriza de Sucumbíos (Ecuador) es vista como la región que abastece a todas estas fuerzas. El resto de las operaciones militares se concentrarían en el norte y suroeste del país.
3. Pero en el enfoque geopolítico del Pentágono el puerto de Manta (provincia de Manabía, litoral pacífico de Ecuador) es el componente clave del Plan Colombia.

La invasión por tierra está descartada por ahora, la tendencia es impulsar la intervención por aire y mar, como en la última guerra de los Balcanes. La base de Manta, en Ecuador, es algo más que “un punto de apoyo logístico”. El plan Colombia le ha asignado un rol similar al que tuvo la base militar de Palmerola (Honduras) en la guerra entre Nicaragua y El Salvador.

El general Charles Wilhelm, jefe del Southcom, explicó que Estados Unidos ve a Manta como “el sitio idóneo para sustituir las capacidades perdidas al abandonar la base aérea de Howard en Panamá”.

Para Wilhelm “la importancia de Manta radica en que se trata del único sitio que nos dará el alcance operaciones que necesitamos para cubrir todo Colombia, todo Perú y las áreas cultivadas con coca de Bolivia”. La crisis económica y política de Ecuador, con más de 80% de su población en la pobreza, conduce a mirar como tabla de salvación cualquier ayuda económica que venga del exterior. El cheque de 1.300 millones de dólares que Clinton entregará a Pastrana, incluye 47 millones para las “funciones de inteligencia y vigilancia de Ecuador”.

El Plan Colombia pretende el aislamiento de los guerrilleros en aquellas zonas del suroeste donde se les puede detectar mediante los modernos aparatos de inteligencia y destruirlos sin necesidad de una invasión por tierra. Las Fuerzas Armadas de Ecuador vienen reforzando el cordón fronterizo con Colombia. Desde inicios de 2000, unos 500 uniformados han incrementado el patrullaje, vestidos con botas especiales y pantalones de malla y se pasean en las zonas selváticas de Carchi y Sucumbíos con la consigna de evaluar lo que pasa al otro lado de la frontera⁵.

Las importaciones agrícolas de Colombia han aumentado un 90% lo que significa un duro golpe para el empleo en las zonas rurales, escenario principal de la guerra.

Y el éxodo de los colombianos que viven en la zona ha comenzado hacia Ecuador, donde día a día llegan cientos de personas a Tulcán, colindante con Ipiales, para abastecerse de víveres⁶.

El número 2 del departamento de Estado, Thomas Pickering, dijo que Colombia no es Vietnam y dijo que se trata de una crisis regional⁷. Pickering aseguró que, a diferencia de lo que ocurrió en Vietnam, Estados Unidos no tiene planes de enviar tropas a Colombia para otra cosa que no sea entrenamiento de las fuerzas militares.

“La militarización del conflicto de la droga fue iniciada hace ya tiempo por la guerrilla y los paramilitares, que utilizan hombres bien armados, bien equipados y bien entrenados para proteger el narcotráfico”, dijo Pickering.

De los 1.300 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos destinó a Colombia 180 millones serán redestinados a Brasil, Ecuador y Bolivia para ayudar a la erradicación de los cultivos de drogas.

El “olvido” norteamericano

La cumbre de 12 presidentes latinoamericanos que se inició el miércoles 30 de agosto de 2000 en Brasilia desató pasiones. Clinton de pronto se sintió culpable y reconoció que su gobierno había prestado “poca atención” a esta parte del continente⁸. Albright despertó de su sueño donde sólo existía el norte e inició una visita de urgencia por Brasilia, Buenos Aires, Santiago, Lima y Quito. Cuando los presidentes latinoamericanos desembarcaron en Brasilia, Clinton inició una visita a Colombia, un país sumido en una crisis política que agudizaba el declive económico. Los “olvidos” nunca resultan gratuitos y el gobierno norteamericano comenzó a sentirlo en carne propia, justo cuando su titular estaba por irse. Brasil está convirtiéndose en líder regional justo en este momento.

En Brasilia, Pastrana trató por todos los medios de convencer a sus colegas sudamericanos de que no existe ningún peligro de contaminación por las fumigaciones. Fracasó en lograr que la reunión endosara el Plan Colombia; se estrelló contra la férrea oposición de la cancillería de Itamaraty.

Pero Brasil no era el punto preocupante para Estados Unidos según la limitada visión de la política exterior de la administración Clinton. La calamidad venía del sur de Colombia: Ecuador y Perú, dos democracias frágiles y con crisis sociales abismales. La nueva administración Bush parece ampliar el abanico geoestratégico y Brasil y Venezuela, tarde o temprano, caerán en el ojo de la mira de los halcones del gabinete.

En cuanto a Brasil el Departamento de Estado no tiene dudas: ha diseñado un cerrojo a lo largo de los 1.600 kms. de frontera con Colombia que (supuestamente) impedirían cualquier aventura de los narcos y eventualmente de la guerrilla de atravesar los límites. “La operación militar de clausura para el paso de los narcos y guerrilleros por los puntos clave de esa frontera se puede ver en los mapas satelitales”, comentaba una fuente militar.

La preocupación de Estados Unidos es que, así como la guerrilla de las FARC estableció bases hacia el norte de Colombia (en la temible frontera del Darién, que separa a este país de Panamá), lo mismo puede ocurrir en el futuro con Ecuador. La selva del Amazonas que comparten cuatro países, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, es difícil de vigilar, sobre todo si no hay fuerzas militares bien pertrechadas.

El Plan Colombia tiene todos los ingredientes para convertir la región en un caos. Para Brasil y Venezuela el Plan tiene visos de gravedad doméstica inminente. Brasil se ha cansado de expresar su enorme desconfianza a la presencia norteamericana en la región y con su poderío tracciona al resto. La declaración final de la reunión de presidentes sudamericanos en Brasilia no contiene ninguna referencia al Plan Colombia. Expresa el apoyo de todos a los esfuerzos de paz del presidente Pastrana, en términos así de generales.

Ecuador, a través del derrocado Jamil Mahuad, firmó un convenio con el SouthCom. Es un acuerdo secreto que habilita a los militares yanquis a realizar operaciones de inteligencia desde la base de Manta. La oposición dice que el uso de esta base permite a los yanquis seguir a los guerrilleros “en tiempo real”.

Sintéticamente el Plan Colombia se expande hacia las siguientes fronteras⁹:

Frontera con Panamá: tiene dos zonas calientes. Hay ingreso de paramilitares en Urabá, en la zona de Darién y de las FARC en el Chocó, estación de descanso, sobre el Pacífico. Hay tráfico de armas. A Panamá han llegado durante el último año 1.500 colombianos desplazados por la violencia.

Frontera con Venezuela: un punto sensible es el río Araucas, donde los guerrilleros solían incursionar y producir secuestros entre los ganaderos venezolanos. Es una frontera muy activa económicamente donde se aprecia el cultivo de amapola opiácea en la serranía de Perijá.

Frontera con Perú: es improbable que Perú se convierta en destino de los desplazados, a pesar de que las zonas colombianas del río Putumayo y de Caquetá son zonas de minifundios, donde los agricultores siembran unas pocas has. de coca junto a sus cuadros de papas y zapallo. La vegetación selvática de Perú, junto con una política agresiva contra el cultivo, disuaden la migración, pero a cambio favorecen el trasiego de armas y pasta de cocaína.

Frontera con Brasil: De Colombia hacia Brasil es una zona de cultivo más industrial, con miles de has. de cicales. Hasta el año pasado era la zona más calma, en virtud de la Amazonia. Pero empezó a ser colonizada por los narcotraficantes y también por las FARC, que establecieron un punto para canjear armas por cocaína en la región de Barranco de Minas. Si la Amazonia no es apta para el cultivo de coca, fue en ese sector donde el año pasado un avión militar lanzó 10 mil fusiles de procedencia jordana, revendidos por traficantes de armas peruanos, vinculados al gobierno, para las FARC.

Frontera con Ecuador: ya comenzó el éxodo de campesinos a Tulcán al mismo tiempo que el gobierno ecuatoriano manifestó temor por el uso ilegal que el narcotráfico puedan hacer de la dolarizada economía de Ecuador.

Hay tres peligros regionales en el Plan:

1. El peligro de defensa nacional es que las fuerzas en lucha se desborden, trasladando la lucha de los rebeldes, cuya intención es internacionalizar el conflicto, fuera del territorio colombiano. Pero también pueden internacionalizarse decenas de narcotraficantes con sus paramilitares.
2. El peligro poblacional: que la lucha en el terreno redefine hacia el éxodo a grupos masivos de los 400 mil desplazados interiores que se han sumado al 1.200.000 de los últimos diez años, creando emergencias de una magnitud africana.
3. El peligro ambiental consiste en que Washington convenza a Colombia de usar el fusarium oxysporum. Este herbicida transgénico fue diseñado en los laboratorios de la Universidad de Montana, en asociación con la empresa de biotecnología Ag/Bio Con¹⁰, específicamente para combatir las plantas de coca, marihuana y amapola.

Estados Unidos solicitó a Colombia permiso para testear el hongo en los cocales colombianos durante dos años. Esto ha sido desmentido por el ministro colombiano de Medio Ambiente, Juan Mayr. Sin embargo no cesan los rumores de que las tratativas continúan.

Brasil

El entonces canciller brasileño envió una carta al New York Times desmintiendo un artículo que decía que Brasil no apoya el Plan Colombia. Efectivamente Lampreia había enviado la carta para aclarar que Brasil "sí" apoya el Plan. "Lo apoyamos y le daremos todo el apoyo que Pastrana nos pida". Sin embargo, durante la visita de Albright a Brasil, Lampreia dejó en claro que su país no piensa involucrarse en el conflicto y que no intervendrá de ninguna manera. El no a Albright se amparó en el principio tradicional de Brasil de la "no injerencia" en los asuntos internos de otros Estados.

Los temores brasileños se expresaron claramente a través del canciller, quien formuló conceptos terminantes: "prevemos la intensificación del conflicto desde comienzos del año 2001 lo cual representa una amenaza para el territorio brasileño porque implica el empleo de nuestro territorio como santuario, e incluso, la realización de acciones militares colombianas en nuestro país con fines de persecución". En boca de la diplomacia más afiada, consecuente y equilibrada de todo el continente, tales aseveraciones deben ser tomadas como lo que son: aprestos de guerra¹¹. Lampreia se encarga de que ése sea el signo de su exposición: "desde el punto de vista de la preparación, para esta nueva etapa de profundización del conflicto, la primera acción del gobierno brasileño es aumentar la coordinación entre los diversos sectores del gobierno: FFAA, Policía Federal y Ministerio de RREE. En segundo lugar, se ha decidido aumentar la capacidad de disuasión militar. Esto es, aumentar la presencia y con planes para una intervención rápida en caso de existir problemas. En tercer lugar, estamos empeñados en mejorar los mecanismos de nuestra inteligencia para saber exactamente qué ocurre en la región".

Existe también un temor de que las plantaciones de coca se trasladen al lado brasileño de la frontera amazónica. La Policía Federal cree que esta alternativa es inviable porque el suelo amazónico brasileño no ofrece las condiciones para producir coca con alto tenor de droga. Pero una de las tareas de los sabuesos federales es la investigación de las áreas desmontadas en plena selva, cerca de Tabatinga. Hay una posibilidad de que la limpieza de centenares de hectáreas sea el paso previo a la plantación de coca.

Brasil se negó a participar de una fuerza internacional de apoyo a Colombia. Más que eso, "negó apoyo logístico al gobierno colombiano, tal como el uso de bases aéreas y de radares brasileños".

La desestabilización regional, por una guerra, ahuyentaría a los inversores internacionales, crearía la imagen de área de riesgo y conspiraría contra cualquier intento de despegue económico.

El canciller de Brasil fue preciso: "Creemos que habrá una intensificación del conflicto a partir de enero de 2001". Brasil teme que los soldados o aviadores colombianos atraviesen la frontera e invadan territorio brasileño.

No es que Brasil pretenda discutir los componentes políticos del Plan Colombia, lo que le preocupa fuertemente son las consecuencias militares.

Estas preocupaciones se pueden sintetizar en:

1. Habrá una intensificación de los combates en función de un mayor grado de preparación y de disposición de recursos militares por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto representa una amenaza para el territorio brasileño. En lo militar, implica el empleo del territorio como santuario, o sea, como base para operaciones del ejército colombiano fuera de su país. E incluso la realización de acciones militares colombianas en Brasil con fines de persecución.

2. Pueden migrar a Brasil grandes contingentes de personas que huyan de los combates.
3. La tercera cuestión es la droga: las plantaciones de coca pueden migrar hacia el Amazonas brasileño¹². La información con que cuenta Brasil sostiene que los planes de entrenamiento y el uso de material bélico nuevo, sobre todo helicópteros, empezarán en enero de 2001. Esa fecha no marcará un cambio inmediato total, pero marcará el inicio de la intensificación del conflicto.

La preparación del gobierno brasileño contiene varias acciones:

1. aumentar la coordinación entre los diversos sectores del gobierno: FFAA, Policía Federal y Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. aumentar la capacidad de disuasión militar. Esto es, aumentar la presencia y con planes para una intervención rápida en el caso de existir problemas.
3. Mejorar los mecanismos de nuestra inteligencia para saber exactamente qué ocurre en la región.

Clinton dijo que el desplazamiento de la guerra hacia los países vecinos no va a suceder. "No creo que el conflicto interno colombiano tenga propensión a expandirse en otros países de la región", aseguró en cuanto a la guerrilla. Pero el segundo del Departamento de Estado, Thomas Pickering, afirmó que este es un conflicto regional. El canciller Lampreia sostiene que el conflicto de Colombia puede ser aislado y no traspasará los límites de ese país. "Nosotros opinamos exactamente lo contrario. No regionalizamos el conflicto. Es más, esperamos que el conflicto no traspase hacia nuestros países".

El gobierno brasileño militarizó su frontera con Colombia e instaló siete bases de control en ciudades limítrofes. Se apresuró a montar en Tabatinga, la ciudad brasileña de la triple frontera con Colombia y Perú, localizada en la selva amazónica, un "comando de administración de crisis". Tabatinga, gemela en Brasil de la colombiana Leticia fue elegida por su posición estratégica como centro de coordinación de todas las fuerzas involucradas en esa acción.

El comando brasileño está integrado por delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Ejército, de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y de la Policía Federal. La misión del comando brasileño, dentro del denominado Plan Cobra, es evitar que la guerra en Colombia contamine físicamente al Brasil. Esto ya sucedió hace dos años cuando aviones de la fuerza aérea de Colombia aterrizaron en Brasil, en una operación antiguerrillera en la zona de Mitú, del lado colombiano.

El ejército anticipó la compra de 8 helicópteros franceses Cougar que estaba prevista para fin de año. Mauro Spósito, jefe de Proyectos Especiales de la Policía Federal para Amazonas dijo que "no hay rutas que conecten ambos países, a pesar de compartir 1.600 kms. de frontera. Las únicas vías de acceso son la fluvial y la aérea. Tenemos el control de los ríos pero hay muchas pistas clandestinas difíciles de detectar"¹³.

El lanzamiento oficial del Plan Cobra revela una motivación política más profunda que la prevención. Representa un fuerte mensaje político: Brasil no aceptará pasivamente que los actores del plan Colombia, es decir, los asesores militares norteamericanos más las fuerzas armadas colombianas, utilicen su territorio para operaciones de retaguardia.

En esta etapa se instalarán 180 hombres en tres bases: una es la de Tabatinga. Las otras dos son Ipiranga y Vila Bittencourt.

Estas bases albergan personal del ejército brasileño que cederá parte de las instalaciones para la policía federal. Esas localidades ubicadas a orillas de los ríos Izá y Japurá (que continúan a los ríos colombianos Putumayo y Caquetá) son los lugares más vulnerables de los 1.600 kms. de selva amazónica por donde pasa la división política entre Brasil y Colombia¹⁴.

El gobierno de Pastrana descrea que exista guerrilla en la zona. Pero informes obtenidos por la Agencia Brasileña de Inteligencia ABIN, publicados por el diario O'Globo, dicen que existen al menos dos destacamentos guerrilleros ubicados en la región. Uno está sobre el río Putumayo, en un poblado homónimo. Otros en las orillas del Caquetá, en la localidad colombiana de La Pedrera.

El diario Jornal do Brasil reveló la existencia de destacamentos guerrilleros de las FARC (denominados frentes 51 y 52) a unos 100 kms. de Tabatinga. Las FARC actúan en la región selvática que media entre Leticia y Tarapacá, distantes a 175 kms. Es tierra de nadie, donde no se atreve a incursionar ni el ejército colombiano ni los asesores norteamericanos de la DEA.

Por otro lado Brasil le dijo a Colombia que las relaciones entre los dos países podrían sufrir un duro revés si se comprueba que el Plan Colombia propugna la erradicación de cultivos de coca mediante el uso de hongos tóxicos o de otros agentes químicos que representen un peligro para el ecosistema de la cuenca del Amazonas¹⁵.

Pastrana, al igual que su ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr, aseguró que Colombia rechaza la experimentación, uso o aplicación del hongo fusarium que según el programa antidrogas de las Naciones Unidas fue objeto de experimentos para controlar la coca.

Pero sobran indicios de que el gobierno de Brasil no quedó del todo satisfecho. Altos funcionarios apuntan a la confusión y las aseveraciones contradictorias que emanan de distintas agencias, tanto del

gobierno de Colombia como del de Estados Unidos hasta el grado de que recurren a los periodistas para que les den información a ellos.

La triple frontera (Brasil-Colombia-Perú)¹⁶

Tabatinga es la última escala, el último punto limítrofe brasileño con Colombia, en el extremo sur de los 1.640 kms. de frontera común. Una desdibujada callejuela la separa de Leticia, capital de la provincia de Amazonas en Colombia. Entre ambas hay un abismo cultural. Del lado brasileño se habla portugués; del colombiano, español. Y no se mezclan ni las lenguas ni la música.

La bandera del Perú flamea a escasa distancia (a 15 minutos de lancha por el río Solimoes) en un caserío con una única calle asfaltada, un colegio, aduana y puesto policial. Esta triple frontera vuelve a ser protagonista como hace 20 años cuando comandaban la región los barones de la droga. En la zona hay 90 mil habitantes y se asiste a una intensa preparación policial y militar. Brasil está reforzando militar el lugar para impedir que los efectos del conflicto colombiano pasen a su territorio. Los rebeldes no son visibles pero están allí, en la jungla colombiana.

La Pousada do Sol, a 300 metros de la oficina de la Policía Federal Brasileña es el mejor albergue de Tabatinga. La hostería da ganancias porque aloja a algunos huéspedes especiales: son pilotos aéreos que no pertenecen a una línea comercial, sólo transportan droga.

Estos comandantes de pequeñas aeronaves vuelan sólo a unos metros por encima de los árboles más altos de la floresta amazónica para evitar los radares. "El principal aporte brasileño al esquema del narcotráfico son los pilotos y la flota aérea".

Los aviones transportan la cocaína hacia el Atlántico. Cruzan la selva amazónica, con escala en pistas clandestinas brasileñas, hasta Surinam, la ex colonia holandesa. De Surinam, poblado por 300 mil habitantes, la cocaína sale en los barcos cargueros holandeses a Europa. El 90% de los ingresos anuales proviene del tráfico de droga.

Tabatinga fue fundada en 1766 por unos 500 portugueses que vinieron desde Belem de Pará, en el nordeste, para defender los territorios amazónicos. Leticia fue fundada por los peruanos en 1867, como puerto de salida para la quina y el caucho.

Las dos ciudades son el centro comercial de una zona donde hay otras pequeñas localidades, entre ellos el municipio peruano en una isla fluvial cedida por Brasil.

En esta zona hay dos explotaciones legales: madera y pescado. Pero la verdadera fuente de ingresos es la coca. Para entrar y salir de la zona hay dos medios: agua y aire. Por el río Solimoes se tarda dos semanas en llegar a Manaus (a 1.100 kms.). Por avión hay un vuelo diario que sale de Leticia o Tabatinga. El resto es la inmensidad amazónica donde sólo se atreven los guerrilleros de las FARC, los indios ticunas que habitan allí y los soldados del ejército regular.

Tabatinga tiene 30 mil habitantes, Leticia tiene 20 mil. También existe una poderosa estructura militar y policial del ejército, la marina y la aeronáutica, en ambas ciudades. Del lado colombiano parece actuar también la DEA. El Batallón de la Selva colombiana alberga una base de la DEA; otros dicen que la DEA solo instaló un radar, ahora manejado por los colombianos.

En Leticia se dice que hay una hostería alquilada por la DEA para sus agentes. Estas fuerzas militares se concentran en Leticia y Tabatinga porque es el más importante núcleo urbano fronterizo amazónico y porque por allí pasa la mayor ruta fluvial trinacional de transporte: el río Amazonas colombiano que pasa a llamarse Solimoes del lado brasileño para volver a llamarse Amazonas en Manaus. Por esa vía fluvial salen los cargamentos de droga, escondidos entre bolsas de pescado congelado o en barcasas que transportan troncos.

En la región no se cultiva coca. La producción de coca está en Putuma-yo y Caquetá, relativamente alejados de Leticia. Pero muy cerca de allí hay una finca donde se cultiva coca a escasos 20 minutos del Batallón de la Selva donde los soldados colombianos conviven con la DEA.

"La estrategia de la guerrilla consistió hasta ahora en inmovilizar a las fuerzas armadas en las grandes ciudades, que precisan ser defendidas. De alguna manera es lo que pasa en Leticia. No pueden dispersarse porque dejarían flancos libres para las incursiones guerrilleras".

Las FARC tienen presencia en la zona desde hace décadas y sus miembros se aprovisionan de alimentos en Leticia. También están presentes las AUC. En Leticia son los propios agentes de policía quienes integran ese cuerpo. "Es la segunda actividad que tienen esos soldaditos, que necesitan contar con dos sueldos para sobrevivir en la región". En la visión de los militares entrevistados "lo que está por ocurrir en Colombia es un experimento". Algo como fue la guerra civil española en relación a la Segunda Guerra Mundial.

Se supone que los guerrilleros de las FARC están a unos 50 kms. de Leticia. Hace más de 40 años que la guerrilla puebla la zona y por tanto domina perfectamente la hostilidad de una selva como la amazónica, donde los problemas no son las personas armadas sino los animales silvestres.

“El gran problema es que las fuerzas guerrilleras logran acorralar en las ciudades capitales amazónicas, incluidas las de los departamentos de Putumayo y Caquetá, a las fuerzas armadas de Colombia. Estas no salen de los pueblos. Permanecen allí como si estuvieran sitiadas. Y eso ocurre porque carecen de personal suficiente para adentrarse en la selva. Si lo hicieran, dejarían desguarnecidos sus propios batallones. Además, no es tan simple controlar la selva amazónica”, comentaron las fuentes militares brasileñas.

Los 30 mil habitantes de Tabatinga, más 10 mil indígenas, tienen cuatro fuentes de empleo: la alcaldía, las FFAA, la policía federal y el narcotráfico. Unas 2 mil personas viven de la explotación pesquera, aunque también transportan droga en las barcas. Hay una quinta forma de obtener ingresos, pero muy limitada: el comercio, que ocupa apenas a 300 personas.

El transporte por la vía fluvial de la droga y dinero del tráfico sucede en Tabatinga y en Leticia, bajo las barbas de los agentes federales.

Si recrudecen los combates empezarán a llegar campesinos. Ninguna de las ciudades está en condiciones de recibir inmigrantes. Es una zona donde ya no hay espacio para crecer, cercada por el atraso, la pobreza y el narcotráfico.

El peor mal es “la relación de los habitantes de Tabatinga con el narcotráfico. Esa relación avanza y se consolida por causa de que no hay ninguna actividad económica que reemplace la antigua producción de caucho”. La producción maderera está prohibida en la zona. Esto se debe a la existencia de reservas indígenas que por ley impiden avanzar en la destrucción de esos terrenos.

Ecuador

En el mes de febrero de 2000 el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Pickering, se entrevistó con el presidente de Ecuador, Gustavo Noboa a fin de fijar el papel de este país dentro del Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la subversión¹⁷. Pickering condicionó cualquier ayuda de Estados Unidos a Ecuador a la consolidación del orden constitucional de este país. Además dejó entrever que las ayudas económicas de Estados Unidos a Ecuador formarían parte del denominado Plan Colombia.

Los policías de Colombia y Ecuador realizan rígidos controles en la frontera común para impedir “una lluvia” de dólares falsos desde territorio colombiano. El temor está centrado, además, en la posibilidad de que los narcotraficantes se aprovechen de la dolarización ecuatoriana para lavar dinero de la cocaína¹⁸.

El gobierno de Ecuador dijo que respetará el principio de no intervención en la guerra civil de Colombia, pero advirtió a los grupos armados de ese país que en caso de producirse una incursión en territorio colombiano serán reprimidos¹⁹.

El comunicado fue difundido después de que al menos dos estaciones de radio y un canal de televisión hicieran público un presunto comunicado donde las FARC pedían dialogar con el presidente Noboa.

“En determinado ámbito y en determinadas circunstancias, cuando se presenten, podríamos hacer un contacto sin que esto signifique el gobierno o que el estado ecuatoriano entren a tratar con esas fuerzas como si fueran una nación o un Estado”, dijo el ministro de Gobierno, Juan Manrique²⁰.

Los efectos internacionales del Plan Colombia ocuparon las primeras páginas de los diarios colombianos durante la visita del presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, quien dijo que espera que estos temas militares sean resueltos dentro de Colombia por los colombianos. Pero varios de sus asesores reconocieron que las autoridades fronterizas temen un desplazamiento masivo de campesinos, coqueros y hasta guerrilleros, una vez que los 60 helicópteros norteamericanos comiencen a erradicar 106 mil has. de coca en el sur colombiano.

Venezuela

Chávez dijo que Estados Unidos “antes de pensar en solucionar los problemas del narcotráfico en otras naciones con actos de violencia, deben hacer algo para reducir el elevado consumo de drogas que existe en su territorio”. Las fortunas que genera el narcotráfico “van a parar a bancos de Estados Unidos y de otras naciones industrializadas y no sirven para el desarrollo de las afectadas por la producción de drogas”²¹.

El canciller Rangel expresó sus temores sobre la expansión del conflicto. “Son ciertos y fundados los temores de Venezuela y demás naciones vecinas ante la posibilidad de que con la puesta en marcha del plan se propicien grandes desplazamientos de ciudadanos colombianos hacia las zonas limítrofes. Sin duda la violencia en Colombia es una amenaza latente”.

El gobierno venezolano se declaró alarmado por el incesante ingreso a su territorio de cientos de personas que huyen de la cruenta guerra en Colombia entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares. El canciller José Vicente Rangel denunció que los desplazados colombianos están llegando a nado y en canoas hacia la frontera venezolana. Pero el gobierno colombiano rechazó las objeciones venezolanas. “Colombia no acepta estigmatizaciones ni adjetivos, eso es una falta de respeto con el país”, contestó molesto el canciller Guillermo Fernández de Soto, al referirse a las críticas que recibe el controvertido plan Colombia.

El éxodo de colombianos se estaba desplazando por el río Catatumbo, hacia las riberas del lago de Maracaibo, al sudoeste de Venezuela. Los 2.200 kms. de frontera que unen ambos países hacen muy difícil controlar los desplazamientos que produce la guerra en Colombia.

Venezuela tuvo entre mayo y junio de 1999 tres oleadas con un total de más de 20 mil campesinos colombianos desplazados a su zona fronteriza. En el sector de La Gabarra, entre el departamento Santander y el sur del estado Zulia, los campesinos habían huido en masa hacia el territorio venezolano escapando de los enfrentamientos de los paramilitares y el ejército colombiano, creando un problema social de grandes proporciones. 15 mil de esos campesinos llegaron desde la norteña provincia de Santander, donde los grupos clandestinos de ultraderecha (los paramilitares) los acusan de simpatizar y ayudar a la guerrilla del ELN²².

Perú y Bolivia

Pickering confirmó que Perú ya no recibirá la ayuda como estaba prevista en la asignación de los 180 millones de dólares debido a las anomalías que hubo durante la reelección de Fujimori²³. Estados Unidos esperaba que el triunfo de Toledo, asistido por el Departamento de Estado, pondría otra bandera norteamericana en Sudamérica. Pero la salida de Fujimori se tornó más lenta, complicada y explosiva.

Los acontecimientos de Perú y Bolivia a partir del inicio del Plan Colombia amenazan con extenderse a cada país del hemisferio. Los desmanes políticos de Fujimori, incompatibles con un mecanismo institucional y para colmo acompañados de gestos de autonomía, hicieron apelar a un nuevo recurso por parte de Estados Unidos para controlar aliados: una denuncia de corrupción en puntos claves del gobierno.

Vladimiro Montesinos, a pesar de su antigua pertenencia a la CIA, llevado por una combinación de avaricia financiera y juego político propio, poco antes del inicio del plan Colombia, facilitó la compra y recepción por parte de las FARC de 10 mil fusiles Kalashnikov. La Casa Blanca optó por el camino de la desestabilización.

En el caso de Bolivia el éxito en la erradicación de cultivos produjo la sublevación de los campesinos.

Los gobiernos de Perú y Bolivia quedaron reclamando la potestad de avances significativos en la lucha contra narcoproductores y traficantes con políticas inspiradas en Washington y que privilegian la acción policial y militar. En esos países el cultivo de la hoja de coca –insumo básico de la cocaína, droga que sólo proviene de esta zona del mundo- se ha reducido el 66% y el 55% respectivamente desde 1995, dice la estadística oficial estadounidense. Pero la aguda crisis política que sacude ambos países les quitó la posibilidad de reclamar ayuda norteamericana, por ahora.

Argentina

La Argentina es diferente: su diplomacia no detiene demasiado su atención sobre el problema que presente el Plan Colombia y observa el debate con la incomodidad que supone un obstáculo para la sonrisa permanente que exhibe ante Estados Unidos en la política exterior.

El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini dijo que la crisis en Colombia “complicará enormemente a la región” y que el gobierno argentino se limitará a “utilizar estrictamente aquellos instrumentos de política exterior que tiene autorizados. No habrá ninguna clase de ayuda militar”.

La diplomacia argentina sostiene que la colaboración se ceñirá al terreno técnico y humanitario²⁴ aunque esto no parece ser cierto.

En septiembre se realizaron en la provincia de Córdoba juegos de guerra que involucraron a 1200 militares de 8 países²⁵. La demostración que hicieron tropas del batallón multinacional duró unos pocos minutos y fue relatada en castellano e inglés. Incluyó una protesta de habitantes del imaginario pueblo de San Ignacio, que fue contenida por cascos azules del ataque de un francotirador, que usó balas de fogueo.

Las operaciones apuntan a integrar y fortalecer lo que los militares llaman seguridad cooperativa. Esta es una de las prioridades estratégicas de Estados Unidos para el área de América Central y del sur. La otra tarea estratégica es el combate del tráfico de drogas.

El Comando Sur tiene nuevo jefe, Peter Pace. Sus primeros viajes fueron a Colombia y Argentina. Después siguió rumbo a Brasil, que no envió tropas a las maniobras de Córdoba aunque fue invitado.

Unos 2 mil efectivos del ejército de Estados Unidos realizaron entre marzo y abril de 2001 tareas junto con fuerzas de seguridad de Misiones, según informaron fuentes del gobierno provincial. Los soldados estadounidenses instarían su puesto de comando en Eldorado, a 200 kms. de Posadas. Así cumplirían un objetivo imaginario; el control sobre el río Paraná, con lo cual estarían a un paso de la Triple Frontera, recurrente preocupación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y otros países²⁶.

Otro objetivo es desplazar fuerzas hacia el oeste, con eje en la ruta provincial 17, que une a Eldorado y Bernardo de Irigoyen, el punto continental argentino ubicado más al este, en la frontera con Brasil.

Otro grupo de los efectivos estadounidenses pasaría el último trimestre del año en Cruce Caballero, 300 kilómetros al noreste de Posadas, sobre la ruta nacional 14 y en plena zona selvática de la sierra central de Misiones.

Marines de USA ya estuvieron en el campo de entrenamiento selvático que la Gendarmería Nacional argentina tiene en la frontera con Brasil. Pero entonces se trató de un conjunto de maniobras acotadas a un espacio territorial.

El escenario regional

El ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) abrió sus oficinas en Bogotá en junio de 1998 para monitorear la situación en el país. En los últimos tiempos ha abierto tres oficinas más en pueblos fronterizos con Panamá, Ecuador y Venezuela. Actualmente prepara un plan de emergencia. Un informe del Comité para Refugiados del gobierno norteamericano (USCR) indica que el 31% de la última marea de desplazados se trasladó en grandes grupos, lo que representa un aumento sustancial del desplazamiento masivo. De acuerdo con el USCR 300 colombianos llegaron a Venezuela entre el 13 y el 16 de junio; el 29 de junio llegó un grupo de 700. El comité criticó a Bogotá y Caracas por obligar al refoulement, es decir el regreso forzado de los desplazados en varias ocasiones²⁷.

Venezuela, Perú y Ecuador son los países "más vulnerables a una desestabilización debido a la actividad de la guerrilla colombiana en sus fronteras", según el análisis del Comando Sur.

Las FARC y el ELN "utilizan a cada uno de estos países de manera rutinaria como santuario para el tráfico de armas y de drogas", afirmó el general Peter Pace, nuevo comandante del Comando Sur desde el 8 de septiembre, sucesor del general Charles Wilhelm.

Perú, afirmó el general, es el mejor preparado para prevenir "un éxodo de narcotraficantes", mientras que Ecuador tiene una "capacidad limitada" para movilizar recursos hacia la frontera "por la inestabilidad política y los desafíos económicos" que enfrenta.

Aunque la administración Clinton sostiene que el plan tiene como objetivo luchar contra el narcotráfico, y no contra los grupos guerrilleros, la relación entre unos y otros es cada vez más fuerte, según admitió Pace. Aunque el zar de las drogas, general Barry McCaffrey, suele referirse también a la relación de los narcos con los paramilitares, Pace pareció ignorar ese aspecto del problema²⁸.

También le restó importancia a la relación de las fuerzas armadas colombianas con los paramilitares, que según el Departamento de Estado son responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos. El general afirmó que el vínculo, cuando se produce "no es tolerado" por la cúpula militar.

El Comando Sur, según anticipó The Miami Herald, tiene previsto destinar un general en forma permanente en Bogotá, para que supervise la instrumentación del Plan Colombia.

La integración sudamericana²⁹

Cuando el presidente Cardoso invitó a sus 11 colegas sudamericanos a una reunión en Brasilia lo hizo para festejar los 500 años del descubrimiento de Brasil. También ambicionaba una cita positiva para gestar la unión regional. Pero el conflicto en Colombia y la concreción de la ayuda militar norteamericana cambió la agenda de esa cumbre.

En el comunicado final de la reunión de presidentes sudamericanas realizada el 30 de agosto en Brasilia los participantes no mencionaron ningún apoyo al Plan Colombia y sí dijeron que celebraban los esfuerzos de Bogotá para pacificar el país³⁰.

La intención de unir el Mercosur y el Pacto Andino, el motivo inicial de la convocatoria, obedece a que la globalización dejó en el camino a gran cantidad de jugadores. Todos detectan que si no hacen algo para aumentar el perfil negociador, simplemente van a ser convidados ocasionales en el banquete mundial³¹. La crisis de Colombia puede ser la bomba que detenga la maquinaria de integración sudamericana. La intención de crear un bloque que logre negociar en conjunto con un producto bruto regional de más de un billón 500 mil millones de dólares es el principal palo en la rueda del proyecto del ALCA.

El escenario político regional es otra causa de incertidumbre, en especial la situación de Ecuador. La inestabilidad se extiende también a Perú y Bolivia. Una tempestad continental podría ocurrir si se tienen en cuenta la insurgencia indígena en México, el fortalecimiento de la izquierda en Uruguay, El Salvador, Brasil y Chile y la nueva estructura política de Venezuela.

William Brownfield, asistente del Departamento de Estado para el hemisferio occidental en una entrevista con el diario El Tiempo, dijo que "es materia de sentido común reconocer que en la medida en que se aplique el plan y se logren progresos en el esfuerzo por combatir el narcotráfico y en la búsqueda de la paz (en alusión a la guerrilla) es inevitable suponer que habrá algún impacto en los países fronterizos a Colombia".

Por tal razón pidió comprensión y colaboración de los vecinos de Colombia. Hasta ahora los norteamericanos aseguraban que la ayuda económica se iba a concentrar en las zonas cocaleras de Colombia y que no buscaba causar efectos sobre el conflicto entre el gobierno y la guerrilla y sobre el proceso de paz que comenzó en 1998³².

La Casa Blanca propondrá un refuerzo para Venezuela, Panamá, Brasil, Perú y Bolivia, adelantó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, William Brownfield. ¿La justificación? “Mientras los grupos insurgentes y los paramilitares mantengan enlace con el narcotráfico, la comunidad internacional tiene el derecho a defenderse”³³.

La Iniciativa Andina³⁴

Ante el naufragio del Plan Colombia Estados Unidos ha resucitado la Iniciativa Andina un proyecto elaborado junto con el Plan Colombia, que hasta ahora había permanecido semioculto.

Como su nombre lo indica la guerra contra las drogas ya toma en esta iniciativa un carácter abiertamente regional. Todas las anteriores declaraciones sobre que “la guerra no se extenderá a la región” quedan sepultadas hasta en la letra del proyecto. Esta expansión regional de la Iniciativa Andina se explica por el fracaso del Plan Colombia:

- ❑ La guerra contra las drogas ha resultado en la fumigación de 60 mil hectáreas de coca pero se han replantado 160 mil lo que significa un crecimiento del 30% en relación a las 120 mil hectáreas previas al inicio del Plan.
- ❑ La presión internacional ha frenado la implementación de las etapas siguientes de fumigación de cultivos y el hongo *Fusarium Oxysporum* no será utilizado contra los cocales.
- ❑ Pastrana esperaba recaudar 3.500 millones de dólares en la Mesa de Donantes europea pero sólo obtuvo la promesa de menos de 200 millones de los cuales no se ejecutó un sólo peso. Los 4.000 millones que Colombia debía aportar al Plan son imposibles de obtener por la crisis económica.
- ❑ El resultado electoral de las elecciones norteamericanas de noviembre de 2000, con los republicanos perdiendo en las urnas pero ganando en la Corte Suprema, otorgó al gobierno republicano una enorme debilidad que intenta ser paliada con una nueva aventura militar.

En el trasfondo de este fracaso opera una lucha mundial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Europa se siente con la capacidad de intervenir en territorios hasta ahora exclusivos de Estados Unidos, algo que ha quedado demostrado con la negativa de la OTAN a amparar una intervención unilateral ilimitada en los países árabes.

La camarilla militar-petrolera que gobierna en Estados Unidos quiere universalizar la “guerra contra el terrorismo” para poder re-intervenir en Colombia y toda América Latina, algo que le resultará nuevamente imposible de conseguir aunque expandirá la presencia militar mediante el asentamiento de bases en varios países de la región pretendiendo transformar la política exterior en brazo armado del “interés nacional” norteamericano que por ahora no podrá entrar en una guerra abierta aunque seguirá perseverando en el intento. Mientras tanto es previsible un retorno declamativo a la “Doctrina de Seguridad Nacional” y al fin de la democracia como un régimen político de libertad individual. La consigna de pobres y presos envolverá la cotidianeidad de los trabajadores latinoamericanos al mismo tiempo que las protestas y las revoluciones se trasladarán desde las calles a los cuarteles sin golpear la puerta. Yendo de fracaso en fracaso y echando gasolina al fuego la diplomacia guerrera de los halcones quiere pegar un manotazo al cielo para atrapar algo más que el aire entre los puños.

Conclusiones

Venezuela y Brasil firmaron un acuerdo de “cooperación militar” que los compromete a aumentar el intercambio y el entrenamiento en “aspectos específicos”. Esta decisión salió de un encuentro del Grupo de Cooperación Militar entre ambos países, que se reunió después de dos años y medio de receso³⁵.

Este acuerdo surgió un día antes de la visita de Clinton a Colombia y de la reunión de 12 presidentes latinoamericanos en Brasilia.

Pero América Latina se está moviendo nuevamente disarmonicamente. Con el sigilo de quien a sabiendas hace algo reprochable, 1.200 efectivos de ocho países (Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay) se entrenaron durante 16 días en técnicas operativas para afrontar insurrecciones populares³⁶. Los gastos, estimados oficialmente en 2.5 millones de dólares, exceptuando el costo de los 400 marines que encabezaron la maniobra, fueron saldados con fondos estadounidenses. El argumento norteamericano para quebrar la reticencia latinoamericana hacia este tipo de maniobras fue la promesa de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Este operativo, realizado en Argentina, denominado “Operativo Cabañas 2000” se desarrollaba en el imaginario país del Sudistán donde debía reprimirse una sublevación popular. Venezuela y Brasil estuvieron ausentes en el ejercicio. En setiembre de 2001 se realizaron los ejercicios militares conjuntos “Cabañas 2001” en la provincia de Salta y también se realizaron operaciones militares norteamericanas en la localidad de Ibicuy, Entre Ríos.

En relación a la Argentina el gobierno estadounidense no ha logrado más que una media palabra para brindar “asistencia técnica”, hipérbole que según la cancillería aludiría al permiso para instalar en el noreste

una estación de vigilancia satelital, de hecho una base militar al estilo de lo que se intenta hacer en Esequibo y que ya se ha hecho en otros puntos de Latinoamérica.

De todos modos a Estados Unidos le queda por resolver el futuro papel de algunos ejércitos latinoamericanos. Suponer que mantenerlos en constantes ejercicios multinacionales es un preanuncio asegurado de su participación en un cuerpo de intervención multilateral en Colombia es una ilusión.

Pero la formulación de una política común regional frente al Plan Colombia no es aún lo suficientemente coherente. Brasil monitorea la oposición, acompañada por Venezuela, país con quien la integración arranca de acuerdos políticos hacia abajo. Otros países tienen conductas ambivalentes (Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay). Otros están más cerca de Estados Unidos (Perú, Panamá, Ecuador). Pero sin la colaboración de Brasil el Plan Colombia y la Iniciativa Andina pueden naufragar. Algunas señales ya pueden advertirse al respecto. Si se le suma el escaso entusiasmo europeo, la propia crisis de paridad de poder norteamericana y los probables resultados de la aventura militar en Afganistán el panorama es más desolador para Estados Unidos.

Notas

1. Los múltiples mensajes de la cumbre, Juan Gabriel Tokatlian, Clarín, 31 de agosto de 2000.
2. Acuerdo militar de Brasilia y Caracas, Eleonora Gosman, Clarín, 30 de agosto de 2000.
3. Ecuador, ¿portaaviones del Pentágono?, José Steinsleger, 29 de agosto de 2000.
4. La nueva alianza sudamericana, Torcuato di Tella, Clarín, 10 de septiembre de 2000.
5. Ecuador, ¿portaaviones del Pentágono?, José Steinsleger, 29 de agosto de 2000
6. Idem.
7. Colombia es un problema regional, Ana Barón, Clarín, 26 de agosto de 2000. Aunque el mismo día el presidente Clinton sostuvo que "este es un conflicto interno colombiano y no creo que el conflicto interno colombiano tenga propensión a extenderse a otros países".
8. La mirada del vecindario, Eleonora Gosman, Clarín, 27 de agosto de 2000.
9. En las fronteras del peligro, Matilde Sánchez, Clarín, 24 de septiembre de 2000.
10. En las fronteras del peligro, Matilde Sánchez, Clarín, 24 de septiembre de 2000. Esta información no coincide con otras que afirman que el fusarium es una investigación desarrollada en Gran Bretaña. Ver Clarín, 19 de septiembre de 2000.
11. Militarización de la política, Luis Bilbao, Le Monde Diplomatique en español, septiembre de 2000.
12. En enero se agravará la guerra en Colombia, Eleonora Gosman, Clarín, 29 de agosto de 2000.
13. Pronto en la región tendremos problemas, Clarín, 10 de septiembre de 2000
14. Brasil reforzó su frontera amazónica, Eleonora Gosman, Clarín, 28 de septiembre de 2000.
15. Advertencia de Brasil a Colombia por el uso de un hongo tóxico, La Nación, 14 de septiembre de 2000.
16. Notas de Eleonora Gosman en las ediciones de Clarín del 10, 11 y 12 de septiembre de 2000.
17. El Espectador, Colombia, 21 de febrero de 2000
18. Temor por Colombia, Clarín, 9 de septiembre de 2000
19. Ecuador advierte que tomará acción contra grupos armados de Colombia, El Espectador, 7 de noviembre de 2000
20. Ministro ecuatoriano abre posibilidad de diálogo con guerrilleros colombianos, El Espectador, 10 de noviembre de 2000.
21. Sudamérica le dice no a Clinton, Eleonora Gosman, Clarín, 1 de septiembre de 2000.
22. Alarman a Venezuela los desplazados colombianos, Ludmila Vinogradoff, Clarín, 26 de agosto de 2000
23. Colombia es un problema regional, Ana Barón, Clarín, 26 de agosto de 2000.
24. El conflicto colombiano complica a la región, Eleonora Gosman, 27 de agosto de 2000.
25. Córdoba, un adiós a las armas, Fabián García, Clarín, 21 de septiembre de 2000
26. Misiones, ejercicio militar con Estados Unidos, Patricio Downes, Clarín, 28 de septiembre de 2000.
27. En las fronteras del peligro, Matilde Sánchez, Clarín, 24 de septiembre de 2000.
28. Colombia, preocupación de Estados Unidos, María O'Donnell, La Nación, 17 de septiembre de 2000
29. Un informe completo sobre la integración entre Mercosur y Pacto Andino puede leerse en el paper "Un Maastricht sudamericano", disponible en www.cderi.com.ar
30. Todos apoyan el Plan Colombia, salvo Brasil, Telma Luzzani, Clarín, 8 de septiembre de 2000.
31. Sudamérica suelta amarras, Marcelo Cantelmi, Clarín, 13 de septiembre de 2000
32. El Plan Colombia impactará en la región, Nelson Padilla, Clarín, 25 de agosto de 2000.
33. Plan Colombia: Estados Unidos ampliará la ayuda a los países vecinos, Ana Gerschenson, Clarín, 28 de octubre de 2000
34. ANNCOL, Agencia de Noticias Nueva Colombia, «Iniciativa Andina es síntoma de debilidad», entrevista a Manuel Salgado Tamayo, de la Universidad Central de Ecuador, 6 de julio de 2001.
35. Acuerdo militar de Brasilia y Caracas, Eleonora Gosman, Clarín, 30 de agosto de 2000.
36. La onda expansiva del Plan Colombia, Luis Bilbao, Le Monde Diplomatique, octubre de 2000.

Capítulo 11 – Los desplazados

En el capítulo 10 se analizó el problema de los desplazados externos, campesinos que huyen de la guerra hacia países vecinos, generalmente esperando volver cuando la situación se calme.

Pero un mayor problema es el desplazamiento forzoso interno en Colombia.

Hasta 1995 se calculaba que los desplazados sumaban entre 500 y 600 mil. Según las evaluaciones más recientes su número está alrededor de 2.000.000². Las precarias condiciones en que se encuentran estos refugiados que se concentran ya en varias ciudades, medianas y grandes es un preanuncio de que el problema se acrecentará en el futuro próximo, cuando la guerra se intensifique por el Plan Colombia.

La proliferación de los desplazados en las ciudades no fue suficiente como para que se pudiera tomar real conciencia del problema. Los voceros de la opinión pública, los “formadores de opinión” y el mundo académico debían crear nuevas categorías para explicar el fenómeno.

Era más o menos conocida la existencia de fronteras invisibles en los barrios de las ciudades de Barrancabermeja o Apartadó, bajo la tutela de uno u otro grupo, donde los habitantes vivían en el medio del miedo. Pero ya vimos que la geografía de Colombia lo convirtió en un país archipiélago. Lo que sucede en una región no necesariamente debe difundirse hacia las otras.

El empuje de las fuerzas paramilitares y las masacres sistemáticas que los acompañan, la expansión de las guerrillas y el fortalecimiento de su capacidad militar permitió tomar conciencia de la existencia de poblaciones que están en medio de fuegos cruzados, sometidas al terror, en amplias regiones del país. Durante mucho tiempo, una gran parte de la opinión pública se acostumbró a vivir en una situación de “paz armada” pero el recrudescimiento de los enfrentamientos y los desplazamientos masivos de poblaciones son parte del mismo proceso

Mediante la aprobación de una ley sobre los desplazados el Congreso colombiano supuso poder solucionar la cuestión. Pero una ley por sí sola, sin una política que la sostenga, sólo permite al gobierno justificar la negativa a dirigir recursos para su implementación.

Las autoridades locales no muestran gran afán por ocuparse del tema. Están más preocupados por la generación de negocios individuales, desguazando los recursos públicos y diagramando políticas para la solución de dificultades financieras a las que se ven enfrentadas. Para ellos los desplazados engendran tensiones sociales y una ayuda a su favor contribuye a asentarlos definitivamente en el lugar. No se termina de definir si se debe buscar la instalación definitiva de los desplazados en las ciudades o favorecer su regreso a los lugares de origen, cuando esto sea posible.

Hannah Arendt en su libro *El Imperialismo*, comenta la situación de los desplazados europeos en el período del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Se trata del traslado de los desplazados hacia otros países, llamados “apátridas” a pesar de ellos. La tragedia de estas poblaciones, dice Arendt, se puede leer en un triple plano:

1. Han sido arrancados de los puntos de referencia de su identidad personal y colectiva e inclusive de aquellos lugares que marcan su memoria. La pérdida de “residencia” no es sólo una pérdida de propiedades, sino de todos los elementos que los enmarcan en una tradición que es parte de su individualidad.
2. La expulsión no se origina en una oposición explícita al régimen sino a su pertenencia a categorías “negativas” basadas en características consideradas como “naturales”. Se trata de que nacieron en una mala categoría de raza o de clase. Son golpeados por una persecución política cuyo significado no pueden comprender.
3. Los apátridas se encuentran desprovistos de todo derecho. Los derechos, los que se han definido a lo largo del siglo XIX, están relacionados con la pertenencia a una comunidad nacional. Los apátridas son por principios los “sin derechos”. Su gran desgracia es la de “haber dejado de pertenecer a una comunidad. Su tara no es que no son iguales frente a la ley, sino que no existe para ellos ninguna ley”.

Los desplazados colombianos no son apátridas: son miembros de una comunidad política pero en muchos aspectos se parecen a los apátridas. Han sido sustraídos a su trama social; han sido privados de vínculos sociales que les pertenecían en su lugar de origen. Muchos de ellos tienen familiares muertos en el conflicto, la mayoría de las unidades familiares se han resquebrajado y basta ver los hogares de los desplazados compuestos por mujeres solas. La ruptura de la memoria está en el centro de su experiencia.

En la mayoría de los casos no han sido expulsados por haber tomado parte activa en las confrontaciones. Si en Colombia la raza o la clase social no son la causa de su desplazamiento, su lugar de residencia sí lo es ya que tuvieron que huir porque habitaban en tal o cual zona.

Son también los “sin derechos”. Disfrutan teóricamente de los derechos de todos los ciudadanos colombianos y pueden reclamar el estatuto jurídico de los desplazados. Pero esos derechos son abstractos ya que no poseen los medios para hacerlos valer. Saben que están catalogados como “desplazados” y que los desplazados se vuelven frecuentemente “sospechosos”. Los mismos refugiados en una ciudad, por el hecho mismo de provenir de una zona determinada, se exponen a ser catalogados como pertenecientes a un campo u otro, a pesar de que muchos de ellos buscan mezclarse con la población de su nueva residencia para evitar ser estigmatizados como actores de la violencia.

Los desplazados colombianos no han tenido jamás acceso a una ciudadanía plena y total. Se han acostumbrado a vivir bajo el signo de la violencia y no pueden encontrar refugio seguro ni siquiera en las grandes ciudades. El desplazamiento ya no es una simple coyuntura sino que se convierte en una condición social casi permanente.

La ciudadanía supone, además de derechos y deberes reconocidos por el Estado, la atribución a los individuos de la dignidad ligada a su pertenencia a una comunidad política nacional. Pero muchos despla-

dos nunca han tenido acceso a tal ciudadanía, sobre todo los que provienen de zonas de colonización reciente.

Por otro lado el acceso a la tierra siempre ha sido incierto en Colombia. En zonas de colonización reciente como Amazonía, Urabá o el sur del Cesar, la obtención de títulos de propiedad sigue siempre con retraso a la ocupación de la tierra y en muchos casos no llega a obtenerse.

Los colonos amazónicos se ven obligados a revender las mejoras logradas en sus terrenos a quienes poseen capitales y luego deben ubicarse cada vez más lejos. En Urabá, el empuje de los grandes dominios en manos de los propietarios tradicionales o de los nuevos ricos, los narcos, ha expulsado a los colonos. Estamos lejos del status del campesino europeo, heredero de generación en generación de las tierras familiares. La garantía sobre la propiedad de la tierra es lo que engendra una inserción en la "trama social", es portadora de una memoria y de un futuro.

En Colombia la relación con la comunidad nacional sigue siendo una ficción y prevalece la dependencia de redes particulares de poder. En Europa el período de inserción de los campesinos en la política nacional se prolongó durante todo el siglo XIX. Pero los colombianos pueden sufrir sanciones y la muerte cuando no se someten al orden establecido por el líder local. La violencia manejada por un gamonal llega a alcanzar el rango de regla social. En las zonas de colonización reciente los colonos se encuentran sin otra alternativa que plegarse a la tutela de cualquier grupo político que disponga de medios de fuerza suficientes como para imponer su voluntad. Cuando estos grupos ejercen su poder por largo tiempo, terminan por engendrar comportamientos de identidad colectiva.

En Trujillo la identidad proviene del prestigio departamental reconocido al gamonal. En las zonas de Urabá donde las FARC llegaron con los primeros colonos (las veredas de San José de Apartadó o de Belén de Bajira) los habitantes han interiorizado los comportamientos exigidos por la organización armada. En los dos casos es una identidad delegada, donde la subordinación a los agentes políticos es con-comitante con la prohibición de toda acción colectiva autónoma.

Diversos autores han subrayado la desorganización y la violencia cotidiana existente entre los colonos, particularmente en las zonas de plantación de coca. Las organizaciones armadas se implantaron e instauraron reglas para dirimir los conflictos y sancionar las infracciones. Este es un modelo de lógica racional que supone un contexto estable.

Pero en Colombia este análisis tiene sus límites, porque el contexto de guerra modifica los parámetros. En los '80 el frente de las FARC del Magdalena Medio comenzó a practicar el secuestro indiscriminado con toda la población. Así, la protección armada de los períodos estables es reemplazada por la extorsión de los tiempos de guerra. La identidad colectiva asumida bajo actores armados permanentes, se transforma en sumisión bajo actores armados cambiantes.

Los casos se han multiplicado. Algo similar puede pasar en Barranca-bermeja con el ELN. Por otro lado el valor de la protección desaparece cuando surgen otros protagonistas. Los límites de las zonas se vuelven inciertos y la gente descubre que mañana puede caer bajo la tutela de otro protector. No le queda otro remedio que adoptar el perfil más bajo posible mientras se produce el reemplazo de tutela. En este contexto toda noción de derecho es absurda.

La noción misma de desorganización es discutible. Es cierto que en ciertas zonas de colonización convergen poblaciones de orígenes diversos. En las plantaciones bananeras de Urabá coexisten paisas, chilapos y chocoanos. En las zonas de cultivo de coca, los colonos rurales se mezclan con individuos de origen urbano. Pero esto no implica necesariamente desorganización y violencia. De hecho, los colonos manifiestan una notable aptitud para organizarse a través de las Juntas de Colonizadores o el rol de los "fundadores". La desorganización y la violencia surgen a gran escala cuando comienzan a circular recursos monetarios abundantes y cuando la influencia de los actores armados está en disputa.

Pero muchos colonos se colocan en un horizonte de corto plazo. Pretenden permanecer sólo el tiempo necesario para acumular algunos medios económicos. Un estudio ha demostrado la gran rotación de mano de obra en las plantaciones de banano a comienzos de los '80. En las zonas de droga la mayor parte de los colonos se consideran de paso y no hacen nada para mejorar su medio. Esta limitación del horizonte temporal prevalece aún más cuando la violencia organizada invade la escena y las lógicas de protección pierden utilidad.

El Plan Colombia reconoce la necesidad de un desplazamiento de amplios sectores sociales, campesinos y colonos que tendrán que trasladarse a zonas urbanas. En el Plan se sostiene que estas tierras de cultivo ilícito se encuentran ubicadas en zonas de bajo rendimiento agrícola. Por esta razón, después del paquete de ayuda militar, se da mayor importancia a la reubicación de los desplazados. También es éste un objetivo militar, pues se trata de aplicar una política complementaria a la del paramilitarismo, que ejecuta masacres pero no se hace cargo de los desplazamientos ni de la responsabilidad frente a las víctimas. El Plan Colombia diseña un programa de incentivo a los campesinos para que abandonen la zona, sin perjuicio

de ser sometidos a fuertes bombardeos si permanecen en ella. En suma, esto es lo que en la Guerra Fría se llamó “quitar el agua al pez”.

Tendencias del desplazamiento forzado en 1999³

Los combates entre paramilitares, ejército y guerrillas tienen las siguientes características:

- El fortalecimiento y ampliación de la cobertura territorial de las operaciones paramilitares produce éxodos masivos, destrucción de bienes en poblados y caseríos y limitaciones en la capacidad de movilidad de la población.
- El uso, tanto por parte del Ejército como de las guerrillas, de medios y métodos de combate que causan daño indiscriminado empujan a la población a huir de las áreas de confrontación.
- Los grupos armados no aplican los principios de distinción e inmunidad de la población civil no combatiente, presionando por la elección entre alguno de los bandos, su participación o el abandono de la región y de los bienes.

Durante 1999 el desplazamiento forzado tuvo las siguientes manifestaciones:

- Búsqueda de alternativas temporales de reubicación en zonas más seguras, especialmente en áreas urbanas. En etapas anteriores la reubicación privilegiaba los poblados cercanos, ahora se dirige hacia las capitales de departamento.
- Crece la inseguridad de las comunidades de paz ubicadas en zonas de guerra y se dificulta el retorno por el control paramilitar sobre el aprovisionamiento.
- Las comunidades indígenas se ven amenazadas por el desconocimiento de su neutralidad.
- Se incrementa el desplazamiento interfronterizo a pesar de que los gobiernos, en general, no otorgan status de refugiados a los colombianos que huyen de la violencia.
- El 86% de los hogares desplazados tienen niños, niñas o menores de 18 años, constituyendo el 65% de la población desplazada por la violencia en 1999⁴.

Las respuestas del Estado tienen serias deficiencias frente al problema del desplazamiento forzoso de personas:

- Las soluciones están condicionadas al desarrollo de las negociaciones con los grupos armados.
- Hay un manifiesto desinterés por desarticular a los grupos paramilitares.
- El agravamiento del desplazamiento produce un desfase cada vez más profundo con las posibilidades del gobierno de estructurar una política destinada a resolver el problema.
- El incumplimiento gubernamental de pactos y compromisos asumidos produce desconfianza entre los desplazados.
- El gobierno manifiesta desconfianza hacia los voceros de la población desplazada y cuestiona su legitimidad.
- Los desplazados internos están excluidos de la elaboración de los planes gubernamentales sobre el tema.
- Las políticas de gobierno no contemplan el derecho de reparación de las víctimas.

Notas

1. Los desplazados, un problema social y político, Daniel Pecaú, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, mayo de 1999.
2. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, N° 27, Bogotá, 26 de enero de 2000.
3. Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia, 1999; Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados - GAD, Bogotá, marzo de 2000. En www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/gad1e.html
4. Sobre el tema de los menores desplazados ver www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/codhes.html

Capítulo 12 – Estados Unidos

Mucho antes de que el Pentágono comenzara a movilizar su más avanzada tecnología en inteligencia de guerra a la Amazonia colombiana y los países vecinos, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos habían desplazado entrenadores y técnicos especializados en la instalación de los equipos de tierra y el entrenamiento de las fuerzas locales que deberían actuar en base a la información capturada, especialmente a la guerrilla de las FARC¹.

En enero de 1998 se estaban instalando la base de entrenamiento de combate naval “Riverine” en Iquitos, Perú y la Escuela de Selva del Ejército Ecuatoriano en El Coca, por acuerdos suscritos en 1997, luego de la terminación del conflicto fronterizo entre ambos países.

En las dos bases, que son financiadas totalmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, existen dormitorios aparte para los contingentes de norteamericanos que envían las Fuerzas Especiales Operativas (SOF) que perdieron su centenaria casa en la Base Howard del Comando Sur, por la entrega del Canal a Panamá.

Una cuarta base en los países limítrofes comenzó a instalarse en Aruba, como parte del convenio suscrito por Estados Unidos y Holanda. Se trata de una fuerza especializada en inteligencia aérea que serviría de puerto a los aviones de inteligencia.

El mayor grupo de entrenadores norteamericanos tiene sede en la base del Ejército nacional en Tolemaida (Tolima) y en la sede del Comando Específico de Oriente en Tres Esquinas (Caquetá), en donde se distribuyen los 160 soldados y 30 civiles contratados por el Departamento de Defensa de USA para entrenar y apoyar al Batallón Antinarcóticos del Ejército. A ellos se suman los “pilotos civiles” contratados por el Departamento de Estado para tripular y controlar los aviones y helicópteros enviados para apoyar a la Policía antinarcóticos en Mariquita, San José del Guaviare y Puerto Asís.

A los norteamericanos les está prohibido tomar parte en los combates, pero desde hace unos meses son capaces de proporcionar “inteligencia en tiempo real”, en la que, durante el desarrollo de una operación, se advierten los movimientos de los objetivos.

La base naval Teniente Clavero, en Iquitos, es una base naval, según el Pentágono, pero el grupo permanente de Fuerzas Especiales en la base consta de 33 aviadores pertenecientes al grupo de operaciones 24 de la Base Howard que cumplen misiones durante 90 días y son reemplazados. El comandante y su equipo rotan cada 6 meses.

Los militares peruanos y ecuatorianos comenzaron a cooperar. En Ecuador entrenarían juntos, bajo el patrocinio del Pentágono, militares de Colombia, Ecuador y Brasil en técnicas de combate en selva, mientras que en Perú lo harán para el combate ribereño.

Aunque los movimientos del Departamento de Defensa están definidos como operaciones antidrogas, los militares norteamericanos no ocultan el hecho de que comparten información sobre los movimientos de la guerrilla y justifican tal hecho en los estudios que muestran la participación de las FARC en el mercado de la cocaína.

La entrega de inteligencia norteamericana al ejército colombiano tiene sus riesgos. Muchas veces el ejército la pasa a los grupos paramilitares, “lo que condujo a la muerte y al asesinato de activistas de derechos humanos, líderes sindicales y otros civiles sospechosos de ser de izquierda”, dijo Winifred Tate, experta en Colombia de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

Un grupo de 83 miembros de las Fuerzas Especiales del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos llegó en secreto al país para entrenar en las selvas del sur a un segundo batallón antinarcóticos del ejército colombiano que combatirá a los traficantes de cocaína. El contingente fue trasladado en aviones del ejército hacia la base militar de Larandia, un fortín de 30 km. cuadrados ubicado en Caquetá, a 35 kms. de la zona de distensión².

Durante los tres primeros meses del año 2000 otro centenar de marines norteamericanos habían entrenado a orillas del río Putumayo a otro grupo de soldados del primer batallón antidrogas del ejército. En total el programa de intercambio prevé la formación de al menos 3 mil hombres que integrarán tres batallones, dos de las cuales entrarán en operación a finales de 2000 y el último durante el 2001.

Su objetivo inicial será la provincia de Putumayo, fronteriza con Ecuador, en la que hay sembradas 60 mil has. de coca, la mayoría bajo control guerrillero

Esta repentina movilización militar norteamericana hacia Colombia se coloca en un contexto donde merecen destacarse varios fenómenos claves:

1. La hegemonía de Estados Unidos da como resultado una balanza de pagos espectacularmente favorable con Latinoamérica. Si comparamos y analizamos el superávit comercial de Estados Unidos en Latinoamérica con sus déficits comerciales con Asia y Alemania podemos comprender las enormes ventajas que el sistema de libre comercio le ha generado en la región, donde las empresas estadounidenses gozan de ventajas competitivas y de instituciones políticas favorables a sus intereses. Sin esas balanzas comerciales favorables con Latinoamérica las cuentas exteriores de USA estarían desequilibradas, lo que provocaría grandes presiones sobre el dólar y sobre la capacidad de Estados Unidos para financiar sus déficits. La apertura comercial que existe en Latinoamérica y la capacidad de las empresas estadounidenses para explotarla es con diferencia mayor que en cualquier otro lugar del mundo (desde luego mayor que en Asia).
2. También se observa el declive simultáneo y contradictorio de la autoridad del Estado y el ascenso acelerado de la autoridad no estatal.
3. La noción de “gran enemigo” en el terreno mundial ha perdido peso político y discursivo ante la proliferación de graves “amenazas”. Las amenazas no surgen de un espacio físico delimitado, único y poderoso, no provienen de un solo ámbito geográfico ni son impulsados por un país en concreto.

4. La particularidad del fenómeno de las drogas ilegales definido como cuestión de seguridad nacional, es que difiere de todos los retos críticos que llevarían a Estados Unidos a usar la fuerza. Un ataque directo a su territorio, una situación inminente de agresión, los intereses económicos vitales del país en peligro concreto, una evidente proliferación nuclear incontrolada, la respuesta a una provocación terrorista, según las referencias oficiales estadouni-denses contempladas en la estrategia de seguridad vigente, son generados externamente. El asunto de las drogas, por el contrario, deriva de una conducta específica interna de los propios estado-unidenses que demandan sustancias ilegales para satisfacer sus gustos, deseos, placeres, vacíos, angustias y necesidades. Colombia es el espejo distorsionado de Estados Unidos.
5. El derrumbe de la guerra fría y la reafirmación del proceso creciente de globalización en las esferas de la economía, la política, la cultura y la seguridad, muestran que algunos rasgos tradicionales de las relaciones entre los países se han transformado de manera radical. Un ejemplo lo constituye la erosión de las alianzas automáticas y de los compromisos sin restricción de Estados Unidos con las naciones periféricas. La existencia de componentes ideológicos fuertes como el anticomunismo y el norteamericanismo reforzaba las coincidencias entre Bogotá y Washington. Ese ya no es el caso de los dos países en esta (mal llamada) posguerra fría.

Pero otros procesos se mueven en sentido inverso a la reafirmación de la hegemonía norteamericana en el subcontinente latinoamericano:

1. En efecto, parece evidente que esta loca escalada estadounidense en su tradicional “patio trasero” obedece al deterioro progresivo de su influencia política y económica en la región. A su fracaso en Cuba, se suma la actitud independiente del nuevo gobierno venezolano, sus reservas de petróleo e influencia en la OPEP son decisivas, y el sutil liderazgo regional hacia la soberanía e integración de una potencia rectora como Brasil.
2. Si entre 1990/1997 las inversiones norteamericanas representaban el 61,8% y las de la UE el 34,8% los dos últimos años de ese período consagraron una virtual paridad: 9.918 millones de dólares de USA contra 8.278 de la UE en 1996; 17.814 y 17.511 millones respectivamente en 1997³. Es imprescindible tener en cuenta estos datos para entender la “estrategia” de Estados Unidos, que prefiere una región desestabilizada, lo que supondría dependencia de los gobiernos a su ayuda militar y económica, a un mercado común sudamericano integrado e independiente, en el que debería competir en pie de igualdad con la UE y otros polos políticos económicos del mundo.
3. Algunos autores afirman que el costo de la insubordinación al poderío norteamericano no es tan alto como se supone. William Pfaff cita los casos de Egipto, Israel, Palestina, Milosevic y Hussein. “El poder de Estados Unidos intimida a los aliados pero no a sus enemigos. (Para Estados Unidos) interferir no sólo es peligroso, sino que no es tan práctico como creen los intervencionistas”⁴.
4. Estados Unidos está mostrando signos de temor frente a las consecuencias del Plan Colombia. Así lo afirmó Bush, entonces candidato republicano a la presidencia. “Sí. Estoy preocupado por eso. Tenemos que ser muy cuidadosos de no enviar demasiadas tropas y de no involucrarnos en los combates. Hay una línea muy fina entre el entrenamiento y el combate. No quiero a nuestras tropas peleando en Colombia”. El candidato reconoció que apoyó en el Congreso la aprobación del Plan Colombia y que por eso se ocupará de que no se convierta en un plan contrainsurgente. “No creo que los insurgentes amenacen con derrocar al Estado. Por eso un acuerdo negociado es la mejor manera de ponerle fin al conflicto”, señaló Bush.
5. La crisis del capitalismo andino, que vimos en el capítulo 2, no favorece una hegemonía norteamericana que parecía perpetua.

Sin embargo, y a pesar del deplorable balance en materia de derechos humanos que presenta Colombia, su gobierno es que el recibe más ayuda militar de Estados Unidos, alrededor de la mitad del total de la proporcionada al conjunto del subcontinente. Javier Calderón, vocero de las FARC, sostuvo que Colombia es el país que más ayuda económica recibe “después de Israel y Egipto”, ya que “Estados Unidos aportó 250 millones de dólares, el Ejército colombiano pidió 500 y Washington respondió diciendo que necesitan mil millones”⁵.

El país está dirigido por los propietarios agrarios y por un ejército a su servicio, pagado por los contribuyentes norteamericanos. Fue la administración Kennedy la que estableció el sistema actual por una decisión de 1962. Los ejércitos latinoamericanos se vieron emplazados para una nueva misión: ya no serían los encargados de la defensa del subcontinente, sino de la “seguridad interior”, término codificado que significa la guerra contra la población.

Estados Unidos tiene significativos intereses económicos para defender en Colombia. El comandante Iván Ríos de las FARC dijo que el Plan Colombia es “un gran negocio de los fabricantes de armas, de productos químicos, de fumigantes y de las petroleras”. La estrategia es posicionarse en la Amazonia, porque en los próximos años va a ser una zona de disputa a nivel mundial por sus incalculables recursos

biológicos. “Por eso van a empezar a fumigar por la región del Putumayo, donde sólo hay pequeños productores. Eso les permitirá estar cerca de las zonas en donde opera la guerrilla y allí es en donde queda al descubierto su verdadera estrategia: acabar con nosotros”⁶.

Estados Unidos y las plantaciones de coca

¿Por qué los campesinos latinoamericanos producen más coca de la que tienen necesidad para su propio uso? La explicación reside en las políticas impuestas a los países del sur. Contrariamente a los ricos estados occidentales, ellos han tenido que abrir sus mercados, en efecto, a las exportaciones agrícolas norteamericanas subvencionadas, que arruinan su producción nacional. Los agricultores locales son invitados a convertirse en “productores racionales”, según los preceptos de la economía moderna⁷ y por tanto producir para la exportación. Y precisamente porque son racionales se dedican a producciones como la coca o la marihuana que les proporcionan más dinero⁸.

En 1988 Estados Unidos obligó a los productores de café a denunciar un acuerdo que había mantenido los precios a un nivel razonable. El precio del café, principal exportación de Colombia, cayó un 40%. Cuando los ingresos se hundieron hasta que los niños sufren hambre no es necesario sorprenderse que los productores de café se vuelvan hacia las salidas que les ofrece el mercado norteamericano de la droga. Las políticas neoliberales impuestas al Tercer Mundo han sido una de las causas mayores del aumento del tráfico.

Por otro lado, la política norteamericana de represión del uso y consumo de estupefacientes ha jugado también su papel. Ha conducido a consumidores de marihuana, sustancia relativamente inofensiva, a volverse hacia drogas duras como la cocaína. Así, Colombia ha cesado de producir marihuana para concentrarse en la cocaína, mucho más rentable y fácil de transportar.

Otra cuestión merece ser planteada cuando se habla del tráfico de drogas: el papel de los bancos. Según un estudio de la OCDE los beneficios de ese tráfico, a escala mundial, se elevan a unos 500 mil millones de dólares por año, de los que la mitad transita por los circuitos del sistema financiero norteamericano. Colombia, según la OCDE, no retira más que un 2% o un 3% de lo que resta, o sea, alrededor de 6 mil millones de dólares por año. Lo que ha hecho decir a un miembro de la Comisión Andina de Juristas y de la Asociación Latinoamericana de Derechos del Hombre, expresándose en el diario mexicano *Excelsior*, que el “big business” de la droga está presente sobre todo en el norte del Río Grande.

La industria química norteamericana no desmentirá esta constatación. La CIA había señalado en un informe que las exportaciones de esos productos hacia América Latina eran muy superiores a las necesidades lícitas.

Por su lado el servicio de investigaciones del Congreso norteamericano concluyó que más del 90% de las sustancias químicas utilizadas para la producción de droga provenían de Estados Unidos.

De hecho se sabe perfectamente que, fuera de las fronteras, esta guerra sirve de cobertura a acciones de contraguerrilla y ofrece salidas no despreciables para los industriales del armamento. Internamente es utilizada como pretexto para mantener en la cárcel a una parte de la población que no contribuye a la producción de beneficios. Su encarcelamiento responde a una “sana lógica”, en la medida que permite un relanzamiento keynesiano de la economía.

Las mayores empresas de USA en la banca, exportación e inversión extraen o sacan la parte más importante de sus ingresos de Latinoamérica: de hecho su viabilidad depende de mantener en funcionamiento esa bomba de succión. El colapso de las economías latinoamericanas, en gran parte inducido por el sistema de libre mercado y el masivo pillaje de su economía por parte de la elite empresarial, bancaria e inversora de Estados Unidos y sus socios latinoamericanos es inminente. El impacto en las principales empresas norteamericanas será rápido y profundo, amenazando con el mayor crash desde 1929.

En estas grandes cuestiones que definen la posición hegemónica de Washington los regímenes de libre mercado latinoamericanos son “seguidores de la fuerza hegemónica”. Pero en cuestiones específicas que afectan sensibilidades nacionales concretas y los importantes intereses de sus capitalistas transnacionales, los regímenes de libre mercado latinoamericanos han disentido, particularmente cuando han contado con el apoyo europeo y canadiense⁹.

Estados Unidos y la descertificación

En 1996 y 1997, EE.UU “descertificó” a Colombia en su evaluación anual de las iniciativas antidroga de los países de producción o de tráfico de drogas. Cada año, al final de febrero, el Presidente de EE UU está legalmente obligado a informar al Congreso sobre los esfuerzos de unos 30 países de este grupo. Aquéllos cuya cooperación sea juzgada satisfactoria (la mayoría) son certificados, contrariamente a aquéllos cuyos esfuerzos se consideren insuficientes. Un tercer grupo se compone de países que, sin aprobar, son certificados por razones de “interés nacional”. La descertificación tiene varias consecuencias:

- el cese de la asistencia estadounidense exceptuando la ayuda humanitaria y antidroga;

- ❑ el voto de EE.UU en contra de la concesión de préstamos al país descertificado en seis instituciones financieras internacionales, entre ellas el XE "BID" BID y el Xial;
- ❑ la negativa de créditos del Banco de Exportación e Importación (EximBank) a los exportadores estadounidenses para financiar las ventas al país en cuestión;
- ❑ el bloqueo del acceso a créditos de la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (Overseas Private Investment Corporation, OPIC).

En la práctica, muchas de estas sanciones están abiertas a la negociación; con frecuencia, las autoridades han evitado obstaculizar excesivamente el comercio en consideración a los intereses empresariales estadounidenses.

La decisión de descertificar a Colombia en 1996 y 1997 constituyó una anomalía en el marco global del proceso de descertificación. Los demás países plenamente descertificados eran naciones consideradas por Washington como parias, semiparias o "pícaros". En este grupo han figurado regularmente Afganistán, Irán, Myanmar (Birmania) y Siria. A diferencia de estos países Colombia ha desplegado notables esfuerzos de cooperación con EE.UU. Washington se vio en aprietos para recalcar que su decisión fue una respuesta a Samper en persona y no a las instituciones colombianas de lucha antiestupefacientes, frecuentemente alabadas por el Presidente Clinton y otros altos funcionarios.

En 1998, EE.UU. certificó a Colombia por motivos de "interés nacional". Según el Departamento de Estado, la Policía colombiana erradicó en 1997 más cultivos de coca y amapola que ningún otro país en la historia. Esto se logró mediante la fumigación de más de 44.000 hectáreas de coca y 7.000 hectáreas de amapola, pese al vivo rechazo de la opinión pública a la erradicación química. Las autoridades colombianas levantaron igualmente el veto constitucional a la extradición y firmaron con EE.UU un acuerdo para autorizar a los agentes antinarcóticos estadounidenses a abordar embarcaciones colombianas en busca de drogas. Asimismo se endurecieron las condenas para delitos mayores, al tiempo que se caracterizó por primera vez el blanqueo de dinero como un crimen. Sin embargo, Washington criticó la no retroactividad de las leyes de extradición, alegando que éstas no afectarían a los jefes del cartel de Cali actualmente recluidos en prisiones colombianas.

Si bien era difícil ignorar esta evolución favorable de la política colombiana antidroga, el gobierno de Clinton tenía otras razones en favor de la certificación. La decisión de las autoridades coincidió con la inminencia de dos importantes citas internacionales en las que la descertificación de Colombia habría menoscabado la posición que Estados Unidos deseaba adoptar: la Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile del 16 al 18 de abril de 1998, en la que Washington buscaba insistir en la cooperación hemisférica multilateral contra la droga y la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (8 al 10 de junio de 1998), que subrayó igualmente la cooperación multilateral.

Estados Unidos y la guerrilla

El Gobierno de EE.UU observa con creciente inquietud el conflicto guerrillero en Colombia. Dirigiéndose al Congreso el 31 de marzo de 1998, el Jefe del Comando Sur (Southcom), general Charles Wilhelm, describió el conflicto en Colombia como la principal amenaza a la seguridad en el "área de responsabilidad" (AOR) del Southcom. Asimismo, sugirió que las Fuerzas Armadas de Colombia son incapaces de derrotar a los subversivos. La mayor preocupación, y también un insostenible argumento, de Washington se refiere a la implicación de las fortalecidas fuerzas guerrilleras con el narcotráfico. Durante su visita a Colombia en octubre de 1997, el jefe antidroga de Estados Unidos, general Barry McCaffrey, ponderó la labor de la Policía y del Ejército y utilizó repetidamente el término "narcoguerrilla" para referirse a los rebeldes. Asimismo, el Departamento de Estado incluyó por primera vez en 1997 a las FARC y al ELN en la lista de organizaciones terroristas.

Estados Unidos había sostenido previamente que los movimientos guerrilleros en sí no estaban implicados en el comercio de drogas, pese a que ofrecían servicios de transporte y protección a los narco-traficantes. Ahora, Washington coincide con las Fuerzas Armadas colombianas en que la "narcoguerrilla" es un actor independiente en el narcotráfico y constituye casi un cartel por derecho propio. Los recientes debates en el Congreso estadounidense y las declaraciones del general McCaffrey en Colombia han demostrado que Estados Unidos está preparado para autorizar el uso de su ayuda militar contra la subversión si ésta participa en el comercio de drogas.

No obstante, los dirigentes de uno y otro país consideran con recelo la posibilidad de un mayor involucramiento norteamericano. Las autoridades colombianas siempre han temido que la cruzada estadounidense contra la droga y la implicación de la guerrilla en el narcotráfico puedan propiciar una intervención militar velada o abierta de Estados Unidos. Washington también teme verse enredado en una compleja aventura militar cuyos objetivos no son claros. No sin profundas reservas, el Departamento de Estado aceptó tomar parte en operaciones antiestupefacientes a finales de los años ochenta. Pese a ser hoy en día un activo

participe en la estrategia internacional antidroga de Estados Unidos, el Pentágono es reacio a combinar las actividades antidroga con una guerra contrainsurgente en el exterior.

Las cifras exactas sobre el personal militar estadounidense en Colombia se mantienen en riguroso secreto. Sin embargo, según la Oficina sobre América Latina de Washington (Washington Office on Latin America, WOLA), este personal comprende actualmente entre 130 y 250 miembros. Entre éstos figuran 80 efectivos que recogen datos sobre el narcotráfico en dos estaciones de radar, una presencia a la que Estados Unidos desea dar la menor publicidad posible. Según portavoces militares norteamericanos, este país mantiene asimismo unos 40 asesores militares a la vez en Colombia, aunque según algunos indicios esta cifra ha ascendido últimamente. El nuevo embajador, Curtis Kamman, ha prometido impulsar el aumento de la asistencia militar a Colombia.

Aunque el profundo recelo de una y otra parte sobre la intervención norteamericana impide una implicación más directa, la situación podría variar. Así, la participación de este país podría cambiar de naturaleza si los rebeldes deciden atacar a su personal, algo que las FARC han amenazado hacer alegando que los asesores estadounidenses están adelantando operaciones encubiertas de contrainsurgencia. Las FARC dijeron que una vez que detecten la presencia de norteamericanos en suelo colombiano los declararán objetivo militar¹⁰. "Pero sólo cuando caigan las primeras bombas nos levantaremos de la mesa de negociación", advirtió Raúl Reyes.

La seguridad de los militares norteamericanos fue uno de los temas que surgió con insistencia en las preguntas de los senadores norteamericanos. Pace, nuevo jefe del SouthCom, respondió que ya están haciendo planes para enfrentar a una eventual amenaza o atentado contra los norteamericanos. El paquete de ayuda, recordó, incluye 4 millones de dólares que serán utilizados para reforzar la seguridad de las bases donde se llevan adelante los programas de entrenamiento.

El general también reveló que, como medida preventiva, ningún soldado norteamericano está autorizado a conducir ejercicios fuera de esas bases, y están trabajando además en un plan que si fuera necesario les permitiría evacuar el lugar. En marzo de 1998, las FARC secuestraron, y posteriormente liberaron, a cuatro ornitólogos estadounidenses, amenazando con darles muerte si se descubría que habían colaborado con los servicios secretos o de seguridad de Estados Unidos. Es posible que las FARC intenten disuadir a Washington de involucrarse en mayor grado. No obstante, estas amenazas directas al personal estadounidense podrían alentar una mayor participación de Estados Unidos en el conflicto, un objetivo perseguido por la guerrilla que considera necesario desenmascarar al "adversario". Pero el costado contrainsurgente de la injerencia norte-americana ya apareció. Funcionarios y legisladores de Estados Unidos polemizaron por una posible participación de su país en la lucha contra la guerrilla, después que se supo que helicópteros que forman parte de la cooperación antidrogas con Bogotá habrían estado involucrados en un enfrentamiento en el que murieron 13 personas¹¹.

El fin de semana del 29 y 30 de julio de 2000 ocho policías y cuatro civiles murieron durante un ataque de las FARC contra el pequeño poblado de Arboleda, en el sudoeste del país. Otros 10 policías están desaparecidos. Varios helicópteros Black Hawk estaban estacionados a pocos kilómetros de la zona de combate. Aun no está claro si los helicópteros colaboran o no en el intento de rescate de los agentes colombianos atrapados, pero el tema despertó una fuerte polémica en Estados Unidos. Según Philip Reeker, vocero del Departamento de Estado de USA, "las fuerzas cercanas eran elementos antinarcóticos de la policía nacional de Colombia. Estos elementos se movilizan utilizando todo medio disponible, incluyendo los helicópteros provistos por Estados Unidos". Trece policías se rindieron a las fuerzas guerrilleras después de que sus municiones se terminaron. Uno por uno fueron ejecutados por los guerrilleros.

Estados Unidos y los derechos humanos

La certificación de Colombia el 26 de febrero de 1998 coincidió con un debate sobre la ayuda militar bilateral. La suspensión de la ayuda militar antidroga de EE.UU. a Colombia durante casi un año no fue consecuencia de la descertificación, que permite mantener esta ayuda pese a la imposición de otras sanciones. Más bien, la medida obedeció a consideraciones relativas al uso dado a dicha asistencia, y específicamente al modo de evitar el uso del material militar por unidades militares acusadas de vaporear los derechos humanos. Desde finales de los años ochenta, la ayuda estadounidense a las Fuerzas Armadas colombianas ha sido virtualmente nula, debido a la presunta participación de éstas en violaciones de dichos derechos. La asistencia militar se suspendió formalmente en 1996. Sin embargo, el nombramiento del general Manuel José Bonett como Comandante de las Fuerzas Armadas colombianas en 1997 favoreció la decisión estado-unidense de reanudar la ayuda. Al parecer, Washington considera a Bonett menos proclive a tales abusos que su predecesor.

Con el fin de controlar el uso de la ayuda militar estadounidense, los dos gobiernos firmaron el 1º de agosto de 1998 un memorando de entendimiento que otorga a Estados Unidos poderes de veto y supervisión sobre las unidades que reciben dicha ayuda¹². Del mismo modo, Colombia debe certificar cada seis meses

que las violaciones de derechos humanos imputadas a las fuerzas militares son objeto de una rigurosa investigación. El Departamento de Defensa estado-unidense preveía el envío de equipos por valor de 30 millones de dólares, incluyendo botes y helicópteros, e iniciaría en 1999 un programa de entrenamiento fluvial por 20 millones de dólares.

Colombia es, ya el principal receptor mundial de ayuda antidroga de Estados Unidos, la cual ha aumentado ante la necesidad de combatir la producción de estupefacientes. La asistencia estadounidense por este concepto se ha triplicado de 28,5 a casi 100 millones de dólares entre 1995 y 1997. El 31 de marzo de 1998, R. Rand Beers, Secretario Adjunto de Estado en funciones para Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Fiscalización, pidió al Congreso consagrar mayores fondos a una nueva estrategia para combatir el narcotráfico en Colombia en todos los frentes. A tal efecto, solicitó la concesión de 21 millones de dólares adicionales, que se sumarían a la petición original de 30 millones hecha dos meses antes.

Colombia podría utilizar también la certificación para solicitar la extensión de las concesiones comerciales que desde 1991 derivan de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (Andean Trade Preferences Act, ATPA). Esta, al igual que el sistema de preferencias (SGP) de la Unión Europea, tiene por objeto estimular las exportaciones legales de los países andinos. En virtud del ATPA, que expirará en el 2001, unos 6.000 productos colombianos, entre ellos el café, tienen libre acceso al mercado estadounidense.

Cuando Clinton se reunió con Pastrana en agosto de 2000, estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, el republicano Dennis Hastert y por el senador demócrata Joe Biden, para dejar en claro que su plan para Colombia es una política de Estado que cuenta con el apoyo de ambos partidos. Sin embargo, a la salida de la reunión el discurso de Hastert fue mucho más duro que el de Biden. Biden puso énfasis en los derechos humanos mientras que Hastert ni siquiera mencionó el tema. Hastert dijo que "Colombia puede terminar como Vietnam, es necesario correr el riesgo"¹³.

Las diferencias entre Hastert y Biden marcan la posición de republicanos y demócratas sobre Colombia. Esto significa que el sucesor de Clinton seguirá con la ayuda, pero con un cambio en la "letra chica", que puede hacer una gran diferencia en lo relativo a los derechos humanos.

El contrapeso de Europa

El 23 de junio de 1998, el Presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, dirigió a Pastrana un mensaje en el que le comunicaba el pleno apoyo de la Comisión y formulaba votos por que el nuevo Gobierno "responda a las esperanzas del pueblo colombiano de que cese la violencia en su país".

Tradicionalmente, las relaciones de Europa con Colombia se han centrado en los derechos humanos, más que en la lucha contra la droga. La presidencia de la UE ha emitido regularmente declaraciones sobre el contexto político en Colombia. En 1997 sus declaraciones abordaron el asesinato de dos miembros del Centro de Investigación y Educación Popular (13 de junio), la liberación de los rehenes militares (20 de junio), el proceso de paz (25 de septiembre) y la liberación de los observadores electorales secuestrados por las FARC (10 de noviembre).

Estados Unidos y el incremento de la guerra

El 30 de agosto, la visita de Clinton desató en Bogotá y Cartagena revueltas, marchas de protesta y manifestaciones violentas. Los enfrentamientos entre decenas de estudiantes y agentes de la fuerza anti-disturbios comenzaron temprano en los alrededores de la Universidad, dejando un policía muerto.

En la embajada norteamericana, fuertemente custodiada, se concentraron 2 mil personas, convocadas por las centrales obreras colombianas. Los manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos y un muñeco que representaba la figura de Clinton también terminó en llamas¹⁴.

Activas protestas repudiaron a Clinton, en una Jornada nacional convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones, con importantes manifestaciones en más de 14 ciudades y varios miles de estudiantes de la Universidad Nacional chocando con la policía en Bogotá¹⁵.

Estados Unidos teme un estallido del "polvorín" colombiano o su "balcanización", con varias zonas controladas por la guerrilla o los "narcos", así como las consecuencias de la enorme inestabilidad colombiana más allá de sus fronteras: Colombia ocupa un lugar central en la región andina, recorrida por profundas crisis políticas y grandes luchas obreras y populares, como la oleada de movilizaciones que en los primeros meses del año se extendió por Ecuador, Bolivia y Perú.

El general Tapias, jefe militar colombiano, formuló un siniestro pronóstico. "habrá guerra pero después habrá paz". La guerra intentará cambiar sobre el terreno la relación de fuerzas, y luego la paz impondrá condiciones.

Pero estos aprestos militares están provocando una explosiva polarización política, que causa alarma en los países vecinos y despierta discusión en Europa y los propios Estados Unidos.

Colombia, a pesar del peso del campesinado y su gran tradición de luchas agrarias, es un país fundamentalmente urbano: el 70% de la población vive en las ciudades, que concentran una clase obrera numerosa, que es la fuerza social y económica decisiva del país, y que viene protagonizando fuertes paros y luchas contra Pastrana en los que comienza a mostrar su fuerza y combatividad. La jornada nacional de protesta del 30 de agosto unió a los trabajadores, los estudiantes y otros sectores populares en repudio a Clinton y Pastrana.

Pero la violencia en realidad arrancó antes de la visita de Clinton, en la noche del martes 29 de agosto:

- en la provincia de Norte de Santander, en el municipio de Lavateca las FARC atacaron un puesto de policía dejando un saldo de 5 civiles muertos.
- En Nariño, provincia de Antioquía, las FARC causaron la muerte de 3 civiles.
- En Hato Corozal, provincia de Casanare, fue muerto un policía.
- En Santander de Quilichao, provincia de Cauca, un civil y un policía murieron en un ataque.

La militarización de la política que implica la implementación del Plan Colombia establece, contradictoriamente, las bases materiales para la unificación de las luchas urbanas con las del campesinado, una alianza que ha sido imposible de conseguir en los últimos cincuenta años.

Capítulo 13 - Conclusiones

El flujo de ganancias latinoamericanas había permitido a Estados Unidos sostener su economía y balancear su déficit asiático. La hasta entonces indiscutida hegemonía norteamericana en Sudamérica ahora está puesta en tela de juicio. A los aprestos de liderazgo que ensaya Brasil se suman el nacionalismo bolivariano de Chávez y la inestabilidad andina.

Estados Unidos intentó crear un mercado americano único a fin de succionar en forma "institucional" y permanente el flujo de beneficios. Pero el proyecto del ALCA sigue adormeciendo en el Congreso y no parece que su "despertar" sea una tarea fácil para el nuevo gobierno republicano. Estados Unidos también supuso que la retirada de Panamá podría ser un buen argumento para incrementar su presencia militar en todo el subcontinente. Para eso extendió el Área de Responsabilidad del Comando Sur y comenzó a anudar acuerdos bilaterales para la instalación de bases militares. Pero estas medidas, impulsadas por sus agencias de Defensa, no pudieron constituir una política global y unificada. El "olvido", una especie de mea culpa que elaboró Clinton al final de su mandato, otorgó un amplio margen para el crecimiento de los actores sudamericanos, de todo tipo.

El repentino (y desordenado) "interés" de Estados Unidos por Sudamérica encontró en Colombia una excusa para desbordarse, intentando controlar una situación que "se le había ido de las manos". Y dentro de Colombia enarboló al narcotráfico como el ariete para la penetración.

Pero al no colocar a la política como principio de organización del conflicto social y por lo tanto al carecer de un análisis complejo de la situación¹, el Plan Colombia amenaza con desmoronarse antes de comenzar a ser seriamente implementado. Presionado por los intereses económicos, Estados Unidos no encuentra mecanismos para crear una nueva asociación con los países sudamericanos, volcándose ineludiblemente hacia una simplificación rayana con la ignorancia. De repente se encuentra con una multitud de problemas mal estudiados.

- ❑ Empieza a encontrar en Brasil un enemigo, cosa que no es. Cree ver en Venezuela un Estado disidente, cosa que tampoco es. Dice ver en Colombia un narco Estado pero militariza la vida rural, quiere estabilizar Perú pero desestabiliza la "autonomía" de Fujimori, quiere erradicar la coca en Bolivia, pero genera autodefensas campesinas, sostiene el ajuste económico pero no puede impedir el desajuste político y social, aplaude los esfuerzos de paz pero empuja a las FARC hacia la guerra.
- ❑ Afirma que Colombia no es Vietnam pero sus principales asesores son veteranos de esa guerra, dice respetar los derechos humanos pero pide un "waiver" para Colombia, sostiene que el plan es colombiano pero lo elabora como parte del interés nacional norteamericano, fortalece la seguridad pero debilita la legitimidad, denuncia a las organizaciones terroristas pero los paramilitares no están en su lista, dice defender la democracia pero le preocupa sobre todo el petróleo, la tierra, los ríos y la biodiversidad, protege el libre comercio y las ventajas comparativas pero ataca a los campesinos cuando éstos los utilizan en su provecho, proyecta un desarrollo sustentable pero está por hacer desaparecer la Amazonia.
- ❑ Dice que la ayuda militar es contra el narcotráfico pero es contra la guerrilla, envía helicópteros artillados pero dice que no podrán atacar, los militares norteamericanos entrenan a los batallones de elite colombianos pero al mismo tiempo preparan un plan de retirada, afirma que la guerra no se extenderá pero

instala bases en toda la región, implementa el Plan Colombia pero no encuentra financiación, quiere crear una Fuerza multilateral de intervención pero nadie lo apoya.

- ❑ Explica que el narcotráfico colombiano es una amenaza para Estados Unidos pero el 75% de la marihuana que se consume en Estados Unidos se produce en su propio territorio, supuestamente quiere combatir a los paramilitares pero las armas de éstos provienen de Florida, anuncia la destrucción del narcotráfico pero planea construir un canal interoceánico que conecta los puertos de salida de la droga, afirma que ya no hay carteles en Colombia pero los carteles están en Méjico y Estados Unidos.
- ❑ El hongo fusarium fue rechazado en Florida pero se usará en Colombia, el gobierno colombiano no tiene vinculaciones con el narcotráfico pero el responsable antinarcóticos norteamericano en Colombia está procesado porque su esposa traficaba cocaína, dice que las FARC son una narcoguerrilla pero el narcotraficante inventor del término fue un embajador norteamericano, niega la intervención norteamericana pero sus helicópteros rescatan militares que luchan contra la guerrilla.

El gobierno colombiano, jaqueado por el desastre económico, la derrota electoral y la oposición liberal, es el único sostén firme con que cuenta Estados Unidos en el Plan Colombia. Pero la militarización de la política también tiene sus contradicciones y debilidades:

- ❑ Pastrana sostiene los diálogos de paz pero amenaza con suspender el status de desmilitarización de la zona de despeje², discute con las FARC un Plan pero firma otro texto con Estados Unidos, evalúa los proyectos guerrilleros de erradicación de la droga pero fumiga los cultivos, acepta las presiones del Congreso norteamericano sobre los derechos humanos pero no cumple sus exigencias.
- ❑ Los militares se equipan con ayuda norteamericana pero siguen acumulando derrotas, denuncian la debilidad del gobierno frente a la guerrilla pero tienen pedidos de juicio por violaciones a los derechos humanos, dicen defender su honor pero rehúyen a los tribunales.

Las FARC también acumulan serias contradicciones:

- ❑ Mientras dictan los decretos 001, 002 y 003 privilegian la instauración de un modelo capitalista al estilo nórdico.
- ❑ Cuando el gobierno y los paramilitares atacan al ELN se trenzan en guerra contra éstos por el control del territorio.
- ❑ Mientras se lanza un paro general contra el gobierno de Pastrana las FARC no pueden insertarse en los medios sindicales y urbanos.
- ❑ Cuando efectúan un paro armado prolongado en el Putumayo, no establecen una política de propaganda para captar a la población urbana que se moviliza en protesta.
- ❑ En el transcurso del conflicto no buscaron unificarse con los otros grupos guerrilleros.
- ❑ Mientras denuncian a Estados Unidos depositan excesiva confianza en la Unión Europea.

Este cúmulo de contradicciones y falsos análisis hace que los tres actores involucrados, Estados Unidos, Colombia y las FARC, disparen hacia adelante mediante el involucramiento intenso en la guerra.

Pero mientras las contradicciones de Estados Unidos y Colombia pueden suponerse como característica de una lógica de discurso que pretende otorgar un marco moral a la cruzada belicista, en las FARC se ve una lógica de “radicalización empírica”. Los dos primeros se dirigen, aunque torpemente, hacia donde quieren. Las FARC parecen estar siendo obligadas, por la presión externa, a dirigirse hacia una guerra que no quieren.

Obligar a las FARC a buscar la transformación de una guerrilla campesina en una guerra antiimperialista³ es el principal error del Plan Colombia, incluso en el marco de un análisis estrictamente militar, ya que por esta vía la radicalización de las FARC se vuelve programática. Hace 2500 años decía Sun Tzu que “a un ejército rodeado se le debe dar una salida. Muéstrales un camino hacia la vida para que no se dispongan a pelear hasta la muerte”.

Algunos autores sostienen que la política de Estados Unidos es librar una guerra de extenuación para obligar a las FARC a sentarse a la mesa de negociaciones totalmente desarmados. La paz resultante reproduciría el esquema centroamericano⁴ y nacería “la paz de los cementerios”. Se aplicaría entonces la lógica de la guerra civil, moderna y absoluta, porque alguno de los que la libran deberá desaparecer, ya que ambos pretenden el mismo territorio. La paz sería la salida de emergencia para unas fuerzas guerrilleras claramente derrotadas en un esquema que intentaría resolver la dialéctica paz-guerra en una resultante donde la paz fuera resultado del triunfo en la guerra.

Este análisis, teóricamente correcto, no es apto para Colombia. Las FARC se encuentran militarmente cómodas en sus bases, siguen asestando costosas pérdidas al Ejército y demuestran su perfecta adaptación al terreno. La presión externa de Estados Unidos se traduce en una presión sobre los campesinos que aceptan la militarización del conflicto e impulsan la “radicalización empírica” de la guerrilla. En este marco de fortaleza militar y debilidad política de las FARC el error de Estados Unidos consiste en no ver que la mejor manera de evitar la guerra es concretar la paz. Se obtendría una victoria política sin necesidad de

probar una victoria militar aunque el proceso sería largo y complejo, privilegiando la legitimidad democrática sobre la seguridad y la estabilidad. Pastrana parecía sinceramente interesado en esta posibilidad pero el Plan Colombia modificó el escenario.

Ninguna alquimia política es nueva en Colombia. Basados en las contradicciones políticas de las FARC se podría suponer que, sorpresivamente, aceptarían negociar una paz donde obtuvieran algunas garantías generales sobre su seguridad sin modificar el capitalismo colombiano. Estados Unidos y el gobierno colombiano podrían obtener una victoria política a cambio de concesiones militares. Pero eso ya lo hicieron las FARC en 1984 y casi fueron exterminadas. No quedan recursos históricos para volver a repetir la experiencia aunque la guerrilla insistió repetidamente en que estaba dispuesta a transitar por ese camino. Nadie les prestó atención y la administración Bush rechaza cualquier posibilidad de entablar diálogos de paz, desesperado ante la estrategia de Pastrana, un socio molesto para los halcones.

Una posibilidad extraña echó a rodar en los últimos meses del gobierno de Clinton. Comienzan a alzarse voces en Estados Unidos y en Colombia sobre la posibilidad de que el Plan Colombia involucre hacia la nada⁵.

Hay varias causas para esta posible caída:

- El aislamiento norteamericano
- La baja performance de la economía colombiana
- Los indicadores sociales de desempleo y pobreza
- Las derrotas del Ejército
- La crisis electoral norteamericana y la paridad de poder establecida en el gobierno de Bush
- La extensión de la crisis económica en el cono sur
- La explosiva situación en el Medio Oriente, que absorberá la atención norteamericana.

Las tres posibilidades que se abren para el Plan Colombia son, pues:

1. el triunfo de la cruzada belicista y la firma de un acuerdo de paz condicionado.
2. la transformación de la “radicalización empírica” en una guerra antiimperialista.
3. una caída del Plan y el retorno al status anterior de “paz armada”.

Los últimos sucesos en Colombia, donde el ELN y las FARC decidieron unirse para luchar conjuntamente contra los paramilitares, sumado a la renuncia de Carlos Castaño y el surgimiento de una nueva dirección “política” en las AUC, están otorgando elementos que parecen privilegiar la segunda opción ya que presionan para una mayor intervención norteamericana ante la incapacidad del Estado nacional. La operación «Libertad Duradera» y su intención de extenderse a Colombia empuja aún más en este sentido.

Notas

1. William Pfaff sostiene que Estados Unidos manifiesta una fácil adaptación a una perspectiva ideológica del mundo que lo condujo desde Vietnam a “una crisis de la cual aún no ha salido”. Ver William Pfaff, *La ira de las naciones*, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1996, pág. 178.
2. El Ejército colombiano manifestó estar listo para retomar el control sobre la zona de despeje. *El Espectador*, 22 de noviembre de 2000.
3. La condición previa para que la guerra se transforme en antiimperialista es la participación de tropas norteamericanas en ella.
4. El plan Colombia, una paz armada, Libardo González, ANNCOL, 27 de abril de 2000.
5. El propio Barry McCaffrey manifestó la posibilidad de incumplimiento de las metas del Plan Colombia si no encontraba apoyo de “sus vecinos y la comunidad internacional”. *La Nación*, 22 de noviembre de 2000.